Materia : Proceso de inconstitucionalidad
Escrito : 01
Sumilla : Demanda de inconstitucionalidad

SEÑORA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
OFICINA DE TRAMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
19 MAYO 2025
RECIBIDO
HORA: 11:42 FIRMA:
folios: 126

JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR, Defensor del Pueblo, designado mediante Resolución Legislativa del Congreso 013-2022-2023-CR, publicada el 19 de mayo de 2023 en el diario oficial "El Peruano", con domicilio legal y procesal en nuestra sede institucional ubicada en Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima, de la provincia y departamento de Lima, me presento ante Usted a fin de expresarle lo siguiente:

I. PETITORIO

Al amparo de los artículos 200.4 y 203.4 de la Constitución Política, el artículo 9.2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el artículo 97 del nuevo Código Procesal Constitucional, interpone demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 32330, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal, por vulnerar el principio-derecho a la dignidad (artículo 1), el derecho al libre desarrollo y bienestar (artículo 2.1), la protección especial de los niños, niñas y adolescentes (artículo 4), el principio de resocialización (artículo 139.22) y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política; así como, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos suscritos por el Estado Peruano.

II. DEMANDADOS

La demanda deberá ser dirigida contra los siguientes funcionarios:

- **Eduardo Salhuana Cavides,** presidente del Congreso de la República, con domicilio real en Av. Abancay s/n, plaza Bolívar, Cercado de Lima, y con dirección electrónica: esalhuana@congreso.gob.pe.

- **Manuel Eduardo Peña Tavera,** procurador del Congreso de la República, con domicilio en Av. Abancay N° 251, of. 610, Cercado de Lima, y con dirección electrónica: mpena@congreso.gob.pe.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro Nº 00008-2025-PI/TC

III. LEGITIMIDAD PROCESAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

El Defensor del Pueblo como máximo representante de la Defensoría del Pueblo, ostenta legitimidad para interponer la demanda de inconstitucionalidad, conforme lo establece el artículo 203.4 de la Constitución Política:

> ***Artículo 203.-*** *Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:*
> *[...]*
> *4. El Defensor del Pueblo*
> *[...].*

Por su parte, el nuevo Código Procesal Constitucional señala que:

> ***Artículo 97.-*** *La demanda de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional y solo puede ser presentada por los órganos y sujetos indicados en el artículo 203 de la Constitución.*

De igual manera, el artículo 9.2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley N° 26520, reconoce dicha facultad:

> ***Artículo 9.-*** *El Defensor del Pueblo está facultado, en el ejercicio de sus funciones, para:*
> *[...]*
> *2. Ejercitar ante el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad contra las normas con rango de ley a que se refiere el inciso 4) del Artículo 200 de la Constitución Política [...].*

En tal sentido, existe un reconocimiento expreso, tanto a nivel constitucional como legal, de la legitimidad procesal que posee el Defensor del Pueblo para incoar esta demanda de inconstitucionalidad, dirigida a preservar el principio de supremacía constitucional y, desde luego, a proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.

IV. PLAZO PARA INTERPONER LA DEMANDA

El artículo 99 del nuevo Código Procesal Constitucional establece que el plazo para presentar una demanda de inconstitucionalidad es de seis (6) años, contados a partir del día siguiente en que la norma fue publicada en el diario oficial "El Peruano". En ese sentido, siendo que la Ley Nº 32330, fue publicada el 10 de mayo de 2025, se puede concluir que la demanda es presentada dentro del plazo de ley, por lo que resulta procedente.

V. CONTENIDO DE LA NORMA SOMETIDA A CONTROL

La demanda de inconstitucionalidad se dirige contra el texto íntegro de la Ley 32330, que comprende lo siguiente:

ARTÍCULO	CONTENIDO
Artículo 1	Modifican los artículos 20 —numeral 2— y 22 — párrafo primero— del Código Penal, Decreto Legislativo 635, en los siguientes términos: **Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal** [...] 2. El menor de dieciocho años, *con excepción de los adolescentes de dieciséis y menos de dieciocho años, que cometen alguno de los delitos tipificados en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 121, 121-B, 129-A, 129- B, 129-C, 129-D, 129-G, 129-H, 129-I, 129-K, 129-L, 129-M, 129-Ñ, 148-A, 152, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 189, 200, 279, 279-G, 280, 281, 296, 296-A, 296-B, y los numerales 4, 5 y 6 del artículo 297, así como los artículos 303- C, 317, 317-A, 317-B y 326 del Código Penal, o alguno de los delitos tipificados en el Decreto Ley 25475, que establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.* [...]. **Artículo 22.- Responsabilidad restringida por la edad** Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido, cuando el agente tenga entre *dieciséis* y menos de veintiún años, o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo. [...].
Artículo 2	Modifican el artículo I del título preliminar —numeral 1— y los artículos 126 —numerales 2, 3 y 4—, 163 —párrafos 163.2 y 163.4— del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348; en los siguientes términos: **Artículo I.- Responsabilidad penal especial** 1. El adolescente entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad, es sujeto de derechos y obligaciones, y responde por la comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial, considerándose para ello su edad y características personales. *Si el adolescente tiene entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años y comete los delitos señalados en el numeral 2 del artículo 20 del Código Penal, se le aplicará responsabilidad penal ordinaria.* **Artículo 126.- Determinación de la medida socioeducativa** Cuando el adolescente se acoge a este proceso, se le aplica una medida socioeducativa de acuerdo a las siguientes reglas: [...] 2. Si a la infracción le correspondiera la medida de internación conforme al párrafo 163.2, se aplica la medida conforme al plazo de duración dispuesto en el párrafo 163.4. 3. Si a la infracción le correspondiera una internación conforme al artículo 163.4, se aplica la medida conforme al plazo de duración dispuesta en el mismo articulado. 4. Si a la infracción le correspondiera una internación conforme al artículo 163.4, se aplica la medida conforme al plazo de duración dispuesto en el artículo 163.2, si el adolescente tiene entre catorce (14) y menos de dieciséis (16) años [...]. **Artículo 163. - Duración de la internación** [...] 163.2 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la medida socioeducativa de internación es no menor de cuatro (4) ni mayor de seis (6) años, cuando el

	adolescente tenga entre catorce (14) y menos de dieciséis (16) años y se trate de los siguientes delitos: [...] 163.4 Excepcionalmente, cuando se trate de los delitos de sicariato (108-C) o violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (173-A), tipificados en el Código Penal, Decreto Legislativo 635, así como de los delitos regulados mediante Decreto Ley 25475 — por el que se establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio—, la medida de internación puede durar de seis (6) a ocho (8) años, si el adolescente tiene entre catorce (14) y menos de dieciséis (16) años. [...]"
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES	**PRIMERA. Adecuación de reglamentos** El Poder Ejecutivo adecuará el Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado por Decreto Supremo 004-2018-JUS; así como el Reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto Supremo 015-2003-JUS, a las modificaciones dispuestas en la presente ley en un plazo de sesenta días calendario contados a partir de su entrada en vigor.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES	**SEGUNDA. Normativa adicional** El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario emitirán la normativa adicional necesaria, conforme a las modificaciones dispuestas en la presente ley, en un plazo de sesenta días calendario contados a partir de su entrada en vigor, a fin de garantizar su debido cumplimiento.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS	**PRIMERA. Modificación del artículo IV del título preliminar y de los artículos 11 y 63 del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654** Se modifica el artículo IV del título preliminar y los artículos 11 —numeral 4— y 63 del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654; en los siguientes términos: **Sistemas de tratamiento penitenciario** Artículo IV. El tratamiento penitenciario para los internos mayores de veintiún años se lleva a cabo mediante el sistema progresivo, mientras que para los internos de dieciséis a veintiún años se utiliza el sistema de individualización científica. [...] Artículo 11.- Criterios de separación de internos Los internos están separados de acuerdo a los siguientes criterios básicos: [...] 4.- Los de dieciséis a veintiún años de los de mayor edad. [...] **Clasificación del interno** Artículo 63.- 63.1 El interno es clasificado en grupos homogéneos diferenciados, en el establecimiento penitenciario o sección del mismo que le corresponda, determinándose el programa de tratamiento individualizado. 63.2 En el caso de los internos de *dieciséis* a veintiún años, estos serán separados absolutamente de los de mayor edad, de acuerdo con los demás criterios de separación.

	SEGUNDA. Incorporación de los artículos 63-A, 63-B, 63-C y 63-D en el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654 Se incorporan los artículos 63-A, 63-B, 63-C y 63-D en el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654, en los siguientes términos: **Artículo 63-A. Tratamiento penitenciario bajo el sistema de individualización científica** 63-A.1 El tratamiento penitenciario de carácter individualizado, científico e integral, comprende acciones y actividades terapéutico-asistenciales. Está diseñado para abordar situaciones problemáticas vinculadas a aspectos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, que han influido en la personalidad o conducta delictiva de la persona privada de libertad de 16 a 21 años. 63-A.2 El tratamiento penitenciario busca mejorar capacidades, desarrollar aptitudes y habilidades, enriquecer conocimientos y compensar carencias para una efectiva reincorporación social. **Artículo 63-B. Proyectos de tratamiento individualizado** 63-B.1 El tratamiento penitenciario implica el desarrollo de programas especializados adaptados a las particularidades de la personalidad o conducta de cada persona privada de libertad de 16 a 21 años. 63-B.2 Los programas especializados de tratamiento se centran en actividades de trabajo penitenciario, educativas, culturales, familiares, artísticas, deportivas, espirituales o religiosas, adaptadas al grado de clasificación de la persona privada de libertad y a la organización específica de cada establecimiento penitenciario. Artículo 63-C. Tratamiento integral La Administración Penitenciaria, a través del Órgano Técnico de Tratamiento, facilita un tratamiento científico, individualizado e integral para la persona privada de libertad de dieciséis a veintiún años de edad, y aborda las necesidades, así como deficiencias identificadas, en atención a los siguientes lineamientos: a) Desarrolla los distintos programas especializados de tratamiento. b) Brinda servicios asistenciales de índole sanitaria, social, legal, psicológica y otros que coadyuven a la rehabilitación de la persona privada de libertad. c) Estimula la participación activa del interno en la planificación y ejecución de su tratamiento. d) Desarrolla otras acciones orientadas a lograr la resocialización de la persona privada de libertad. **Artículo 63-D. Consentimiento para el tratamiento penitenciario** 63-D.1 La administración penitenciaria estimula la participación de la persona privada de libertad de dieciséis a veintiún años, en el diseño, planificación y ejecución de su tratamiento penitenciario. 63-D.2 Para la aplicación del tratamiento penitenciario, no será necesario contar con el consentimiento de las personas privadas de libertad en condición de sentenciadas. La negativa a aceptar dicho tratamiento constituye un criterio para reconsiderar la clasificación de la persona privada de libertad. 63-D.3 La persona privada de libertad que tenga la condición de procesada puede acogerse a un programa de tratamiento compatible con su situación jurídica.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA	**ÚNICA. Derogación del párrafo 163.3 del artículo 163 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348** Se deroga el párrafo 163.3 del artículo 163 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348.

Cabe precisar que se cuestiona el integro de la Ley N° 32330. Si bien su primer artículo es el que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal, el resto de artículos y disposiciones complementarias son una consecuencia directa de la disposición normativa del artículo 1.

Por tanto, al tratarse de una norma con rango de ley, la misma es sujeta a control a través del proceso de inconstitucionalidad, según lo prevé el artículo 200.4 de la Constitución.

VI. ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

La presente demanda cumple con los requisitos establecidos en el artículo 100 del nuevo Código Procesal Constitucional, ya que se señala la identidad y domicilio del titular que interpone la acción; indica la norma sometida a control en forma precisa; desarrolla con claridad los fundamentos que sustentan la pretensión; establece la relación alfanumérica de los documentos que se acompañan; designa apoderados y adjunta copia simple de las normas cuestionadas, con el día, mes y año de publicación correspondiente.

Por otro lado, conviene mencionar que, a la Defensoría del Pueblo no le resultan aplicables las reglas contenidas en el artículo 101 del nuevo Código Procesal Constitucional, por lo que no corresponde acompañar documento adicional alguno que acredite la decisión de presentar esta demanda de inconstitucionalidad. En consecuencia, al haber cumplido con cada una de las exigencias formales, el escrito debe ser admitido a trámite, como lo dispone el artículo 102 del precitado código.

VII. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA

El artículo 103 del nuevo Código Procesal Constitucional establece que la demanda será declarada improcedente liminarmente cuando: i) El Tribunal Constitucional hubiere desestimado una demanda de inconstitucionalidad sustancialmente igual en cuanto al fondo; o, ii) El Tribunal carezca de competencia para conocer la norma impugnada.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo señala que ninguno de estos supuestos resulta aplicable al presente caso, porque este alto tribunal no cuenta con pronunciamientos idénticos sobre la materia controvertida. Asimismo, conforme se ha sostenido en los acápites anteriores, nuestra institución cuestiona una norma de rango de ley, razón por la cual este tribunal es competente para analizar su constitucionalidad, al amparo del artículo 200.4 de la Constitución y 76 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Sobre la fórmula "rango de ley", el Alto Tribunal ha precisado que con este se "indica que las fuentes a las que se ha calificado como tales, se ubican en el ordenamiento en el grado inmediatamente inferior al que ocupa la Constitución" y "sólo las fuentes que ocupan esa posición en el ordenamiento jurídico, pueden ser impugnadas en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes". Por ello, se desprende que las normas vigentes y con rango de ley, como la que se cuestiona en la presente demanda, pueden ser objeto del control abstracto de constitucionalidad, confirmándose la procedibilidad.

VIII. INTERVENCIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RESPECTO AL SISTEMA PENAL JUVENIL

En el marco de sus facultades constitucionales de defensa de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, así como de la supervisión de la administración pública, la Defensoría del Pueblo tiene una línea institucional de defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. En ese sentido, ha tenido diversas intervenciones a fin de garantizar que a los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal se les respeten sus derechos constitucionales y garantías convencionales.

En ese sentido, en el 2000, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe N° 51, denominado "El sistema penal juvenil en el Perú". Hace 25 años, nuestra institución advertía que "la seguridad ciudadana y el incremento de la criminalidad son temas que siempre han llamado la atención y generado preocupación de la sociedad. Para enfrentar este fenómeno, se ha adoptado una política criminal centrada en el incremento de sanciones y la disminución de las garantías procesales."[1]

De igual forma, se destacó que fue el Código de Menores de 1962 la primera norma que dio un tratamiento orgánico a los menores que se encontraban en conflicto con la ley penal. Asimismo, se recordó que "el Código Penal de 1924 contenía ya normas específicas aplicables a los menores de edad que infringían una norma penal. Así, los artículos 137º a 149º y 410º a 416º, contenía disposiciones relacionadas con el tratamiento de los menores infractores, las medidas que se les podían aplicar y la jurisdicción a la que eran sometidos en base a los postulados básicos de la Doctrina de la Situación Irregular."[2]

Posteriormente, en el Informe "Análisis de los decretos legislativos sobre seguridad nacional dictados al amparo de la Ley N° 26950", se evaluó el Decreto Legislativo 895, el cual reducía la edad hasta los 16 años, para imputar responsabilidad penal por la comisión del delito de terrorismo agravado.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo fue tajante al establecer que el referido decreto legislativo vulneraba la norma constitucional y convencional. Al respecto, señaló:

> "El literal c) del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 895, reduce la edad para imputar responsabilidad penal por la comisión del delito de "Terrorismo Agravado". **En efecto, establece que los menores entre 16 y 18 años podrán ser condenados con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años y hasta de 35 años. Esta norma estaría afectando el sentido protector distintivo de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Resolución Legislativa Nº 25278, así como el deber de proteger especialmente al niño y al adolescente reconocido por el artículo 4º de la Constitución.** (...) El literal b) del inciso 3) del artículo 40º de la Convención, establece como una de las garantías para los niños acusados de infringir leyes penales, el establecimiento por los Estados de una edad mínima, antes de la cual se presumirá la incapacidad penal.

[1] Defensoría del Pueblo. Informe El sistema penal juvenil en el Perú: Análisis jurídico social. Pág. 6. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe_51.pdf

[2] Defensoría del Pueblo. Informe El sistema penal juvenil en el Perú: Análisis jurídico social. Pág. 12.

De esta manera, **sería contrario a la Convención por atentar contra su carácter progresivo reducir la edad mínima de dieciocho años en el Código Penal,** sustrayendo a los adolescentes de la regulación especial que les otorga el Código de los Niños y Adolescentes e imputarles responsabilidad penal de acuerdo a las normas del Código Penal o normas complementarias.

Lo que además **violenta el sentido tuitivo de la legislación sobre niños y adolescentes**, es (...) **que sean pasibles de las más drásticas sanciones en establecimientos penales para adultos**, de alta seguridad, **sin consideración a su edad, a la situación de vulnerabilidad en la que se les pone, ni a la potencial victimización a la que se les confronta.**" [3] [Resaltado propio]

Continuando con nuestro mandato constitucional y la línea de trabajo institucional, la Defensoría del Pueblo de manera sostenida se ha mostrado en desacuerdo con distintas propuestas legislativas orientadas a reducir la edad de responsabilidad penal de los adolescentes. A continuación, se podrá observar algunas de las propuestas legislativas que pretendieron incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal; sin embargo, las mismas fueron archivadas o retiradas.

Periodo legislativo	Proyecto de ley
2016-2021	- PL 02217-2017-CR, ley que establece la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 16 años por la comisión de delitos graves y modifica el artículo 20 del Código Penal. - PL 01871-2017-CR, ley que modifica el artículo 11 del decreto legislativo 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes - PL 01309-2016-CR, ley que modifica los artículos XIII del título preliminar 2, 16, 19, 44, 45, 161, 177, 183 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado por el Decreto Legislativo 1348.
2011-2016	- PL 04147-2012-CR, ley que disminuye la edad de inimputabilidad en el Código Penal. - PL 02433-2012-CR, modifica art. 20 del Código Penal, estará exento de responsabilidad penal el menor de 16 años. - PL 1951-2012-CR, ley que modifica la responsabilidad penal de menores de edad. - PL 01886/2012-CR, ley que modifica el código penal, código procesal penal, Código de Ejecución Penal y el Código de Los Niños y Adolescentes y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. - PL 04004-2014-CR, inimputabilidad y responsabilidad restringida por la edad.

Elaboración: Defensoría del Pueblo

[3] Informe Análisis de los decretos legislativos sobre seguridad nacional dictados al amparo de la Ley N° 26950. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe_9.pdf

Fuente: Congreso de la República

Ahora bien, en el actual periodo parlamentario, nuevamente se presentaron diversas propuestas legislativas orientadas a incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años en el sistema penal ordinario. Cabe resaltar que todos los proyectos de ley han sido calificados como NO VIABLES por las diversas entidades que emitieron opinión.

Proyecto de ley	Posición de entidades consultadas	Estado actual
09252-2024-CR, ley que modifica diversos artículos del Decreto Legislativo n° 1348 para la lucha contra la delincuencia.	- Ministerio del Interior: No viable. - Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú: No viable. - Equipo de Asesoramiento en Orden Público y Seguridad Ciudadana del Estado Mayor General: No viable.	En comisión
09251-2024-CR, ley de reforma constitucional que precisa la edad mínima legal para atribuir responsabilidad penal	- Defensoría del Pueblo: No viable.	En comisión
08166-2013-CR, 07771-2023-CR, 06080-2023-CR, 00618/2021-CR, ley que establece la responsabilidad penal de adolescentes a partir de los 16 años	- UNICEF: No viable. - Defensoría del Pueblo: No viable. - Ministerio Público: No viable. - Poder Judicial: No viable. - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: No viable. - Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: No viable. - Policía Nacional del Perú: No viable.	Ley N° 32330

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Congreso de la República

La posición institucional de la Defensoría del Pueblo ha sido plasmada en diversos documentos, por ejemplo, en el Informe de Adjuntía N.º 001-2013-ANA/DP **(ANEXO 1-E)** y el Oficio N.º 0196-2022-DP **(ANEXO 1-F)**.

Con posterioridad a la presentación de la propuesta legislativa que dio origen a la ley materia de la presente demanda, en julio de 2024, la Defensoría del Pueblo presentó el Documento Defensorial N.º 001-2024-DP/ANA, denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*[4] **(ANEXO 1-G)**. Este documento concluyó que la formula legislativa resulta incompatible con el ordenamiento jurídico vigente y los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, especialmente en materia de derechos de la

[4] El mencionado documento fue remitido al Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, mediante Oficio n.° 0118-2025-DP/DA de fecha 7 de marzo de 2025.

niñez. Se precisó, además, que el enfoque punitivo ha demostrado ser insuficiente para enfrentar la criminalidad, por lo que se hace urgente promover estrategias de prevención que aborden las causas estructurales de la violencia y prioricen el respeto a la dignidad humana.

En ese sentido, se insistió en la necesidad de diseñar, reformular y/o implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, evaluables y sostenibles en el tiempo, que atiendan de manera integral a la niñez y adolescencia, especialmente a quienes se encuentran en contextos de alta vulnerabilidad.

Asimismo, en octubre de 2024, a través de los Oficios Nros. 2551-2024-DP, 2552-2024-DP, 2553 - 2024-DP, 2554-2024-DP, 2555-2024-DP, 2556-2024-DP, 2564-2024-DP, 2558-2024-DP, 2559-2024-DP, 2560-2024-DP, 2561-2024-DP, 2562-2024-DP y 2563-2024-DP **(ANEXO 1-H)**, se hizo llegar a diversos congresistas nuestra opinión desfavorable en relación con el texto sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que sirvieron de base a la ley materia de la presente demanda.

Una vez aprobada la ley por el Congreso de la República, el pasado abril emitimos el Comunicado N.º 016/DP/2025 **(ANEXO 1-I)** solicitando al Poder Ejecutivo que observe la autógrafa de ley. En ese sentido, el 5 de mayo de 2025, mediante Oficio N.º 0794-2025/DP **(ANEXO 1-J)**, la Defensoría del Pueblo envió a la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, una solicitud para que en ejercicio de sus facultades constitucionales y en defensa del Estado Constitucional de Derecho, observe la autógrafa de la ley.

Finalmente, la norma no fue observada; por el contrario, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado 10 de mayo. En ese sentido, mediante Comunicado N.º 021/DP/2025 **(ANEXO 1-K)**, informamos a la ciudadanía la decisión de interponer la presente demanda de inconstitucionalidad.

IX. ANÁLISIS DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Ley N.º 32330, al modificar el Código Penal, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y el Código de Ejecución Penal para considerar como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario a los adolescentes de 16 y 17 años por la comisión de un catálogo específico de delitos penales, incurre en graves vicios de inconstitucionalidad, así como en vulneraciones de los derechos, principios y garantías reconocidos en la Constitución Política del Perú, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en base a las siguientes consideraciones:

1. La Ley N.º 32330 contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política

La Constitución peruana ha establecido diversas disposiciones sobre la relación entre el derecho interno y los tratados internacionales de derechos humanos. Al respecto, el artículo 55 dispone que: "Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional". De

esta forma, la Constitución consagra un sistema de incorporación monista, es decir, la aplicación en el ordenamiento interno de las normas convencionales una vez que el tratado ha entrado en vigor en el plano internacional. De tal manera que el modelo constitucional peruano integra directamente el tratado como fuente de derecho interno una vez que este es vinculante y se encuentra en vigor.

Por su parte, la Cuarta Disposición Final y Transitoria establece que "Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú". Este mandato obliga a todos los poderes públicos, entre ellos el Congreso de la República, y a los operadores jurídicos, fiscales y jueces, a interpretar los derechos fundamentales de conformidad con los estándares que surjan de los tratados internacionales.

Sobre esto último, si bien no existe una definición interna sobre los diferentes tipos de tratados en base a su contenido, la Constitución realiza una diferenciación a partir del tipo de solemnidad requerida en el proceso de su celebración: tratados complejos[5], tratados simplificados[6] y tratados que afectan disposiciones constitucionales[7]. Dentro de los tratados complejos se encuentran los tratados de derechos humanos.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional se ha decantado por reconocer que los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional, al precisar que, si los derechos constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados, estos forman parte del parámetro para medir la constitucionalidad, conformando el denominado "Bloque de Constitucionalidad"[8]. Esto implica que los tratados de derechos humanos con rango constitucional sirven como estándar para el control de constitucionalidad de normas infra-constitucionales, como la cuestionada a través de esta demanda.

Ahora bien, la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado de derechos humanos debido a que, en primer lugar, tiene como finalidad el establecimiento de obligaciones a los Estados respecto a los seres humanos, desarrollando así un elemento importante de reconocimiento y protección de derechos. En segundo lugar, constituye un tratado de derechos humanos pues fue adoptado dentro del esquema de tratados solemnes consagrado en el artículo 56 de la Constitución. Al respecto, es preciso resaltar que la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada mediante la Resolución Legislativa N° 25278.

Por otro lado, su condición como tratado de derechos humanos también ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 03247-2008-HC/TC, al señalar que:

---

[5] Son aquellos que requieren una Resolución Legislativa del Congreso y ratificación por parte del Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 56 de la Constitución.
[6] Cuando los tratados no requieran la aprobación legislativa, el Presidente de la República los ratifica directamente, mediante Decreto Supremo, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 57 de la Constitución.
[7] Esta figura se encuentra contemplada en el segundo párrafo del artículo 57 de la Constitución.
[8] STC. Exp. N° 5854-2005-PA/TC. Fundamento Jurídico 23.

"4. (...) la protección de los derechos del niño es una preocupación constante en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como tal, ha sido plasmada en diferentes instrumentos internacionales, los cuales reconocen que **todos los niños, en su calidad de seres humanos, tienen todos los derechos, libertades y garantías que se encuentran consagrados en los mismos, sin discriminación de ninguna clase**. Asimismo, establecen la obligación de brindar una protección específica a favor de la infancia al señalar que todos los niños tienen derecho a las medidas de protección que su condición requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

5. Que **el concepto de protección comprende** no solo las acciones para evitar cualquier perjuicio sobre el desarrollo del niño y del adolescente, sino también **la adopción de medidas que permitan su crecimiento como personas y ciudadanos.** De esta forma, en materia de infancia se debe entender por protección el conjunto de medidas de amplio espectro que recaen sobre la persona humana, dotada de personalidad propia y potencial, que por razón de su edad o circunstancias particulares, requiere de la aplicación de medidas generales o especiales, que garanticen el logro de su potencialidad vital y la consolidación de las circunstancias mínimas para la construcción de su personalidad, a partir del conocimiento del otro y de la necesidad de alcanzar la realización propia."[9] [Resaltado propio]

En ese orden de ideas, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y ratificada por el Estado peruano en 1990, reconoce preliminarmente a los niños como sujetos de derechos y establece la obligación de los Estados Parte de garantizar su protección, incluyendo su derecho a vivir en un entorno familiar, a no ser separados de sus padres salvo en situaciones excepcionales y de acuerdo con el interés superior del niño.

Entre diversas obligaciones establecidas en la Convención, este tratado de derechos humanos aborda la situación de los adolescentes infractores de la ley penal y la necesidad de crear un sistema de justicia especializado. En efecto, el numeral 1 y 3 del artículo 40 dispone:

"Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen **el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad** y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y **en la que se tengan en cuenta la edad del niño** y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
(...)

3. Los **Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para**

[9] Tribunal Constitucional. STC N° 03247-2008-HC/TC, fundamento 4 y 5.

los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales." [Resaltado propio]

De otro lado, dentro del derecho a la integridad personal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que:

"Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
(...)
5. **Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados,** con la mayor celeridad posible, para su tratamiento." [Resaltado propio]

El referido artículo contempla el derecho de los adolescentes a ser procesados dentro de un sistema de administración de justicia especial. De allí que, en la Opinión Consultiva OC-17/2002, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que:

"**Es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas en que lo hace un adulto**. Si se sostuviera otra cosa se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de los niños, con grave perjuicio para estos mismos. Por lo tanto, **es indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación**, entre quienes participan en un procedimiento[10]". [Resaltado propio]

En cumplimiento de dichos mandatos internacionales, incorporados al sistema jurídico peruano, el Estado peruano ha regulado en el Libro IV del Código de los Niños y Adolescentes el sistema de administración de justicia especializada en el niño y el adolescente, estableciendo un procedimiento especial para el caso de infracción a la ley penal. Así lo ha reconocido también el propio Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 03386-2009-HC.

En efecto, en el fundamento 13 del citado expediente se prevé que, *"(...)* ***un sistema de responsabilidad penal juvenil es compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño****, siempre y cuando dicho sistema tenga una naturaleza garantista y sus disposiciones guarden conformidad con la doctrina de protección integral reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política".* [Resaltado propio]

[10] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002. Párrafo 96.

Incluso, en el 2017, mediante Decreto Legislativo N.º 1348, se emitió el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes[11]. Ambos códigos significaban la existencia de un sistema penal especial para niños y adolescentes menores de 18 años, el mismo que se adecuaba al marco constitucional y convencional. La Ley N.º 32330 colisiona con dicho sistema penal especializado, además de impactar negativamente en las normase convencionales de la cual el Perú es parte y que, en base al principio *pacta sunt servanda*[12], está obligado a cumplir.

2. La Ley N.º 32330 vulnera el principio convencional y constitucional del Interés Superior del Niño

El principio del Interés Superior del Niño se encuentra consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. De acuerdo con el Tribunal Constitucional, este principio tiene una estrecha relación con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política, siendo desarrollado por el Código de los Niños y Adolescentes y en la Ley N.º 30466.

Al respecto, el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes señala que: "En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos".

Por su parte, la Ley N.º 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, dispone en su artículo 2 que:

> "El **interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior** en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos". [Resaltado propio]

De igual forma, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en su artículo II, desarrolla el principio constitucional del Interés Superior de Niño aplicable a los adolescentes infractores de la ley penal, estableciendo que:

> **Artículo II.- Principio de interés superior del adolescente**
>
> 1. Al adolescente se le debe brindar la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos durante el proceso de responsabilidad penal. **El desarrollo y ejercicio de sus derechos deben ser considerados como principios rectores. Ningún derecho debe ser perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del adolescente**.
>
> 2. Es obligación de la autoridad que adopte una medida, evaluar las posibles repercusiones de las decisiones adoptadas en el adolescente, debiendo justificar

[11] La norma entrará en vigor el próximo 01 de agosto de 2025 en los distritos judiciales de Lima Norte, Puente Piedra-Ventanilla y Callao.

[12] Este principio se encuentra recogido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969, de la cual el Perú es parte. Ver en: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H795276

expresamente la forma como se ha considerado el interés superior, así como los criterios utilizados para dicha decisión y la ponderación efectuada frente a otros derechos e intereses. El adolescente debe ser escuchado en toda oportunidad que establezca el Código, en cualquier situación en la que se defina alguna decisión que pueda afectarlo y cuando así lo solicite.

3. **Esta disposición es de cumplimiento por todo funcionario o servidor público durante el desarrollo del proceso, así como durante la ejecución de alguna medida socioeducativa.** (...). [Resaltado propio]

Aunado a ello, el Tribunal Constitucional ha señalado que: "***El principio del interés superior del niño se caracteriza por irradiar sus efectos de manera transversal***. *Así, el deber de considerar sus alcances, cada vez que se adopten decisiones que los tengan como destinatarios, comprende a toda institución privada o pública, esto es, al Congreso de la República, órganos de la administración pública y tribunales de justicia.* ***Y exige de cualquiera de estos una actuación "garantista", de acuerdo con la cual cualquier decisión que involucre a un menor deba adoptarse considerando al menor como un sujeto de derecho al que es preciso garantizar la satisfacción integral de sus derechos.***"[13]

Asimismo, este Colegiado ha sido enfático en la aplicación del principio del Interés Superior del Niño. Por ejemplo, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 02079-2009-HC/TC, se calificó como el "vértice de interpretación" de los derechos del niño[14]. En tal sentido, los principios generales de aplicación de los tratados son plenamente aplicables a la Convención sobre los Derechos del Niño, por tanto, tal y como lo ha hecho el Tribunal Constitucional con anterioridad, los operadores jurisdiccionales deben interpretar la legislación interna a la luz de la citada convención, garantizando el cumplimiento de estándares internacionales y teniendo como consideración primordial el principio del Interés Superior del Niño.

Al respecto, es importante advertir que la integración de la Convención sobre los Derechos del Niño en el Bloque de Constitucionalidad[15] otorga a los niños[16] una protección especial con un enfoque diferenciado e individualizado, respecto de los adultos. Esta protección reconocida en el artículo 4 de la Constitución, impone que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Públicos, se considerará prioritario el principio del interés superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos[17].

A su vez, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que "en todas las medidas concernientes a los que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los **órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".** [Resaltado propio]

---

[13] STC N° 01665-2014-PHC/TC. Fundamento Jurídico 16.
[14] STC N° 02079-2009-PHC/TC. Fundamento Jurídico 13.
[15] STC N° 01587-2018-PHC/TC. Fundamento Jurídico 17.
[16] A la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, el término "niño" alude a los menores de 18 años de edad.
[17] STC N° 02079-2009-PHC/TC. Fundamento Jurídico 11.

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño ha precisado que el objetivo de este concepto es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño[18].

Desde este orden de ideas, resulta pertinente señalar que la Ley N.º 32330, al optar por un enfoque predominantemente punitivo y trasladar a los adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal adulto para delitos graves, no cumple con otorgar la debida primacía a su interés superior, ya que, al decir del Comité, el contacto con el sistema de justicia penal constituye un perjuicio para los niños, al restringir sus posibilidades de convertirse en adultos responsables, pues resulta evidente que el contacto prematuro de adolescentes infractores con el sistema penal de adultos, especialmente el peruano, de hecho genera consecuencias negativas que afectan su desarrollo integral y aumentan los riesgos de exclusión social, como la estigmatización social y daños en el desarrollo psicosocial[19].

A partir de lo señalado, el artículo 1 de la Ley N.º 32330 subordina el principio convencional y constitucional del Interés Superior del Niño de los adolescentes de 16 y 17 años al cumplimiento de los objetivos de una Política Criminal orientados a la seguridad ciudadana. Si bien nos encontramos ante un escenario coyuntural, no debemos olvidar que el Estado debe adoptar medidas estructurales e integrales, sin dejar de lado los principios de la justicia juvenil consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos[20].

3. La Ley N.º 32330 vulnera el principio constitucional de protección especial a la niñez y adolescencia

El artículo 4 de la Constitución Política del Perú establece de manera imperativa la obligación del Estado y la comunidad de proteger especialmente a todos los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado con total claridad que:

> "Sobre esta base normativa supranacional, el artículo 4° de la Constitución reconoce que la "comunidad y el Estado protegen especialmente al niño". Así pues, teniendo presente el enunciado normativo de este artículo, este Tribunal estima que **el constituyente ha**

[18] Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Párrafo 4.

[19] Un estudio realizado por las Naciones Unidas, indica que: "La investigación, basada en más de 7.000 artículos científicos, pone de manifiesto que las circunstancias específicas de la retención son directamente nocivas para la salud mental y física de los niños en todas las situaciones de privación de libertad". En: Estudio mundial sobre los niños privados de libertad. Párrafo 26. En el Perú, los efectos perversos del internamiento prolongado han sido expuestos con mucha claridad y detalle por los directores y profesionales que laboran en los Centros Juveniles, quienes señalaron, entre otras situaciones profundamente vulneratorios de derechos: "(...) haber observado en más de una oportunidad involución de los jóvenes después de transcurridos dos años de privación de libertad y que este fenómeno que se intensifica cuando su externamiento no es muy próximo". En: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (Perú). La Justicia Juvenil en el Perú, 2013, pág. 32. En: https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Informes/Justicia_Juvenil_Peru_2013_Final.pdf.

[20] Comité de los Derechos del Niño. Observación general núm. 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. Párrafo 3. Asimismo, la Corte IDH, sostiene que "los principios del interés superior del niño, de autonomía progresiva y de participación tienen una relevancia particular en el diseño y operación de un sistema de responsabilidad penal juvenil". En: Caso "Mendoza y otros vs. Argentina", Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Párrafo 143.

> **reconocido el principio de especial protección del niño, que se fundamenta en la debilidad, inmadurez (física y mental) o inexperiencia en que se encuentran los niños, y que impone tanto al Estado como a la familia, a la comunidad y a la sociedad, entre otras acciones y deberes, la obligación de brindarles atenciones y cuidados especiales y el deber de adoptar las medidas adecuadas de protección para garantizar su desarrollo libre, armónico e integral**"[21]. [Resaltado propio]

En el mismo sentido, el Tribunal ha enfatizado la disposición establecida que el artículo 4 de la Constitución "(...) tiene una base justa en el **interés superior del niño y del adolescente, doctrina que se ha admitido en el ámbito jurídico como parte del bloque de constitucionalidad** conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, a través del artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, **precisando que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo y Ministerio Público, entre otros, se considerará prioritario el principio del interés superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos**"[22]. [Resaltado propio]

Dicha obligación debe ser concordada con el artículo 1 del mismo texto constitucional que consagra la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo; y con el artículo 2, inciso 1, que reconoce el derecho fundamental al libre desarrollo y bienestar.

Aunado a ello, debemos tener presente la obligación de protección reforzada hacia el niño y adolescente, la cual ha sido reconocida en la Convención sobre Derechos del Niño (octavo párrafo del Preámbulo[23]), a la vez de constituirlo como sujeto de protección especial. Ambas protecciones representan un límite adicional al *ius puniendi* estatal, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que los instrumentos internacionales que la reconocen son un *corpus iuris* especial de protección de sus derechos[24].

Por último, es de recordar que el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha precisado que "**Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte** de su familia, de la sociedad y **del Estado**". [Resaltado propio]

4. La Ley N.º 32330 vulnera el principio-derecho a la dignidad y el derecho fundamental al libre desarrollo y bienestar de los adolescentes de 16 y 17 años

---

[21] STC. Exp. 01817-2009-PHC/TC. Fundamento Jurídico 4.
[22] STC. Exp. 02079-2009-PHC/TC. Fundamento Jurídico 11.
[23] "Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una **protección especial** ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño". [Resaltado propio]
[24] Cillero Bruñol, Miguel. El tratamiento de la criminalidad violenta grave en el derecho penal juvenil: Tesis doctoral. Universidad de Sevilla, 2010, pp. 359 y 360. En: https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=6pUKcRzdTEk%3D.

El artículo 2.1 de la Constitución Política reconoce a toda persona el derecho fundamental al libre desarrollo y bienestar. Este derecho no debe ser considerado como una solo cláusula general, sino un principio inherente del Estado democrático y Social de Derecho, cuya particularidad también se proyecta hacia los niños, niñas y adolescentes.

Como ha sido ampliamente reconocido por el Tribunal Constitucional, la noción de libre desarrollo de la personalidad *"(...) garantiza una libertad general de actuación del ser humano en cada esfera de desarrollo de personalidad"*[25]. Es decir, implica el reconocimiento del individuo como un ser autónomo y con el derecho a construir su proyecto de vida de manera libre, progresiva y en condiciones de dignidad, siendo el Estado garante activo de la remoción de cualquier obstáculo que impidan tal desarrollo.

A razón de ello, concluye el referido Tribunal que *"Tales espacios de libertad para la estructuración de la vida personal y social constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier intervención estatal que no sean razonables ni proporcionales para la salvaguarda y efectividad del sistema de valores que la misma Constitución consagra."*[26]

Para la Defensoría del Pueblo, este derecho fundamental cobra especial intensidad para el caso de los adolescentes de 16 y 17 años, pues nos encontramos en una etapa decisiva del ciclo de vida humano, donde se puede alcanzar un grado de consolidación de la identidad personal y la definición de proyectos de vida significativos.

En este marco, el sometimiento de adolescentes infractores al sistema penal adulto no solo constituye una medida regresiva en términos de protección de derechos, sino que configura una grave afectación al derecho fundamental al libre desarrollo y bienestar, al insertarlos en un sistema carcelario adulto que opera bajo lógicas punitivas, profundamente ajenas a los fines restaurativos y de promoción del desarrollo integral que exige la Convención sobre los Derechos del Niño. Aunado a ello, se desconoce que el sistema penitenciario aplicable a adultos se encuentra en crisis, incluso ha sido declarado Estado de Cosas Inconstitucionales por el mismos Tribunal Constitucional.

En ese mismo sentido, el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño impone a los Estados la obligación de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes; el cual comprende una dimensión mental, espiritual, moral, psicológica y social. El derecho al libre desarrollo de la personalidad de los niños constituye un elemento central en tanto su reconocimiento como sujetos de derechos, impone la búsqueda de un equilibrio que sin desconocer su vulnerabilidad respete su autodeterminación progresiva, conforme prescribe el artículo 5 de la citada Convención. De modo tal que se permita una expansión cada vez mayor de sus potencialidades físicas, psicológicas y afectivas, en cuyo proceso participan activamente la familia, la sociedad y el Estado; es decir, existe una obligación de actuar conjuntamente y de manera sincrónica.

---

[25] STC N° 02868-2004-PA/TC. Fundamento 14.
[26] STC N° 02027-2021-AA/TC. Fundamento 15.

Desde un enfoque de respeto a la dignidad, esta no debe ser negada a los niños y adolescentes por su minoría de edad y mayor vulnerabilidad, razón por la cual, se exige no solo adoptar un enfoque basado en sus derechos, sino garantizar un entorno que respete la dignidad humana y asegure el desarrollo holístico de todos los niños, que le garantice el pleno respeto de su derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Por lo demás, el derecho a la dignidad o su inviolabilidad se constituye como una garantía frente a la expansión del poder punitivo, al poner énfasis en la naturaleza ilegitima de las vulneraciones de derechos a través de actos abusivos o del uso arbitrario del poder estatal[27].

Desde esta perspectiva, resulta peligroso el sometimiento de los adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal de adultos, cuyo riesgo de estigmatización resulta opuesto al cumplimiento de esta obligación estatal. De allí que el Comité de los Derechos del Niño haya advertido de los efectos negativos del internamiento de adolescentes en centros penitenciarios para adultos, al poner en riesgo no solo su salud, sino también su seguridad básica, comprometiendo de este modo su desarrollo futuro[28].

De allí que resulte pertinente recordar que, según el Estudio Global sobre Niñez Privada de la Libertad, elaborado por las Naciones Unidas[29], concluyó que:

> "**La detención de niños y niñas como medida de prevención del delito, reducción de la delincuencia y/o seguridad de la comunidad es en gran medida ineficaz**, ineficiente en función de los costos e incluso contraproducente. **Las condiciones y la violencia tienen repercusiones negativas en el bienestar de la niñez y se han descrito como intrínsecamente angustiantes, potencialmente traumáticas y con efectos adversos en la salud mental.**" [Resaltado propio]

Es preciso señalar que la ley cuestionada incorpora a los referidos adolescentes a la población de los establecimientos penitenciarios diseñados para el internamiento de personas adultas que han sido condenadas por la comisión de delitos o que cuentan con mandatos de prisión preventiva. Al respecto, advertimos que la norma cuestionada presenta una contradicción pues pese a lo establecido en su primer artículo, la primera disposición complementaria modificatoria refiere que los internos entre 16 y 21 años serán separados de los adultos de acuerdo con criterios de separación.

Lo cierto es que la situación actual de los establecimientos penitenciarios en nuestro país no permitirá brindarles un adecuado tratamiento, acorde con los preceptos convencionales antes mencionados. Ello ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.º 05436-2014-PHC/TC[30], emitida en mayo del 2020. El Tribunal estableció que el

---

[27] Cillero Bruñol, Miguel. El tratamiento de la criminalidad violenta grave en el derecho penal juvenil: Tesis doctoral. Universidad de Sevilla, 2010, pp. 355 y 356. En: https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=6pUKcRzdTEk%3D.

[28] Comité de los Derechos del Niño. Observación general núm. 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. Párrafo 2.

[29] Naciones Unidas. Estudio global de las Naciones Unidas sobre niñez privada de la libertad. Resumen Ejecutivo. 2019. En: https://omnibook.com/view/59879413-1a0d-4c78-887e-91066d6f025a/page/1

[30] Disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/05436-2014-HC.pdf

hacinamiento en cárceles afecta gravemente la calidad de vida de los internos e internas, al no contar con una debida infraestructura y servicios básicos, por lo que advierte un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario.

Asimismo, la referida sentencia mencionó que las condiciones penitenciarias como el hacinamiento pueden menoscabar el ejercicio de derechos de las personas privadas de libertad y, en ese sentido, llegar a constituir incluso tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Otra evidencia clara de la preocupante situación de los establecimientos penitenciarios son los hallazgos reflejados en el Informe Defensorial N.º 216[31] **(ANEXO 1-L)**, el cual revela las deficiencias en la prestación de los servicios que brinda el Instituto Nacional Penitenciario, que impiden el cumplimiento de la finalidad del sistema de ejecución penal que está orientado a una adecuada reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Lamentablemente, esta situación también se verá reflejada con los adolescentes que ingresen a los establecimientos penitenciarios en aplicación de la norma en cuestión, por lo que resulta necesario que el Tribunal Constitucional se pronuncie lo antes posible, declarando fundada la presente demanda.

Nuestro informe reveló también, entre otros temas, que el servicio de asistencia social en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional se encuentra en una situación crítica, al solo contar con 137 trabajadores sociales que no pueden atender las necesidades de más de noventa mil personas que conforman la población penitenciaria. Esta situación también afectará a los adolescentes que ingresen a los establecimientos penitenciarios.

Por último, la norma hace referencia a "Proyectos de tratamiento individualizado", encontrándose entre ellos actividades de trabajo penitenciario y educativas, entre otros; sin embargo, nuestro citado Informe Defensorial reveló que la oferta que se brinda en los talleres de estudio y trabajo en los establecimientos penitenciarios resulta insuficiente, en relación con la demanda de la población penitenciaria; lo cual afectará gravemente a los adolescentes de 16 y 17 años.

5. La Ley N.º 32330 incumple el deber estatal de garantizar un sistema penal juvenil para adolescentes de 16 y 17 años

El numeral 3 del artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño exhorta a los Estados Parte a promover el establecimiento de un sistema penal juvenil, es decir, diferenciado del sistema de adultos, al establecer la obligación estatal de adoptar:

> "(...) **todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales** o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes (...)". [Resaltado propio]

[31] Informe Defensorial N.º 216, Derechos humanos de los internos e internas de los 68 establecimientos penitenciarios del país. En el marco del Programa Rompiendo Cadenas. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/Informe-Defensorial-216-Derechos-Humanos-PPL.pdf

Asimismo, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores ("Reglas de Beijing")[32], en su Regla 2.3, instan a los Estados a que:

> "En cada **jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes,** así como a los órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de menores (...)". [Resaltado propio]

Igualmente, las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)[33], ha establecido en la directriz 52, con claridad que:

> "Los **gobiernos deberán promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales** para fomentar y proteger los derechos y el bienestar de todos los jóvenes". [Resaltado propio]

Por otro lado, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, el artículo 5.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos determina que:

> "Cuando **los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados**, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento". [Resaltado propio]

A partir de este dispositivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-17/2002, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, señaló que:

> "Una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada y específica las cuestiones referentes a los niños, y particularmente, las relacionadas con la conducta ilícita, **es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquéllos**. (...) Consecuentemente, los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de conductas previstas como delictuosas por la ley penal, deberán quedar sujetos, para los fines del conocimiento respectivo y la adopción de las medidas pertinentes, **sólo a órganos jurisdiccionales específicos distintos de los correspondientes a los mayores de edad**"[34]. [Resaltado propio]

Esta distinción de tratamiento, como bien lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño, se basa en las diferencias respecto a su grado de desarrollo tanto físico como psicológico, así como también en el reconocimiento de un menor grado de culpabilidad[35]. Además, en el hecho

---

[32] Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985.

[33] Aprobadas y proclamadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990

[34] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-17/2002. Párrafo 109. Igualmente, en el caso "Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay", Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafo 210.

[35] Comité de los Derechos del Niño. Observación general núm. 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. Párrafo 2. En sentido similar, la Corte IDH en el caso "Mendoza y otros vs. Argentina", Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Párrafo 146.

comprobado de que el contacto precoz con el sistema de justicia penal los perjudica, pues limita sus posibilidades de convertirse en adultos responsables.

La existencia de una capacidad penal o culpabilidad disminuida de los adolescentes se estructura a partir de la evidencia proveniente, tanto de la psicología evolutiva, las ciencias neurológicas o neurociencias y la criminológica. De allí que el Comité de los Derechos del Niño señala lo siguiente:

> "Las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la **capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando** en los niños de 12 a 13 años, **debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando**. Por lo tanto, **es poco probable que comprendan las consecuencias** de sus **acciones o que entiendan los procedimientos penales**. También se ven afectados por su entrada en la adolescencia. Como señala el Comité en su observación general núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, esta es una etapa singular de definición del desarrollo humano caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro, lo que afecta a la asunción de riesgos, a ciertos tipos de toma de decisiones y a la capacidad de controlar los impulsos. **Se alienta a los Estados parte a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo**. Además, las pruebas obtenidas en los ámbitos del desarrollo y la neurociencia indican que los cerebros de los jóvenes **continúan madurando incluso más allá de la adolescencia**, lo que **afecta a ciertos tipos de toma de decisiones**" [36]. [Resaltado propio]

En esa misma línea, en el citado Documento Defensorial N.º 001-2024-DP/ANA, la Defensoría del Pueblo ha sostenido, sobre la base de varios estudios revisados, que la madurez y el pensamiento abstracto aún están en desarrollo en adolescentes tempranos debido a que la corteza prefrontal del cerebro sigue madurando, y que esta etapa se caracteriza por un rápido desarrollo cerebral que afecta la asunción de riesgos y el control de impulsos.

Además, precisa que la psicología evolutiva describe cambios cognitivos en la adolescencia, como el desarrollo de un pensamiento que permite distanciarse de la realidad, manifestándose en un "egocentrismo metafísico", la sensación de ser el centro de atención ("auditorio imaginario") y la creencia de que las consecuencias negativas de acciones riesgosas solo aplican a otros ("fábula personal").

Por último, ha indicado que estudios de neurociencia confirman que el córtex prefrontal, crucial para funciones cognitivas complejas como la toma de decisiones y el control de impulsos, madura completamente recién en la tercera década de vida.

Por ello, la rotundidad y claridad de estos estudios implica, siguiendo a los profesores Couso y Duce, que los mismos sean plasmados en el diseño e implementación, tanto de normas procesales regulatorias específicas del proceso de investigación y juzgamiento, como de instituciones y

[36] Observación general núm. 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, párrafo 22.

órganos (individuales y colegiados) especializados[37]. Es decir, no solo de penas diferenciadas, sino también de procedimientos adaptados a sus especiales necesidades, así como personal judicial y penitenciario altamente especializado, que actúen bajo un enfoque educativo, ajeno al puro retribucionismo.

Al respecto, es importante observar que la Ley N.º 32330, al incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario para ciertos delitos, desarticula el sistema especializado establecido para este grupo etario en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, lo cual constituye un retroceso en la protección de derechos del referido grupo etario y una clara contravención a las normas convencionales antes citadas. Cabe señalar que el Código en mención contiene enfoques como el de protección de derechos y de justicia restaurativa, entre otros, que se verán afectados en virtud de la Ley antes mencionada.

Asimismo, es importante advertir que la Ley N.º 32330 mantiene su inconstitucionalidad pese a la creación de un autodenominado "sistema de individualización científica" para personas entre 16 y 21 años edad (artículo 63-A del Código de Ejecución Penal) y la separación de los adultos (Primera Disposición Complementaria Modificatoria), en tanto la sola sujeción a la jurisdicción penal ordinaria, resulta *per se* contraria a los objetivos y fines de la justicia penal juvenil.

Al respecto, debemos recordar que entre los objetivos del Sistema de Justicia Penal Juvenil y su mecanismo restaurativo se encuentran lograr que el adolescente comprenda y valore las consecuencias que el hecho cometido generó en la víctima, así como cumplir con el fin educativo del proceso de responsabilidad penal del adolescente, no alterando su desarrollo integral mediante la aplicación de medidas socioeducativas.

Cabe señalar que la ejecución de dichas medidas tiene por finalidad la reinserción social del adolescente, en atención a su interés superior, a través de los programas de orientación y formación que le permitan su permanente desarrollo personal, familiar y social, así como el desarrollo de sus capacidades.

En efecto, la incorporación del sistema de individualización de las sanciones en el Código de Ejecución Penal (artículo 63), en tanto se activa después del procesamiento y juzgamiento de los adolescentes con las reglas del derecho penal de adultos, no previene su ingreso a dicho sistema, únicamente ofrece un tratamiento "diferenciado" sin salir del mismo. Ello resulta irrelevante, pues no compensa los efectos perjudiciales del sometimiento del adolescente a un proceso penal aplicable al adulto, resultando igualmente vulneratorio del deber de protección estatal.

Por tanto, la efectividad de este trato en un entorno penitenciario adulto, incluso con separación física, para lograr los fines de resocialización del adolescente, resulta extremadamente contradictorio a nuestro ordenamiento jurídico constitucional y convencional.

Ahora bien, nuestro ordenamiento ha previsto que cualquier tipo de infracción atribuida al adolescente, debe contar con un mecanismo de justicia independiente al proceso penal ordinario

[37] Cf. Duce, Mauricio y Couso Jaime. Juzgamiento penal de adolescentes. LOM ediciones. Santiago de Chile, 2013, p. 2013.

que respete la dignidad de este grupo de especial protección. Ello se encontraba regulado en el Código de los Niños y Adolescentes y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, los cuales prevén medidas socioeducativas que garantizan el respecto de la dignidad de los adolescentes infractores de la ley penal.

6. La Ley N.º 32330 incumple la finalidad de las medidas socioeducativas orientadas a la reintegración familiar y social del adolescente de 16 y 17 años

El artículo 40.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño con toda claridad señala que el sistema penal juvenil debe orientarse a promover la reintegración social del adolescente y la asunción de un papel constructivo en la sociedad, es decir, confiere mayor intensidad a los fines preventivos especiales (socioeducativos), antes que los retributivos generales[38].

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del citado dispositivo y en concurrencia con el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sostenido que la medida a imponer a los adolescentes infractores en el caso de acreditarse su responsabilidad debe tener como finalidad su reintegración a la sociedad, para lo cual la proporcionalidad de la pena debe guardar relación con dicho objetivo[39].

Al respecto, pretender aplicar el sistema penal para adultos a los adolescentes, especialmente en un entorno carcelario adulto, inevitablemente prioriza los aspectos retributivos o punitivos, lo cual imposibilita la reinserción de los adolescentes infractores. Aunado a ello, no se puede desconocer que el sistema carcelario peruano, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional mantiene un estado de operatividad vulneratorio de los derechos fundamentales de las personas, ajenos totalmente a los fines primordiales de la justicia juvenil.

Esta situación se agrava si consideramos el grave hacinamiento de los establecimientos penitenciarios en nuestro país, problemática que ha sido considerada en el año 2020 por el Tribunal Constitucional para declarar la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario. Cabe indicar que, como hemos señalado líneas arriba, la precariedad del sistema penitenciario persiste en la actualidad, lo cual se evidencia en los hallazgos del Informe Defensorial N.º 216, publicado en julio de 2024.

7. La Ley N.º 32330 incumple el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos

El principio de progresividad aplicable a los derechos humanos exige que el Estado avance continuamente hacia la más completa realización de estos[40], teniendo como corolario la

---

[38] Vázquez González, Carlos. Delincuencia juvenil. Editorial Dykinson. Madrid, 2019, p. 374.

[39] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso "Mendoza y otros vs. Argentina", Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Párrafo 165.

[40] El principio de progresividad se ha relacionado particularmente con los derechos económicos, sociales y culturales, pero aplica también para los civiles y políticos, procurando por todos los medios posibles su satisfacción en cada momento. En: Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México 2018. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf, pp. 11 y 12. En similar sentido, Vásquez, Luis Daniel y Serrano, Sandra. *Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y*

prohibición de regresividad, que impide al Estado adoptar medidas que disminuyan el nivel de protección de los derechos ya reconocidos.

La mencionada progresividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el caso del Estado peruano se concretiza a partir de la ratificación soberana de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya adecuación normativa, a través de la promulgación de sucesivos códigos de la niñez y la adolescencia[41], determinó el reconocimiento del carácter especial del sistema de justicia penal juvenil, que debía procesar y sancionar a las personas menores de 18 años de edad, decisión que se ha mantenido vigente hasta la publicación de la Ley N.º 32330.

La citada norma representa una clara regresión normativa, al rebajar la edad de imputabilidad para un grupo de adolescentes que cometan determinados tipos de delitos, reduciendo el estándar de protección especial exigido en las normas y jurisprudencia internacional, en consideración a su grado de desarrollo psicofísico. Ello sin justificar ni demostrar que esta medida constituye la única vía, entre las diversas alternativas, para alcanzar un objetivo estatal prioritario, y sin haber previsto todas las precauciones para mitigar sus efectos negativos sobre los derechos de los adolescentes.

Por consiguiente, el Estado ha decidido que los adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados en el sistema penal para adultos, produciendo indefectiblemente un retroceso en la protección de los derechos de los adolescentes de nuestro país, vulnerando el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

Aunado a ello, en el Informe Defensorial N.º 51, la Defensoría del Pueblo ya advertía que el Estado peruano había avanzado hacia un mayor reconocimiento de derechos al pasar de la aplicación de una Doctrina de Situación Irregular a una Doctrina de Protección Integral, con la entrada en vigencia del Código de Niños y Adolescentes. Al respecto, sostuvo que:

> "La Doctrina de la Situación Irregular comenzó a ser cuestionada por la afectación de los derechos fundamentales del interno, tanto por los criterios para determinar quiénes podrían ser juzgados como infractores, como por el tipo de proceso a los que los sometían. **Por ello, emergió la denominada Doctrina de la Protección Integral**, [...]. La **Doctrina de la Protección Integral se caracteriza por reconocer al menor de edad como ser humano y sujeto de derechos.**"[42] [Resaltado nuestro]

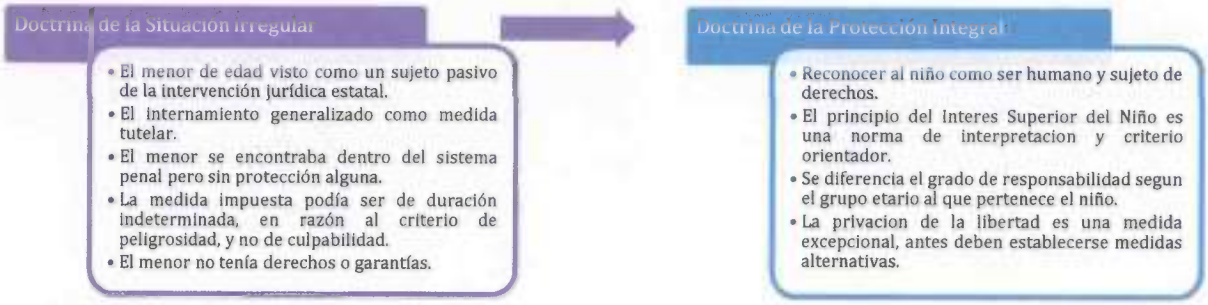
---

progresividad. Apuntes para su aplicación práctica. p. 159 y ss. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/7.pdf. Complementariamente, debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 41° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala lo siguiente: "Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: a) El derecho de un Estado Parte; o b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado."

[41] Decreto Ley N° 26102 publicado con fecha 29 de diciembre de 1992, en el texto del T.U.O. del Código de los Niños y Adolescentes (aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-99-JUS de fecha 8 de abril de 1999), el vigente Código de los Niños y Adolescentes (aprobado mediante Ley N° 27337 de fecha 7 de agosto de 2000); y, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, promulgado el 07 de enero de 2017.

[42] Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N.º 51. Pág. 16. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1191660/Informe_5120200803-1197146-1f1lth9.pdf?v=1596577041

De igual forma, la doctrina de la Protección Integral encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil.



Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Informe Defensorial N.º 51.

Aunado a ello, a fin de determinar la prohibición que tiene el Estado de no retroceder en la garantía y respeto de los derechos humanos a los niños, niñas y adolescentes, resulta clave lo señalado en el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual precisa que "Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: a) El derecho de un Estado Parte; o b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado".

En el mismo sentido, es de advertir que los estándares relativos al sistema penal juvenil se encuentran protegidos por los alcances del segundo párrafo del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual señala que en ninguna circunstancia los derechos de los niños pueden ser suspendidos. Ello, lo recuerda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al afirmar que:

> "(...) la adopción de medidas regresivas a través de las cuales se limite el goce de los derechos de los niños, constituye una violación a los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos e insta a los Estados a abstenerse de aprobar legislación contraria a los estándares sobre la materia"[43].

En atención a lo expuesto, el Estado peruano tiene la obligación internacional de progresar en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, la publicación de la Ley N.º 32330 significa un retroceso significativo en dicha protección.

8. La Ley N.º 32330 contradice la Política Nacional del Adolescente en riesgo y en conflicto con la Ley Penal al 2030

[43] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas. 2011. Párrafo 144.

La ley aprobada no se condice con la Política Nacional del Adolescente en riesgo y en conflicto con la Ley Penal al 2030[44], la cual reconoce como problema público que "cuando un/una adolescente ingresa a un proceso dentro del sistema de justicia penal juvenil se enfrenta con insuficientes espacios para su resocialización o integración a la vida familiar, educativa y social". Esta situación se agravará aún más con la ley objeto de la presente demanda.

Al respecto, debemos señalar que los objetivos prioritarios representan el aspecto central de la política nacional multisectorial en tanto describen los cambios específicos que se desea alcanzar en materia de la política criminológica para prevenir el crimen y la reforma de la justicia penal juvenil. Estos objetivos orientan las acciones del Estado para alcanzar la situación futura deseada con un horizonte temporal al año 2030, propósitos que se ven afectados con la ley en cuestión.

Entre los objetivos prioritarios de esta política tenemos:

- Objetivo prioritario 1: Reducir la concentración de condiciones de riesgo de los y las adolescentes en riesgo infractor

Este objetivo busca que los adolescentes se desarrollen de forma integral para evitar la inclusión en proyectos de vida en criminalidad, a través de la disminución de los factores de riesgo criminógenos que la evidencia ha relacionado, y fortalecer los principales sistemas de socialización como la familia, la comunidad y la institución educativa, de modo que sean espacios de protección y promoción de los factores protectores específicos.

- Objetivo Prioritario 2: Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil

Este objetivo busca asegurar el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal alineados al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento. Así como el fortalecimiento de las estrategias y programas vinculados a las salidas alternativas al proceso judicial, y enfoques como la justicia juvenil restaurativa y la justicia terapéutica.

- Objetivo Prioritario 3: Fortalecer la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal

Este objetivo dispone alcanzar los niveles más altos de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal durante la ejecución de las medidas socioeducativas en los Centros Juveniles, así como durante la intervención de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa y su programa de orientación, en el marco de la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

La Política Nacional del Adolescente en riesgo y en conflicto con la Ley Penal al 2030 representa el deber primordial del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, con

[44] Aprobado mediante Decreto Supremo N.º 009-2023-JUS, el 27 de setiembre de 2023.

especial énfasis de los grupos vulnerables como son los adolescentes, lo cual adquiere relevancia si consideramos las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 16 de las Naciones Unidas[45].

De otro lado, en el Boletín Estadístico: *Reporte Mensual de datos estadísticos presentados por la UAPSIE*[46] del Programa Nacional de Centros Juveniles[47] (Pronacej) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se destaca que el programa atendió a 3,804 adolescentes y jóvenes. De ellos, 1,862 pertenecían a los Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJRD); 1,609, a los Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) y 333, al Programa de Asistencia y Seguridad Posterior al Egreso (PASPE), lo que representó el 48.9 %, 42.3 % y 8.8% de la población total activa del Programa Nacional de Centros Juveniles, respectivamente.

Asimismo, dicho boletín advierte que *"en el mes de mayo, 16.3 % de adolescentes egresados de los CJDR del PASPE realizó actividades educativas y 52 %, actividades laborales. Respecto de los SOA, 48.9 % realizó actividades educativas y 52.8 %, de carácter laboral"*. Esta información revela que los programas de educación y de trabajo implementados dentro del recinto juvenil, y que buscan la rehabilitación del adolescente infractor, resultan de gran prevalencia por parte del Estado, cuyo efecto próximo es lograr su reinserción social.

9. La Ley N.º 32330 resulta ineficaz a efectos de luchar contra la inseguridad ciudadana, vulnerando el principio de razonabilidad

De acuerdo con la información estadística publicada por el Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de febrero del 2025[48], los grupos etarios de 25-29,30-34y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la edad de responsabilidad penal que contempla la norma aprobada por el Congreso de la República.

El informe del INPE también revela que el grupo etario más cercano a la minoría de edad, esto es de 18 y 19 años, en febrero de 2025, solo reúne a 694 internos e internas, de un total de 100,603 personas recluidas en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional[49].

---

[45] Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Organización de las Naciones Unidas). Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.

[46] Unidad de Asistencia Técnica Post Egreso, Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención.

[47] Programa Nacional de Centros Juveniles. Boletín Estadístico: *Reporte Mensual de datos estadísticos presentados por la UAPSIE*. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6575594/5722800-boletin-estadistico-mayo-2024.pdf?v=1720029382

[48] Instituto Nacional Penitenciario. Informe Estadístico del INPE. Febrero de 2025. Pág. 15. Disponible en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2025/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_febrero_2025.pdf

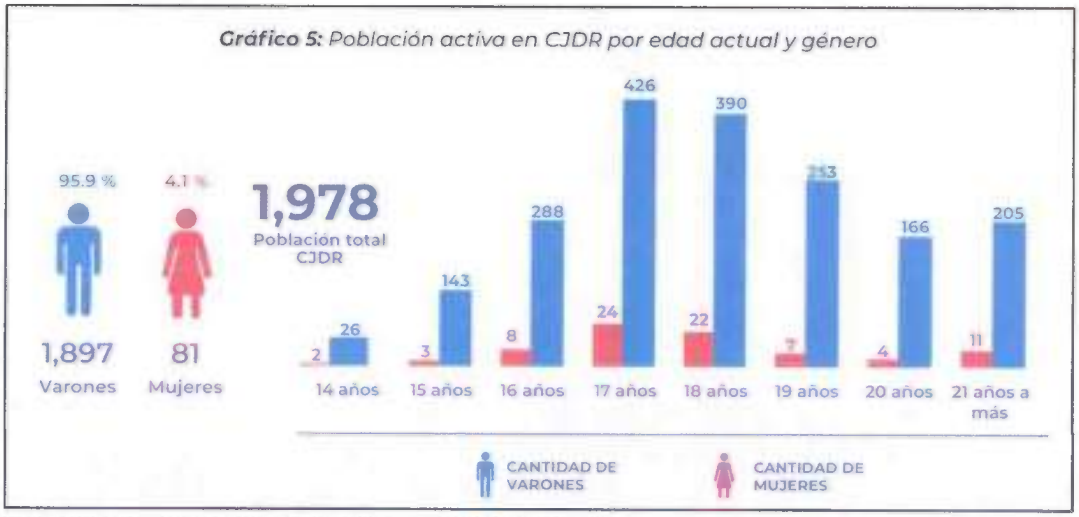
[49] Instituto Nacional Penitenciario. Sistema de información de estadísticas penitenciarias. Disponible en: https://siep.inpe.gob.pe/form/reporte



Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Instituto Nacional Penitenciario

Del mismo gráfico se advierte que el porcentaje de internos de 18 y 19 años en su pico más alto, en el 2017, representó únicamente el 1.17% (1,007) del total de internos recluidos en establecimientos penitenciarios. Desde el 2017, la tendencia de personas de dicho grupo etario recluidas ha ido en descenso.

De otro lado, a febrero de 2025, el Pronacej determinó que los adolescentes de 16 y 17 años representan el 37.7% (746) del total de la población activa en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación – CJDR.



Fuente: Pronacej – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Gráfico 13: *Mayores infracciones específicas en CJDR*



Fuente: Pronacej – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Esta información permite inferir que no es necesario reducir la edad para que los adolescentes respondan penalmente, más aún si nuestro país ya cuenta con un sistema de responsabilidad penal especial para adolescentes que infringen la ley penal, donde las infracciones de mayor incidencia por las cuales son internados los adolescentes en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación son robo agravado (934 casos) y violación sexual de menor de edad (234 casos), distintos a los comprendidos en la norma cuestionada.

En efecto, el dictamen emitido por el Congreso de la República sustenta la emisión de la norma "en la necesidad de disminuir el índice de criminalidad cometido por menores de 18 años y mayores de 16 años de edad, la impunidad y la sensación de inseguridad ciudadana, ante la preocupante situación de temor y zozobra que se vive en el país, la cual se agrava por la presencia de menores ciudadanos extranjeros integrantes de bandas y organizaciones criminales"[50].

No obstante, del siguiente grafico se advierte que el internamiento de adolescentes en CJDR por delito de organización criminal es de 1 interno, mientras que por el delito de sicariato es de 7, según las cifras publicada por el Pronacej a febrero de 2025.

[50] Congreso de la República. Dictamen recaído en los proyectos de ley 618/2021 -CR, 6080/2023-CR, 7771/2023-CR y 8166/2023-CR, que propone la Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348; para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años, como imputables dentro del Sistema Penal. Pág. 11. Disponible en: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjA1NTUy/pdf



Fuente: Pronacej – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Las cifras expuestas evidencian la profunda incompatibilidad de la ley con los principios constitucionales, las obligaciones internacionales del Estado peruano, la evidencia científica y, sobre todo, con el interés superior del niño y los derechos fundamentales de los adolescentes. En ese mismo sentido, la incompatibilidad evidencia una vulneración al principio de razonabilidad.

En cuanto al principio de razonabilidad, se ha sostenido que *"(...) representa la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho"*, en el sentido que, *"se expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades discrecionales de los poderes públicos"*[51]. Es decir, toda norma legal debe sujetarse no solo a los procedimientos formales establecidos, sino también a parámetros sustantivos que garanticen el respeto de los derechos fundamentales, sobre todo cuando estos derechos pertenecen a grupos de especial protección, como son los niños y adolescentes.

También se ha considerado que la protección especial del menor implica que "las autoridades públicas se encuentran obligadas a actuar en función de los principios de razonabilidad y proporcionalidad; elementos que deben aplicarse en todos los casos sin excepción ni condicionamiento alguno, como requisitos indispensables para la validez constitucional de las decisiones que se adopten (...).[52]

Para la Defensoría del Pueblo, la Ley N.º 32330 que incorpora a adolescentes de 16 y 17 años dentro del sistema penal para adultos, genera un quiebre del régimen de justicia juvenil que el Estado peruano ha adoptado en cumplimiento de sus obligaciones convencionales. El cambio normativo se realizó sin que el legislador haya cumplido con la carga argumentativa reforzada que le impone el principio de razonabilidad y proporcionalidad en contextos donde se afectan derechos fundamentales de adolescentes, y sin evidenciar una relación de causalidad entre la medida impuesta y el objetivo a alcanzar (luchar contra la inseguridad ciudadana).

[51] STC N° 03167-2010-AA/TC. Fundamento 11.
[52] STC N° 04937-2014-PHC/TC. Fundamento 20 y 21.

Por tanto, consideramos que la Ley N.º 32330 incurre en un ejercicio inconstitucional del poder legislativo, por cuanto vulnera el principio de razonabilidad como estándar sustantivo ineludible, especialmente en el tratamiento jurídico de adolescentes infractores de la ley penal, configurándose una infracción autónoma de los límites constitucionales al poder normativo del Parlamento. El déficit de razonabilidad en la emisión de la ley objeto de cuestionamiento no es un simple defecto formal, sino un vicio sustantivo de inconstitucionalidad que hace insostenible su validez en un Estado Constitucional de Derecho.

X. MEDIO PROBATORIO

- Publicación de la Ley 32330, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

- OFICIO Nº 041-2025- DP/DMNPT de fecha 13 de mayo de 2025, emitido por la Dirección General del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros malos tratos de la Defensoría del Pueblo. El documento contiene un link de acceso a un drive, que contiene material fotográfico y fílmico, el cual acredita la situación actual inhumana que padecen los adolescentes.

POR TANTO:

A usted, señora presidente del Tribunal Constitucional solicito admitir a trámite la presente demanda de inconstitucionalidad y declararla fundada en su oportunidad, para eliminar del ordenamiento jurídico la Ley Nº 32330, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal, por contravenir el principio-derecho a la dignidad (artículo 1), el derecho al libre desarrollo y bienestar (artículo 2.1), la protección especial de los niños, niñas y adolescentes (artículo 4), el principio de resocialización (artículo 139.22) y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política; así como, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos suscritos por el Estado Peruano.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Notificación electrónica

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, consignamos la siguiente dirección electrónica: hsaldana@defensoria.gob.pe e indicamos el número de teléfono celular: 995170203.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Designar como apoderados

De conformidad con el artículo 80 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, designo como apoderado en este proceso competencial al Jefe de Gabinete Hebert Anderson Saldaña Saavedra, con DNI 07446380 y registro CAL 23952, a fin de que intervenga indistintamente en los actos procesales permitidos conforme a ley.

TERCER OTROSÍ DIGO: Adjuntamos anexos

ANEXO 1-A: Copia de la Resolución Legislativa N.º 013-2022-2023-CR, que nombra al Dr. Josué Manuel Gutiérrez Cóndor como Defensor del Pueblo.

ANEXO 1-B: Copia del DNI del Dr. Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, Defensor del Pueblo.

ANEXO 1-C: Copia de la Resolución Administrativa N.º 030-2025/DP-DP, que designa al abogado Hebert Anderson Saldaña Saavedra como jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo.

ANEXO 1-D: Copia del DNI del abogado Hebert Anderson Saldaña Saavedra, jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo.

ANEXO 1-E: Informe de Adjuntía N.º 001-2013-ANA/DP.

ANEXO 1-F: Oficio N.º 0196-2022-DP.

ANEXO 1-G: Documento Defensorial N.º 001-2024-DP/ANA, Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú.

ANEXO 1-H: Oficios remitidos a congresistas de la República.

ANEXO 1-I: Comunicado N.º 016/DP/2025.

ANEXO 1-J: Oficio N.º 0794-2025/DP.

ANEXO 1-K: Comunicado N.º 021/DP/2025.

ANEXO 1-L: Informe Defensorial Nº 216. Derechos Humanos de los internos e internas de los 68 establecimientos penitenciarios del país.

ANEXO 1-M: Publicación de la Ley 32330, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

ANEXO 1-N: OFICIO Nº 041-2025- DP/DMNPT de fecha 13 de mayo de 2025, emitido por la Dirección General del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros malos tratos de la Defensoría del Pueblo. El documento contiene un link de acceso a un drive, que contiene material fotográfico y fílmico, el cual acredita la situación actual inhumana que padecen los adolescentes.

Lima, 19 de mayo de 2025

Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Defensor del Pueblo

Hebert R. Saldaña Saavedra
ABOGADO
CAL 23954

El Peruano Firmado por: Editora Peru Fecha: 19/05/20
ANEXO
35

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Gerente de Publicaciones Oficiales : **Ricardo Montero Reyes** "AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

NORMAS LEGALES

Año XL - Nº 17253 VIERNES 19 DE MAYO DE 2023 1

EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Res. 013-2022-2023-CR.- Resolución Legislativa del Congreso que designa al Defensor del Pueblo 1

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Resolución Legislativa del Congreso que designa al Defensor del Pueblo

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 013-2022-2023-CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO QUE DESIGNA AL DEFENSOR DEL PUEBLO

El Congreso de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 161 de la Constitución Política del Perú; los artículos 6, 64 -inciso c)- y 93 de su Reglamento; y los artículos 2 y 3 de la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ha resuelto elegir al señor JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA
Presidente del Congreso de la República

MARTHA LUPE MOYANO DELGADO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

2179218-1

El Peruano

Editora Perú es una empresa pública de derecho privado. Su principal objetivo, para habilitar el mandato Constitucional, es editar el Diario Oficial El Peruano y darle publicidad a los dispositivos aprobados por las instituciones públicas y sus correspondientes autoridades. Editora Perú no es, por tanto, responsable por los contenidos de las publicaciones oficiales remitidas por las entidades del Estado.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES

ANEXO 3

REPÚBLICA DEL PERÚ
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

CUI
22672851-7



22672851

Primer Apellido
GUTIERREZ

Segundo Apellido
CONDOR

Prenombres
JOSUE MANUEL

715122

Sexo	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento
M	PER	01 05 1972

Estado Civil	Fecha de Emisión
CASADO	06 10 2021

N° de Tarjeta	Fecha de Caducidad
0200490778	06 10 2029

Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio

Grupo de Votación
113365

Ubigeo de Nacimiento 080101
Donación de Órganos SI

Dirección
JR. PROGRESO S/N

Departamento/Provincia/Distrito
HUANUCO/AMBO/SAN RAFAEL

Carmen Velarde Koechlin
Jefa Nacional

I<PER22672851<7<<<<<<<<<<<<<<<
7205011M2910068PER<<<<<<<<<<<8
GUTIERREZ<<JOSUE<MANUEL<<<<<<<

ANEXO 37

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0030 -2025/DP

Lima, 21 MAR. 2025

VISTO:

El Memorando N° 0067-2025-DP/SG emitido por la Secretaría General, los Informes N° 0127-2025-DP/OGGDH y N° 0128-2025-DP/OGGDH emitidos por la Oficina General de Gestión y Desarrollo Humano, el Memorando N° 0181-2025-DP/OGPP-OPRE emitido por la Oficina de Presupuesto y el Informe N° 0150-2025-DP/OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la Constitución Política del Perú se constituye la Defensoría del Pueblo como Organismo Constitucionalmente Autónomo y se asignan sus funciones mediante la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y sus modificatorias; y, mediante Resolución Defensorial N° 0021-2024/DP se aprobó su Reglamento de Organización y Funciones;

Que, la Ley N° 26602, Ley que establece el régimen laboral del personal de la Defensoría del Pueblo, dispone que el personal de la Defensoría del Pueblo se encuentra comprendido en el régimen laboral de la actividad privada;

Que, el numeral 2 del artículo 4° de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, señala que se considera empleado de confianza a aquel que desempeña un cargo técnico o político, distinto al del funcionario público; asimismo, el citado artículo menciona que el empleado de confianza forma parte del entorno de quien lo designa o remueve libremente;

Que, el artículo 43° del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece que los trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, y cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección contribuyendo a la formación de decisiones;

Que, el numeral 8.1 del artículo 8° de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, prohíbe el ingreso de personal en el Sector Público por servicios personales y nombramiento, salvo en los supuestos de excepción contenidos en el citado numeral;

Que, el artículo 63° del Reglamento de Organización y Funciones dispone que la Oficina General de Gestión y Desarrollo Humano tiene como función principal conducir, coordinar y ejecutar los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, promoviendo así el bienestar y desarrollo de las personas y las relaciones laborales;

Defensoría del Pueblo

Que, en el marco del numeral 28.4 del artículo 28° del Reglamento de la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, la Oficina General de Gestión y Desarrollo Humano emitió el Informe N° 0127-2025-DP/OGGDH, en atención al requerimiento efectuado a través del Memorando N° 0067-2025-DP/SG, ambos de fecha 21 de marzo de 2025, titulado "Informe de verificación de cumplimiento del perfil de puesto e impedimentos para el acceso a la función pública para los cargos de funcionarios y directivos de libre designación y remoción en el marco de la Ley N° 31419 y su Reglamento", concluyendo que *"(...) de acuerdo a lo señalado en el presente informe, según lo declarado en la Hoja de Vida documentada, concluimos que el abogado Hebert Anderson Saldaña Saavedra CUMPLE con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley N° 31419 y NO SE ENCUENTRA impedido o inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 3.2 En ese sentido, se recomienda de acuerdo al numeral 28.4 del Artículo 28 del Reglamento de la Ley N° 31419, luego de la emisión del presente informe por parte de la Oficina de Recursos Humanos, la entidad puede continuar con el procedimiento para la emisión de la Resolución de designación del profesional propuesto en el cargo de Jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo."*;

Que, asimismo, a través del Informe N° 0128-2025-DP/OGGDH, de fecha 21 de marzo de 2025, la Oficina General de Gestión y Desarrollo Humano concluyó que: *"Consideramos procedente designar en el cargo de confianza de Jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo, cargo CAP-P N° 006, con Nivel y Categoría D7-A, al abogado Hebert Anderson Saldaña Saavedra, a partir del 21 de marzo de 2025. La mencionada acción de personal se ajusta a la normatividad laboral vigente y normas internas de la Defensoría del Pueblo"*; por tanto, solicitó a la Oficina General de Asesoría Jurídica *"proyectar la Resolución correspondiente"*;

Que, por otro lado, mediante el Memorando N° 0181-2025-DP/OGPP-OPRE, de fecha 21 de marzo de 2025, la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto otorgó la Certificación de Crédito Presupuestario;

Que, en consecuencia, con el Informe N° 0150-2025-DP/OGAJ, de fecha 21 de marzo de 2025, la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que *"(...) resulta jurídicamente viable emitir el proyecto de Resolución Administrativa que designe al señor Hebert Anderson Saldaña Saavedra en el cargo de confianza de Jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al cargo CAP-P N° 006, con Nivel y Categoría D7-A, a partir del 21 de marzo de 2025, de acuerdo a lo sustentado en los Informes N° 0127-2025-DP/OGGDH y N° 0128-2025-DP/OGGDH"*;

Que, el literal h) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones establece entre las funciones del Despacho Defensorial, designar a sus funcionarios públicos, empleados de confianza y directivos superiores de libre designación y remoción, incluidos personal CAS de confianza;

Con los visados de la Oficina General de Gestión y Desarrollo Humano, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7° y los literales d) y h) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 0021-2024/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - DESIGNAR al señor **Hebert Anderson SALDAÑA SAAVEDRA** en el cargo de confianza de Jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al cargo CAP-P N° 006, con Nivel y Categoría D7-A, a partir del 21 de marzo de 2025.

Artículo Segundo. - REMITIR una copia de la presente Resolución al interesado y a la Oficina General de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo para los fines correspondientes.

Artículo Tercero. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Defensor del Pueblo
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ANEXO 3

REPÚBLICA DEL PERÚ
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

CUI
07446380-6

DUPLICADO T



07446380

Primer Apellido
SALDAÑA

Segundo Apellido
SAAVEDRA

Prenombres
HEBERT ANDERSON

753138

Sexo	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento
M	PER	27 08 1967

Estado Civil	Fecha de Emisión
CASADO	23 02 2023

N° de Tarjeta	Fecha de Caducidad
0202470430	22 11 2025

Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio	Constancia de Sufragio

Grupo de Votación
052475

Ubigeo de Nacimiento 140101
Donación de Órganos NO

Dirección
MZ H-2 LT 1 - PJE. TRES 105 DPTO. 301
URB. PORTADA DEL SOL ETAPA 1RA.

Departamento/Provincia/Distrito
LIMA/LIMA/LA MOLINA

Carmen Velarde Koechlin
Jefa Nacional

I<PER07446380<0<<<<<<<<<<<<<<<
6708272M2511225PER<<<<<<<<<<<2
SALDANXXA<<HEBERT<ANDERSON<<<<

CARGO

ANEXO 1-E
40

037143

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
MESA DE PARTES
29 ENE. 2013
RECIBIDO
Firma: ..... Hora: .....

Defensoría del Pueblo

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

OFICIO Nº 0182-2013-DP

Lima, 28 ENE. 2013

Señora Congresista
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Congreso de la República
Presente.-

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla y, a la vez, emitir opinión en relación a los Proyectos de Ley Nº 1024/2011-CR, Nº 1107/2011-CR, Nº 1113/2011-CR, Nº 1590/2012-CR y Nº 1860-/2012-CR, que tienen como objeto reducir la edad de imputabilidad penal, con la finalidad de que aquellos adolescentes que cometan hechos criminales graves, sean procesados y sancionados con mayor rigor dentro del sistema penal para adultos.

Al respecto, se remite el Informe de Adjuntía Nº 001-2013-ANA/DP, elaborado por la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia, que contiene los comentarios y sugerencias a las iniciativas legislativas, que esperamos contribuyan a enriquecer su contenido.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Eduardo Vega Luna
Defensor del Pueblo (e)

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Área de Gestión Documentaria
29 ENE. 2013
RECIBIDO PARA DESPACHAR
Firma: ..... Hora: 9:00

Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia

Informe de Adjuntía N° 001-2013-ANA/DP

Análisis de la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal contenida en los proyectos de ley N° 1024/2011-CR, 1107/2011-CR, 1113/2011-CR, 1590/2012-CR y 1860/2012-CR

I. Competencia de la Defensoría del Pueblo

De conformidad con el artículo 162° de la Constitución Política y con el artículo 1° de su Ley Orgánica, Ley N° 26520, la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo que tiene como mandato constitucional la defensa de los derechos fundamentales de las personas, así como la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

A partir de dichas normas, el Tribunal Constitucional ha reconocido en diversas sentencias[1] que la función principal de la Defensoría del Pueblo es defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.

Para el cumplimiento de dicha función, el tercer párrafo del artículo 17° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo señala que:

> "*Cuando un mismo hecho violatorio de derechos humanos esté siendo investigado por otra autoridad, funcionario, institución del Estado, el Defensor del Pueblo* ***podrá tener acceso*** *a las informaciones pertinentes. Asimismo,* ***podrá aportar a las autoridades competentes los elementos provenientes de su propia investigación***" (el resaltado y subrayado es nuestro).

De esta manera, la Defensoría del Pueblo tiene la facultad constitucional y legal de aportar a las autoridades competentes los elementos provenientes de su propia investigación cuando un hecho violatorio de derechos humanos esté siendo investigado por cualquier otra autoridad.

De acuerdo con dicha facultad, se ha elaborado el presente Informe de Adjuntía con el propósito de dar a conocer la opinión de la Defensoría del Pueblo sobre diversos proyectos de ley que pretenden la reducción de la edad de imputabilidad penal.

Al respecto, en el Informe Defensorial N° 157 titulado "La justicia penal juvenil",[2] la Defensoría del Pueblo señaló que no es viable reducir la edad de imputabilidad penal porque el hacerlo implicaría desconocer que los adolescentes requieren un tratamiento especial, por su condición de vulnerabilidad. Por tanto, cumplimos con aportar al Congreso de la República del Perú los siguientes elementos provenientes de nuestra propia investigación.

II. Antecedentes

Actualmente, el artículo 20° inciso 2 del Código Penal –aprobado por Decreto Legislativo N° 635- establece que se encuentra exento de responsabilidad penal el menor de 18 años de edad. Ello determina que las personas menores de 18 años no

---

[1] Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0023-2008-PI, Fundamento Jurídico 13.

[2] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad (Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios). Informe Defensorial N° 157. "*Sistema Penal Juvenil.*" Serie Informes Defensoriales. Lima, 2012.

son imputables para efectos penales, y por ende, no pueden ser juzgadas en el sistema penal para adultos.

Esta norma guarda relación con lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes –aprobado mediante Ley N° 27337-, concordado con el artículo 183° del mismo cuerpo normativo, que establecen que la persona menor de 18 años de edad comete infracción a la ley penal, correspondiéndole ser juzgada dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil.

Al respecto, desde el año 2011 se han presentado diversos proyectos de ley dirigidos a reducir la edad de imputabilidad penal, con la finalidad de que aquellos adolescentes que cometan hechos criminales graves, sean procesados y sancionados con mayor rigor dentro del sistema penal para adultos.

Cabe precisar que los proyectos de ley presentados son los siguientes:

Proyecto de Ley	Autor	Resumen del proyecto
1024/2011-CR	*María Luisa Cuculiza Torre*	Modificar los artículos 20° y 22° del Código Penal y, en consecuencia, reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 15 años.
1107/2011-CR	*Wuilian Monterola Abregu*	Modificar los artículos 20° y 22° del Código Penal y, en consecuencia, sancionar como adultos a aquellos adolescentes que incurran en delitos de homicidio calificado, violación de la libertad sexual u otro delito sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 25 años o cadena perpetua.
1113/2011-CR	*Elías Rodríguez Zavaleta*	Modificar el artículo 20° numeral 2 del Código Penal, y en consecuencia, reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.
1590/2012-CR	*Marco Falconí Picardo*	Modificar los artículos 20° y 22° del Código Penal, y en consecuencia, reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 15 años
1860/2012-CR	*Tomás Zamudio Briceño*	Reducir la edad de imputabilidad penal a 14 años en casos de delitos graves como homicidio calificado, violación de la libertad sexual, secuestro, extorsión u otro delito cuya pena sea no menor de veinticinco años.

En el presente informe se analizará la viabilidad de las propuestas presentadas desde la perspectiva de los derechos fundamentales de las personas menores de edad.

III. Objetivo de las propuestas

Los cinco proyectos de ley citados pretenden, en concreto, lo siguiente:

- Reducir la edad de imputabilidad penal.
- Dar un tratamiento de adultos a los adolescentes en conflicto con la ley penal que cometan delitos graves.

IV. Análisis de los proyectos de ley

Con el fin de facilitar la lectura del presente informe, a continuación se señalan los puntos que se abordarán:

- ❖ Las propuestas planteadas no respetan la normativa internacional.
- ❖ Los proyectos de ley presentados atentan contra el principio de progresividad de los derechos humanos.
- ❖ La reducción de la edad de imputabilidad es inviable porque desconoce el principio de última ratio del Derecho Penal.
- ❖ No se puede regular la política criminal juvenil a partir de situaciones excepcionales propias del Derecho Civil.
- ❖ Existe la errónea percepción de que los adolescentes infractores cometen actos impunes.
- ❖ Procesar a algunos adolescentes como adultos vulnera los principios de proporcionalidad e igualdad.
- ❖ El sistema penal penitenciario para adultos no es una mejor opción.
- ❖ Las propuestas presentadas contradicen la política pública sobre adolescentes infractores adoptada en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA) 2012-2021.
- ❖ No se debe recurrir al Derecho Penal "Simbólico".
- ❖ Las cifras evidencian que los adolescentes infractores pueden rehabilitarse.

4.1. Las propuestas planteadas no respetan la normativa internacional.

El artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño[3] entiende por "niño" a todo ser humano menor de dieciocho años de edad. Esta definición es importante, porque a partir de ella se establece un sistema especial de derechos, deberes y garantías a favor de todas las personas menores de 18 años de edad.

Cabe enfatizar que este sistema especial atiende al hecho de que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una situación denominada «vulnerabilidad antropológica», entendida como «una condición de fragilidad propia e intrínseca al ser humano, por su ser biológico y psíquico».[4] En ese sentido, la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes no se justifica en una presunta incapacidad de éstos, sino en el proceso de desarrollo biológico y social inherente a todo ser humano.

[3] Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989. Para el Perú: aprobada mediante Resolución Legislativa N° 25278, de fecha 3 de agosto de 1990. Instrumento de ratificación del 14 de agosto de 1990, depositado el 4 de septiembre de 1990. Fecha de entrada en vigencia: 4 de octubre de 1990. De conformidad con el artículo 55° de la Constitución Política de 1993, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
[4] FEITO, Lydia. "Vulnerabilidad". En: *Anales del sistema sanitario de Navarra*, Vol. 30, Número Extra 3, 2007, p. 7.

Es en el marco de este sistema especial de derechos, deberes y garantías a favor de la niñez y adolescencia que se configura un sistema de responsabilidad penal juvenil, diferenciado del de los adultos.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha manifestado que un mecanismo de responsabilidad penal juvenil se basa en que el adolescente no sólo es sujeto de derechos sino también de obligaciones hacia la sociedad. Sin embargo, este sistema debe obedecer a determinados parámetros respetuosos del interés superior del niño y de los principios rectores de derechos humanos.[5]

El sistema de responsabilidad juvenil debe ser aplicado a todas las personas menores de 18 años de edad, en tanto se encuentran en proceso de formación física y psicológica. Al respecto, esta afirmación es avalada por los pronunciamientos tanto del Comité de los Derechos del Niño como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

a) El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N° 10, "Los derechos del niño en la justicia de menores" (2007), señaló que «toda persona menor de 18 años en el momento de la presunta comisión de un delito debe recibir un trato conforme a las normas de la justicia de menores» (párrafo 37).

A partir de ello recomendó a los Estados parte que permiten que personas menores de 18 años de edad sean juzgadas como adultos que «modifiquen sus leyes con miras a lograr la plena aplicación, sin discriminación alguna, de sus normas de justicia de menores a todas las personas menores de 18 años» (párrafo 38). En otros términos, para el organismo supervisor de la Convención sobre los Derechos del Niño, la justicia juvenil debe aplicarse a toda persona menor de 18 años de edad, sin excepción alguna.

Sobre la base de lo señalado, el argumento referido a que es posible reducir la edad de imputabilidad a menos de 18 años porque otros países lo contemplan así, como es el caso de Bolivia, es incorrecto. Igualmente, tampoco es recomendable tomar en cuenta la realidad norteamericana para sustentar la reducción de la edad de imputabilidad penal –como lo justifican los proyectos de ley N° 1590-2012/CR y N° 1107-2011/CR- debido a que Estados Unidos es uno de los dos países junto con Somalia, a nivel mundial, que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño,[6] por lo que su estándar de protección a favor de la niñez y adolescencia difiere del establecido en dicho instrumento internacional.

b) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe titulado "Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas" (2011), manifestó su extrema preocupación por el hecho de que en varios Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos se someta a personas menores de 18 años al sistema ordinario de justicia penal, negando su condición de niños. En esa medida, la Comisión considera que toda persona debe estar sometida a un régimen especial de justicia juvenil cuando en un determinado caso se desprenda que ésta no había alcanzado los 18 años de edad al momento de la presunta infracción de la ley penal.[7]

Se aprecia entonces que existen pronunciamientos internacionales que señalan la necesidad de que las personas menores de 18 años de edad reciban un tratamiento

[5] RTC. Exp N° 3247-2008-HC/TC, fundamento jurídico N° 11.
[6] Al respecto, ver en: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en (Consultado el 14/01/2013).
[7] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. *"Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas"* (2011). Párrafo 43.

penal especial y diferenciado del que se aplica para los adultos, en razón a su minoría de edad.

Cabe precisar que las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño constituyen mandatos de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano porque representan síntesis de años de experiencia en el examen de informes provenientes de los Estados y del diálogo con sus representantes, con respecto a un determinado tema. Asimismo, permiten interpretar o aclarar el contenido, alcance o valor jurídico de una disposición contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño.[8]

Por su parte, los informes que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos califican como doctrina internacional,[9] por lo que también son fuente de derecho válida al momento de interpretar las obligaciones internacionales contenidas en tratados o convenios.

En conclusión, tal como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo en el informe defensorial N° 157 titulado "La justicia penal juvenil",[10] la reducción de la edad de imputabilidad penal determinaría el incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por parte del Estado peruano para proteger a los niños, niñas y adolescentes.

4.2. Los proyectos de ley presentados atentan contra el principio de progresividad de los derechos humanos.

Cuando el Estado peruano aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño el año 1990,[11] determinó a través de su voluntad soberana que las personas menores de 18 años de edad sean juzgadas dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, decisión que se ha mantenido vigente hasta el día de hoy. Ello se aprecia en los diversos códigos de la niñez y la adolescencia que se promulgaron en nuestro país desde dicha fecha hasta la actualidad: en el texto del Decreto Ley N° 26102 publicado con fecha 29 de diciembre de 1992, en el texto del T.U.O. del Código de los Niños y Adolescentes (aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-99-JUS de fecha 8 de abril de 1999), como en el vigente Código de los Niños y Adolescentes (aprobado mediante Ley N° 27337 de fecha 7 de agosto de 2000).

Por consiguiente, si el Estado decide que las personas menores de 18 años sean juzgadas en el sistema penal para adultos, se produciría un retroceso en la protección de los derechos de los adolescentes de nuestro país, vulnerándose el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.[12]

---

[8] O'DONNELL, Daniel. *Derecho Internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano*. Bogotá: Oficina Regional para la América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007, pp. 28-31.

[9] O'DONNELL, Daniel. *Derecho Internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano*. Bogotá: Oficina Regional para la América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007, p. 49.

[10] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad (Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios). Informe Defensorial N° 157. *"Sistema Penal Juvenil."* Serie Informes Defensoriales. Lima, 2012.p. 30.

[11] Mediante Resolución Legislativa N° 25278 de fecha 04 de agosto de 1990.

[12] Sobre el principio de progresividad y no regresividad se recomienda ver: VÁSQUEZ, Luis Daniel y SERRANO, Sandra. *Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica*. p. 159 y ss. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/7.pdf (Consultado el 14/01/2013). Complementariamente, debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 41° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala lo siguiente: "Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:
a) El derecho de un Estado Parte; o
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado."

4.3. La reducción de la edad de imputabilidad es inviable porque desconoce el principio de última ratio del Derecho Penal.

La doctrina penal también establece que las personas menores de 18 años de edad deben ser procesadas en un fuero especial, independiente al sistema de adultos. Esta distinción se funda en que antes de esa edad no se tiene el modo de pensar del adulto y en que las medidas de orientación y protección podrían ser beneficiosas para las personas menores de edad que no han llegado a esa edad. En ese sentido, durante ese periodo, el desarrollo incompleto –físico, intelectual y moral (carácter)- permite actuar con más eficacia en la formación del niño, niña y/o adolescente, mediante una buena influencia y ejemplos apropiados.[13]

Esta situación, junto con el hecho de que en países como el nuestro el sistema penal es esencialmente represivo, permite afirmar la inviabilidad de una disminución de la minoría de edad penal.[14]

Asimismo, la proposición de disminuir la edad de responsabilidad penal tiene su equivocación en la creencia de que el sistema penal es la solución para cualquier problema que esté relacionado con la inseguridad o delincuencia. Sin embargo, el sistema penal debe ser utilizado siempre como última ratio, y con mayor énfasis en el ámbito de la niñez y la adolescencia.

Siguiendo lo señalado por Bustos Ramírez, la aplicación del Derecho Penal a personas menores de 18 años no respetaría el principio de última ratio,[15] pues de manera directa se estaría aplicando medidas lesivas de sus derechos fundamentales, sin respetar el orden y condiciones de los controles anteriores, como es la aplicación de un sistema especial de responsabilidad juvenil. En ese caso, el Derecho Penal pasaría a ser más bien prima ratio.[16]

De allí que la prohibición de disminuir la edad de imputabilidad penal a menos de 18 años de edad configure una barrera político criminal para el legislador.[17] Inclusive, en algunas experiencias comparadas como Brasil, la prohibición de que personas menores de 18 años sean procesadas como adultos se encuentra expresamente prevista en la Constitución, lo que constituye para un sector de la doctrina una garantía constitucional.[18]

Por otro lado, se aprecia que en el proyecto de ley N° 1107-2011/CR se propone reducir la edad de imputabilidad penal en los casos en los que el adolescente cometa delitos cuyas penas sean no menores a 25 años; pero no se establece hasta qué edad se reduciría la imputabilidad penal.

Al respecto, el principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de determinación, que prohíbe la

---

[13] HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor. *Manual de Derecho Penal. Parte General.* Tomo I. IDEMSA, 4ta Edición. Lima, 2011 p. 593

[14] HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor. *Manual de Derecho Penal. Parte General.* Tomo I. IDEMSA, 4ta Edición. Lima, 2011 p. 594.

[15] "La sanción penal es la *ultima ratio*, lo que tiene como correlato constitucional el determinar que solo es posible recurrir a la restricción de derechos (libertad personal) cuando no sea posible lograr los mismos fines a través de medidas menos restrictivas" (STC. Exp. N° 017-2011-AI/TC, fundamento jurídico N° 10).

[16] BUSTOS RAMÍREZ, Juan. *Imputabilidad y edad penal.* Disponible en: http://enj.org/portal/biblioteca/penal/penal_juvenil/16.pdf (Consultado el 14/01/2013).

[17] BELOFF, Mary. *Los adolescentes y el sistema penal. Elementos para una discusión necesaria en la Argentina actual.* Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. p. 113-114

[18] BELOFF, Mary. *Responsabilidad penal juvenil y derechos humanos.* p. 83. En UNICEF. Justicia y Derechos del Niño N° 2. Buenos Aires, 2000. p. 77. Disponible en: http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos2.pdf (Consultado el 14/01/2013).

promulgación de leyes penales indeterminadas, y constituye una exigencia expresa en nuestro texto constitucional al requerir el literal "d" del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución que la tipificación previa de la ilicitud penal sea "expresa e inequívoca" (Lex certa).

En el presente caso, al no establecerse una edad mínima exacta para ser juzgado penalmente en el sistema criminal para adultos –que es un presupuesto esencial para la aplicación de las sanciones correspondientes-, se vulneraría el principio de legalidad penal, en la medida que, de acuerdo al citado proyecto de ley, quedaría a discrecionalidad del operador jurídico el determinar hasta qué edad se puede juzgar a un niño, niña o adolescente como adulto, generando arbitrariedad e indefensión.

4.4. No se puede regular la política criminal juvenil a partir de situaciones excepcionales propias del Derecho Civil.

De otro lado, se ha cuestionado que los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años no sean imputables para ser procesados como adultos, a pesar que, contradictoriamente el Código Civil les permite realizar ciertos actos jurídicos como el matrimonio.[19] Es decir, para algunos aspectos sí podrían comportarse como adultos, mientras que para determinar su responsabilidad penal tendrían que ser tratados como personas menores de edad.

Sobre el particular, cabe señalar lo siguiente:

a) Los artículos 44° y 45° del Código Civil establecen que los adolescentes de entre 16 y 18 años no pueden ejercer directamente sus derechos civiles, sino a través de sus representantes legales, según las normas referentes a la patria potestad y/o tutela. Sin embargo, el artículo 46° establece excepcionalmente que las personas mayores de dieciséis (16) años pueden ejercer directamente sus derechos civiles en dos supuestos concretos: i) al contraer matrimonio; ii) por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio.

b) En tal sentido, dichas disposiciones se refieren únicamente a situaciones especiales en las que los adolescentes de entre 16 y 18 años realizan ciertos actos autorizados por la ley.[20] Sin embargo, esta regulación especial es independiente del hecho que todas las personas menores de 18 años de edad son consideradas como sujetos de derechos, libertades y de protección específica, tal como lo reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el Código de los Niños y Adolescentes –Ley N° 27337- que es la norma competente sobre la materia.[21]

Por tanto, no se puede buscar regular la política criminal juvenil a partir de situaciones excepcionales propias de otro orden normativo como es el Derecho Civil, que tiene sus propios presupuestos y definiciones, autónomos del Derecho Penal.[22]

---

[19] Disponible en: http://www.larepublica.pe/04-01-2013/mario-amoretti-internos-que-cumplen-18-anos-deben-ir-centro-penitenciario-pero-ley-se-incumple (Consultado el 07/01/2013).

[20] Artículo IV Título Preliminar (CNA) - Capacidad
Además de los derechos inherentes a la persona humana, el niño y el adolescente gozan de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo. Tienen capacidad especial para la realización de los actos civiles autorizados por este código y demás leyes.
La Ley establece las circunstancias en que el ejercicio de estos actos requiere de un régimen de asistencia y determina responsabilidades.
En caso de infracción a la ley penal, el niño y el adolescente menor de catorce (14) años será sujeto de medidas de protección y el adolescente mayor de catorce (14) años de medidas socio-educativas.

[21] Artículo II - Sujeto de derechos (CNA) -
El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica. Deben cumplir las obligaciones consagradas en esta norma.

[22] A modo de ejemplo, Hurtado Pozo señala que, en los delitos contra el patrimonio, diversos conceptos del Derecho Civil tienen una acepción distinta dentro del Derecho Penal, debido esencialmente a las diferentes funciones que cumplen. Al respecto, se

4.5. Existe la errónea percepción que los adolescentes infractores cometen actos impunes.

En el debate de reducir la edad de imputabilidad penal, también se ha afirmado que los adolescentes infractores, al no ser imputables para el Derecho Penal, no responderían por los actos que cometen, generando una sensación de impunidad en la percepción de la población. Inclusive, este argumento ha sido recogido en la exposición de motivos de los proyectos de ley N° 1113-2011/CR y N° 1860-2012/CR.

Al respecto, el artículo 40° de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que las personas menores de edad que infringen las leyes penales se les atribuye una responsabilidad penal especial, distinta a la de los adultos. En ese sentido, son plenamente responsables por los actos que cometan, lo cual guarda concordancia con la doctrina de Protección Integral, así como con el principio de autonomía progresiva:

> [...] el niño es también portador de una creciente responsabilidad por sus actos, que permitirá no sólo afirmar que la infancia y la adolescencia son destinatarias de las normas prescriptivas y prohibitivas del ordenamiento jurídico, sino también que pueden, según su edad y la evolución de sus facultades, constituirse en responsables de sus actos ilícitos.[23]

Inclusive, la Convención sobre los Derechos del Niño señala que es posible restringir la libertad de los adolescentes infractores, como medida extrema, ante la comisión de una infracción a la ley penal.[24]

En la misma lógica se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al señalar que:

> Si bien los menores de edad no son penalmente responsables de acuerdo con el artículo 20, inc. 2), del Código Penal, ello no implica que en caso de que se les impute infracción a la ley penal estén exentos de proceso alguno. Así, el artículo 183 del Código del Niño y el Adolescente considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal. Respecto de estos comportamientos, el Juzgado de Familia es competente conforme al artículo 133 del Código del Niño y el Adolescente.[25]

En atención a ello, los procesos por infracción a la ley penal contra adolescentes, en la medida que implican la aplicación del *ius puniendi* estatal, deben estar revestidos de determinadas garantías procesales y sustantivas, con el fin de tutelar los derechos fundamentales de los adolescentes involucrados. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelven derechos de los niños se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal. Esto abarca las reglas correspondientes a juez natural –competente, independiente e imparcial–, doble instancia, presunción de inocencia, contradicción y audiencia y defensa, atendiendo las particularidades que se derivan de la situación específica en que se encuentran los

---

recomienda revisar: HURTADO POZO, José. *Relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho Civil respecto al delito de hurto en el Código Penal peruano*. En: Revista Oficial del Poder Judicial. Año 4-5, N° 6 y N° 7. 2010-2011. pp. 219-240.

[23] CILLERO BRUÑOL, Miguel. *Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios*. p. 5. Disponible en: http://www.inau.gub.uy/biblioteca/cillero.pdf (Consultado el 07 de enero de 2013).

[24] Artículo 37 (CDN). Los Estados parte velarán porque (...) b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. **La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda** (resaltado nuestro).

[25] STC. Exp. N° 0006-2006-HC/TC, fundamento jurídico N° 2.

niños y que se proyectan razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención personal de dichos procedimientos y las medidas de protección que sea indispensable adoptar en el desarrollo de éstos.[26]

En esa medida, debe desterrarse el argumento referido a que los menores de edad "son inimputables" y por ende, carecen de capacidad alguna para responder por los actos que cometen. Las personas menores de edad sí son responsables por los hechos que realizan y pueden ser pasibles de medidas de internación por un lapso máximo de 6 años (Art. 235° del Código de los Niños y Adolescentes).

Sin embargo, esta "responsabilidad penal especial" determina que, si bien existe un grado de reproche negativo por la conducta cometida, el trato que se les debe brindar a las personas menores de edad es sustancialmente distinto al de un adulto, en tanto son personas en proceso de formación o desarrollo.

4.6. Procesar a algunos adolescentes como adultos vulnera los principios de proporcionalidad e igualdad.

En los proyectos de ley N° 1107/2011-CR y 1860/2012-CR se planteó la propuesta de que, únicamente aquellos adolescentes de entre 14 a 17 años de edad que cometan delitos graves fueran procesados como adultos. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento Justicia Juvenil en las Américas (2011) ha manifestado que un tratamiento no diferenciado entre menores de edad y adultos puede resultar incompatible con el principio de proporcionalidad de la pena y con el juicio de reproche del menor de edad que debe subyacer a toda conducta cometida por un o una adolescente conforme al interés superior del niño (párrafo 42).

Adicionalmente, la medida propuesta vulneraría el principio-derecho de igualdad, al abrir la posibilidad de procesar a algunas personas menores de 18 años como adultos, a pesar que la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de los Niños y Adolescentes garantiza un tratamiento especializado a TODOS los niños, niñas y adolescentes.

4.7. El sistema penal penitenciario para adultos no es una mejor opción.

La propuesta de exigir que adolescentes entre 15 a 17 años sean juzgados como adultos implicará que éstos puedan ser recluidos en centros penitenciarios para adultos, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sobre el particular, cabe recordar que mediante Decreto de Urgencia N° 007-2012 de fecha 22 de febrero de 2012 se declaró el estado de emergencia del sistema nacional penitenciario. De acuerdo a la exposición de motivos de la norma, la declaratoria de emergencia se justificó en lo siguiente:

> Actualmente, el sistema penitenciario nacional viene atravesando una aguda crisis debido principalmente a la insuficiente cantidad y aforo de los actuales establecimientos penitenciarios, afectados por una creciente sobrepoblación penal asociada al incremento de la criminalidad, de las penas y disminución de los beneficios, así como por el deterioro de la infraestructura física y/o del equipamiento de los establecimientos penitenciarios, y por otro lado, el número insuficiente del personal penitenciario encargado de la seguridad de los penales.

[26] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. *Condición jurídica y derechos humanos del niño.* Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002 Serie A No. 17, opinión resolutiva N° 10.

> lo cual imposibilita asegurar una adecuada política penitenciaria en favor de la resocialización del interno.

Esta grave percepción del sistema penitenciario nacional también fue identificada por el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, quien en sus observaciones finales referidas al quinto y sexto informe presentados por el Estado peruano (29 de octubre-23 de noviembre de 2012), realizó una serie de recomendaciones sobre dicho tema, entre las que caben destacar las siguientes: a) tomar acciones inmediatas para reducir la sobrepoblación en centros de detención, incluyendo la aplicación de medidas distintas a la prisión; b) adoptar plazos razonables para la construcción de nuevos centros de reclusión, y la expansión y mejora de los ya existentes; c) asegurarse de que exista suficiente personal médico en los centros de reclusión; entre otros.

Inclusive, se llegó a recomendar el cierre de los penales de Challapalca y Yanamayo por las condiciones extremas que presentan, y su impacto negativo en los derechos de los internos recluidos en dichos centros.

Ante dicha situación, debe evaluarse seriamente la conveniencia de permitir que los adolescentes ingresen a los centros penitenciarios para adultos, ya que, en vez de lograr su resocialización, se los estaría exponiendo a situaciones de mayor riesgo físico y psicológico.

4.8. Las propuestas presentadas contradicen la política pública sobre adolescentes infractores adoptada en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA) 2012-2021.

Los proyectos de ley que buscan reducir la edad de imputabilidad penal no toman en cuenta que dicha propuesta, de corte directamente represivo, contradice las medidas adoptadas sobre adolescentes infractores en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA) 2012-2021 –aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP de fecha 14 de abril de 2012-, que contiene la política pública vigente sobre niñez y adolescencia adoptada por el Estado peruano.

En ese sentido, dentro del resultado esperado N° 11 se pretende reducir la tasa de adolescentes en conflicto con la ley penal, para lo cual establecen una serie de medidas de carácter netamente preventivo. Entre dichas medidas, cabe resaltar la siguiente:

> Fortalecer las especialidades académicas, la investigación y el diálogo nacional sobre el problema de los adolescentes en conflicto con la ley penal, **generando corrientes de opinión e iniciativas que prevengan la violencia y eviten tendencias legislativas cíclicas para la agravación de medidas socio educativas, o reducción de edades mínimas para el procesamiento de adolescentes** (el resaltado es nuestro).[27]

Por tanto, es incongruente que por un lado, se pretenda reducir la edad de imputabilidad penal con el objetivo de sancionar con mayor rigor a los adolescentes infractores, y por otro lado, se establezcan políticas a favor de adolescentes infractores destinadas más bien a trabajar la problemática desde un enfoque preventivo, evitando en todo momento la adopción de medidas punitivas como es la reducción de la edad de imputabilidad penal.

---

[27] MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. *Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA) 2012-2021*. p. 77. Disponible en: http://www.unicef.org/peru/spanish/PNAIA-2012-2021.pdf (Consultado el 15/01/2013).

Cabe resaltar que, en el diseño e implementación del PNAIA 2012-2021, participaron diversas entidades públicas y privadas, por lo que constituye un documento consensuado con alto grado de legitimidad.

4.9. No se debe recurrir al Derecho Penal "Simbólico".

Los proyectos de ley analizados se sustentan legítimamente en salvaguardar la seguridad ciudadana. Al respecto, cabe señalar que la seguridad ciudadana constituye un bien jurídico de gran importancia porque permite una convivencia pacífica, y paralelamente, garantiza el normal ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía.[28] Es por ello que el Estado, a través de diversos mecanismos, busca preservar la seguridad ciudadana, como por ejemplo con la aplicación de medidas socioeducativas en el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal.

En esa medida, es necesario y urgente que las autoridades competentes –Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial- apliquen las medidas correspondientes ante la comisión de una infracción a la ley penal por parte de una persona menor de edad, con todo el rigor establecido en la ley.

Sin embargo, no se puede desconocer que el sistema de responsabilidad juvenil dentro de nuestro país evidencia resultados positivos -como se mostrará en el siguiente punto- los cuales deben ser tomados en cuenta al momento de evaluar propuestas como la reducción de la edad de imputabilidad penal. En ese sentido, debe recordarse que una política criminal juvenil respetuosa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reconocidos en la normativa nacional e internacional, jamás puede diseñarse e implementarse a partir de casos concretos, sino que requiere una evaluación integral de la situación.

Y es que, un agravamiento en las condiciones de juzgamiento para personas menores de edad, carente de fundamentación empírica, buscaría más bien crear la sensación de seguridad en la población, a pesar de que no existe certeza en su efectividad, lo que calificaría como una manifestación de un Derecho Penal Simbólico.[29]

4.10. Las cifras evidencian que los adolescentes infractores pueden rehabilitarse.

De acuerdo al informe defensorial N° 157: "La justicia penal juvenil", hasta julio de 2012 existía un total de 2,278 adolescentes infractores de la ley penal en todo el ámbito nacional. La edad más presente entre los adolescentes infractores era de 17 años (32.9%), seguido del grupo de 16 años (24.3%). Por el contrario, los

---

[28] Aunque no existe una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que para la Constitución representa la seguridad ciudadana, sino, básicamente, un conjunto de características o elementos que permiten integrar lo que sería su contenido, esta puede ser catalogada como un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza o reparados en caso de vulneración o desconocimiento. Derechos como la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la libertad personal suelen ser los principales referentes que integran el contenido de la seguridad ciudadana en atención a lo que del Estado y la colectividad se espera, siendo evidente que, por sus alcances, se trata fundamentalmente de un bien jurídico de relevancia antes que de un atributo o libertad a título subjetivo. (STC. Exp. N° 3482-2005-HC/TC, fundamento jurídico N° 13).

[29] "*El Derecho penal simbólico se da bajo formas muy diversas: Derecho penal que está menos orientado a la protección del bien jurídico que a efectos políticos más amplios como la satisfacción de una «necesidad de acción». Es un fenómeno de la crisis de la política criminal actual orientada a las consecuencias. Ello convierte gradualmente al Derecho penal en un instrumento político flanqueador de bienes jurídicos universales y delitos de peligro abstracto. Este Derecho penal se aviene a las imágenes de una «inseguridad global» y de una «sociedad de riesgo». Un Derecho penal simbólico con una función de engaño no cumple la tarea de una política criminal y mina la confianza de la población en la Administración de Justicia.*" HASSEMER, Winfried. Derecho Penal simbólico y protección de bienes jurídicos. En: http://www.metajus.com.br/textos_internacionais/simbolismo-e-bem-juridico-Hassemer.pdf (Consultado el 14/01/2013).

adolescentes menores de 14 y 15 años tenían, a su vez, menor presencia con el 2,4% y 10.5% del total, respectivamente.

Las infracciones más frecuentes eran las efectuadas contra el patrimonio (60,1%). De éstas, el 49.5% estaba vinculado a robo o robo agravado y el 10.6% a hurto. Esto podría estar relacionado con las carencias personales, económicas y sociales de los adolescentes.

Respecto al nivel de reincidencia dentro del sistema de justicia juvenil se observa que la gran mayoría de adolescentes, en mayo del 2012, cumplía su primera medida de internación (91.3%). Esta tendencia no ha sufrido mayor variación respecto al año 2007.

Inclusive, de una muestra de 144 infractores egresados del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, se pudo apreciar que solo 2 de ellos nuevamente delinquieron en su etapa adulta.[30]

Esta información debe ser tomada en cuenta por el Estado, porque evidencia, a partir del trabajo que viene realizando el Poder Judicial, que es posible rehabilitar y reinsertar a la sociedad a los adolescentes infractores.

De otro lado, respecto al problema de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, antes que enfocarse desde el punto de vista punitivo debe analizarse como problema social. Tal como se desprende de las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (directrices de Riad),[31] la problemática de la delincuencia juvenil debe ser abordada a través de tres ejes de prevención: una *primaria*, que promueven la justicia social y la igualdad de oportunidades, abordando así las que son a primera vista las causas principales de la delincuencia, tales como la pobreza y otras formas de marginación; prevención *secundaria*, o sea medidas encaminadas a asistir a los niños, niñas y adolescentes que puedan correr más peligro, como por ejemplo aquéllos cuyos padres se encuentran en situaciones especialmente difíciles o no se ocupan de ellos como debieran; y prevención *terciaria*, o sea planes diseñados para evitar que los niños, niñas y adolescentes entren innecesariamente en contacto con el sistema judicial formal, y otras medidas para impedir que reincidan.

V. Conclusiones

Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo es de la opinión que los proyectos de ley presentados con la intención de reducir la edad de imputabilidad penal, no son viables, en atención a que:

- Desconocen obligaciones internacionales que establecen la especialidad en el tratamiento para personas menores de 18 años de edad, por encontrarse en proceso de formación física y psicológica.

- Suponen un retroceso en la protección de la niñez y adolescencia de nuestro país, vulnerando por ende el principio de progresividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

- Desconocen el principio de última ratio del Derecho Penal.

---

[30] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad (Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios). Informe Defensorial N° 157: *"Sistema Penal Juvenil."* Serie Informes Defensoriales. Lima, 2012.p. 41 y ss.

[31] Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.

- Desconocen el hecho que los adolescentes infractores responden por los hechos criminales cometidos, inclusive con la privación de su libertad.

- Buscan regular la política criminal juvenil en función a situaciones excepcionales del Derecho Civil, lo cual no es posible por responder a presupuestos distintos.

- Al pretender procesar únicamente a aquellas personas menores de 18 años que cometan delitos graves en el sistema penal de adultos, se vulnera el principio de proporcionalidad y de igualdad, ya que se pretende imponerles sanciones excesivas y se deja de lado que la protección especial es a favor de TODAS las personas menores de 18 años de edad, sin distinción alguna.

- Desconocen la política pública sobre adolescentes infractores adoptada en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 2012-2021, que tiene un enfoque más preventivo.

- Buscarían dar únicamente una sensación de seguridad, que respondería a la idea de un Derecho Penal "Simbólico".

- Desconocen que las cifras estadísticas muestran que los niveles de resocialización en el caso de adolescentes infractores es mucho mayor que en el caso de adultos.

Lima, enero 2013

MAXDA RAMOS BALLON
Adjunta (e) para la Niñez y Adolescencia

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: REVOLLAR AÑAÑOS Eliana F 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/07/2022 18:14:49

ANEXO 1-F
47

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República"

Lima, 18 de julio del 2022

OFICIO N° 0196-2022-DP

Señor
Aníbal Torres Vásquez
Presidente del Consejo de Ministros
Presidencia del Consejo de Ministros
Presente. -

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y expresarle nuestra preocupación institucional y rechazo frente al anuncio del Poder Ejecutivo de presentar un proyecto de ley que pretendería modificar la responsabilidad penal de adolescentes para tratarlos como adultos, con la finalidad de luchar contra la inseguridad ciudadana.

Sobre el particular, es importante recordar que el artículo I del Título Preliminar del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes[1] establece que el/la adolescente entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad, es sujeto de derechos y obligaciones, y responde por la comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial, considerándose para ello su edad y características personales. Es decir, los/as adolescentes sí tienen responsabilidad pero esta se define en un sistema especial y distinto al de los adultos por tratarse de personas en situación de vulnerabilidad, que se encuentran en pleno proceso de desarrollo.

No obstante, en los últimos años se han presentado diversos proyectos de ley en distintas legislaturas, con el objetivo de que los adolescentes que cometan hechos criminales graves sean procesados y sancionados con mayor rigor dentro del sistema penal para adultos. Sobre ello, la Defensoría del Pueblo emitió opinión técnica[2], señalando que esta reforma legal no sería posible, porque se estaría desconociendo el ordenamiento jurídico nacional e internacional y, sobre todo, las obligaciones que el Estado peruano ha asumido al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.

En ese contexto, es preciso señalar que el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño[3] considera "niño" a todo ser humano menor de

[1] Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1348 de fecha 07 de enero del 2017.
[2] Informe de Adjuntía N.° 001-2013-ANA/DP, titulado "Análisis de la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal contenida en los proyectos de ley N° 1024/2011-CR, 1107/2011-CR, 1113/2011-CR, 1590/2012-CR y 1860/2012-CR".
[3] Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989. Para el Perú: aprobada mediante Resolución Legislativa N° 25278, de fecha 3 de agosto

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: REVOLLAR AÑAÑOS Eliana 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/07/2022 18:14:49

dieciocho años de edad. Esta definición es importante, porque a partir de ella se establece un sistema especial de derechos, deberes y garantías a favor de todas las personas menores de 18 años de edad.

Dicho sistema responde a que la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes no se justifica en una presunta incapacidad de estos, sino en el proceso de desarrollo biológico y social inherente a todo ser humano. En ese sentido, el sistema de responsabilidad penal juvenil se configura en este sistema especial de derechos, deberes y garantías a favor de la niñez y adolescencia.

Por tanto, el sistema de responsabilidad juvenil debe ser aplicado a todas las personas menores de 18 años de edad, en tanto se encuentran en proceso de formación física y psicológica, conforme lo ha señalado el Comité sobre los Derechos del Niño en su Observación General N° 10 sobre *los derechos del niño en la justicia de menores* (2007), al precisar que «toda persona menor de 18 años en el momento de la presunta comisión de un delito debe recibir un trato conforme a las normas de la justicia de menores» [4].

Del mismo modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su informe sobre "Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas", manifestó su extrema preocupación porque en varios Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos, se someta a personas menores de 18 años al sistema ordinario de justicia penal, negando su condición de menor de edad.[5]

En esa línea, cualquier propuesta legislativa que busque modificar la responsabilidad penal especial que tiene las/os personas adolescentes, estaría vulnerando los derechos de personas menores de edad que incurren en hechos con relevancia penal e impidiendo que reciban un trato conforme a su grado de desarrollo. Respecto a este punto, es necesario y obligatorio tener en cuenta las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo puntualmente al Perú[6], a fin de que adapte totalmente su sistema de justicia juvenil a la Convención y a otras normas pertinentes[7].

Ahora bien, es importante mencionar que en países como el nuestro, el sistema penal es esencialmente represivo, lo que permite reafirmar la inviabilidad de la propuesta anunciada, por cuanto el sistema penal debe ser

---

de 1990. Instrumento de ratificación del 14 de agosto de 1990, depositado el 4 de septiembre de 1990. Fecha de entrada en vigencia: 4 de octubre de 1990. De conformidad con el artículo 55° de la Constitución Política de 1993, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

[4] Comité de los Derechos del Niño. *Observación General N° 10 sobre los derechos del niño en la justicia de menores (2007)*. Párrafo 37.

[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *"Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas"* (2011). Párrafo 43.

[6] A través de sus Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú del año 2016

[7] Recomendó lo siguiente: a) Promover siempre que sea posible medidas extrajudiciales y alternativas al encarcelamiento, como la libertad vigilada, la mediación, la asistencia psicológica o el servicio a la comunidad, y asegurarse de que el encarcelamiento se utilice como último recurso y durante el período más breve posible.

b) En los casos en que sea inevitable el encarcelamiento, garantizar que las condiciones de la reclusión se ajusten a las normas internacionales, particularmente, en lo concerniente a la protección contra la violencia, y que se disponga de un espacio adecuado de alojamiento y acceso a servicios de alimentación, educación y atención de la salud y a mecanismos de presentación de quejas que sean independientes y adaptados a los niños.

c) Establecer una base de datos general sobre los niños en conflicto con la ley con miras a facilitar el análisis de su situación y utilizar los resultados para mejorar el sistema de justicia juvenil.

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: REVOLLAR AÑAÑOS Eliana F 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/07/2022 18:14:49

48

utilizado siempre como última ratio y, con mayor énfasis, en el ámbito de la niñez y adolescencia pero sobre todo debe buscar que toda medida adoptada para luchar contra la inseguridad ciudadana sea distinta a la de los adultos.

Ante ello, urge más bien que se adopten acciones a favor de dicho grupo poblacional que, en la línea de lo señalado por el Comité de los Derechos del Niño, procuren la socialización e integración, especialmente, en el marco de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares, la escuela, la formación profesional y el medio laboral, así como mediante la acción de organizaciones voluntarias. Sobre todo, debe brindarse cuidado y atención especiales a las personas menores de edad que están en situación de riesgo, abandonan los estudios o no los completan[8], incluidas aquellas que están en orfandad debido a las consecuencias de la pandemia por el COVID-19.

Cabe mencionar que la experiencia ha demostrado que agravar las sanciones no disuade la comisión de infracciones. Por consiguiente, es necesario repensar otras formas de prevención de la comisión de delitos, y, de ese modo, evitar que se desconozca la orientación personalista del Estado y el sistema jurídico, en donde la dignidad es el valor superior que el Estado debe proteger. Para ello es pertinente adoptar acciones conforme a lo señalado en el primer Objetivo Prioritario de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana[9], consistentes en "incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencias cometidos por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población".

Además, es necesario que el Poder Ejecutivo continúe y concrete la adopción de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal[10], así como el relanzamiento de la Estrategia Nacional "Puedo Más", con la finalidad de fortalecer la capacidad de intervención a nivel preventivo, de atención y reinserción de las y los adolescentes en riesgo y en conflicto con la ley penal en los ámbitos nacional, regional y local.

En línea con lo antes mencionado, corresponde que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindar un mayor nivel de atención y recursos al Programa Nacional de Centros Juveniles a fin pueda brindar a los adolescentes privados de libertad entornos seguros y dignos donde sea posible reinsertarlos plenamente a la sociedad[11].

De acuerdo con lo expuesto y al amparo de lo establecido por el artículo 162° de la Constitución Política, así como el artículo 26° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, me permito RECOMENDAR a su despacho que el Poder Ejecutivo descarte la posibilidad de presentar la propuesta legislativa anunciada pues no estaría conforme a los estándares internacionales y nacionales de los derechos humanos de la adolescencia, generando

[8] Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 10 (2007) Los derechos del niño en la justicia de menores. Párrafo 18.
[9] Aprobada por el Decreto Supremo N° 006-2022-IN, publicado el 22 de junio de 2022.
[10] La propuesta de dicha política fue presentada y aprobada en la XIX sesión del Consejo Nacional de Política Criminal, realizada el 04 de mayo de 2021.
[11] Cabe destacar que, sobre las obligaciones del Estado con los privados de libertad, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional a través de la sentencia N° 05436-2014-PHC/TC la cual declaró la existencia de un estado de inconstitucionalidad de cosas en el sistema penitenciario.

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: REVOLLAR AÑAÑOS Eliana 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/07/2022 18:14:49

responsabilidad internacional al Estado peruano y, más bien busque adoptar otro tipo de medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana, especialmente mantener un sistema penal diferenciado de los adultos asi como adoptar políticas, estrategias y medidas que promuevan la prevención de incidencias con relevancia penal cometidas por adolescentes en estricto cumplimiento de las obligaciones que el Estado peruano ha asumido al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

Eliana Revollar Añaños
Defensora del Pueblo (e)

ANEXO G

Defensoría del Pueblo

Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú

Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA

Lima, julio del 2024

I. Introducción

La Defensoría del Pueblo tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Se busca proteger a este grupo vulnerable a través de diversos instrumentos internacionales, siendo el principal de ellos, la Convención sobre Derechos del Niño, a la cual se alinea nuestra Constitución Política al propender una protección especial para la niñez y la adolescencia; por tanto, el Estado peruano ostenta la obligación convencional y constitucional de garantizar el cumplimiento de sus derechos.

En el aspecto punitivo, nuestra legislación regula que las personas menores de dieciocho años no responden penalmente como lo hacen los adultos, sin que ello signifique impunidad en sus actos, toda vez que se cuenta con un sistema de responsabilidad penal especial para adolescentes que infringen la ley penal.

Las entidades que conforman el sistema de justicia, como el Ministerio Público y Poder Judicial cuentan con despachos especializados para atender casos de adolescentes infractores. Asimismo, se cuenta con el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), entidad encargada de administrar el Sistema Nacional de Reinserción Social y ejecutar medidas socioeducativas, como el internamiento en casos graves, impuestas a las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

El fenómeno de la criminalidad obedece principalmente a hechos ilícitos realizados por personas que han alcanzado la mayoría de edad, como lo demuestra la estadística de la población penitenciaria en nuestro país. Sin embargo, es recurrente la presentación de iniciativas legislativas, desde el Poder Ejecutivo o el Congreso de la República, que buscan reducir la edad para la responsabilidad penal de los adolescentes a fin de tratarlos como adultos, como una respuesta frente a la inseguridad ciudadana.

Al respecto, nuestra institución saluda que ante este contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país exista el interés por parte del Congreso de la República de legislar y adoptar medidas urgentes; sin embargo, la reducción de la edad para que los adolescentes respondan penalmente como lo hacen los adultos no es una medida acorde con su desarrollo integral e interés superior.

Asimismo, es necesario señalar que si bien el Estado a través de sus distintos niveles de gobierno realiza esfuerzos por brindar una atención oportuna y adecuada a todas las personas menores de edad, esto aún sigue siendo insuficiente, por lo que existen grupos dentro de esta población que terminan siendo abandonados por el Estado y expuestos a continuar el camino del contexto violento en el que se encuentran, donde incluso, pueden ser inducidos por

personas adultas para la realización de actos contrarios a la ley, para quienes se debería considerar como un supuesto agravante la utilización o inducción de adolescentes en la comisión de delitos.

Desde la Defensoría del Pueblo hemos rechazado estas propuestas normativas, toda vez que no responden a una necesidad pública, carecen de sustento técnico y científico y, sobretodo, porque no se puede responsabilizar a un grupo vulnerable como los adolescentes por la criminalidad que afecta a nuestro país.

En tal sentido, también es oportuno señalar que nuestro país mantiene pendiente una política real y efectiva que contemple la necesidad de generar inversión pública para la prevención y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia; por ello, es necesario llevar a cabo una redistribución del presupuesto público que permita la planificación de medidas eficaces como la adopción e implementación de un sistema de protección integral para dicho grupo vulnerable.

Por el contrario, el Estado no cumple en su totalidad con brindarles servicios básicos de calidad como salud y educación, situación que se agrava cuando este grupo vulnerable se encuentra en contextos de violencia que les genera una desprotección familiar. Es por ello que las acciones que adopte el Estado en favor de ellas y ellos deben tener un enfoque preventivo y promotor de sus derechos fundamentales, brindándoles oportunidades de desarrollo integral y manteniéndolos alejados de la criminalidad.

II. La capacidad penal o culpabilidad disminuida de los adolescentes desde la psicología y las neurociencias

La existencia de una capacidad penal o culpabilidad disminuida de los adolescentes, se estructura a partir de la evidencia proveniente, tanto de la psicología evolutiva, las ciencias neurológicas o neurociencias y la criminológica.

De allí que el Comité de los Derechos del Niño señale lo siguiente[1]:

> *"Las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están **evolucionando** en los niños de 12 a 13 años, debido a que la **parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando**. Por lo tanto, es **poco probable que comprendan** las **consecuencias** de sus acciones o que **entiendan** los procedimientos penales. También se ven afectados por su entrada en la adolescencia. Como señala el Comité en su observación general núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, esta es una etapa singular de definición del desarrollo humano caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro, lo que afecta a la asunción de riesgos, a ciertos tipos de*

[1] Observación general núm. 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, párrafo 22.

toma de decisiones y a la capacidad de controlar los impulsos. Se ***alienta*** *a los Estados partes a que* ***tomen nota*** *de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo. Además, las pruebas obtenidas en los ámbitos del desarrollo y la neurociencia indican que los cerebros de los jóvenes* ***continúan madurando incluso más allá de la adolescencia****, lo que* ***afecta*** *a ciertos tipos de* ***toma de decisiones****"* (el resaltado es agregado nuestro).

Lo afirmado por el Comité nos conlleva a explicar de modo suscinto dichos aportes, en tanto tienen importancia en el momento de comprender muchas de las acciones penalmente relevantes, que cometen los adolescentes durante esta etapa de desarrollo de las personas.

a. Psicología evolutiva[2]

Esta disciplina aborda los cambios psicológicos que ocurren a lo largo de la vida de las personas, lo que abre la posibilidad de caracterizar a los individuos según diversas competencias (por ejemplo, cognitivas, emocionales y sociales) que tienen o no, en las distintas fases de su ciclo vital.

A partir del desarrollo de conductas cognitivas, se señala que desde la infancia hasta la edad adulta, se presenta una secuencia de estadios de complejidad creciente y cualitativamente diferentes en cuanto a las formas de pensar y comprender el mundo y sus circunstancias. En lo que respecta a la adolescencia, es importante destacar los cambios cognitivos que caracterizan esta etapa de la vida, que se desarrollan aproximadamente entre los 12 y 18 años.

En esencia, se observa la elaboración de una nueva forma de pensamiento que permite al adolescente distanciarse de la realidad y crear configuraciones mentales del mundo de los posibles. Es esta capacidad de acceder al mundo de lo posible la que, de algún modo, explica:

i. El "egocentrismo metafísico" del adolescente, es decir, la creencia en un poder ilimitado del propio pensamiento.
ii. La manifestación del "auditorio imaginario", que revela la tendencia del adolescente a verse a sí mismo como el centro de atención de todos los demás.
iii. La "fábula personal", por la cual el adolescente mantiene la firme convicción de que ciertas acciones (por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias) pueden tener consecuencias negativas para otros, pero nunca para sí mismo.

Además, durante la adolescencia, surgen transformaciones de naturaleza socioafectiva que influyen en el desarrollo psicosocial, como la mayor susceptibilidad de los adolescentes a la aprobación social que puede afectar

---

[2] Apartado elaborado sobre la base del texto: Psicología evolutiva y justicia de menores. En: International Journal of Developmental and Educational Psychology, vol. 5, núm. 1, 2011, pp. 383-391. Taborda, Maria da Conceição; Formosinho, Maria; Castro Fonseca, António; Vale Dias, Maria da Luz. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832343041

negativamente su proceso de decisión, incluso cuando no exista una coacción explícita por parte de sus compañeros. Esta circunstancia explica su mayor vulnerabilidad a comportamientos desviados y otras características que los distinguen de los adultos en relación con la madurez psicosocial.

Asimismo, a pesar de sus crecientes capacidades cognitivas, los adolescentes muestran una menor habilidad para evaluar las circunstancias de riesgo en comparación con los adultos. Son menos aptos para controlar sus impulsos, lo que incrementa su deseo de "vivir" emociones fuertes y su participación en actividades de riesgo, incluidas aquellas de carácter marginal.

De igual modo, los adolescentes, a diferencia de los adultos, desarrollan una perspectiva temporal centrada en el presente. Esto les impide sopesar adecuadamente las consecuencias a largo plazo de sus decisiones, lo que a menudo conduce a la imprudencia.

Evidentemente, las diferencias en la madurez psicosocial se acentúan entre los adolescentes más jóvenes y aquellos con un nivel intelectual más bajo, especialmente en contextos desestructurados y bajo condiciones de estrés.

b. Neurociencias[3]

Estudios realizados mediante las técnicas de neuroimagen o resonancia magnética, han permitido obtener algunos hallazgos sobre la evolución del cerebro humano:

1. El **córtex prefrontal**, la capa externa del lóbulo frontal del cerebro, es una de las últimas áreas en madurar completamente, alcanzando su desarrollo pleno hacia la tercera década de vida de una persona.

   Su importancia radica en ser fundamental para comportamientos cognitivos complejos, como la función inhibitoria necesaria en la toma de decisiones. Además, alberga circuitos neuronales responsables de habilidades como la planificación, la memoria activa y el control de los impulsos.

2. Durante la pubertad y la adolescencia las áreas corticales del cerebro continúan densificándose con la proliferación de conexiones neuronales. En la parte frontal del cerebro, la materia gris –formada por cuerpos neuronales- alcanza su mayor nivel de volumen en torno a los 11 años en las chicas y a los 12 en los chicos.

3. Durante la pubertad y la adolescencia, las áreas corticales del cerebro siguen densificándose debido a la proliferación de conexiones neuronales. En la región frontal del cerebro, la materia gris, compuesta por cuerpos neuronales, alcanza su máximo volumen alrededor de los 11 y 12 años.

   A partir de este punto, las conexiones menos utilizadas son eliminadas, lo que hace que el cerebro sea más eficiente al adaptarse estructuralmente a las

[3] Apartado elaborado a partir del texto: Sobre la responsabilidad penal de un cerebro adolescente. Aproximación a las aportaciones de la neurociencia acerca del tratamiento penal de los menores de edad. Laura Pozuelo Pérez. En: InDret, Revista para el análisis del derecho, Nº2 – 2024. Disponible en: https://indret.com/sobre-la-responsabilidad-penal-de-un-cerebro-adolescente/

demandas del desarrollo. Esta eliminación conduce a una mayor especialización en regiones específicas del cerebro, mientras que las conexiones neuronales que sobreviven a este proceso de eliminación se vuelven más eficaces en la transmisión de información, un proceso en el que la mielinización juega un papel crucial.

4. La mielina, que actúa como un aislante para las conexiones neuronales, mejora la velocidad y eficiencia con la que los impulsos nerviosos viajan a través del cerebro, facilitando así su actividad. La presencia de la mielina se infiere del volumen de materia blanca en el cerebro. Investigaciones indican que en el córtex prefrontal, la mielinización completa no se alcanza hasta los 20 años o incluso más tarde.
5. Además, es importante considerar la interacción entre las modificaciones que ocurren en dos sistemas neurobiológicos diferentes: el sistema socioemocional y el sistema de control cognitivo, los cuales no evolucionan de manera sincronizada en el tiempo. Las regiones del córtex prefrontal que regulan el control cognitivo también maduran más tardíamente a lo largo de la adolescencia y en los primeros años de la edad adulta.

Dicho esto, corresponde precisar la influencia que estos hallazgos neurológicos tienen en el comportamiento adolescente, especialmente significativas en el momento de la comisión de acciones con relevancia penal:

1. El córtex prefrontal juega un papel crucial en la coordinación de procesos **cognitivos** de alto nivel y en la ejecución de funciones **ejecutivas**, que son habilidades cognitivas necesarias para el **comportamiento orientado a metas**, como la planificación, la inhibición de respuestas, la memoria activa y la atención.
2. Estas habilidades permiten a una persona dedicar el tiempo necesario para **evaluar** una situación, analizar las **opciones disponibles**, **planificar** un curso de acción y ejecutarlo. Cuando las funciones ejecutivas están **menos** desarrolladas, puede resultar en **dificultades adicionales** en la **planificación**, la atención o una **menor flexibilidad** mental, lo cual podría **afectar** la **capacidad de juicio** y la toma de **decisiones**.
3. El proceso de maduración neuronal sigue una serie de etapas fundamentales, incluyendo la sobreproducción de sinapsis, la eliminación de conexiones neuronales menos activas y la mielinización. Estos procesos **mejoran las capacidades del cerebro para transferir información** eficientemente entre diferentes regiones, asegurando el desarrollo no solo de habilidades como el control de los impulsos, sino también su aplicación consistente.
4. Por tanto, la **menor maduración cortical** en los adolescentes puede resultar en comportamientos **impulsivos** o decisiones **menos reflexivas**, a veces ilegales, debido a que tienen una capacidad cognitiva **reducida** para seleccionar estrategias conductuales relacionadas con la autorregulación, el juicio o la planificación.
5. La diferencia en el tiempo entre la activación del sistema **socioemocional** y la maduración completa del sistema de control **cognitivo**, resulta en un período

de considerable inestabilidad durante la adolescencia temprana, donde existe una mayor propensión a adoptar conductas peligrosas.

6. Durante la pubertad, se observa un aumento rápido e intenso en la actividad de la dopamina, un neurotransmisor vinculado al sistema socioemocional, que parece estar asociado con un **mayor deseo de buscar recompensas**.

Por último, es crucial destacar que los aspectos psicológicos están intrínsecamente ligados a la experiencia relacional de cada individuo y a sus propias condiciones de madurez biológica, como lo ha demostrado la neurociencia.

En conclusión, es innegable que ambas disciplinas proporcionan evidencia suficiente para afirmar que las diferencias significativas entre adolescentes y adultos justifican la necesidad de un tratamiento diferenciado por parte del sistema de justicia penal.

III. Responsabilidad penal especial desde el enfoque jurídico

Como hemos mencionado, se suelen presentar en nuestro país iniciativas legislativas que buscan modificar la responsabilidad penal, ampliándola en razón a la edad, a efectos de tratar a menores de edad como adultos. Al respecto el profesor Felipe Villavicencio señala que *"político criminalmente resulta más adecuado el tratamiento educativo específico que el puro castigo"*[4].

Se reconocen criterios para la fijación de la minoría de edad, el biológico, el intelectual y el mixto[5]. Sobre la edad de madurez, el profesor Fernández Sessarego[6] señala lo siguiente:

> *«No se puede precisar la "edad" de la madurez, ya que ello depende de la personalidad de cada persona, pero cabe considerar que, generalmente, puede suceder a partir de los catorce años de edad. Sin embargo, bien lo sabemos lo que hemos vivido un largo trecho, que otros jóvenes no alcanzan madurez a esta temprana edad sino más adelante, a los diez y seis o dieciocho años y quizás, en algunos casos, a una mayor edad. En síntesis, más allá de todo lo que podamos especular sobre el particular, es siempre incierta la edad en que la persona, cada persona, decide optar por un cierto "proyecto de vida".»*

a. El principio de progresividad de los derechos humanos

Cuando el Estado peruano aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño el año 1990, determinó a través de su voluntad soberana que las personas menores de 18 años de edad sean juzgadas dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, decisión que se ha mantenido vigente hasta el día de hoy. Ello se aprecia en los diversos códigos de la niñez y la adolescencia que se promulgaron en nuestro país desde dicha fecha hasta la actualidad: en el texto del Decreto Ley n.° 26102 publicado con fecha 29 de diciembre de 1992, en el texto del T.U.O. del

---

[4] Villavicencio Terreros F. Derecho Penal Parte General (2009). Pág. 596/597

[5] Ibídem. Pág. 596.

[6] Fernández Sessarego C. ¿Es posible proteger jurídicamente el "Proyecto de Vida"?

Código de los Niños y Adolescentes (aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-99-JUS de fecha 8 de abril de 1999), como en el vigente Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, (Decreto Legislativo Nº 1348).

Por consiguiente, si el Estado decide que las personas menores de 18 años sean juzgadas en el sistema penal para adultos, se produciría un retroceso en la protección de los derechos de los adolescentes de nuestro país, vulnerándose el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

b. Existe la errónea percepción de que los adolescentes infractores cometen actos impunes

Al respecto, el artículo 40° de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que las personas menores de edad que infringen las leyes penales se les reconoce una responsabilidad penal especial, distinta a la de los adultos. En ese sentido, son plenamente responsables por los actos que cometan, lo cual guarda concordancia con la doctrina de Protección Integral, así como con el principio de autonomía progresiva.

Inclusive, la Convención sobre los Derechos del Niño señala que es posible restringir la libertad de los adolescentes infractores, como medida extrema, ante la comisión de una infracción a la ley penal.

En atención a ello, los procesos por infracción a la ley penal contra adolescentes, en la medida que implican la aplicación del *ius puniendi* estatal, deben estar revestidos de determinadas garantías procesales y sustantivas, con el fin de tutelar los derechos fundamentales de los adolescentes involucrados.

En esa medida, debe desterrarse el argumento referido a que los menores de edad "son inimputables" y por ende, carecen de capacidad alguna para responder por los actos que cometen.

c. Vulneración al principio de igualdad

El artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, entiende por "niño" a todo ser humano menor de dieciocho años de edad. Esta definición es importante, porque a partir de ella se establece un sistema especial de derechos, deberes y garantías a favor de todas las personas menores de 18 años de edad, que se justifica, en tanto se encuentran en proceso de formación física y psicológica.

Dentro de dicho sistema se configura un sistema de responsabilidad penal juvenil, diferenciado de los adultos (art. 40.3 de la CDN), el cual, debe ser aplicado a todos los menores de 18 años de edad sin discriminación alguna, es decir, en condiciones de igualdad (art. 2.2 de la CDN), como lo indica el Comité de los Derechos del Niño .

Es por ello, que el mismo Comité ha recomendado enfáticamente que[7]:

> *"(...) los Estados partes (...) que permitan, a título excepcional, que ciertos niños sean tratados como delincuentes adultos (por ejemplo, debido a la categoría del delito), modifiquen sus leyes para garantizar una aplicación plena y no discriminatoria de su sistema de justicia juvenil a todas las personas menores de 18 años en el momento de cometer el delito."*

d. Contradicción con la Política Nacional del Adolescente en riesgo y en conflicto con la Ley Penal al 2030

Las iniciativas legislativas que buscan ampliar la edad de responsabilidad penal tienen un corte directamente represivo, lo que contradice las medidas adoptadas sobre adolescentes infractores en la Política Nacional del Adolescente en riesgo y en conflicto con la Ley Penal al 2030.

Dicha política tiene como Objetivo prioritario 2 (OP2): **"Fortalecer el sistema de justicia penal juvenil"**, que responde a la causa directa 2 en cuanto (...) hay insuficiente aplicación de salidas alternativas al proceso y ejecución de prácticas restaurativas, **excesivas medidas de internación**, insuficientes servicios especializados, bajo nivel de coordinación y articulación entre los operadores de justicia penal juvenil, limitados servicios con enfoque restaurativo para la atención de víctimas y **aplicación de múltiples políticas con enfoques represivos-punitivos**.

De allí, que establece como uno de sus lineamientos el "Implementar reformas normativas no punitivas y garantistas en justicia juvenil a favor de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal (ACLP)" (Lineamiento 2.2).

IV. El deber del Estado de implementar políticas a largo plazo que aseguren derechos de adolescentes y jóvenes

Desde la defensa de los derechos humanos, otro problema que presenta este tipo de iniciativas legislativas es que desconocen la condición de población en situación de vulnerabilidad del adolescente, y su protección especial que debe brindarle la sociedad y el Estado por mandato constitucional. Esta posición en que se colocaría el Estado peruano, de acuerdo al proyecto de ley, además, significa que incumpla su obligación de implementar políticas públicas que aseguren a esa población etaria las condiciones para desarrollar su proyecto de vida e integrarse como ciudadanos que aporten al desarrollo de la comunidad.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2024 se proyecta que existan 2 millones 636 mil adolescentes de 12 a 16 años, y 4 millones 79 mil jóvenes de 17 a 24 años.[8] Sobre el primer grupo etario, el Estado tiene la obligación de asegurar

---

[7] Observación general núm. 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, párrafo 30.

[8] Acceder en: https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/pob_02.xls

la culminación satisfactoria de su trayectoria escolar en la educación básica. Esta etapa del sistema educativo peruano tiene por finalidad favorecer el desarrollo integral, desarrollar las capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales del estudiante para actuar y desenvolverse en los diversos ámbitos de la sociedad.

Con relación al segundo grupo etario, el Estado tiene la obligación de asegurar las condiciones para que accedan a una educación superior en igualdad de oportunidades y atendiendo a sus propios méritos y capacidades. La educación superior, como segunda etapa del sistema educativo, está destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos, así como al logro de competencias profesionales.

En este punto, corresponde recordar que la Constitución Política establece en su artículo 13 que el "Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial, mediante políticas del empleo productivo y de educación para el trabajo". En coherencia con ello, la Política Nacional de Empleo Decente[9] (PNED) plantea una serie de acciones que deben cumplir el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dirigidos a crear las condiciones para que las personas jóvenes obtengan o incrementen competencias para el trabajo, así como para el acceso adecuado y oportuno a un trabajo digno.

En efecto, el primer objetivo prioritario de la PNED es Incrementar las competencias laborales de la población en edad de trabajar. Para ello, la política plantea, entre otros, los siguientes indicadores al 2030: el 82 % de la población en edad de trabajar con educación secundaria completa y/o ciclo avanzado; y 48 % de tasa de transición de la educación básica a la educación superior y técnico productiva.

En tal sentido, se puede determinar que el Estado tiene deberes que cumplir para con la población adolescente y joven, garantizando su derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y al derecho de acceder a un trabajo digno y con equidad. Admitir que se apruebe una norma legal con el contenido que plantea el proyecto legislativo es una contradicción dentro de un Estado constitucional de derecho, así como una contravención de obligaciones internacionales asumidas por el Perú.

Aunado a estas consideraciones de carácter jurídico desde un enfoque de protección de derechos humanos, al Estado peruano le interesa económica y socialmente desarrollar y cumplir con los referidos deberes. En efecto, de acuerdo a la Política Nacional Multisectorial para las Personas Mayores al 2030 (PNMPM)[10], en 2020 había en el país 4 millones 140 mil personas adultas mayores, lo que representa el 12.7 % del total de la población del país, pero se calcula que este grupo etario "continuará incrementando y para el año 2050 será 25 % (Naciones Unidades, 2019)".

De acuerdo con esta proyección demográfica planteada por la PNMPM, en 2050 1 de cada 4 personas en el país será una persona adulta mayor, de manera que la carga de la seguridad social será cubierta por la población económicamente activa en ese periodo. Es decir, desde ahora el Estado debe adoptar acciones y medidas para que la población adolescente y joven pueda acceder a una formación que le permita acceder a un empleo digno, así como aportar a la sociedad, con el objeto de que no exista una brecha social y económica que afecte a la población mayor.

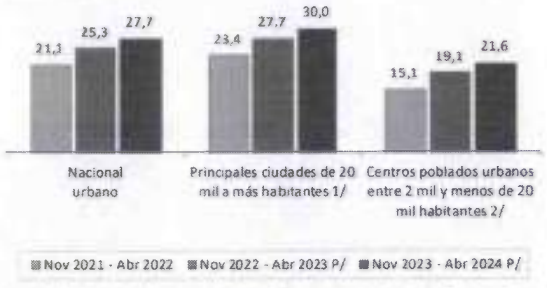
---

[9] Aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2021-TR.
[10] Aprobada por Decreto Supremo Nº 006-2021-MIMP

V. Cifras sobre seguridad ciudadana

De acuerdo con el último Informe Técnico sobre Estadísticas de Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), publicado en el mes de mayo del año en curso[11], los índices de victimización se han incrementado, en comparación a años anteriores. Asimismo, los índices percepción de inseguridad se han mantenido, esto es, 8 de cada 10 personas tienen la sensación que serán víctimas de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad, como se muestra en los siguientes gráficos.

POBLACIÓN URBANA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD VICTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LOS PRÓXIMOS DOCE MESES, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



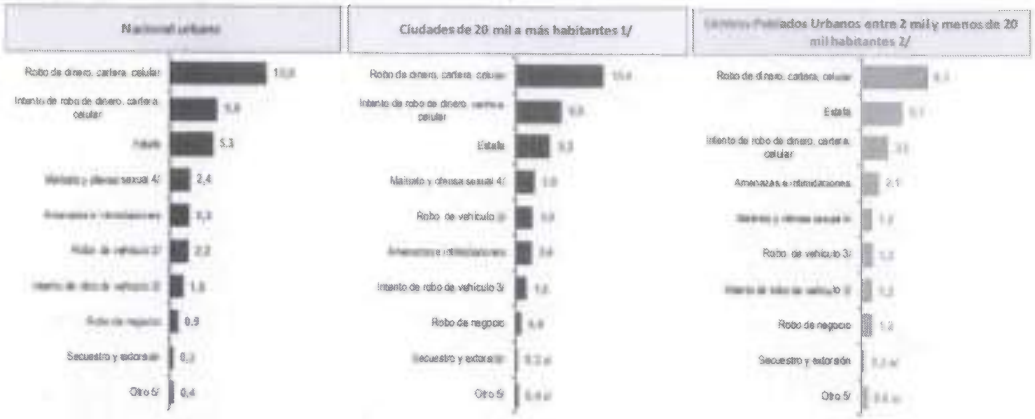
1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima)) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerandose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

Al respecto, teniendo como fuente la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES, el INEI señala que el delito de mayor incidencia es el de robo, tanto a nivel nacional urbano, como en ciudades de 20 mil a más habitantes y los centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, como se muestra a continuación[12].

---

[11] Recuperado de:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_estadistica_seguridad_nov23_abr24.pdf
[12] Ibídem.

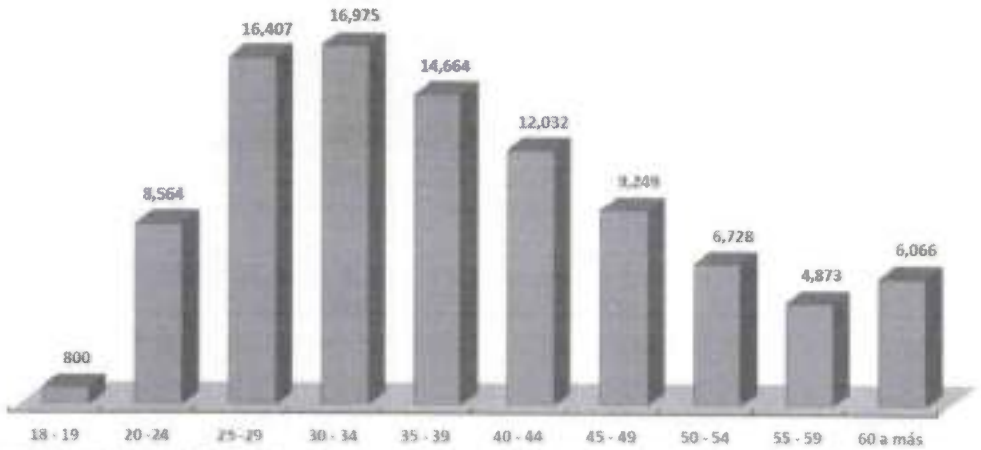
TASA DE VÍCTIMAS POR TIPO DE HECHO DELICTIVO, SEGÚN ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024 P/
(Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo mas de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
3/ Comprende: Auto, camioneta, autopartes de vehículo automotor, motocicleta, mototaxi y bicicleta.
4/ Incluye: Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del hogar, acoso, abuso, violación, entre otros.
5/ Comprende: Robo de mascota, maltrato físico de otra persona no miembro del hogar, entre otros.
P/ Resultados preliminares.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el numero de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

Ahora bien, el informe estadístico del mes de marzo de 2024 del Instituto Nacional Penitenciario demuestra que los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir a partir de los 14 o 16 años la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos.

POBLACIÓN PENITENCIARIA SEGÚN RANGO DE EDAD



Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

Sumado a lo señalado, de la revisión del gráfico anterior se advierte que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 800 internos/as, lo cual representa menos del 1% del total de la Población Penitenciaria.

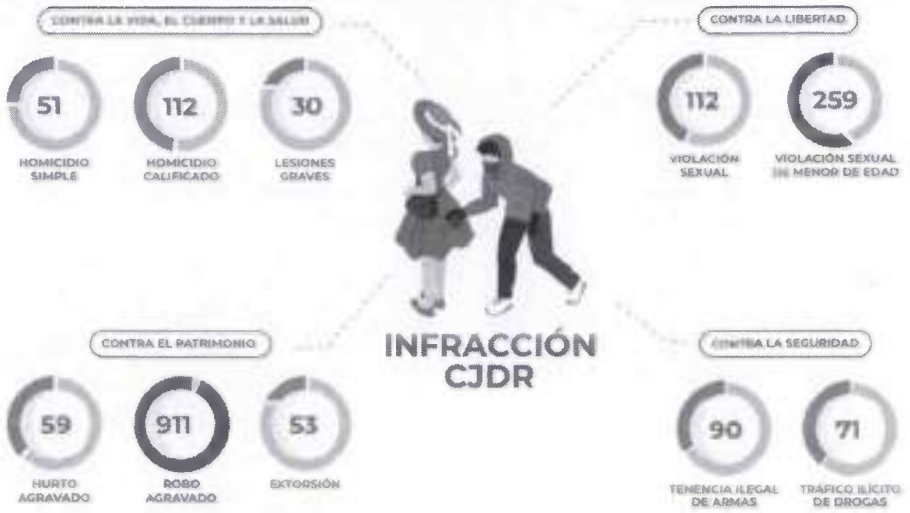
De otro lado, cifras recientes del Pronacej revelan que son solo 1862 los adolescentes que se encuentran en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, cifra que dista mucho de los más de noventa mil internos que se encuentran recluidos en

establecimientos penitenciarios. Cabe precisar que, de los 1862 adolescentes en mención, 1770 son hombres y 92 mujeres. Asimismo, de este grupo de adolescentes, 4 son analfabetos, 201 tienen primaria incompleta, 62 primaria completa y 1178 secundaria incompleta, lo cual demuestra la enorme deuda en educación que tiene el Estado con este grupo vulnerable.[13]

NIVEL EDUCATIVO	14 a 15 AÑOS	16 a 17 AÑOS	18 a 21 AÑOS	22 AÑOS A MÁS	TOTAL
ANALFABETO	0	1	3	0	4
PRIMARIA INCOMPLETA	26	81	90	4	201
PRIMARIA COMPLETA	11	23	27	1	62
SECUNDARIA INCOMPLETA	89	465	563	61	1,178
SECUNDARIA COMPLETA	0	53	255	76	384
SUPERIOR TÉCNICA INCOMPLETA	0	3	11	5	19
SUPERIOR UNIVERSITARIA INCOMPLETA	0	2	8	4	14
TOTAL	126	628	957	151	1,862

Fuente: CJDR
Elaborado: UAPISE- PRONACEJ.

Ahora bien, se advierte que las infracciones de mayor incidencia, por las cuales son internados los adolescentes en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación son robo agravado y violación sexual de menor de edad, como se muestra a continuación.



Fuente: CJDR
Elaborado: UAPISE- PRONACEJ.

VI. Conclusiones

La Defensoría del Pueblo ha mantenido una posición uniforme señalando que las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal no serían viables, puesto que desconocen el ordenamiento jurídico nacional e internacional

[13] Recuperado de:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6575594/5722800-boletin-estadistico-mayo-2024.pdf?v=1720029382

y, sobre todo, las obligaciones que el Estado peruano ha asumido al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta posición ha sido planteada en documentos como el Informe de Adjuntía n.° 001-2013-ANA/DP o, en documentos más recientes, el Oficio n.° 0196-2022-DP.

Al respecto, es preciso indicar que la experiencia ha demostrado que agravar las sanciones, con mayor pena o ampliando la edad de responsabilidad penal, no disuade la comisión de hechos punibles, siendo necesario que desde el Estado se planteen otras formas de prevención de la comisión de delitos, y, de ese modo, evitar que se desconozca la orientación personalista del Estado y el sistema jurídico, en donde la dignidad humana es el valor superior que el Estado debe proteger.

La Defensoría del Pueblo promueve el diseño y ejecución de políticas públicas estatales con un enfoque de derechos humanos, con indicadores que permitan medir y evaluar objetivamente la eficacia y eficiencia de las mismas, especialmente respecto de la victimización y percepción de inseguridad que afecta a las personas. Hemos hecho énfasis también al indicar que no solo es relevante la implementación de estrategias destinadas al control, represión y sanción del delito, como el incremento de penas; sino que, además, es imprescindible apostar por políticas públicas eficientes a mediano y largo plazo, atendiendo los factores y las causas que favorecen la violencia y la criminalidad en nuestro país.

Sobre el particular es de resaltar que el primer Objetivo Prioritario de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana[14], sea "incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencias cometidos por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población".

Por otro lado, podemos decir que el Estado no está siendo totalmente eficiente en garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, por ello, existen grupos de personas menores de edad que terminan siendo expuestos a continuar el camino del contexto violento en el que se encuentran, siendo inducidos por personas adultas a la comisión de delitos, lo cual debería ser considerado como un supuesto agravante en contra de los adultos al momento de ser sancionados.

Además, es necesario que el Estado preste especial importancia a los niños, niñas y adolescentes, que son el futuro del país. Es por ello que la Defensoría del Pueblo implementó el Programa Rompiendo Cadenas[15], con la finalidad de velar por la integridad de los grupos en alto riesgo de vulnerabilidad, algunos de los cuales han sido históricamente invisibles para el Estado y sus políticas públicas.

---

[14] Aprobada por el Decreto Supremo N° 006-2022-IN, publicado el 22 de junio de 2022.
[15] Mediante Resolución Defensorial N° 013-2023/DP del 22 de noviembre de 2023

ANEXO 4

República del Perú
Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/03/2025 17:33:20

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Lima, 7de marzo de 2025

Oficio n.° 0118-2025-DP/DA

Señor
Fernando Miguel Rospigliosi Capurro
Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento
Congreso de la República
Presente. -

Referencia: Oficio n.° 0929-2024-2025-CCR/CR

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme al Proyecto de Ley n.° 9251/2024-CR, "Ley de Reforma Constitucional que precisa la edad mínima legal para atribuir responsabilidad penal", que propone modificar el artículo 30 de la Constitución Política con la finalidad de regular la edad de responsabilidad penal desde los catorce años.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de noviembre del año 2024[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 14 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_noviembre_2024.pdf

Defensoría del Pueblo
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ LUJAN Rina Karen FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/03/2025 17:33:20

ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercano a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 703 internos/as, lo cual representa cerca del 0.7% del total de la Población Penitenciaria.

En tanto que el Proyecto de Ley n.° 9251/2024-CR propone constitucionalizar la edad mínima de 14 años para la atribución de responsabilidad penal en el Perú, resulta pertinente precisar que el artículo 55 de la Constitución Política del Perú establece que los tratados internacionales ratificados por el Estado forman parte del derecho nacional. Además, la Cuarta Disposición Final y Transitoria otorga a los tratados sobre derechos humanos un rango constitucional, equiparándolos a las normas de la propia Carta Magna. En este contexto, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por el Perú en 1990, no solo es vinculante, sino que tiene una jerarquía normativa que obliga a armonizar las leyes y reformas constitucionales con sus disposiciones.

Por otro lado, es de advertir que al definir a los mayores de 14 años como "ciudadanos" para efectos penales, podría interpretarse como una equiparación implícita con la responsabilidad penal adulta, debilitando el enfoque diferenciado que exige la CDN. El Comité de los Derechos del Niño enfatiza que los sistemas de justicia juvenil deben priorizar la reintegración y la educación sobre el castigo, lo que podría verse comprometido si se normaliza la persecución penal desde los 14 años sin salvaguardas específicas.

En todo caso, para evitar que la constitucionalización de la edad mínima derive en un enfoque más punitivo, podría ser conveniente que la reforma incluya explícitamente los principios de la CDN como marco interpretativo. Por ejemplo, se podría establecer que la responsabilidad penal de los adolescentes debe regirse por el interés superior del niño, la proporcionalidad y la prioridad de medidas socioeducativas. Esto aseguraría que cualquier desarrollo normativo futuro respete los estándares internacionales y limitaría la discrecionalidad legislativa en sentido contrario.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año 2024, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, explicando los sustentos científico y legal, que validan nuestra posición sobre la no viabilidad de este tipo de propuestas normativas.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a realizar, a partir de la evidencia existente, una debida evaluación de los alcances de esta propuesta normativa y el impacto negativo que tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

(Documento firmado digitalmente)
Rina Karen Rodríguez Luján
Defensora Adjunta General
Defensoría del Pueblo

SSCSN/SNIAD

[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

ANEXO

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2551 -2024-DP

Señor
FLAVIO CRUZ MAMANÍ
Vocero del Grupo Parlamentario Perú Libre
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

ANEXO

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2552 -2024-DP

Señora
ISABEL CORTEZ AGUIRRE
Vocera del Grupo Bloque Democrático Popular
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

ANEXO

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2553 -2024-DP

Señor
ALEX RANDU FLORES RAMÍREZ
Vocero del Grupo Parlamentario Bancada Socialista
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

ANEXO 1

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2554 -2024-DP

Señor
JOSÉ LEÓN LUNA GÁLVEZ
Vocero del Grupo Parlamentario Podemos Perú
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

ANEXO 4

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2555 -2024-DP

Señor
JORGE CARLOS MONTOYA MANRIQUE
Vocero del Grupo Parlamentario Honor y Democracia
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

ANEXO

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2556 -2024-DP

Señor
HÉCTOR VALER PINTO
Vocero del Grupo Parlamentario Somos Perú
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

ANEXO

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2557 -2024-DP

Señor
ROBERTO HELBERT SÁNCHEZ PALOMINO
Vocero del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú- Voces del Pueblo
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

ANEXO 1-H

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2558 -2024-DP

Señor
JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA
Vocero del Grupo Parlamentario Avanza País
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

ANEXO 4-H

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2559 -2024-DP

Señor
SEGUNDO TEODOMIRO QUIROZ BARBOZA
Vocero del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

ANEXO 4

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2560 -2024-DP

Señor
ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA
Vocero del Grupo Parlamentario Acción Popular
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

ANEXO A-H

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2561 -2024-DP

Señor
ALEJANDRO MUÑANTE BARRIOS
Vocero del Grupo Parlamentario Renovación Popular
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

ANEXO H

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2562 -2024-DP

Señor
ALEJANDRO SOTO REYES
Vocero del Grupo Parlamentario Alianza por el Progreso
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

Defensoría del Pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2563-2024-DP

Señor
ARTURO ALEGRÍA GARCÍA
Vocero del Grupo Parlamentario Fuerza Popular
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte de los integrantes de su bancada para legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los(as) integrantes de su grupo parlamentario, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

Jirón Ucayali 394-398, Lima 1
Teléfono: (01) 311 0300 anexos: 1201-1255
E-mail: jgutierrez@defensoria.gob.pe

ANEXO 4

Lima, 21 de octubre de 2024

OFICIO N°2564 -2024-DP

Señor
MITA ALANOCA ISAAC
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Congreso de la República
Presente. -

Asunto: Opinión sobre el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Referencia: Votación del Pleno del pasado 17 de octubre de 2024

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme al Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley n.° N° 618, 6080, 7771 y 8166, que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo N° 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

Al respecto, debemos mencionar que nuestra institución tiene un compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección especial por parte del Estado, la familia y la comunidad.

Nuestra institución saluda que, en el actual contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, exista el interés por parte del Congreso de la República de legislar y adoptar medidas que respondan a este problema público; sin embargo, la reducción de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, es una medida que no es acorde con su desarrollo integral y tampoco se ajusta a su interés superior.

Como sustento de lo señalado es necesario tener en consideración que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Asimismo, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de julio de este año[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la minoría de edad. Esta información permite inferir que no es necesario reducir, a partir de los 16 años, la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos. Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercado a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 719 internos/as, lo cual representa cerca del 0.8% del total de la Población Penitenciaria.

Por último, debemos indicar que, en el mes de julio del año en curso, publicamos el Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA[2], denominado *"Responsabilidad penal de los adolescentes y el principio de progresividad en el Perú"*, en el cual desarrollamos nuestra posición institucional frente a las propuestas normativas para reducir la edad de imputabilidad penal, expresando la explicación científica y legal, que validan nuestra posición de que no resulta viable lo señalado en el Texto Sustitutorio de la referencia.

En este sentido, expresamos nuestra opinión desfavorable a la propuesta legislativa e invocamos a su despacho compartir nuestros fundamentos con los demás integrantes de la Comisión, previo a la segunda votación, con el propósito de que a partir de la evidencia existente realicen una debida evaluación de los alcances y el negativo impacto que una propuesta normativa tendría en el futuro de los adolescentes de nuestro país, y por las consideraciones expuestas se ha tomado en cuenta la recomendación de incrementar las penas contra los adultos que utilicen a los menores de edad para la comisión de delitos graves.

En la seguridad de su atención, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferencia.

Atentamente,

JOSUÉ GUTIÉRREZ CÓNDOR
Defensor del Pueblo

RMSI/PPA

[1] Véase en: https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2024/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_julio_2024.pdf
[2] Véase en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/07/DOCUMENTO-DEFENSORIAL-001-2024-ANA.pdf

ANEXO 71

República del Perú
Defensoría del Pueblo

Comunicado n.° 016/DP/2025

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA AL EJECUTIVO LA OBSERVACIÓN DE LA AUTÓGRAFA DE LEY QUE INCORPORA A LOS ADOLESCENTES DE 16 Y 17 AÑOS COMO SUJETOS IMPUTABLES DENTRO DEL SISTEMA PENAL POR SER INCONSTITUCIONAL

La Defensoría del Pueblo rechaza la aprobación del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 618/2021-CR, 6080/2023-CR, 7771/2023-CR y 8166/2023-CR, que propone la Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348; para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años, como imputables dentro del Sistema Penal.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo informa que el Poder Judicial, como actor principal del sistema de justicia tutelar de las garantías y los derechos fundamentales de las personas, respecto a estos proyectos de Ley, de connotación eminentemente populistas, ha opinado en contra. De igual modo, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, concordantes con nuestra posición institucional expresada a través del Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA de julio del 2024, han ratificado la no viabilidad de dichas iniciativas legislativas.

En el dictamen, no existe una sola posición institucional o de la sociedad civil organizada que respalde dichas iniciativas, pues tratándose de personas menores de edad, su abordaje obliga un análisis jurídico serio y coherente con la finalidad de la ley, respetuoso del marco convencional y constitucional vigente. Además, debe tomarse en cuenta nuestro informe, el cual aborda, desde el enfoque científico y criminológico, que la responsabilidad atenuada en los adolescentes se encuentra respaldada por la evidencia científica proveniente tanto de la psicología evolutiva como de las neurociencias, tal como lo ha indicado el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones.

Asimismo, el texto aprobado en el dictamen, vulnera el principio de igualdad, puesto que el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) define como «niño» a todo ser humano menor de dieciocho años, estableciendo un sistema especial de derechos, deberes y garantías para todas las personas en esta franja de edad, justificado por su proceso de formación física y psicológica. Dentro de este marco, se implementa un sistema de responsabilidad penal juvenil, distinto al de los adultos (art. 40.3 de la CDN), que debe aplicarse sin discriminación alguna a todos los menores de 18 años, en igualdad de condiciones (art. 2.2 de la CDN), según lo señalado por el Comité de los Derechos del Niño, lo que evidencia, desde ya, la inconstitucionalidad de los proyectos aprobados.

Finalmente, desde la perspectiva de los derechos humanos, este tipo de iniciativas legislativas ignoran la condición de vulnerabilidad de los adolescentes y la protección especial que la sociedad y el Estado deben garantizarles por mandato constitucional.

Defensoría del Pueblo

Adoptar una postura distinta a la establecida en la ciencia y la ley, implica que el Estado peruano incumpla su obligación de implementar políticas públicas que aseguren, a este grupo etario, las condiciones necesarias para desarrollar su proyecto de vida e integrarse como ciudadanos de bien que contribuyan al desarrollo del país.

Lima, 11 de abril de 2025

ANEXO

Defensoría del Pueblo

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Lima, 05 de mayo de 2025

Oficio N° 0794 /2025-DP

Señora
Dina Ercilia Boluarte Zegarra
Presidenta Constitucional de la República
Presente.-

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted, en mi calidad de Defensor del Pueblo y en el marco de nuestras funciones constitucionales de defensa de los derechos fundamentales y supervisión de la administración estatal, establecidas en el artículo 162 de la Constitución y en el artículo 1 de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, para ampliar los fundamentos que sustentan nuestra solicitud de observar la Autógrafa de Ley aprobada por el Congreso de la República, sobre la base de los Proyectos de Ley 618/2021-CR, 6080/2023-CR, 7771/2023-CR y 8166/2023-CR, que entre otras cuestiones, proponían la incorporación de los adolescentes de 16 y 17 años de edad como sujetos imputables dentro del sistema de administración de justicia penal ordinario, equiparándolos a los adultos.

Señora Presidenta, reiteramos nuestra observación a esta iniciativa legislativa y consideramos indispensable exponer con mayor detalle las razones por las cuales instamos a su Despacho a ejercer la prerrogativa constitucional de observación, prevista en el artículo 108° de la Constitución, impidiendo así la entrada en vigencia de una norma que consideramos lesiva a los derechos de los adolescentes de todo el país y contraria al ordenamiento jurídico y jurisprudencia nacional e internacional, sobre la materia:

a) Carencia de consenso técnico y oposición institucional generalizada

Esta propuesta legislativa carece de respaldo técnico y ha generado una oposición prácticamente unánime entre las instituciones directamente involucradas en el sistema de justicia penal y protección de derechos de la niñez y la adolescencia: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef Perú), el Colegio de Abogados de Lima, e incluso el Poder Judicial, como garante último de los derechos fundamentales y actor central del sistema de administración de justicia, ha expresado formalmente su opinión contraria, calificando iniciativas similares como inviables y de naturaleza populista, alejadas de una solución real al problema de la criminalidad.

De igual manera, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), entidades rectoras en políticas de protección a la infancia y justicia, respectivamente, han opinado por la inviabilidad técnica y jurídica de reducir la edad de imputabilidad de los adolescentes.

Estas posturas son plenamente concordantes con la posición institucional que la Defensoría del Pueblo ha sostenido consistentemente, plasmada, entre otros, en nuestro **Documento Defensorial n.° 001-2024-DP/ANA** de julio de 2024.

En ese sentido, resulta preocupante constatar que en el dictamen aprobado no se recoge ni una sola opinión favorable proveniente de alguna institución pública relevante o de organizaciones de la sociedad civil especializada que respalde esta medida, por el contrario, el Grupo Impulsor para poner Fin a la Violencia contra los niños, niñas y adolescentes, ha expresado su total rechazo al mismo, lo que revela que el abordaje de la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal exige un análisis jurídico serio, coherente con los fines de la ley penal y respetuoso del marco normativo, constitucional y convencional, no respuestas simplemente de carácter punitivo.

b) Inobservancia del Principio de Interés Superior del Niño y desconocimiento de la evidencia científica

La autógrafa no toma en consideración el principio rector del Interés Superior del Niño, consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que obliga a que todas las medidas concernientes a los menores de 18 años de edad atiendan primordialmente a su bienestar y desarrollo integral, pues va en contra del mismo el promover la incorporación precoz de los adolescentes en el sistema penal de adultos.

Asimismo, la propuesta ignora en forma temeraria la robusta evidencia científica proveniente de la psicología evolutiva y las neurociencias, puesto que como ha señalado enfáticamente el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el cerebro adolescente se encuentra en una etapa crucial de desarrollo, particularmente en las áreas responsables del control de impulsos, la toma de decisiones, la evaluación de riesgos y la proyección a futuro. Esta inmadurez neurobiológica y psicosocial explica, en gran medida, comportamientos que pueden tipificarse como delictivos, pero del cual no se puede derivar del mismo grado de culpabilidad que en un adulto con plenas capacidades desarrolladas. De allí, que la ciencia respalde una responsabilidad penal atenuada para los adolescentes, precisamente por estas características inherentes a su etapa vital, por lo que pretender juzgarlos bajo los mismos parámetros que a un adulto es negar una realidad biológica y psicológica científicamente confirmada.

c) Incompatibilidad manifiesta con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Perú

La Ley aprobada colisiona frontalmente con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano, en particular con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad.

Dicha Convención en su artículo 1° de define categóricamente como "niño" a todo ser humano menor de 18 años, estableciendo así el estándar internacionalmente reconocido que fundamenta un sistema de protección especial. Asimismo, el artículo 40.3 exige a los Estados Parte que establezcan un sistema de justicia especializado para las personas menores de 18 años de edad, presuntamente infractores de la ley penal, distinto del sistema aplicable a los adultos, buscando con este mandato un enfoque socioeducativo y restaurativo, no meramente punitivo. Finalmente, el artículo 2.2 de la CDN prohíbe cualquier tipo de discriminación, lo que implica que el sistema especializado debe aplicarse por igual a todas las personas menores de 18 años, sin permitir distinciones arbitrarias basadas únicamente en la edad dentro de ese rango, como sería tratar de forma diferente a los de 16 y 17 años.

Por ello, modificar la ley para someter a adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal adulto constituye una violación directa de estos preceptos convencionales. Al ser la CDN un tratado de derechos humanos con rango constitucional en nuestro ordenamiento, la autógrafa deviene en manifiestamente inconstitucional por contravenir estas normas supranacionales y el principio de igualdad y no discriminación.

d) Inobservancia del deber de protección reforzada de los adolescentes

Cabe señalar que, desde una perspectiva de derechos humanos, la propuesta legislativa representa un grave retroceso al desdeñar la condición de especial vulnerabilidad de los adolescentes y la obligación reforzada de protección que el artículo 4 de la Constitución impone al Estado y a la sociedad en general. La adolescencia es una etapa de transición, formación y construcción de identidad, en la que los adolescentes son con mayor intensidad susceptible a influencias externas y requieren un trato diferenciado.

Adoptar una postura meramente punitiva, que equipara la responsabilidad adolescente a la adulta, implicaría que el Estado peruano incumpliría su obligación de diseñar e implementar políticas públicas integrales y preventivas, por lo demás aprobada en la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, que abordar las causas estructurales de la delincuencia juvenil (pobreza, exclusión, falta de oportunidades educativas y laborales, violencia familiar, etc.) y asegura las condiciones necesarias para que los adolescentes puedan desarrollar un proyecto de vida digno, alejado de la criminalidad, y se integren a la sociedad como ciudadanos responsables y constructivos, contribuyendo así al desarrollo del país.

e) Medida ineficaz para combatir la inseguridad ciudadana

Finalmente, debemos mencionar que, de acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario, correspondiente al mes de enero del año 2025[1], los grupos etarios de 25-29, 30-34 y 35-39 son los que concentran la mayor cantidad de la población penitenciaria, rangos que se encuentran muy alejados de la edad de responsabilidad penal que contempla la Autógrafa de Ley aprobada por el Congreso de la República.

Sumado a ello, el referido informe revela que el grupo etario más cercano a la minoría de edad, esto es de 18-19 años, solo reúne a 647 internos/as, lo cual representa cerca del 0.6% del total de la Población Penitenciaria.

Esta información permite inferir que no es necesario reducir la edad para que los adolescentes respondan penalmente como adultos, más aún si nuestro país ya cuenta con un sistema de responsabilidad penal especial para adolescentes que infringen la ley penal, donde las infracciones de mayor incidencia, por las cuales son internados los adolescentes en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación son robo agravado y violación sexual de menor de edad, distintos a los comprendidos en la referida Autógrafa de Ley[2].

Por todas estas consideraciones, que evidencian la profunda incompatibilidad de la autógrafa de ley con los principios constitucionales, las obligaciones internacionales del Estado peruano, la

---

[1] Informe Estadístico del INPE (Pág. 15).
Véase en:
https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2025/informes%20estadisticos/informe_estadistico_enero_2025.pdf

[2] Boletín Estadístico del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pág. 17).
Véase en:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7994777/6719542-boletin-estadistico-marzo.pdf?v=1745879918

República del Perú
Defensoría del Pueblo

evidencia científica y, sobre todo, con el interés superior y los derechos fundamentales de los adolescentes; en virtud de lo cual, reitero a usted, Señora Presidenta, nuestra formal y respetuosa solicitud para que, en ejercicio de sus facultades y en defensa del Estado Constitucional de Derecho, observe la referida autógrafa de ley.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi más distinguida consideración y estima personal.

Atentamente,

Josué Gutiérrez Cóndor
Defensor del Pueblo

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la Defensoría del Pueblo. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 06/05/2025. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
https://sgd.defensoria.gob.pe/verificador/

Código de verificación: 0137 0624 4403 0299

ANEXO K

República del Perú
Defensoría del Pueblo

Comunicado n.° 021/DP/2025

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTARÁ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY Nº 32330 QUE INCORPORA A ADOLESCENTES DE 16 Y 17 AÑOS AL SISTEMA PENAL ORDINARIO

La Defensoría del Pueblo informa a la ciudadanía su decisión de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 32330, "Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal", promulgada el día de hoy. Esta decisión se fundamenta en la profunda incompatibilidad de la mencionada ley con la Constitución Política del Perú, las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, la evidencia científica y el principio del interés superior del niño.

Nuestra institución rechaza de forma categórica la citada Ley, tal como lo expresamos en el oficio nº 0794/2025 de fecha 05 de mayo del año en curso, dirigido a la Presidencia de la República solicitando la observación de la autógrafa de ley.

Consideramos que la norma es perjudicial para los derechos de los adolescentes del país y contraria al ordenamiento jurídico y jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia.

Los principales argumentos que sustentan nuestra posición son:

- La ley vulnera el principio rector del Interés Superior del Niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige priorizar el bienestar y desarrollo integral de los menores de 18 años. Asimismo, no se considera la evidencia científica en psicología evolutiva y neurociencias, que señala que el cerebro adolescente está en desarrollo, impactando el control de impulsos, toma de decisiones y evaluación de riesgos.
- La ley colisiona frontalmente con la Convención sobre los Derechos del Niño que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad. La CDN define "niño" a todo ser humano menor de 18 años y exige a los Estados establecer un sistema de justicia especializado para menores de 18 años, distinto al de adultos, con un enfoque socioeducativo y restaurativo que ha sido recogido con el Nuevo Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.
- Desde el enfoque de derechos humanos, la ley es un grave retroceso al no considerar la especial vulnerabilidad de los adolescentes y la obligación reforzada de protección que el Estado y la sociedad tienen hacia ellos, conforme al artículo 4 de la Constitución Política del Perú, en virtual del cual la comunidad y el Estado deben proteger especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono.
- La ley carece de respaldo técnico y las instituciones claves del sistema de justicia, entre ellos el Poder Judicial (que la calificó de inviable y populista), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), y, además, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF Perú) y el Colegio de Abogados de Lima.

Por todas estas consideraciones, la Defensoría del Pueblo, en defensa del Estado Constitucional de Derecho y los derechos fundamentales de los adolescentes, presentará próximamente la correspondiente demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional del Perú, en atención a la facultad establecida en el numeral 2) del artículo 9° de la Ley N° 29882, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Instamos al fortalecimiento del sistema de justicia penal juvenil con enfoque terapéutico que trae consigo la implementación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, para garantizar un tratamiento adecuado y efectivo de aquellos adolescentes de 14 a 18 años que han cometido infracciones a ley penal con el fin de lograr su real y efectiva reintegración social y familiar.

Lima, 10 de mayo de 2025

ANEXO L

REPÚBLICA DEL PERÚ
Defensoría del Pueblo

DERECHOS HUMANOS DE LOS INTERNOS E INTERNAS DE LOS 68 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL PAÍS

EN EL MARCO DEL PROGRAMA ROMPIENDO CADENAS

Informe Defensorial n.° 216

Lima, junio de 2024

Defensoría del Pueblo

Jirón Ucayali 394-398
Lima-Perú
Teléfono: (511) 311-0300
Correo electrónico: consulta@defensoria.gob.pe
Página web: http://www.defensoria.gob.pe
Línea gratuita: 0800-15170

Informe Defensorial n.° 216. Derechos humanos de los internos e internas de los 68 establecimientos penitenciarios del país. En el marco del programa Rompiendo Cadenas.

Primera Edición: Lima - Perú, junio de 2024.
Hecho el Depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2024-06846

El presente documento fue elaborado bajo la dirección de Josué Gutiérrez Cóndor, Defensor del Pueblo.

La unidad orgánica a cargo de su elaboración, revisión, corrección y visto bueno fue el Programa para las Personas Privadas de Libertad de la Adjuntía para la Seguridad Ciudadana, Seguridad Nacional y la Lucha contra las drogas.

Este informe fue elaborado por Cintya Indira Muro Valverde, Paulo César Palomino Acuña y Carlos Enrique Terrones Ramos con la asistencia de Gianpool Javier Vásquez Luque y el equipo del Programa para las Personas Privadas de Libertad. Asimismo, se contó con el apoyo de Carlos Eduardo Fernández Millan, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, Cecilim Bricel Paniura Fernández y Sandra Elizabeth Gil Armas, comisionadas de la adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad y Piero Efraín Villena Escalante, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

La revisión y corrección la realizó un equipo conformado por Deyvi Manuel Morales Zárate, comisionado de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia; Ana Isabel Pari Morales, adjunta para los Derechos de la Mujer (e); Yanina Roxana Pacheco Canales, adjunta para la Descentralización y Desarrollo Socioeconómico (e); Liz Karen Alata Ramos, Jefa de la Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la Información y Rina Karen Rodríguez Luján, Primera Adjunta (e). El visto bueno estuvo a cargo de Raúl Enrique Miranda Sousa Infante, adjunto para la Seguridad Ciudadana, Seguridad Nacional y la Lucha contra las Drogas (e).

La información estadística y el diseño de la base de datos estuvieron a cargo del equipo de la Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la Información, conformado por Liz Karen Alata Ramos, Rosario Venturo Palomino y Víctor Marchena Bautista.

Fue aprobado por Rina Karen Rodríguez Luján, Primera Adjunta (e), conforme al procedimiento establecido mediante Resolución Administrativa n.° 006-2023/DP-PAD. La diagramación estuvo a cargo de Troy Loayza Márquez.

Expresamos un especial agradecimiento a los funcionarios y personal de la alta dirección, órganos administrativos, de apoyo, de línea y desconcentrados de la Defensoría del Pueblo por su valioso apoyo durante esta supervisión nacional.

Además, nuestro agradecimiento a todas las instituciones públicas y privadas que nos permitieron alcanzar el objetivo trazado, de manera especial, al Instituto Nacional Penitenciario por las facilidades brindadas para el desarrollo de la supervisión defensorial.

Índice

Introducción 5

CAPÍTULO I
Competencia, objetivos y metodología 7

1.1. Competencia 9
1.2. Objetivos 10
1.2.1. Objetivo general 10
1.2.2. Objetivos específicos 10
1.3. Metodología 10

CAPÍTULO II
Marco teórico y normativo 13

2.1. Marco teórico 15
2.2. Marco normativo 19

MARCO NORMATIVO CONVENCIONAL - INTERNACIONAL 19
2.2.1. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos 19
2.2.2. Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas 20
2.2.3. Estándares internacionales sobre el aislamiento penitenciario 22

MARCO NORMATIVO NACIONAL 23
2.2.4. Constitución y principios del régimen penitenciario 23
2.2.5. Código de Ejecución Penal y su Reglamento 24
2.2.6. Jurisprudencia constitucional 24
2.2.7. Política Nacional Penitenciaria al 2030 26

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 26
2.2.8. Acciones del Estado en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad 26
2.2.9. Costo social de la criminalidad 27
2.2.10. Costo de oportunidad 27
2.2.11. Propuesta de la Defensoría del Pueblo frente al hacinamiento penitenciario 29

CAPÍTULO III
Resultados de la supervisión 31

3.1. Datos generales 33
3.2. Servicios penitenciarios 38
3.2.1. Educación 38
3.2.2. Trabajo 42
3.2.3. Salud 46
3.2.4. Servicio social 50
3.2.5 Inscripción de sentencias 57
3.3. Grupos de especial protección 57
3.3.1. Mujeres 57
3.3.2. Adultos mayores 69
3.3.3. Personas con discapacidad 70
3.3.4. Extranjeros y extranjeras 72

3.3.5. Poblaciones indígenas 76
3.3.6. Comunidad LGTBI 77
3.4. El aislamiento en los establecimientos penitenciarios desde la mirada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 78
3.4.1. Definición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 79
3.4.2. El aislamiento penitenciario en el Perú 79
3.4.3. El Aislamiento Penitenciario como Forma de Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes 82
3.4.4. Efectos psicológicos y fisiológicos del aislamiento penitenciario 82

CONCLUSIONES 83

RECOMENDACIONES 87

ANEXOS 91

Introducción

El Programa Rompiendo Cadenas de la Defensoría del Pueblo ha sido creado con la finalidad de velar por la integridad de los grupos en alto riesgo de vulnerabilidad, algunos de los cuales han sido históricamente invisibles para el Estado y sus políticas públicas.

En tal sentido, el principal grupo de interés de la Defensoría del Pueblo son las niñas, niños y adolescentes altamente vulnerables y, en esa línea, se decidió realizar, como una primera etapa del Programa, una supervisión nacional a los establecimientos penitenciarios de todo el Perú, con el objetivo de hacer un levantamiento de información sobre los hijos de las personas privadas de libertad. Esta información es el insumo principal para el Informe del Programa Rompiendo Cadenas.

En este contexto, es importante precisar que las personas privadas de libertad son una población vulnerable para la Defensoría del Pueblo, y en atención a la importante información recabada en la supervisión, es que se decide sistematizar esta información para evaluar la situación actual del sistema penitenciario y la población penitenciaria.

En efecto, las personas privadas de libertad tienen condición de vulnerabilidad, dado que el internamiento en cárceles puede llegar a afectar el goce y ejercicio de otros derechos como la integridad, salud, trabajo, vida familiar, entre otros, pese a que no deberían verse limitados más derechos que el de la libertad personal, en estricto cumplimiento de un mandato judicial de pena privativa de libertad o una orden de prisión preventiva.

Asimismo, el sistema penitenciario peruano es aquel conglomerado de instituciones, normatividad y autoridades que tiene como misión el cumplimiento de los objetivos resocializadores y tiene como base normativa a los instrumentos para el tratamiento penitenciario, llámese el Código de Ejecución Penal y su Reglamento, que se ajustan plenamente a los documentos internacionales que se encuentran en el ámbito de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, reconocidos y aprobados por el Estado Peruano.

Es así como nuestra labor se desarrolla en el marco de la aplicación de diversos instrumentos internacionales como las "Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos - ONU", los "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad de las Américas - OEA", las "Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento y Medidas no privativas de libertad para las Mujeres Delincuentes", entre otros.

Es importante precisar que, como veremos más adelante, las personas privadas de libertad, a su vez, pueden pertenecer simultáneamente a otros grupos de especial protección, por ser mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas LGTBI, entre otros. Esto requiere una especial atención por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Estado en su conjunto; sin embargo, pese a que se cuenta con normas, planes, programas y proyectos enfocados a atender sus necesidades diferenciadas y prevenir actos de discriminación en su contra, generalmente, es insuficiente para garantizar el bienestar de la población penitenciaria y, especialmente, de los grupos vulnerables que en ella se encuentran.

En cuanto al cumplimiento de la finalidad resocializadora de la pena, tenemos que el entorno familiar resulta trascendental para ello, siendo así que el área social desempeña una labor sustancial al abordar la problemática familiar, para lo cual interviene en el ámbito personal de la población penitenciaria, y propicia una cultura de paz, a través de actividades que promueven el respeto por los derechos humanos, entre otras acciones propias de su función.

En ese orden de ideas, es necesario precisar que la resocialización en el momento de la ejecución de la pena concibe tres finalidades constitucionales como es la reeducación de la persona condenada, su rehabilitación y reincorporación a la sociedad.

Así, nuestra intervención defensorial, como ya se ha señalado, se ha enfocado en el entorno familiar de la población penitenciaria, al resaltar que no solo se busca rehabilitar a la persona que cumple una condena de privación de libertad, sino que también se debe prevenir que las conductas antijurídicas sean un patrón para sus hijos e hijas; por lo que, se busca verificar que el servicio de asistencia social se brinde adecuadamente, tanto a los internos e internas, así como a las víctimas del delito y a los familiares inmediatos de ambos, conforme se encuentra previsto en el Código de Ejecución Penal.

Por otro lado, es menester indicar que nuestra Constitución Política del Estado reconoce, como una garantía de la función jurisdiccional, el derecho de los reclusos de ocupar establecimientos penitenciarios adecuados, el cual se encuentra ligado íntimamente con el concepto de dignidad, lo que significa que, si bien debe cumplirse la sanción penal de privación de libertad, ello no implica que adicionalmente deba ser castigado con ambientes inhabitables o tratos degradantes que afecten la dignidad del penado.

En esa línea, la supervisión realizada también se ha enfocado en las condiciones de habitabilidad en las que se encuentran los establecimientos penitenciarios y en la calidad de los servicios que brinda la autoridad penitenciaria que se encarga del tratamiento de los reclusos. Y es que, las condiciones en las que se brinda dicho tratamiento penitenciario resultan relevantes para su eficacia, siendo así que nuestra labor como institución defensora de los derechos humanos, además de enfocarse en el respeto por la dignidad de las personas privadas de libertad, también busca que no se repitan estas conductas, al velar por la seguridad ciudadana de manera global.

Llama la atención que el presupuesto público destinado a las instituciones que conforman el sistema de justicia penal, como el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior y Policía Nacional de Perú, se ha incrementado en los últimos años; sin embargo, los indicadores de criminalidad, como la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad, no se han reducido, por el contrario, han tenido un incremento. Esto revela que el Estado tiene un enorme desafío y debe fortalecer sus acciones en la lucha contra la delincuencia común y organizada, a través de un uso eficiente de los recursos públicos.

La multidimensionalidad del trabajo en penales por parte de la Defensoría del Pueblo y conscientes de que el correcto desarrollo y funcionamiento del sistema penitenciario impacta no solo en las vidas de los internos y en sus familias sino en la sociedad en su conjunto, es deseo de la Defensoría del Pueblo que estas páginas sean de especial utilidad para la mejora del sistema penitenciario y de la realidad penitenciaria, así como para el diseño y ejecución de políticas públicas que abonen en la mejora de la seguridad ciudadana en el país.

Finalmente, agradecemos el apoyo brindado por el personal de la Defensoría del Pueblo y por innumerables entidades estatales que coadyuvaron para la consecución del objetivo de supervisar todos los establecimientos penitenciarios y, especialmente, al Instituto Nacional Penitenciario – INPE por las facilidades brindadas y la fluidez de las coordinaciones necesarias para alcanzar el objetivo.

CAPÍTULO I

Competencia, objetivos y metodología

REPÚBLICA DEL PERÚ
Defensoría del Pueblo

1.1. Competencia

La supervisión nacional de las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios en el Perú se realizó en el marco de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo previstas en el artículo 162° de la Constitución Política del Perú[1] y en el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo[2]. Este marco legal atribuye a la Defensoría del Pueblo la competencia para garantizar los derechos constitucionales y fundamentales de todas las personas, incluye a aquellas que se encuentran privadas de libertad. Además, le asignan la responsabilidad de verificar que la administración estatal cumpla con sus obligaciones y proporcione servicios públicos adecuados a la ciudadanía.

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional de la Defensoría del Pueblo para el período 2020-2027, su misión consiste en defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado.

La Defensoría cuenta desde el año de su fundación (1996), con un órgano de línea dedicado a atender la problemática de las personas que se encuentran recluidas en los establecimientos penitenciarios del país. Actualmente es el Programa para las Personas Privadas de la Libertad, el cual se encuentra adscrito a la Adjuntía para la Seguridad Ciudadana, Seguridad Nacional y la Lucha contra las Drogas, quien tiene a su cargo la responsabilidad de realizar supervisiones permanentes a los establecimientos penitenciarios en todo el país[3], en estrecha colaboración con las 40 oficinas y módulos defensoriales a nivel nacional, ello nos permite conocer los desafíos presentes en el sistema carcelario y las deficiencias en la administración de justicia.

Desde entonces, estas acciones han sido cruciales para garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de la población penitenciaria. La importancia de estas supervisiones radica en la necesidad de coadyuvar con el diseño, formulación, seguimiento y ejecución de las políticas públicas.

A pesar de que los establecimientos penitenciarios albergan a un grupo vulnerable, como son las personas privadas de la libertad, es importante reconocer que existen otros grupos de especial protección y problemáticas que requieren un enfoque intersectorial. Entre estos grupos vulnerables podemos identificar a la población LGTBI, niñas y niños de 0 a 3 años, personas con discapacidad, adultos mayores, extranjeros, entre otros, cuyos derechos también deben ser protegidos. Por lo tanto, es fundamental adoptar estrategias que aborden de manera integral las diversas formas de vulnerabilidad y promover una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

Consideramos fundamental que el Estado cumpla con su obligación de proteger, resguardar y auxiliar a la población, implemente políticas públicas y estrategias efectivas para abordar tanto la criminalidad común como la organizada. Estas políticas deben ser preventivas, represivas y orientadas hacia la reparación a las víctimas, siempre con un enfoque centrado en los derechos humanos. Al profundizar en el estudio de la problemática penitenciaria, podemos identificar áreas de acción que nos permitan formular recomendaciones dirigidas a las autoridades pertinentes.

Es importante destacar que nuestro trabajo se lleva a cabo en el marco de la aplicación de diversos instrumentos internacionales, tales como las "Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos - ONU", los "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas - OEA", así como las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento y Medidas no privativas de libertad para las Mujeres Delincuentes, entre otros. Estos instrumentos proporcionan un marco de referencia sólido que guía nuestras acciones y recomendaciones en el ámbito penitenciario.

---

1 **Artículo 162.-** Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

2 **Artículo 1.-** A la Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos.

3 Artículo 121° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo.

1.2. Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Identificar las diversas problemáticas en las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad, con un enfoque de protección de derechos fundamentales.

1.2.2. Objetivos específicos

- Evaluar las condiciones de habitabilidad en los establecimientos penitenciarios, incluyendo el nivel de hacinamiento y el acceso a la salud mediante atenciones en salud física y mental.
- Verificar la capacidad del servicio de asistencia social que se brinda a los internos e internas, a las víctimas de delitos y a los familiares inmediatos de ambos.
- Identificar la oferta de trabajo y educación con el objetivo de promover la reinserción social y la reducción de la reincidencia delictiva.
- Identificar necesidades específicas de grupos vulnerables dentro de la población penitenciaria, tales como mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, extranjeros, comunidad LGTBI, entre otros; y proponer medidas para garantizar su protección y atención adecuada.

1.3. Metodología

Se aplicó una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa), lo cual permitió realizar un diagnóstico de la situación actual que atraviesan las personas privadas de libertad y los establecimientos penitenciarios en el territorio nacional.

El proceso de recopilación de información se dividió en tres etapas. La primera fase abarcó el diseño metodológico y la planificación del cronograma para la implementación del trabajo de campo. En la segunda fase, se llevó a cabo el análisis del marco normativo y teórico, la creación y validación de los instrumentos de recojo de datos, la realización del trabajo de campo y la sistematización de la información obtenida. Por último, la tercera etapa comprendió el análisis de los resultados a la luz del marco conceptual y normativo establecido.

ILUSTRACIÓN N° 1: SUPERVISIÓN A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

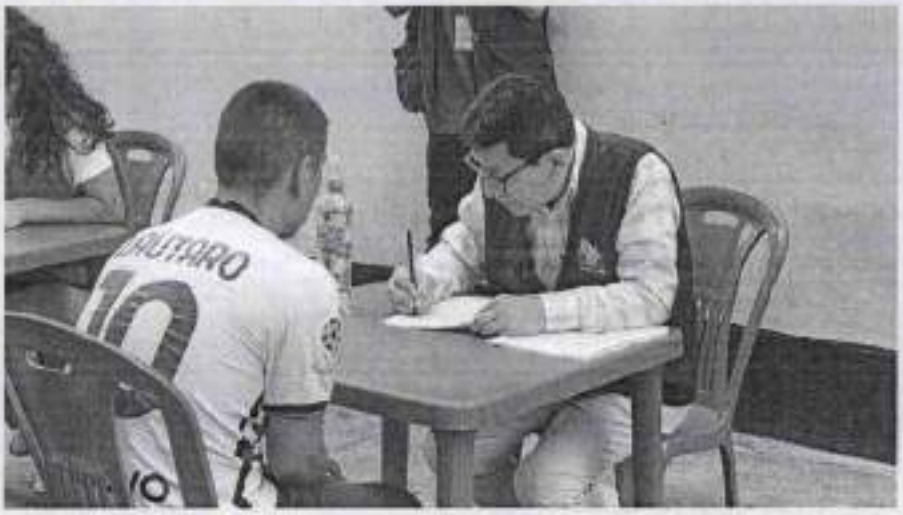


Fuente: Defensoría del Pueblo

Con relación a los instrumentos de recojo de información, se aplicó una ficha de supervisión para entrevistar a internas e internos, la cual contenía preguntas cerradas sujetas a medición cuantitativa, así como preguntas

abiertas que permitieron un análisis cualitativo. Esta ficha se aplicó en los 68 establecimientos penitenciarios (13 de ellos, con población exclusivamente femenina, 27 con población masculina y 28 establecimientos penitenciarios mixtos) a nivel nacional, en el periodo de agosto a diciembre de 2023.

ILUSTRACIÓN N° 2: SUPERVISIÓN A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS



Fuente: Defensoría del Pueblo

El recojo de información estuvo a cargo de las oficinas y módulos defensoriales, quienes realizaron las entrevistas a internas e internos con el apoyo de trabajadores de otras entidades públicas a nivel nacional[4]. Además de las entrevistas individuales, se llevaron a cabo otras actividades complementarias, como la revisión de documentos institucionales, reuniones de coordinación con funcionarias y funcionarios, así como pedidos de información al Instituto Nacional Penitenciario, entre otros.

ILUSTRACIÓN N° 3: SUPERVISIÓN A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS



Fuente: Defensoría del Pueblo

4 Trabajadores de municipalidades provinciales y distritales, Dirección de Defensa Pública, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, Subprefecturas provinciales y distritales, gobiernos regionales, entre otros.

En conjunto, esta metodología garantizó la recopilación de información precisa y fidedigna sobre la situación de las personas privadas de libertad, lo que permitirá formular recomendaciones concretas y efectivas para mejorar sus condiciones de vida y promover el respeto de sus derechos humanos.

ILUSTRACIÓN N° 4: SUPERVISIÓN A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS



Fuente: Defensoría del Pueblo

Conforme a los principios éticos de la investigación, se garantizó la participación voluntaria del personal entrevistado, para explicar los objetivos y alcances de la supervisión.

ILUSTRACIÓN N° 5: SUPERVISIÓN A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS



Fuente: Defensoría del Pueblo

CAPÍTULO II

Marco teórico y normativo

REPÚBLICA DEL PERÚ
Defensoría del Pueblo

2.1. Marco teórico

La situación de las personas privadas de libertad es objeto de interés para nuestra institución, es una de las líneas temáticas en las cuales hemos realizado diversos informes[5] que dan cuenta de la realidad penitenciaria y la necesidad de una reforma integral de este sistema.

El sistema penitenciario no solamente tiene como función el resguardar a las personas privadas de libertad, sino que también se encuentra a cargo del tratamiento penitenciario, este es un instrumento empleado para lograr la resocialización, reeducación y reinserción del interno a la sociedad.

Nuestro Código de Ejecución Penal señala que el tratamiento penitenciario consiste en la utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, entre otros, aplicados de manera individual o grupal, a fin de que se logre la reinserción social de las internas e internos.

Si tomamos en cuenta ello, el tratamiento es la acción que se encuentra dirigida a la modificación de la conducta de la persona privada de libertad en atención a sus características propias, ubicándolo en el régimen penitenciario más apropiado de acuerdo a su prognosis de readaptación.

La importancia de tener un tratamiento penitenciario adecuado para las personas condenadas a privación de libertad beneficia a toda la sociedad, en la medida que no solo se resocializa a una persona, sino que se puede prevenir que en su entorno más cercano se repitan conductas irregulares que conlleven, a largo plazo, a la comisión de un delito.

Es así que una adecuada resocialización puede significar un efecto dominó que mejore la seguridad ciudadana y, sobre todo, brinde oportunidades de desarrollarse laboralmente a quienes hayan cumplido su condena.

Ahora bien, pese a que se han producido cambios en algunos aspectos del sistema penitenciario, uno de los principales problemas que se advierte desde nuestra institución es el hacinamiento, el cual afecta la capacidad de atención de los servicios penitenciarios y genera una atención deficiente respecto de los programas de tratamiento penitenciario.

En atención a lo antes indicado, la Defensoría del Pueblo supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia recaída en el Expediente N° 05436-2014-PHC/ TC, de fecha 2020, emitida por el Tribunal Constitucional que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto del hacinamiento de los penales y las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura y servicios básicos a nivel nacional.

En efecto, el problema más crítico que afronta nuestro sistema penitenciario es el hacinamiento en la mayoría de penales[6]; lo cual, sumado al insuficiente presupuesto asignado al Instituto Nacional Penitenciario - INPE, impide que pueda superarse las condiciones precarias en que se encuentran los establecimientos penitenciarios, donde se alberga a más de noventa mil personas privadas de libertad, sin dejar de lado que en dichas instalaciones también se encuentran los trabajadores penitenciarios.

---

5 Informes elaborados por el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, sobre temática penitenciaria:
- Informe Defensorial N° 154-2011/DP, "El sistema penitenciario: componente clave de la seguridad y la política criminal. Problemas, retos y perspectivas".
- Serie Informes Defensoriales - Informe N° 157-2012/DP, "Sistema Penal Juvenil".
- Informe de Adjuntía N° 006-2013-DP/ADHPD, "Lineamientos para la implementación de las Reglas de Bangkok en el sistema penitenciario peruano".
- Informe de Adjuntía N° 006-2018-DP/ADHPD, "Retos del Sistema Penitenciario Peruano: Un diagnóstico de la realidad carcelaria de mujeres y varones".
- Informe de Adjuntía N° 003-2020-DP/ADHPD, "Supervisión al procedimiento de egreso de las hijas e hijos de internas de los establecimientos penitenciarios, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19".
- Informe de Adjuntía n.° 001-2022-DP/ADHPD, "Situación de las personas adultas mayores sometidas a restricciones de libertad".

6 Actualmente, de los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, 49 se encuentran con hacinamiento, esto es, el 72% de los penales; de acuerdo con el Reporte Estadístico de la plataforma virtual del Instituto Nacional Penitenciario. Disponible en: https://www.inpe.gob.pe/estad%C3%ADstica1.html

Por tanto, podemos sostener que el sistema penitenciario se encuentra en estado deficiente, por lo que el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y la escasez de recursos materiales y de capital humano afecta a toda la comunidad penitenciaria, sin distinguir entre varones y mujeres.

Ahora bien, doce establecimientos penitenciarios tienen más de 300% de sobrepoblación, lo cual hace insuficiente la cantidad de personal técnico del Instituto Nacional Penitenciario y de trabajadores del tratamiento penitenciario. Cabe señalar que, en cárceles donde no existe hacinamiento, la cantidad de personal penitenciario tampoco resulta proporcional para el total de la población penitenciaria; además de las condiciones degradantes en las que deben convivir las personas privadas de libertad.

TABLA N° 1: ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN CONDICIÓN DE HACINADOS A NIVEL NACIONAL

N	Establecimiento Penitenciario	Capacidad de Albergue (C)	Población Penitenciaria (P)	% Sobrepoblación (S=P-C)	% Sobrepoblación (%S)	Hacinamiento (%S≥20%)
	TOTALES	**30,639**	**86,324**	**55,685**	**182%**	**SI**
1	E.P. DE CALLAO	572	3,469	2,897	506%	SI
2	E.P. DE QUILLABAMBA	80	448	368	460%	SI
3	E.P. DE CHANCHAMAYO	120	651	531	443%	SI
4	E.P. DE ABANCAY	90	483	393	437%	SI
5	E.P. DE CAMANÁ	78	407	329	422%	SI
6	E.P. MIGUEL CASTRO CASTRO	1,142	5,761	4,619	404%	SI
7	E.P. DE HUANTA	42	204	162	386%	SI
8	E.P. DE HUANCAVELICA	60	287	227	378%	SI
9	E.P. DE JAEN	50	239	189	378%	SI
10	E.P. DE PUCALLPA	576	2,704	2,128	369%	SI
11	E.P. DE TACNA	222	972	750	338%	SI
12	E.P. DE AYACUCHO	644	2,658	2,014	313%	SI
13	E.P. DE LAMPA	44	166	122	277%	SI
14	E.P. DE RIO NEGRO	216	807	591	274%	SI
15	E.P. DE JULIACA	420	1,550	1,130	269%	SI
16	E.P. DE TRUJILLO	1,518	5,503	3,985	263%	SI
17	E.P. DE AREQUIPA	667	2,212	1,545	232%	SI
18	E.P. DE HUACHO	644	2,070	1,426	221%	SI
19	E.P. DE CHICLAYO	1,143	3,666	2,523	221%	SI
20	E.P. DE HUANCAYO	680	2,117	1,437	211%	SI
21	E.P. DE PIURA	1,370	4,228	2,858	209%	SI
22	E.P. DE LURIGANCHO	3,204	9,625	6,421	200%	SI
23	E.P. DE CAÑETE	1,024	3,023	1,999	195%	SI
24	E.P. DE HUARAL	1,029	2,887	1,858	181%	SI
25	E.P. DE MUJERES DE AREQUIPA	67	184	117	175%	SI

26	E.P. DE MUJERES DE TACNA	40	109	69	173%	SI
27	E.P. DE CHINCHA	1,152	3,120	1,968	171%	SI
28	E.P. DE BAGUA GRANDE	119	318	199	167%	SI
29	E.P. DE CHIMBOTE	1,144	3,012	1,868	163%	SI
30	E.P. DE ICA	1,924	4,719	2,795	145%	SI
31	E.P. DE SICUANI	96	235	139	145%	SI
32	E.P. DE HUÁNUCO	1,344	3,069	1,725	128%	SI
33	E.P. DE TARAPOTO	222	489	267	120%	SI
34	E.P. DE TUMBES	576	1,267	691	120%	SI
35	E.P. DE ANDAHUAYLAS	248	543	295	119%	SI
36	E.P. DE TARMA	48	97	49	102%	SI
37	E.P. DE PUERTO MALDONADO	590	1,186	596	101%	SI
38	E.P. DE HUARAZ	598	1,188	590	99%	SI
39	E.P. DE CHOTA	65	127	62	95%	SI
40	E.P. ANEXO DE MUJERES DE CHORRILLOS	288	562	274	95%	SI
41	E.P. DE CUSCO	1,616	2,972	1,356	84%	SI
42	E.P. DE MUJERES DE CHORRILLOS	450	782	332	74%	SI
43	E.P. DE MUJERES DE TRUJILLO	296	500	204	69%	SI
44	E.P. DE MOQUEGUA	178	300	122	69%	SI
45	E.P. DE LA OROYA	64	102	38	59%	SI
46	E.P. DE CAJAMARCA	1,512	2,198	686	45%	SI
47	E.P. DE MOYOBAMBA	675	920	245	36%	SI
48	E.P. DE ANCÓN I	1,620	2,098	478	30%	SI
49	E.P. DE PACASMAYO	72	90	18	25%	SI

Fuente: Unidad de Registro Penitenciario – noviembre 2023
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

Conforme a la tabla detallada de los 49 Establecimientos Penitenciarios considerados con hacinamiento, el Establecimiento Penitenciario del Callao es el más crítico, debido a que cuenta con 3469 internos, para una capacidad de albergue de 572 internos, representa un 506% del hacinamiento.

Ahora bien, la situación de los Establecimientos Penitenciarios de Quillabamba, Chanchamayo, Abancay, Camaná y Miguel Castro Castro, es claramente alarmante al superar el 400% en razón a la sobrepoblación, situación que al paso de los meses iría en aumento, pese a las medidas adoptadas por el estado para lograr el deshacinamiento penitenciario.

En ese contexto, resulta importante indicar lo señalado por el Instituto Nacional Penitenciario en su informe estadístico del mes de noviembre de 2023, que explica que *"La capacidad de albergue se refiere al aforo que tiene el Sistema Penitenciario para albergar a las personas privadas de libertad, se dice que hay sobrepoblación cuando se excede el aforo. Cuando la sobrepoblación excede o es igual al 20% de la capacidad de albergue, se*

denomina sobrepoblación crítica, lo que el Comité Europeo para los Problemas Criminales ha entendido como hacinamiento".

El hacinamiento no solo afecta las condiciones de albergue de los internos y el óptimo desarrollo de sus actividades de tratamiento penitenciario, sino que propicia un ambiente insalubre e inseguro para los grupos de especial protección, como son mujeres privadas de libertad, mujeres gestantes, los niños y niñas que acompañan a sus madres privadas de libertad, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población extranjera, población indígena, y personas LGTBI; toda vez que se coloca en mayor riesgo su salud física y psicológica.

Cabe resaltar que los internos de grupos de especial protección tienen un nivel de vulnerabilidad más crítico, al tener que convivir con sus potenciales victimarios y no tener algún mecanismo realmente efectivo que permita proteger su integridad física y psicológica. Al respecto, se encuentra prohibido realizar cualquier acto de discriminación[7]. Los crímenes de odio continúan fuera y dentro de los establecimientos penitenciarios como parte de la estadística criminal.

Respecto al acceso a la salud de la población penitenciaria debemos indicar que este es un derecho protegido constitucionalmente y, en virtud de ello, cada establecimiento penitenciario cuenta con un servicio médico básico a cargo de profesionales de la salud, conforme se establece en el Capítulo Cuarto "Salud", del Título III "Tratamiento Penitenciario", del Código de Ejecución Penal.

La normativa precisa la atención especializada, en caso resulte necesario; empero, es sabido que la escasa contratación de trabajadores en establecimientos penitenciarios impide que se pueda contar con un mínimo de personal de salud especializado, situación que afecta especialmente a internos adultos mayores y mujeres, precisamente porque requieren atención médica especializada y al no contar con ello dentro de los establecimientos penitenciarios, deben esperar la aprobación de juntas médicas para acceder a la especialidad correspondiente.

En cuanto a la salud mental, si bien se ha implementado un equipo especializado en dicha rama, que cuenta con aproximadamente 15 profesionales entre médicos psiquiatras, enfermeros y técnicos con especializaciones en salud mental; tampoco se abastece a toda la población penitenciaria que, en algunas cárceles, supera los nueve mil internos, como el E.P. Lurigancho, de modo que se necesitaría triplicar esfuerzos para brindar una adecuada atención en salud mental a toda la población penitenciaria.

Las demás áreas de tratamiento penitenciario, no cuentan con el recurso humano suficiente, adicional, las bajas escalas remunerativas no son un aliciente para el óptimo desarrollo de sus actividades; por lo que el personal de seguridad penitenciaria debe laborar y albergarse en condiciones que no solo afectan su salud física, sino que merman su estado emocional. Así, el personal de educación, trabajo, psicología y administrativos en general, si bien no pernoctan en los establecimientos penitenciarios, deben trasladarse a cárceles que, en muchos casos, se ubican en la periferia de la ciudad, o incluso más lejos, lo cual expone su integridad física a diario.

A propósito de ello, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario, aprobado por Decreto Supremo n.° 009-2007-JUS, el personal penitenciario se encuentra organizado jerárquicamente en ocho Oficinas Regionales a nivel nacional, las cuales son: Chiclayo, Lima, Arequipa, Huancayo, Huánuco, Cusco, Tarapoto, Puno y Lima su Sede Central. A su vez, está conformado por personal administrativo, personal de tratamiento y personal de seguridad, quienes cumplen funciones de seguridad, en un régimen de 24 horas de labores por 48 horas de franco, distribuidos en tres turnos.

Sobre ello, es importante señalar que la labor de la seguridad penitenciaria no se limita a la seguridad perimetral de las prisiones, sino que es responsable también de garantizar la integridad física y mental de los internos e internas. El servidor penitenciario, por las propias funciones que cumple, necesita laborar en óptimas condiciones y, a la vez, gozar de estabilidad económica, para lo cual es necesario no solo mejorar las condiciones carcelarias, sino también las condiciones laborales del personal penitenciario.

7 Numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Desde el Informe de Adjuntía n.° 006-2018-DP/ADHPD[8], realizado por el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, identificamos que en los establecimientos penitenciarios de Lima (como Ancón I, Cañete y "Miguel Castro Castro") existe, por cada agente de seguridad un aproximado de 80 internos. Asimismo, en el Penal de Ancón I, a pesar de ser de Régimen Cerrado Especial, por cada agente, se tiene un aproximado de 86 internos, cantidad que nos genera preocupación, debido a la seguridad penitenciaria y al trabajo que realizan los agentes penitenciarios.

2.2. Marco normativo

MARCO NORMATIVO CONVENCIONAL - INTERNACIONAL

2.2.1. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos

También conocidas como Reglas Mandela, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos son preceptos normativos fundamentados en conceptos y elementos esenciales de los sistemas carcelarios contemporáneos más adecuados. Así, se cuenta con principios y prácticas idóneas en lo que respecta al tratamiento de los reclusos y la administración penitenciaria.

En virtud de dichas reglas, se reconoce y promueve el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y se enfatiza su vulnerabilidad, dado que la separación de una persona del mundo exterior afecta su estado emocional, en tanto se le despoja de su derecho a la autodeterminación de libertad de desplazamiento. Ergo, se ha establecido que el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.

En ese sentido, las Reglas Mandela señalan que el régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano.

Precisamente, se hace mención a la infraestructura de los establecimientos penitenciarios, en cuanto a las condiciones que deberían encontrarse los pabellones, celdas y demás ambientes donde permanecen las internas e internos durante el día, como los talleres de educación y trabajo, el patio, los servicios higiénicos, entre otros.

Sobre ello, las Reglas Mandela resaltan que el hacinamiento no exime de la responsabilidad que tiene la administración penitenciaria de garantizar a todos los reclusos un ambiente apropiado para descansar, asearse e interactuar con la comunidad penitenciaria, por lo que debe contar con el suficiente espacio para desplazarse, además de una adecuada ventilación, iluminación y limpieza constante en cada área de los establecimientos penitenciarios.

Respecto al derecho a la salud, se ha indicado en dichas reglas que las reclusas y los reclusos deberán recibir atención médica con los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles para la comunidad en el exterior, lo que implica prevenir cualquier discriminación por su condición jurídica. De modo que, los casos de especial atención, como personas con enfermedades crónicas o terminales, o aquellas con especial vulnerabilidad, deben ser atendidos con enfoque diferenciado, a fin de que puedan ser externados a un centro de salud para la atención especializada que requieran, con la confidencialidad que corresponda en cada caso clínico.

En lo referente a la disciplina intramuros, se pone especial atención en la prevención de actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, principalmente en los casos de poblaciones vulnerables, como pacientes de salud mental, o con discapacidades físicas o mentales. Para ello, se prevé un examen sanitario en razón de las sanciones que se impongan, a fin de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad.

La utilización de técnicas de control deberá realizarse de manera gradual y proporcional, a fin de evitar restricciones arbitrarias y abusivas ante inconductas que pueden ser asumidas sin afectar su integridad y dignidad. En tal

8 "Retos del Sistema Penitenciario Peruano: Un diagnóstico de la realidad carcelaria de las mujeres y varones"

sentido, el empleo de instrumentos de coerción física debe ser relegado como última opción ante eventos que ameriten una severa intervención, para garantizar la seguridad de la comunidad penitenciaria, entiéndase, los servidores penitenciarios y las personas privadas de libertad que cometan la infracción, ya que se debe evitar que lesione a los demás o a sí mismo.

A propósito de ello, debe considerarse también que puede realizarse inspecciones dentro de los establecimientos penitenciarios, las cuales buscan verificar que los procedimientos intramuros se ajusten a la normativa vigente, con la finalidad que se cumplan los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales, por lo que se debe proteger en todo momento los derechos de las personas privadas de libertad. Es ahí donde nuestra labor defensorial cobra importancia, dado que como institución es nuestro deber realizar visitas ordinarias, así como también supervisiones inopinadas a fin de verificar la prestación de un idóneo servicio penitenciario.

Asimismo, la privación de la libertad no significa en ningún extremo la incomunicación del interno, cuya única excepción será cuando medie una sanción disciplinaria (que siempre será temporal). Por tanto, las internas e internos conservan su derecho de mantenerse comunicados, no solo dentro de su comunidad intramuros, sino también con el exterior, ya sea mediante llamadas telefónicas, videollamadas, cartas o visitas dentro del establecimiento penitenciario.

De esta manera, se garantiza que la persona privada de libertad se mantenga conectada con su entorno intramuros y extramuros, principalmente con su familia, que cumple un rol fundamental en la rehabilitación del interno. Ello incluye informar a la misma sobre su encarcelamiento, traslado o cualquier enfermedad o lesión grave, por lo que corresponde permitirle los medios para ejercer dicho derecho.

Finalmente, al ocurrir el fallecimiento de algún interno o interna, la máxima autoridad del establecimiento penitenciario estará en la obligación de comunicar a la autoridad competente para que realice la investigación del fenecimiento; que, de acuerdo a nuestro derecho interno, es el Ministerio Público quien debe apersonarse y levantar las actas sobre la investigación que corresponda iniciar, además del levantamiento del cadáver, en tanto corresponda. Esto no implica necesariamente la responsabilidad del establecimiento penitenciario sobre el fallecimiento de la interna o interno, sino que responde a un trámite regular exigido legalmente a fin de determinar de manera oficial si amerita o no la acusación fiscal y el juzgamiento debido.

Las Reglas Mandela desarrollan a detalle todos los aspectos de la vida dentro de un establecimiento penitenciario, con la previsión de situaciones críticas que deben ser abordadas siempre desde el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, quienes solo pierden su libertad personal en cuanto a la autodeterminación de desplazamiento, más no otros derechos conexos, sobre todo aquellos reconocidos en los textos normativos de rango constitucional.

2.2.2. Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas

Todos los principios y buenas prácticas que se exponen en dicho instrumento internacional se pueden invocar y aplicar conforme el caso concreto, esto es, si se trata de la privación de libertad por la comisión de delitos o infracciones a la ley, o por razones humanitarias y de protección.

Al igual que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y los Principios y Buenas Prácticas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como base el trato humano de manera irrestricta para toda situación en que se encuentre la persona, especialmente cuando están privados de libertad. Desde ahí, se hace énfasis en la dignidad, integridad física y mental, igualdad y no discriminación, el trato diferenciado en favor de los grupos de especial protección, y los derechos a los servicios básicos, destacándose la salud, educación, trabajo, albergue, vestimenta, entre otros.

En el ítem "Principios relativos a los sistemas de privación de libertad", se desarrollan seis principios que versan sobre:

Principio XX: Personal de los lugares de privación de libertad.

Principio XXI: Registros corporales, inspección de instalaciones y otras medidas; Los registros intrusivos vaginales y anales serán prohibidos por la ley.

Principio XXII: Régimen disciplinario.

Principio XXIII: Medidas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia.

Principio XXIV: Inspecciones institucionales.

Principio XXV: Interpretación

En el principio XX se hace referencia, principalmente, a la integridad ética y moral que debe caracterizar al personal penitenciario, además de una sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones de género, capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido de responsabilidad. En ese sentido, se indica que las cárceles que albergan mujeres deben contar con personal penitenciario femenino para el área de seguridad interna, en virtud del enfoque de género.

Para los registros corporales, el principio XXI exige que toda revisión se realice en condiciones sanitarias adecuadas, por personal calificado del mismo sexo, siempre prevale la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales, por lo se debe utilizar medios alternativos con equipos tecnológicos u otros métodos apropiados. Esto, suele resultar complejo en nuestra realidad penitenciaria, toda vez que los recursos tecnológicos con los que cuenta el Instituto Nacional Penitenciario son escasos y, además, conforme se ha podido advertir en las visitas ordinarias, no suelen estar operativos, por lo que corresponde agenciarse de métodos manuales que ya han generado discrepancias con el respeto a la integridad física y psicológica de los internos e internas, así como también de sus visitantes.

Sin embargo, no debe perderse de vista que no solo se afecta a nivel personal a los reclusos y sus visitantes; sino que, además, limitarse a usar aparatos obsoletos o inoperativos, permite el ingreso de objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, habida cuenta que la deficiencia de un sistema de registro y revisión deja la puerta abierta para el incumplimiento de normas dentro de las cárceles y también durante la visita familiar.
Con relación al régimen disciplinario que se señala en el principio XXII, nuestra legislación tiene disposiciones plenamente concordantes con este principio, en tanto y en cuanto, cada establecimiento penitenciario cuenta con un área de meditación, en la cual se ubican a aquellos internos e internas que incurren en inconducta, siempre que no sea posible corregir la misma mediante sanciones leves.

Además, se protege de manera especial a las madres, sean gestantes o que vivan con sus hijas e hijas en cárceles; y, evidentemente, se restringe de manera absoluta el aislamiento de los menores que acompañan a sus madres privadas de libertad. El fundamento es que, tanto las gestantes como las internas que viven con sus hijos tienen bajo su cuidado a un sujeto de derecho de protección prioritaria; entonces, aislarlas implicaría una afectación a los menores o al concebido, dado lo que implica permanecer en una celda de meditación.

Bajo esa misma lógica, se prevé un tratamiento especial a las y los reclusos con alguna discapacidad mental. En estos casos, la medida de aislamiento debe ser autorizada por el médico competente, siguiendo los procedimientos establecidos para cada tipo de caso clínico, por lo que debe permanecer bajo la supervisión constante del personal de salud mientras permanezca en el área de meditación.

Las medidas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia desarrolladas en el principio XXIII consisten en prevenir todo tipo de violencia dentro de la comunidad penitenciaria, entiéndase, entre las y los reclusos, o entre éstos y el personal penitenciario. Para ello, se plantean las siguientes acciones:

- Separar adecuadamente las diferentes categorías de personas, conforme a los criterios establecidos en el presente documento;
- Asegurar la capacitación y formación continua y apropiada del personal;
- Incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior, y establecer patrones de vigilancia permanente al interior de los establecimientos;
- Evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u objetos prohibidos por la ley, a través de registros e inspecciones periódicas, y la utilización de medios tecnológicos u otros

métodos apropiados, incluye la requisa al propio personal;
- Establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis o emergencias;
- Promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos internos;
- Evitar y combatir todo tipo de abusos de autoridad y actos de corrupción; y
- Erradicar la impunidad, investigando y sancionando todo tipo de hechos de violencia y de corrupción, conforme a la ley.

Tales medidas están debidamente reguladas en nuestra legislación especial sobre el sistema penitenciario y, precisamente, son aplicadas cotidianamente debido a los constantes reportes de indicios de ingreso de objetos y sustancias prohibidas y, sobre todo, la constante revisión de la prognosis del recluso, a fin de ubicarlo convenientemente para una rehabilitación idónea que no solo beneficie su progresión, sino que también evite afectar la situación de los demás internos e internas.

Asimismo, bajo el mismo criterio de las Reglas Mandela, se estipula que el uso de la fuerza será excepcional y proporcional, toda vez que el personal penitenciario debe encontrarse plenamente capacitado para poder emplear distintos mecanismos para controlar situaciones de indisciplina, y en todo escenario respeta los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

En el principio XXIV se desarrolla lo relativo a las inspecciones y visitas que podrán realizar las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales con la finalidad de verificar el respeto de la dignidad y de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de libertad.

Esto es, que se establece la posibilidad de que organizaciones humanitarias realicen visitas inopinadas para velar por el trato adecuado a las y los reclusos, así como espacios idóneos para la convivencia en privación de libertad.

Por último, tenemos que se deberá interpretar extensivamente toda norma relativa a los derechos humanos, de forma que se apliquen las cláusulas más favorables a las personas privadas de libertad; conforme el principio XXV se enfoca en la prevalencia de protección del recluso frente a cualquier duda en la interpretación normativa. Esto se relaciona estrechamente con el principio de presunción de inocencia, componente esencial de los sistemas judiciales democráticos y reconocido en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como también se vincula con el "in dubio pro reo", que complementa a la presunción de inocencia, estable que en caso de duda razonable, se debe optar por lo que resulte más favorable para el acusado.

2.2.3. Estándares internacionales sobre el aislamiento penitenciario

El Comité de Derechos Humanos, en su observación general N.° 20, señala que el confinamiento solitario prolongado de la persona detenida o recluida puede equivaler a actos prohibidos por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[9].

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

> *Artículo 7*
> *Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.*

Por su parte, el Comité contra la Tortura reconoció los efectos nocivos, tanto físicos como mentales, del régimen de aislamiento prolongado, y expresó su preocupación acerca de su uso, incluso como medida preventiva y también como medida disciplinaria. Asimismo, recomendó la abrogación de la reclusión en régimen de aislamiento, o que cuando menos esta medida esté regulada estricta y expresamente por ley y se aplique bajo supervisión judicial, cuyo uso solo se presenta en circunstancias excepcionales (A/63/175, párrafo 80).

El Subcomité para la prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes recordó que el aislamiento prolongado puede constituir un acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante y recomendó que el uso de aislamiento como sanción disciplinaria a las personas privadas de libertad sea

9 Comité de Derechos Humanos, 44 periodos de sesiones, Observación General N.° 20, párrafo 6, 10 de marzo de 1992.

severamente restringido. Además, también señalan que no se utiliza contra menores ni contra personas con discapacidad mental (CAT/OP/PRY/1, párrafo 185).

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el nivel de aislamiento impuesto a una persona es esencial para determinar si un caso de aislamiento físico y mental constituye tortura o un trato o pena cruel, inhumano o degradante. La prohibición absoluta y prolongada de visitas procedentes del exterior de la prisión causa un sufrimiento que excede claramente el nivel inevitable inherente a la detención. Sin embargo, cuando la persona puede recibir visitas y escribir cartas, tener acceso a la televisión, libros y periódicos, y tener contacto regular con el personal de la cárcel o la visita de religiosos o de abogados de manera periódica, el aislamiento es "parcial" y no se alcanza el umbral mínimo de gravedad, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera necesario para constatar una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el Tribunal ha destacado que el régimen de aislamiento, incluso cuando es solo parcial, no se puede imponer a un recluso de manera indefinida (A/66/268, párrafo 36).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "Corte IDH") ha sostenido que el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido del respeto debido a la dignidad inherente al ser humano[10].

Corte IDH también se ha pronunciado sobre las condiciones físicas de la detención y ha sostenido que *"el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural... [y] las restricciones al régimen de visitas ... constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes"*[11].

Corte IDH también reconoció que el régimen de aislamiento causa un sufrimiento psicológico y físico que puede contribuir a un trato constitutivo de tortura. En al menos un caso, la Corte ha identificado las condiciones físicas del régimen de aislamiento, que incluye el confinamiento en "una celda reducida, sin ventilación ni luz natural" y un régimen penitenciario en el que el detenido debía permanecer en la celda "23 horas y media... [y] solo podía recibir una vez al mes la visita de sus familiares directos, sin contacto físico entre él y la visita", y llegó a la conclusión de que, cuando a ello se añaden otras formas de agresión física y psicológica, puede tratarse de un caso de tortura física y psicológica (/66/268, párrafo 38).

MARCO NORMATIVO NACIONAL

2.2.4. Constitución y principios del régimen penitenciario

Es importante tener presente que nuestro ordenamiento jurídico desarrolla en su norma constitucional el principio del régimen penitenciario, cuyo objetivo es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Este concepto está intrínsecamente ligado al respeto de la dignidad. Si bien la persona que ha incurrido en algún ilícito debe ser sancionada, ello no implica que el trato que se le brinde en el establecimiento penitenciario sea un castigo adicional.

Las Naciones Unidas siempre han promovido las "Reglas mínimas" para el tratamiento de reclusos, donde se estipula que las personas privadas de la libertad deben contar con locales separados según categorías, higiene personal, ropas, cama, alimentación, servicios médicos, un estándar de igualdad de trato y la proscripción de todo acto de discriminación.

Por ello, siempre debe ser desarrollado en función al Código Penal, que habla sobre la finalidad de la pena como preventiva, protectora y resocializadora. Debemos recordar que, en nuestro sistema normativo, la pena cuenta con un carácter humanista que tiene como finalidad resocializar a la persona privada de la libertad para que pueda retornar a la sociedad en condiciones adecuadas para cumplir con las normas establecidas.

En un estado democrático como el nuestro, donde el respeto de la dignidad humana es el fin supremo del estado y la sociedad, según el artículo 1° de nuestra constitución, no se puede concebir un sistema penitenciario

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 156.

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 58.

únicamente como sanción al infractor y de reparto del dolor. Más bien, se debe enfocar sobre un eje que sustente el sistema material de valores de nuestro ordenamiento jurídico, de tal manera que la ejecución de las penas sea acorde a ellas.

2.2.5. Código de Ejecución Penal y su Reglamento

En nuestro ordenamiento jurídico se establece como objeto de la ejecución penal la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad; por tanto la pena privativa de libertad debe estar exenta de tortura o trato inhumano o humillante y de cualquier otro acto o procedimiento que atente contra la dignidad del interno (Principio de Humanidad).

Precisamente, el principio de humanidad en cárceles se aplica a través de diversas prácticas y normas que buscan garantizar que las personas privadas de libertad sean tratadas con dignidad y respeto, y que sus derechos humanos fundamentales sean protegidos.

Es así que los establecimientos penitenciarios deben proporcionar condiciones de vida que respeten la dignidad humana, lo cual incluye el acceso a una alimentación adecuada, agua potable, atención médica, higiene y espacios suficientes donde no exista hacinamiento; además, las autoridades penitenciarias deben prevenir, investigar y sancionar cualquier abuso o maltrato hacia los reclusos.

En ese sentido, el Código de Ejecución Penal desarrolla todos los aspectos relacionados al cumplimiento de mandato judicial de pena privativa de libertad, pena restrictiva de libertad y pena limitativa de derechos; para lo cual, se establecen los principios y derechos que protegen la integridad del interno e interna.

De acuerdo con esta normativa, las cárceles ofrecen programas de educación, formación profesional y actividades recreativas que ayudan a los reclusos y reclusas a reintegrarse a la sociedad una vez cumplida su condena, lo cual incluye acceso a oportunidades de trabajo y desarrollo profesional.

Asimismo, se establecen los parámetros correspondientes al régimen y tratamiento penitenciario, los estándares que deben cumplir los establecimientos penitenciarios, entre otros. Al respecto, es importante destacar que nuestra legislación penitenciaria se ajusta al marco normativo internacional en la materia; sin perjuicio de que, debido a diversos factores adversos, nuestra realidad nos muestra un sistema penitenciario con muchas falencias que deben ser atendidas con prontitud a nivel de presupuesto y su ejecución.

Ahora bien, en el Reglamento se detallan los temas indicados en el Código de Ejecución Penal, especifican procedimientos, plazos, requisitos, excepciones, y todas las particularidades que se necesitan saber para el desarrollo de la convivencia penitenciaria con su respectivo tratamiento.

En efecto, la tramitación de beneficios penitenciarios es uno de los temas más extensos que atiende tanto el Código de Ejecución Penal como su Reglamento, dedica seis capítulos para especificar cada supuesto y condiciones exigidas para poder acceder a algún beneficio penitenciario. Y es que, en la práctica, la mayor cantidad de consultas que recibe la Defensoría del Pueblo en lo que respecta a la vida penitenciaria corresponde a la tramitación de beneficios penitenciarios (es decir, excluye problemas de contravención de derechos que se califican como quejas).

Por ende, es una gran motivación para las y los reclusos conocer sus opciones y posibilidades para acceder a algún beneficio penitenciario, ya que con ello se comprometen a presentar un mejor comportamiento, estudiar y trabajar, que es parte esencial del tratamiento penitenciario.

2.2.6. Jurisprudencia constitucional

En mayo de 2020, el Tribunal Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario, debido a que el hacinamiento en cárceles afecta gravemente la calidad de vida, al no contar con una debida infraestructura y servicios básicos; tal como señala en el expediente N° 05436-2014-PHC/TC, donde analizó la situación de las personas privadas de libertad, al resolver que, si en el año 2025 no se consigue superar dicho estado de cosas inconstitucional, se deberá suspender los nuevos ingresos a los

establecimientos penitenciarios hacinados o, incluso, el cierre temporal de los establecimientos penitenciarios hacinados, traslada a los internos a otros establecimientos penitenciarios sin hacinamiento, entre otras medidas, según se trate del nivel de hacinamiento, y hasta que se garanticen las condiciones indispensables de reclusión. Ello implica que se inicie con el cierre de seis establecimientos penitenciarios que han alcanzado los mayores niveles de hacinamiento, los cuales actualmente[12] son E.P. Callao (506%), E.P. Quillabamba (455%), E.P. Chanchamayo (437%), E.P. Abancay (434%), E.P. Camaná (420%) y E.P. Miguel Castro Castro (396%).

Basándose en estándares internacionales de derechos humanos, este órgano estableció que las personas privadas de su libertad deben ser tratadas dignamente, asimismo evidenció que las condiciones penitenciarias como el hacinamiento pueden menoscabar el ejercicio de varios de sus derechos y, en ese sentido, llegar a constituir incluso tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay[13], ha señalado que el Estado cumple la función de garante frente a las personas privadas de libertad.

> *"152. Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna."*

Por otro lado, respecto a las condiciones carcelarias, la Corte IDH[14]

> *"60. En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos."*

En efecto, nuestra institución realiza supervisiones a los establecimientos penitenciarios de todo el Perú, tanto de manera ordinaria para atender casos específicos que reportan las internas y los internos, como supervisiones inopinadas de manera extraordinaria a fin de verificar las condiciones carcelarias en las que se encuentran las personas privadas de libertad.

En virtud de ello, realizamos recomendaciones al Instituto Nacional Penitenciario, al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Migraciones, entre otras, respecto a las medidas para paliar el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios; dado que el hacinamiento es un gran obstáculo para la resocialización.

Y es que la sobrepoblación penitenciaria hace que el personal que se encarga del tratamiento penitenciario sea insuficiente para el universo de personas privadas de libertad, si se tienen en cuenta que, incluso si no hubiere hacinamiento, el personal penitenciario no se da abasto para atender a toda la población penitenciaria.

Debido a la falta de proporcionalidad entre el personal penitenciario y las personas privadas de libertad, el tratamiento no surte el efecto de resocialización que se busca, sumado al hecho de que se vulneran los derechos de las internas e internos, así como de los trabajadores penitenciarios; en tanto y en cuanto, el personal penitenciario asume cada vez más carga y se presentan mayores conflictos en razón a la precariedad en la que deben laborar y convivir día a día.

---

12 A la fecha de emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional, las cárceles más hacinadas eran Chanchamayo (553 %), Jaén (522 %), Callao (471 %), Camaná (453 %), Abancay (398 %) y Miguel Castro Castro (375 %), y se precisó que debía iniciarse con el cierre de dichos establecimientos penitenciarios o de aquellos seis que tengan los mayores niveles de hacinamiento, al vencimiento del plazo en el año 2025.

13 Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, pág. 94. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf

14 Corte IDH, Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995, pág. 15. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf

Por consiguiente, nuestra posición institucional es clara frente a esta problemática del sistema penitenciario, para la Defensoría del Pueblo es sustancial que se aplique con mayor cuidado la pena privativa de libertad efectiva, y se opte por sanciones alternativas en la medida que corresponda y, además, que se promuevan los beneficios penitenciarios para internos e internas que muestran una prognosis favorable en cada evaluación semestral.

2.2.7. Política Nacional Penitenciaria al 2030

Mediante Decreto Supremo N° 011-2020-JUS, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó la Política Nacional Penitenciaria al 2030, la cual tiene como objetivo principal que las personas privadas de libertad cuenten con mejores condiciones de vida.

Se busca que en los próximos seis años se pueda mejorar significativamente las condiciones básicas que permitan dar soporte a las actividades del sistema penitenciario, a fin de que se pueda cumplir con la meta de reinserción de las personas privadas de libertad, en virtud de seis objetivos prioritarios:

- Reducir significativamente el hacinamiento penitenciario.
- Mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad, al asegurar las condiciones de seguridad y convivencia de la población penitenciaria, lo cual implica que los reclusos cuenten con acceso a servicios básicos adecuados.
- Fortalecer habilidades para la reinserción de las personas privadas de su libertad que cumplen penas en los medios cerrado y libre, al enfocar los esfuerzos en programas de reeducación, capacitación laboral y apoyo psicológico para facilitar la reintegración social de los internos, y la mejora de sus capacidades para la reinserción una vez cumplidas sus penas.
- Fortalecer la gestión del conocimiento, la interoperabilidad y la transparencia del sistema penitenciario.

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

2.2.8. Acciones del Estado en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Para la Defensoría del Pueblo, la seguridad ciudadana constituye una línea institucional prioritaria de intervención y de especial relevancia, toda vez que, de no ser debidamente garantizada y protegida por el Estado, se afecta o pone en riesgo el ejercicio de una serie de derechos de primer orden como la vida, la integridad, la libertad y el patrimonio de las personas. Ahora bien, la inseguridad ciudadana, además de afectar la vigencia de los derechos antes mencionados, perjudica la estabilidad y el desarrollo de la nación.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos años se ha destinado cerca del 1.5% del presupuesto público en el Programa Presupuestal 086, denominado "Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal". Cabe señalar que este Programa Presupuestal es de corte multisectorial y está conformado por instituciones como el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio del Interior. En el presente año fiscal 2024, cuenta con un presupuesto institucional anual de 3 448 039 956 de soles, destinados a atender los problemas que enfrenta el sistema de justicia penal, con el objetivo de ser eficiente y oportuno.

Sin embargo, resulta preocupante que a pesar que el presupuesto público destinado a las instituciones que conforman el sistema de justicia se ha incrementado en los últimos años, los indicadores de criminalidad, como el porcentaje de la población víctima de algún hecho delictivo, no se han reducido; por el contrario, han tenido un incremento en ciertos periodos, por lo cual resulta necesario fortalecer las acciones del Estado en materia de la lucha contra la criminalidad, a través de un uso eficiente de los recursos públicos con enfoque en resultados.

TABLA N° 2: Programa Presupuestal 086, denominado "Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal"

AÑO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0086	PRESUPUESTO TOTAL DEL PERU	Presupuesto de categ. Pres. 086 (como % del presupuesto público)	Porcentaje de la población víctima de algún hecho delictivo
2018	2 023 859 185	2 201 814 831	97.9%	187 500 601 626	1.17%	25.7%
2019	2 173 958 967	2 617 624 233	96.7%	188 571 789 836	1.38%	26.6%
2020	3 300 218 877	3 238 564 309	95.4%	217 254 208 912	1.49%	23.4%
2021	3 024 849 870	3 394 214 644	96.7%	227 932 217 391	1.48%	18.2%
2022	2 865 549 021	3 493 636 201	98%	238 070 181 438	1.46%	22.9%
2023	3 293 825 862	3 843 483 317	93.5%	249 946 928 959	1.53%	27.1%
2024	3 448 039 956	3 701 519 971	36.6%	253 076 549 285	1.46%	

Fuente: Consulta Amigable MEF
Elaboración: Defensoría del Pueblo

2.2.9. Costo social de la criminalidad

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2014, determinó que el costo social del crimen en Perú fue del 2.77% del producto bruto interno (PBI), esto equivale a un costo de S/15 790 millones anuales. Por otro lado, Videnza Consultores indicó que el costo social por crimen en el 2023 fue de 3.09% del PBI y representó S/31 500 millones anuales[15]. En ambos casos, solo considera los costos directos del crimen. Ahora bien, por costos directos se entienden aquellos en que incurre, por un lado, el Estado peruano para perseguir y reprimir la delincuencia organizada y otros delitos graves, y por otro, las familias peruanas, para atender casos de discapacidad adquirida, hospitalización, costos de oportunidad y seguridad contra el crimen, entre otros cubiertos por las víctimas o sus familiares.

TABLA N° 3: Costo social de la delincuencia en el Perú

AÑO	PBI	Costo social (% del PBI)	Costo Social (solo considera los costos directos del crimen, no considera los efectos indirectos) en millones de soles
2014 (*)	S/ 570 041 239.00	2.77%	S/ 15 790 142.32
2023 (**)	S/ 1 019 917 475.73	3.09%	S/ 31 515 450.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN)
(*) Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
(**) Videnza Consultores
Elaboración: Defensoría del Pueblo

2.2.10. Costo de oportunidad

Con el fin de realizar una simulación de cuántos hospitales (Salud), instituciones educativas (Educación) y carreteras (transporte) se construirían con el costo social del crimen en el Perú en el 2023, se muestra a continuación tres escenarios por cada sector:

15 Recuperado de:
https://rpp.pe/economia/economia/como-afecta-la-inseguridad-ciudadana-a-la-economia-peruana-noticia-1507600

- **Sector Salud:**

El costo del crimen en el Perú, equivale al costo promedio de 50 hospitales complejos, de la misma manera si consideramos solo hospitales medianos serian 131 y finalmente para centros de salud de categoría I serían 526 infraestructuras.

TABLA N° 4: Costo de inversión en infraestructura en el sector salud

TIPO	COSTO ACTUALIZADO SOLES	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REFERENCIAL	N° INFRAESTRUCTURAS QUE PODRIA SER CONSTRUIDO CON EL COSTO SOCIAL TOTAL DEL CRIMEN
HOSPITAL COMPLEJO	632 167 754	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA - categoría II - 2	50
HOSPITAL MEDIANO	239 708 854	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-REGION ANCASH - categoría II - 1	131
CENTRO DE SALUD	59 880 573	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO - categoría I - 4	526

Fuente: https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
Consulta Amigable - MEF
Elaboración: Defensoría del Pueblo

- **Sector Educación:**

De otro lado, el costo del crimen en el Perú equivale al costo promedio de 745 Instituciones educativas grandes, de la misma manera si consideramos solo Instituciones educativas medianos serian 2549 y finalmente para Instituciones educativas pequeñas Nivel Inicial serian 8370 infraestructuras.

TABLA N° 5: Costo de inversión en infraestructura en el sector educación

TIPO	COSTO ACTUALIZADO SOLES	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REFERENCIAL	N° INFRAESTRUCTURAS QUE PODRIA SER CONSTRUIDO CON EL COSTO SOCIAL TOTAL DEL CRIMEN
I.E GRANDE	42 292 288	"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EL BOSQUE" - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA"	745
I.E MEDIANO	12 362 441	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	2 549

I.E PEQUEÑA	3 765 223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 42253 GERARDO ARIAS COPAJA, DISTRITO DE CRNEL GREGORIO ALBARRACIN - TACNA	8 370

Fuente: https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
Consulta Amigable – MEF
Elaboración: Defensoría del Pueblo

- **Sector Transporte:**

Por último, el costo del crimen en el Perú equivale al costo promedio de 21 carreteras complejas en número de proyectos, de la misma manera si consideramos solo carreteras medianos serian 80 y finalmente carreteras urbanas de nivel vecinal serian 2719 infraestructuras.

TABLA N° 6: Costo de inversión en infraestructura vial en el sector Transporte

TIPO	COSTO ACTUALIZADO SOLES	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REFERENCIAL	N° INFRAESTRUCTURAS QUE PODRIA SER CONSTRUIDO CON EL COSTO SOCIAL TOTAL DEL CRIMEN
CARRETERA COMPLEJA	1 530 140 759	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	21
CARRETERA PROVINCIAL	394 284 890	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	80
CARRETERA URBANA	11 590 226	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	2719

Fuente: https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
Consulta Amigable – MEF
Elaboración: Defensoría del Pueblo

2.2.11. Propuesta de la Defensoría del Pueblo frente al hacinamiento penitenciario

En razón al hacinamiento que afecta las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad, es que desde la Defensoría del Pueblo hemos tomado como referencia el proyecto de inversión denominado "Construcción del establecimiento penitenciario de la segunda etapa del Complejo Penitenciario de Piedras Gordas - Piedras Gordas II para 2200 internos", a cargo de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria (OIP-INPE), el cual tiene un costo de inversión de S/ 84 908 188.44.

En atención a ello, podemos inferir que se necesitaría una inversión pública de por lo menos (sin contar con la inflación, costos adicionales y otras contingencias) S/. 2 149 142.03 (Dos mil ciento cuarenta y nueve millones ciento cuarenta y dos mil y tres céntimos), para cubrir la sobrepoblación existente que suma al mes de noviembre de 2023, esto es, aproximadamente 55 685.00 internos. Este monto a invertir por parte del Estado, resulta excesivamente oneroso lo que hace extremadamente difícil su concreción.

En vista de lo expuesto, desde la Defensoría del Pueblo, proponemos la construcción de tres megapenales para reos primarios, con capacidad para 18 561 internos cada uno y con enfoque de cárceles productivas. Lo que representaría un ahorro significativo para el tesoro público y la posibilidad real y concreta de cubrir la brecha entre la capacidad de alojamiento del sistema penal y la población penitenciaria existente.

CAPÍTULO III

Resultados de la supervisión

REPÚBLICA DEL PERÚ
Defensoría del Pueblo

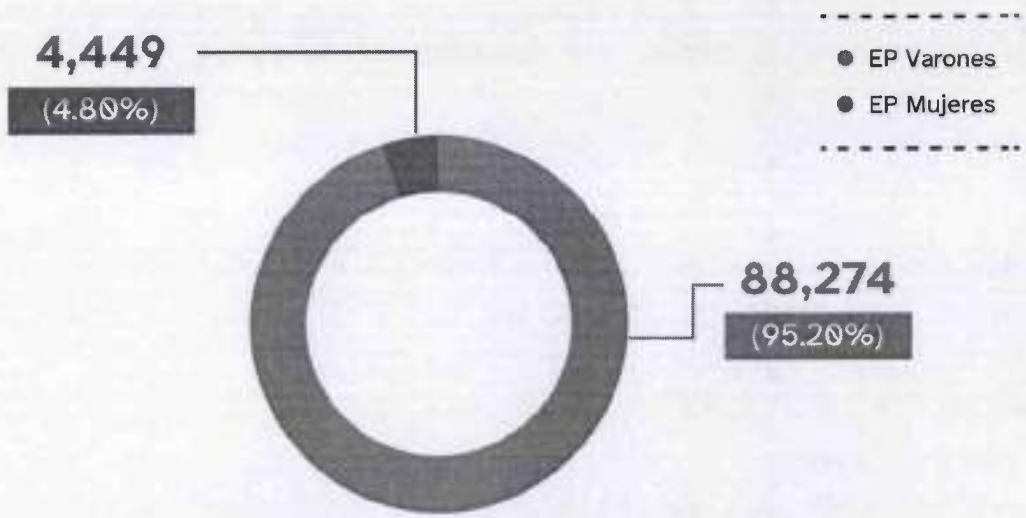
3.1. Datos generales

La finalidad del sistema penitenciario es la rehabilitación de la persona privada de libertad, lo cual se logra mediante la reeducación, el Instituto Nacional Penitenciario - INPE es el llamado a elaborar estrategias y programas de tratamiento penitenciario que coadyuven con dicha reeducación durante la privación de libertad.

Los talleres de educación y trabajo, así como la atención en salud, son esenciales para lograr la rehabilitación de las personas privadas de libertad; y, al considerar que dichos talleres se encuentran a cargo del personal penitenciario y el tópico de profesionales de la salud que trabajan dentro del sistema penitenciario, se tiene que el personal a cargo del tratamiento de la población penitenciaria necesita desarrollar sus actividades en óptimas condiciones laborales que le generen bienestar y, esto a su vez, permita un mejor desempeño al brindar los servicios de salud, educación, trabajo, entre otros.

A nivel nacional se entrevistó a un total de 92 723 personas privadas de libertad, de las cuales 88 274 son varones, representa el 95.20% de la población penitenciaria, mientras que 4449 son mujeres, que representan el 4.80% de la población penitenciaria.

GRÁFICO N° 1: POBLACIÓN PENITENCIARIA SEGÚN GÉNERO

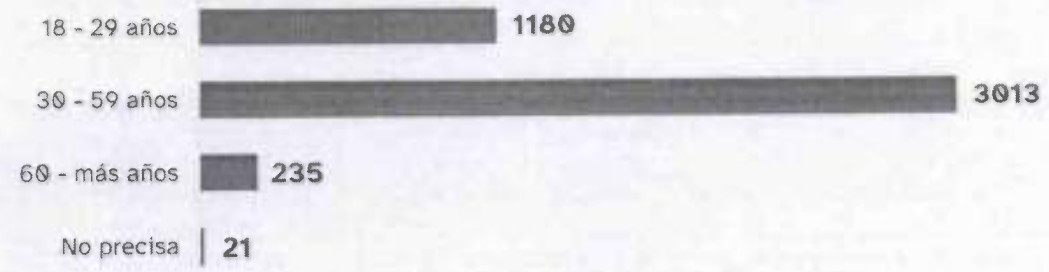


Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Grupo Etario

De un total de 4449 internas privadas de libertad, 1180 son menores de 29 años, 3013 tienen entre 30 a 59 años; y, finalmente, 235 adultas mayores.

GRÁFICO N° 2: MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD SEGÚN GRUPO ETARIO



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

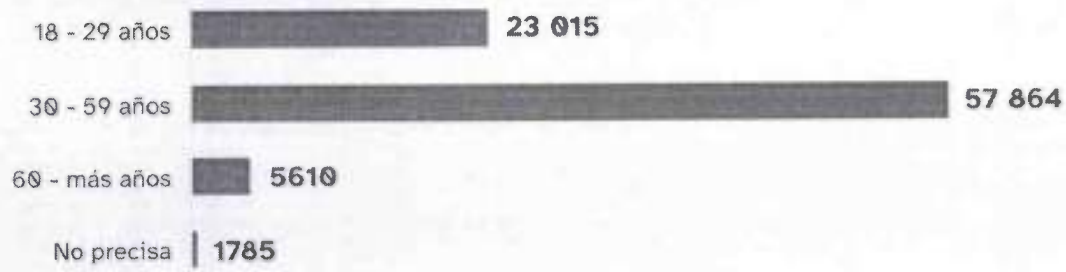
TABLA N° 7: MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD SEGÚN GRUPO ETARIO

Grupo etario	EP Mujeres
18-29 años	1180
30-59 años	3013
60-más	235
No precisa	21
Total	**4449**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Mientras que, de los 88 274 internos, 23 015 son menores de 29 años y 57 864 tienen entre 30 y 59 años y 5610 son adultos mayores.

GRÁFICO N° 3: VARONES PRIVADOS DE LA LIBERTAD SEGÚN GRUPO ETARIO



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 8: VARONES PRIVADOS DE LA LIBERTAD SEGÚN GRUPO ETARIO

Grupo etario	EP Varones
18-29 años	23 015
30-59 años	57 864
60-más	5 610
No precisa	1 785
Total	**88 274**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Entonces, tenemos un total de 5845 personas privadas de libertad que son consideradas población vulnerable a razón de su edad, al tener 60 años o más. Dicha cifra representa un grupo de especial protección, pues, debemos tener en consideración que los adultos mayores tienen una mayor incidencia de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y problemas respiratorios que requieren atención médica continua y especializada.

La edad avanzada lleva consigo la disminución de la movilidad y capacidad física, lo que dificulta el desplazamiento dentro del entorno carcelario y son propensos al deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas, lo que afecta su capacidad para adaptarse y sobrevivir en los establecimientos penitenciarios, además el hecho que se encuentran separados de sus familias deben convivir en ambientes muchas veces hostiles aumentando las tasas de depresión y ansiedad.

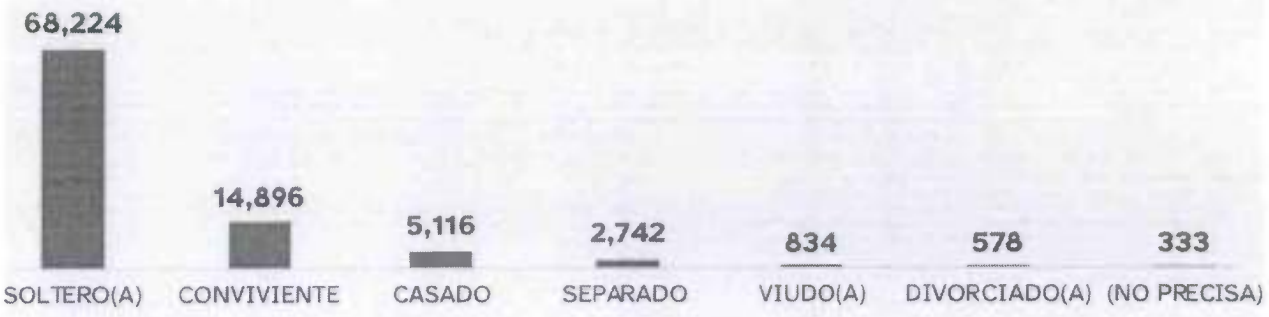
Es importante recordar que la finalidad de la pena es la reinserción social, y los adultos mayores enfrentan un gran desafío al reintegrarse a la sociedad después de su liberación debido a su avanzada edad. La falta de redes de apoyo y las dificultades para encontrar empleo o acceso a servicios sociales hacen infructuoso el tratamiento penitenciario.

El conjunto de problemas de salud, aislamiento social, falta de ambientes adecuados y la vulnerabilidad propia de su edad, hace que los adultos mayores en cárceles sean una población vulnerable, por lo que se requiere atención y políticas especializadas para abordar sus necesidades específicas.

Estado civil

El estado civil de la población penitenciaria muestra que el 68 224 son solteros, 14 896 son convivientes y el 5 116 son casados.

GRÁFICO N° 4: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 9: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

Estado civil	Total general	%
SOLTERO(A)	68 224	73.58%
CONVIVIENTE	14 896	16.07%
CASADO	5116	5.52%
SEPARADO	2742	2.96%
VIUDO(A)	834	0.90%
DIVORCIADO(A)	578	0.62%
[NO PRECISA]	333	0.36%
Total general	**92 723**	**100.00%**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Del total de 88 274 internos varones, el 73.49 % son solteros, el 16.23% son convivientes y el 5.45% son casados. En el caso de las mujeres, del total de 4449 internas, el 75.34% son solteras, mientras que el 12.88% son convivientes y casadas el 6.77%. Existen otras categorías de menor porcentaje como son: separadas/os, divorciadas/os y viudas/os.

Respecto al entorno familiar, del total de 92723 personas privadas de libertad, 63189 declararon tener hijos. Específicamente, 3669 mujeres señalaron ser madres y 59520 varones indicaron ser padres.

El total de la población penitenciaria entrevistada declaró tener 141 181 hijos e hijas, de los cuales 73 935 son hombres y 67 200 son mujeres. Asimismo, 46 internos no precisaron el sexo. De ese total, 93 049 son menores de edad y 48 132 son mayores de edad.

TABLA N° 10: NÚMERO DE HIJAS E HIJOS MENORES Y MAYORES DE EDAD

Supervisión	0-17	18-más	Total general
EP Mujeres	5.114	4.083	9.197
EP Varones	87.935	44.049	131.984
Total general	**93.049**	**48.132**	**141.181**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En cuanto a la nacionalidad de la población penitenciaria, 89, 099 son peruanos, de los cuales 84,891 son varones y 4,208 son mujeres. Asimismo, 3,624 son extranjeros, de los cuales 3,383 son varones y 241 son mujeres.

TABLA N° 11: POBLACIÓN PENITENCIARIA SEGÚN NACIONALIDAD

Supervisión	Peruanos	Extrajeros	Total general
EP Mujeres	4.208	241	4.449
EP Varones	84.891	3.383	88.274
Total general	**89.099**	**3.624**	**92.723**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Situación jurídica

Esta proporción mayoritaria de varones privados de libertad se debe a una serie de factores sociales, culturales y económicos. Los hombres tienden a reincidir más que las mujeres en el crimen, lo que contribuye a una mayor representación masculina en las cárceles.

En la población penitenciaria masculina los delitos de mayor incidencia son robo, hurto, homicidio, violación sexual, tráfico ilícito de drogas y otros,

GRÁFICO N° 5: VARONES PRIVADOS DE LIBERTAD SEGÚN DELITO



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 12: VARONES PRIVADOS DE LIBERTAD SEGÚN DELITO

Tipo de delito	Total general
ROBO	25,279
OTROS	24,649
VIOLACION	13,767
TID	13,412
HOMICIDIO	5,737
HURTO	3,518

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Mientras que en la población penitenciaria femenina son robo, hurto, homicidio, tráfico ilícito de drogas y otros.

GRÁFICO N° 6: MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD SEGÚN DELITO



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 13: MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD SEGÚN DELITO

MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD SEGÚN DELITO	N° DE INTERNAS
TID	2151
ROBO	540
HOMICIDIO	249
HURTO	150
OTROS	1359

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

3.2. Servicios penitenciarios

3.2.1. Educación

En el Perú, la educación es reconocida como un derecho fundamental intrínseco y subyace como un medio esencial para la realización completa de otros derechos fundamentales y no solo se erige como un derecho básico, sino también como un servicio público. Por consiguiente, es deber del Estado asegurar que la provisión educativa sea digna y accesible para todos.

Asegurar que las personas privadas de libertad tengan acceso a la educación no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también de dignidad. Al proporcionar a los reclusos las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad de manera productiva, se les brinda la oportunidad de mejorar sus habilidades y conocimientos. Esto no solo aumenta sus posibilidades de conseguir un empleo, también permite disminuir la reincidencia y contribuye al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

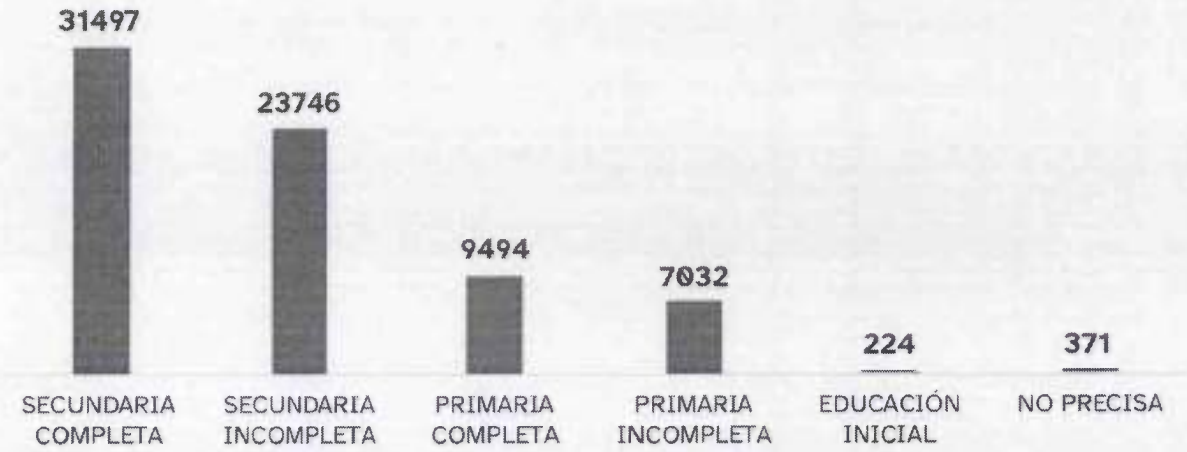
La educación es un factor crucial en el tratamiento penitenciario, pues representa un incentivo significativo para las personas privadas de libertad. La acumulación de una determinada cantidad de horas de estudio permite a los internos redimir[16] parte de su condena, mediante el cómputo correspondiente.

16 De acuerdo con el Manual de Beneficios Penitenciarios. Segunda edición: Revisada y actualizada, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 2024. *La redención de la pena es un beneficio penitenciario que permite a un privado de libertad reducir su permanencia en un establecimiento penitenciario por realizar una actividad laboral o educativa, que previamente ha sido registrada por la autoridad penitenciaria.* Disponible en: https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/10/Manual-beneficios-penitenciarios-lineamientos-modelo-procesal-acusatorio-LP.pdf

NIVEL EDUCATIVO EN LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

En la supervisión a los establecimientos penitenciarios de varones se identificaron hallazgos significativos en cuanto al nivel educativo de los internos: 31,497 han completado la educación secundaria, mientras que 23,746 no lograron finalizarla. Además, 9,494 no completó la educación primaria, y un total de 7,032 si la terminó. Solo 224 han recibido educación inicial y 371 no precisaron su nivel educativo. La mayoría de los internos ha tenido algún grado de acceso a la educación básica, aunque existe una proporción considerable que no ha completado su formación, lo cual refleja la importancia de los programas educativos dentro del sistema penitenciario para mejorar las oportunidades de reinserción social y laboral.

GRÁFICO N° 7: INTERNOS QUE CUENTAN CON EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 14: INTERNOS QUE CUENTAN CON EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	N°
Secundaria completa	31497
Secundaria incompleta	23746
Primaria incompleta	9494
Primaria completa	7032
Educación inicial	224
No precisa	371

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En cuanto a la educación básica alternativa, 642 han completado la educación secundaria, mientras que 156 se encuentra en el nivel intermedio. Además, 66 no precisó su nivel educativo.

GRÁFICO N° 8: INTERNOS QUE CUENTAN CON EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 15: INTERNOS QUE CUENTAN CON EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	N°
Secundaria	642
Intermedio	156
No precisa	66

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Respecto a la educación superior universitaria, 3,027 ha completado estudios superiores no universitarios, mientras que 2, 895 ha terminado estudios universitarios. Por otro lado, 2,378 no logró completar su educación universitaria y 1,742 no finalizó sus estudios no universitarios. Solo 83 alcanzaron el nivel de postgrado y 183 no precisó su nivel educativo. Esto resalta que una parte significativa de los internos cuenta con algún grado de educación superior, aunque una proporción considerable no ha concluido sus estudios.

GRÁFICO N° 9: INTERNOS QUE CUENTAN CON EDUCACIÓN SUPERIOR



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 16: INTERNOS QUE CUENTAN CON EDUCACIÓN SUPERIOR

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	N°
Superior no universitaria completa	3027
Superior universitaria completa	2895
Superior universitaria incompleta	2378
Superior no universitaria incompleta	1742
Postgrado	83
No precisa	183

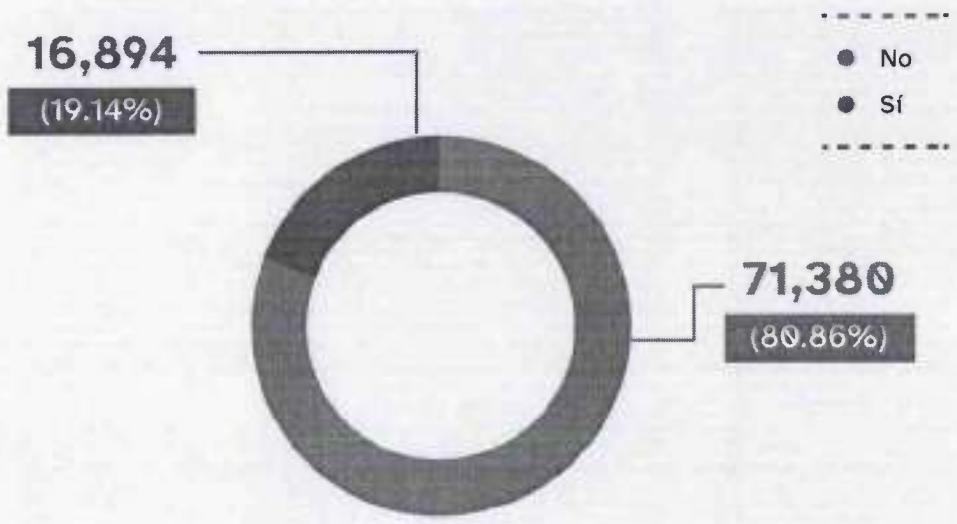
Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

INTERNOS QUE ESTUDIAN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

La supervisión realizada a los establecimientos penitenciarios de varones, permitió establecer que solo el 19.14% de los internos estudia dentro del penal, mientras que el 80.86% no participa en actividades educativas.

Para la Defensoría del Pueblo, la educación desempeña un papel esencial en la reducción de la reincidencia y en la promoción de un entorno penitenciario más seguro. En tal sentido, la implementación de programas educativos contribuye a una mayor equidad social y proporciona a los internos una segunda oportunidad para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y laboral.

GRÁFICO N° 10: VARONES PRIVADOS DE LA LIBERTAD EN TALLERES DE ESTUDIO

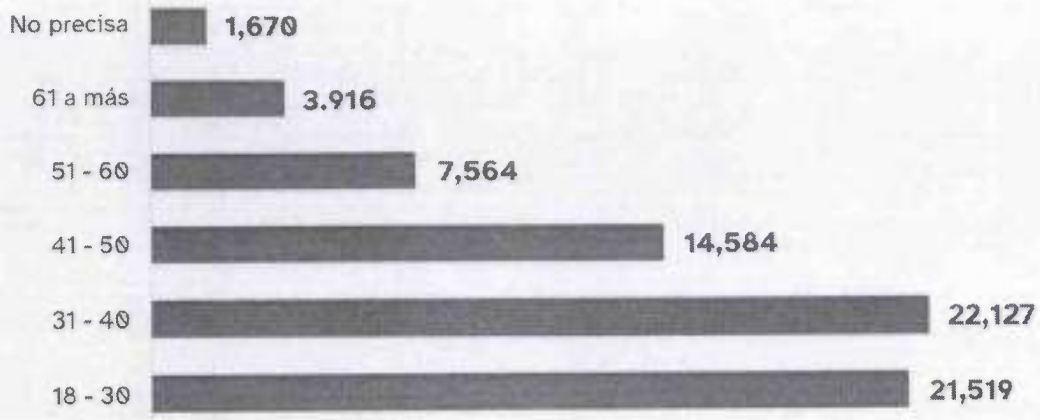


Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Dentro del 80.86% de internos que no cursan estudios, 22,127 pertenecen al grupo etario de 31 a 40 años y 21,519 pertenecen al grupo de 18 a 30 años. Asimismo, 14,584 pertenecen al rango de edad de 41 a 50 años, 7,564 tienen entre 51 a 60 años, 3,916 de 61 años en adelante y 1,670 no precisaron su edad.

Estos datos resaltan la necesidad de adaptar y ofrecer programas educativos que atiendan a las diferentes franjas etarias dentro de la población penitenciaria, con especial atención en los grupos más jóvenes y que representan la mayoría de los internos que no participan en actividades educativas dentro del establecimiento penitenciario.

GRÁFICO N° 11: INTERNOS QUE NO ESTUDIAN EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, SEGÚN RANGO DE EDAD



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 17: INTERNOS QUE NO ESTUDIAN EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, SEGÚN RANGO DE EDAD

INTERNOS QUE NO ESTUDIAN EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN RANGO DE EDAD	N° DE INTERNOS
18 - 30	21,519
31 - 40	22,127
41 - 50	14,584
51 - 60	7,564
61 a más	3,916
No precisa	1,670

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

3.2.2. Trabajo

Mediante el tratamiento penitenciario se pretende modificar el comportamiento del interno e interna, con el fin de resocializarlos y evitar la comisión de nuevos delitos, el mismo es progresivo y comprende el desarrollo de programas de resocialización en forma individualizada y grupal según la naturaleza de la atención[17].

En ese sentido, debemos traer a colación lo referido por el artículo 73 del Código de Ejecución Penal, cuyo texto reza:

> *Artículo 73. El trabajo para el interno y para el procesado*
> *El trabajo es un derecho y un deber del interno, contribuye a su rehabilitación, se organiza y planifica atendiendo a su aptitud y calificación laboral compatible con la seguridad del establecimiento penitenciario.*
> *El trabajo que realicen los internos procesados tiene carácter voluntario.*

17 Artículo 97 del Reglamento del Código de Ejecución Penal.

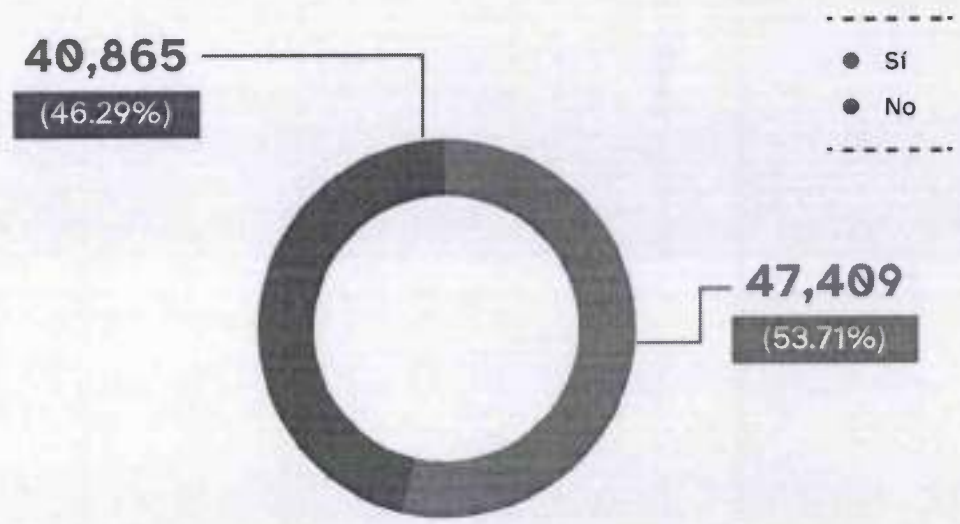
Por tanto, la normativa dicta que todo interno e interna que permanezca privado de libertad en un establecimiento penitenciario podrá desarrollar alguna actividad que le represente una contraprestación económica, esto es, realizar labores para poder percibir alguna ganancia y, además, la posibilidad de acogerse al beneficio penitenciario de redención de la pena por trabajo y estudio, en tanto corresponda. Aunado a ello, la predisposición del interno a realizar labores representa un progreso en su tratamiento, en la medida que busca asumir sus gastos mediante actividades lícitas, desarrolla talentos para tal fin.

Cabe precisar que en algunas etapas del régimen cerrado especial el trabajo es obligatorio para la interna y el interno y, así también, en otras etapas (como la de extrema seguridad) el trabajo se realizará siempre que se cumplan condiciones de estricta seguridad, previa autorización del Consejo Técnico Penitenciario.

La supervisión realizada en los establecimientos penitenciarios de varones, mostraron que el 53.71% se encuentran empleados en actividades laborales dentro del establecimiento penitenciario, mientras que el 46.29% no está involucrado en ninguna tarea laboral. Es decir, que la mitad trabaja dentro del establecimiento penitenciario donde cumple su sentencia condenatoria.

Estos hallazgos resaltan la importancia de promover oportunidades de trabajo dentro de los penales como parte integral de los programas de rehabilitación, con el objetivo de fomentar la responsabilidad, habilidades laborales y preparar a los internos para su reintegración a la sociedad una vez cumplida su condena.

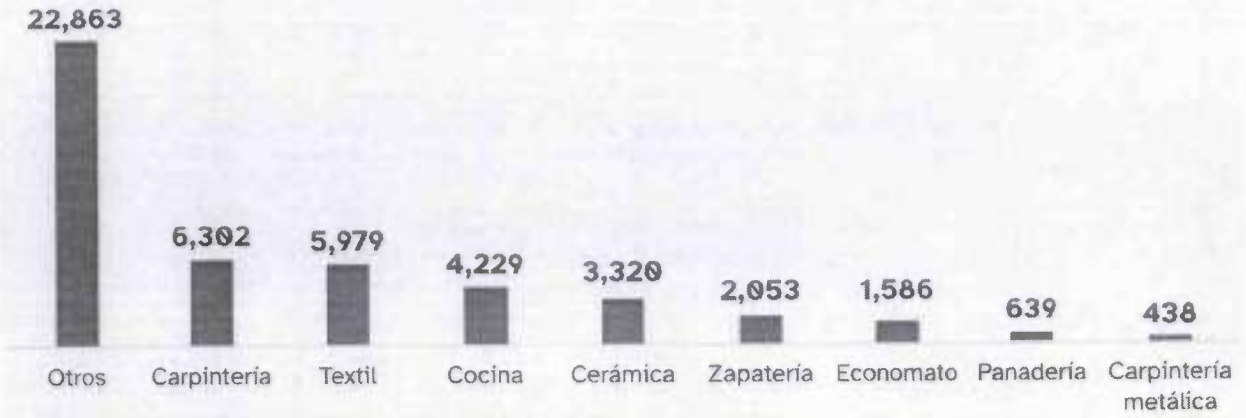
GRÁFICO N° 12: VARONES PRIVADOS DE LIBERTAD EN TALLERES DE TRABAJO



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Respecto al tipo de trabajo que realizan los internos, 6302 se dedica a la carpintería, 5979 a la textilería, 4229 a la cocina, 3320 a la cerámica, 2053 a la zapatería, 1586 al economato, y 639 a la panadería. Además, el 438 realiza carpintería metálica. Sin embargo, el 22 863 se dedica a otras áreas laborales.

GRÁFICO N° 13: TIPOS DE TRABAJOS QUE REALIZAN LOS INTERNOS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

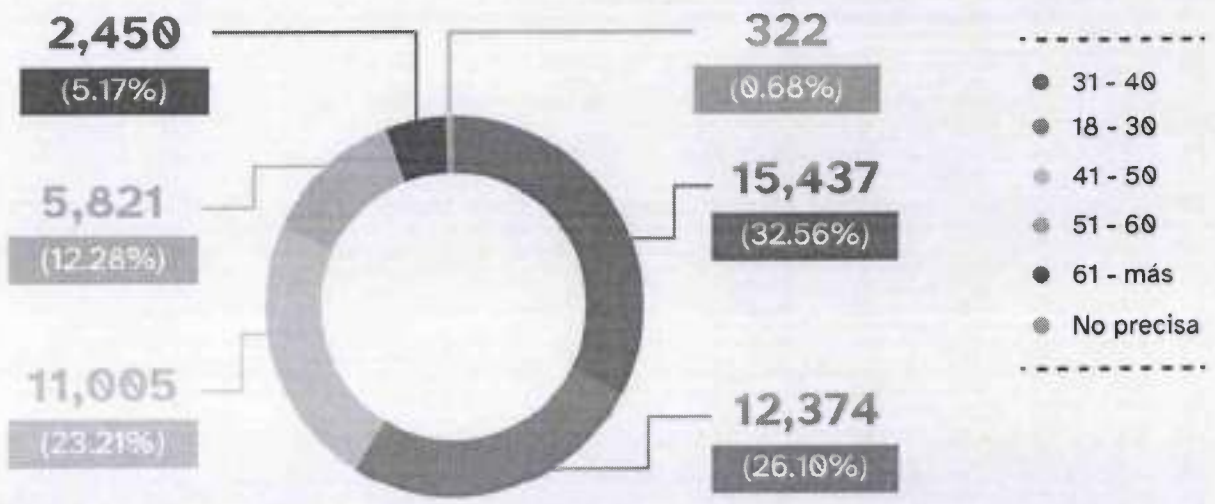
TABLA N° 18: TIPOS DE TRABAJOS QUE REALIZAN LOS INTERNOS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

TIPO DE TRABAJO QUE REALIZAN EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO	N° DE INTERNOS
Carpintería	6,302
Textil	5,979
Cocina	4,229
Cerámica	3,320
Zapatería	2,053
Economato	1,586
Panadería	639
Carpintería metálica	438
Otros	22,863
Total	47,409

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De los 47,409 internos que trabaja en los establecimientos penitenciarios; 15,437 de los internos se encuentran en el rango de edad de 31 a 40 años, 11,005 de 41 a 50 años, 12,374 de 18 a 30 años, 5,821 de 51 a 60 años y 2,450 están entre 61 años a más.

GRÁFICO N° 14: INTERNOS QUE SÍ TRABAJAN SEGÚN EL RANGO DE EDAD



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

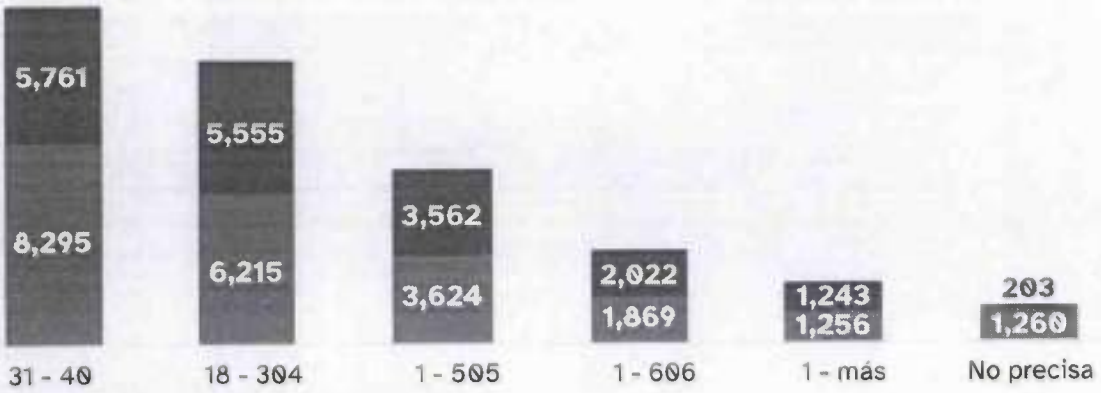
TABLA N° 19: INTERNOS QUE SÍ TRABAJAN SEGÚN EL RANGO DE EDAD

Rango de edad	N° Internos	%
31-40	15,437	32.56%
18-30	12,374	26.10%
41-50	11,005	23.21%
51-60	5,821	12.28%
61-MÁS	2,450	5.17%
No precisa	322	0.68%
Total general	**47,409**	**100.00%**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Respecto a la población que no trabaja en el establecimiento penitenciario, debemos tener en cuenta que existen factores limitantes para realizar el tipo de labores de los talleres de los establecimientos penitenciarios, como es el caso de algunas personas con discapacidad; de modo que, pese a poder conocer el oficio, no les es posible participar de los talleres de trabajo, lo cual escapa a su voluntad y no refleja necesariamente la ineficacia del tratamiento.

GRÁFICO N° 15: POBLACIÓN QUE NO TRABAJA EN EL EP, SEGÚN RANGO DE EDAD Y MANIFIESTA CONOCER UN OFICIO



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

3.2.3. Salud

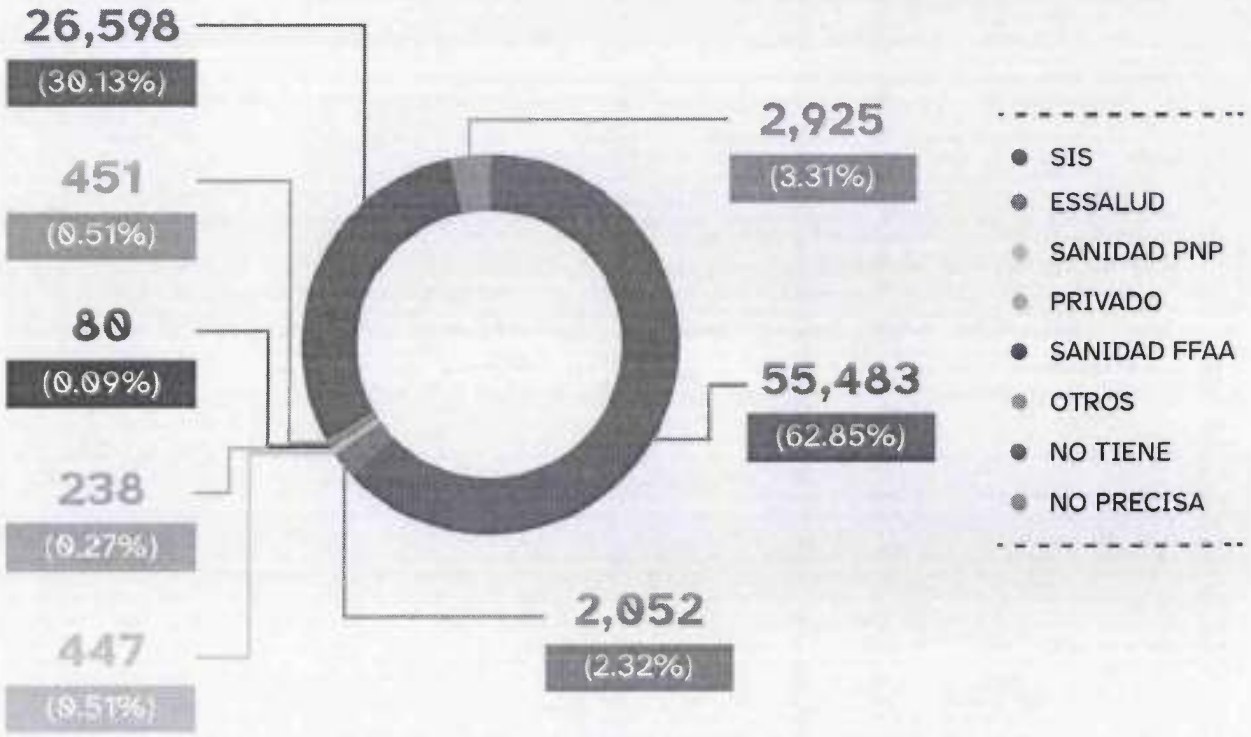
El derecho a la salud de las personas privadas de libertad implica garantizar su oportuno e idóneo acceso a los servicios de salud, a cargo de un médico que pueda diagnosticar y prescribir un adecuado tratamiento y, en tanto resulte necesario, evaluar su traslado con un especialista para la atención que amerite. Así, el Instituto Nacional Penitenciario - INPE tiene la obligación de proveer lo necesario y desarrollar las acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud de la persona privada de libertad.

A partir de los lineamientos y regulaciones establecidos en diversos instrumentos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, ha subrayado la crucial importancia de aplicar y respetar el derecho a la salud de los individuos en reclusión. Esto se fundamenta en el Principio X, el cual está contenido en los "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas".

Sin embargo, en la actualidad el acceso a un servicio de salud adecuado en los establecimientos penitencias de nuestro país se ve limitado debido a los grandes problemas que afronta el sistema penitenciario, los que se presentan por la poca capacidad resolutiva de los centros de salud o tópicos de los establecimientos penitenciarios, la inadecuada infraestructura, el escaso personal de salud y la insuficiente cantidad de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Durante la supervisión a los establecimientos penitenciarios de varones, hemos descubierto un problema crucial que preocupa profundamente a la Defensoría del Pueblo, esto esta referido al acceso a la atención médica de los internos. Sorprendentemente, un 62.85% cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS), 2.32% Essalud, 0.51% Sanidad PNP, 0.27% Seguro Privado y un 0.09% Sanidad FFAA.

GRÁFICO N° 16: TIPO DE SEGURO MÉDICO EN VARONES



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 20: TIPO DE SEGURO EN VARONES

TIPO DE SEGURO	N° DE INTERNOS	%
SIS	55,483	62.85%
ESSALUD	2,052	2.32%
SANIDAD PNP	447	0.51%
PRIVADO	238	0.27%
SANIDAD FFAA	80	0.09%
OTROS	451	0.51%
NO TIENE	26,598	30.13%
NO PRECISA	2,925	3.31%
Total	**88,274**	**100%**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La tabla refleja la diversidad en la cobertura de seguros de salud de los internos, con la mayoría afiliados al SIS. Sin embargo, también revela una preocupante proporción de internos que carecen de seguro de salud, lo que plantea desafíos significativos en cuanto al acceso a la atención médica dentro de los penales. Es fundamental que se tomen medidas para asegurar que todos los internos tengan acceso a servicios de salud adecuados, independientemente de su situación de seguro, con lo que garantiza así el cumplimiento de su derecho fundamental a la salud.

En tal sentido, es crucial resaltar que no todos los individuos privados de libertad tienen la posibilidad de recibir atención médica en un hospital cuando lo necesitan debido a la falta de un seguro de salud. Sin embargo, es fundamental recordar que el Estado, especialmente a través del Instituto Nacional Penitenciario, está obligado a garantizar este acceso a los servicios de salud para todas las personas en reclusión.

La falta de un seguro de salud no puede ser una barrera para recibir atención médica adecuada. Por esta razón, todos los internos que no cuenten con un seguro antes de ser privados de su libertad son afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS). Esta medida busca asegurar que se respeten y atiendan adecuadamente su derecho a la salud de los internos, al ser una responsabilidad inherente al Estado en el marco de los derechos humanos.

Este hallazgo revela una situación preocupante que requiere atención inmediata. La Defensoría del Pueblo está comprometida en supervisar continuamente esta problemática y colaborar estrechamente con las autoridades correspondientes para implementar medidas efectivas que protejan y promuevan el derecho a la salud de todas las personas privadas de libertad. La salud no puede ser un derecho del que se prescinda o se limite, incluso en el contexto de la reclusión, y es crucial garantizar que todos los internos reciban la atención médica necesaria cuando lo requieran.

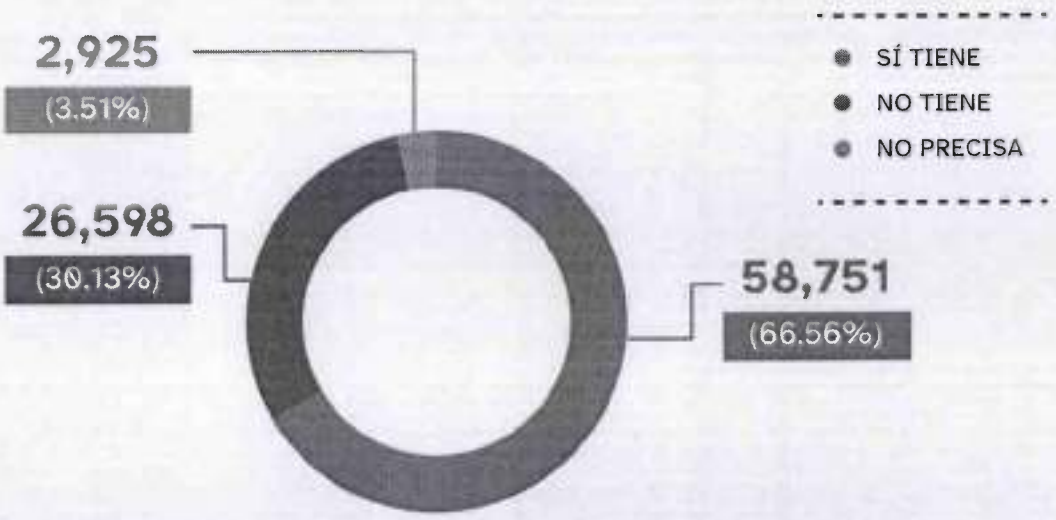
Otros de los problemas que hemos identificado radica en la insuficiencia de personal de salud en los establecimientos penitenciarios para la atención de la población penitenciaria. Esta carencia no solo dificulta la provisión de servicios médicos adecuados, sino que también obstaculiza la gestión administrativa necesaria para coordinar las atenciones externas que surgen diariamente. La escasez de recursos humanos y logísticos en este ámbito impacta negativamente en el derecho a la salud de los internos, el cual no debería verse restringido por el hecho de estar privados de libertad.

Por otro lado, es importante destacar que esta situación se torna aún más preocupante al considerar las enfermedades prevalentes de los internos. A pesar de la existencia de programas de salud destinados a garantizar el suministro de medicamentos a los pacientes crónicos, la demanda es considerablemente superior a la capacidad de los recursos disponibles en cada penal. Esta discrepancia entre la necesidad y los recursos disponibles agrava la calidad de la atención médica dentro de los penales y pone en riesgo la salud de los internos.

En este contexto, es esencial subrayar la importancia de abordar de manera urgente estas deficiencias en la atención médica dentro de los centros penitenciarios. La garantía del derecho a la salud para todas las personas, independientemente de su situación de encarcelamiento, es fundamental para una sociedad justa y equitativa. Por lo tanto, es necesario tomar medidas concretas para mejorar el acceso a la atención médica y asegurar que los internos reciban el tratamiento y la atención necesaria para mantener su bienestar físico y mental durante su reclusión.

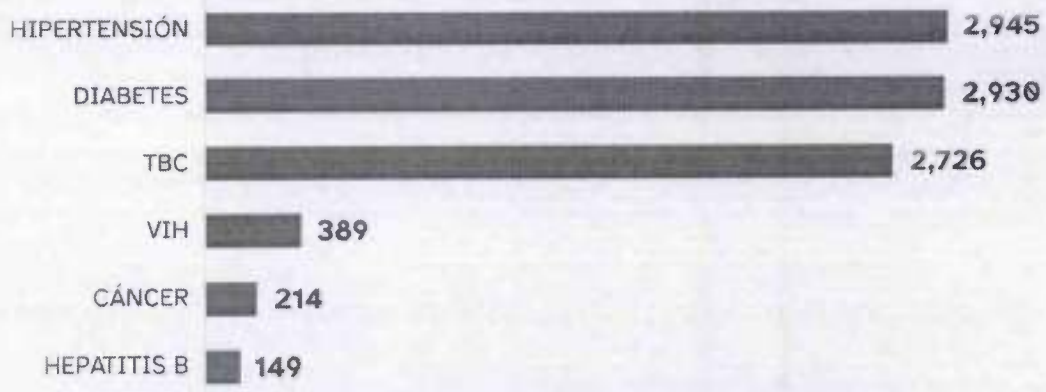
Uno de los aspectos críticos que surge de la información recopilada es la prevalencia de enfermedades entre la población carcelaria masculina. De los internos entrevistados, un total de 21 104 sufren de alguna enfermedad, lo que representa un desafío significativo para la atención médica dentro de los establecimientos penitenciarios. Las enfermedades más comunes son hipertensión, diabetes, tuberculosis (TB), VIH, cáncer y hepatitis B, entre otras. Estas condiciones médicas requieren un manejo especializado y un suministro constante de medicamentos para garantizar un tratamiento efectivo y una calidad de vida adecuada para los internos afectados.

GRÁFICO N° 17: SEGURO DE SALUD DE LOS VARONES PRIVADOS DE LIBERTAD



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

GRÁFICO N° 18: TIPO DE ENFERMEDAD EN VARONES



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 21: TIPO DE ENFERMEDAD EN VARONES

Tipo de enfermedad	N° Internos/as
Hipertensión	2,945
Diabetes	2,930
TB	2,726
VIH	389

Cancer	214
Hepatitis B	149
Otra Enfermedad	12,091

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

3.2.4. Servicio social

El servicio social en los establecimientos penitenciarios del Perú desempeña un papel fundamental en la rehabilitación y reintegración de los internos. A través de programas y actividades diseñadas para mejorar sus habilidades y capacidades. El servicio social contribuye significativamente a su desarrollo personal y profesional. Estas iniciativas no solo buscan proporcionar una ocupación productiva durante el tiempo de reclusión, sino también preparar a los internos para una reintegración exitosa en la sociedad una vez cumplida su condena. La formación en talleres, programas educativos y actividades recreativas fomenta un entorno positivo que promueve el crecimiento y el cambio personal.

Además, el servicio social en los penales aborda necesidades básicas y emocionales de los internos, por lo que se ofrece apoyo psicológico, asesoramiento y servicios de salud. Este enfoque integral es esencial para garantizar que los derechos fundamentales de los internos sean respetados y que se promueva su bienestar general. Al brindar acceso a estos servicios, se contribuye a la reducción de la reincidencia delictiva y se facilita una transición hacia la vida en libertad. La importancia del servicio social en los establecimientos penitenciarios es, por tanto, crucial para construir un sistema de justicia más humano y efectivo, que no solo castigue, sino que también rehabilite y transforme vidas.

Este servicio es vital no solo para la rehabilitación de los internos, sino también para el bienestar de sus hijos. A través de programas de apoyo familiar y asesoramiento, este servicio ayuda a mantener y fortalecer los vínculos familiares, proporciona apoyo emocional tanto para los internos como para sus hijos. Esto es esencial para mitigar el impacto negativo de la reclusión, garantizar el desarrollo emocional y psicológico de los hijos y fomentar la reintegración exitosa del interno en la sociedad. Al abordar las necesidades de toda la familia, el servicio social contribuye a romper el ciclo de criminalidad y a construir un futuro más estable y esperanzador para las nuevas generaciones.

El tratamiento social en los establecimientos penitenciarios es importante para una persona privada de libertad, debido a que la detención genera un impacto psico social en la persona y su entorno familiar; que trae como consecuencia la modificación de la dinámica familiar, lo cual es el campo de intervención del área social del Instituto Nacional Penitenciario; quienes dirigen su accionar en la restitución, mantenimiento y fortalecimiento del vínculo familiar para el logro de la resocialización del interno y la prevención del delito[18].

Es labor del Instituto Nacional Penitenciario verificar el entorno familiar de las personas privadas de libertad en cuanto ingresan al establecimiento penitenciario, esto a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Código de Ejecución Penal y su Reglamento, que a la letra dice:

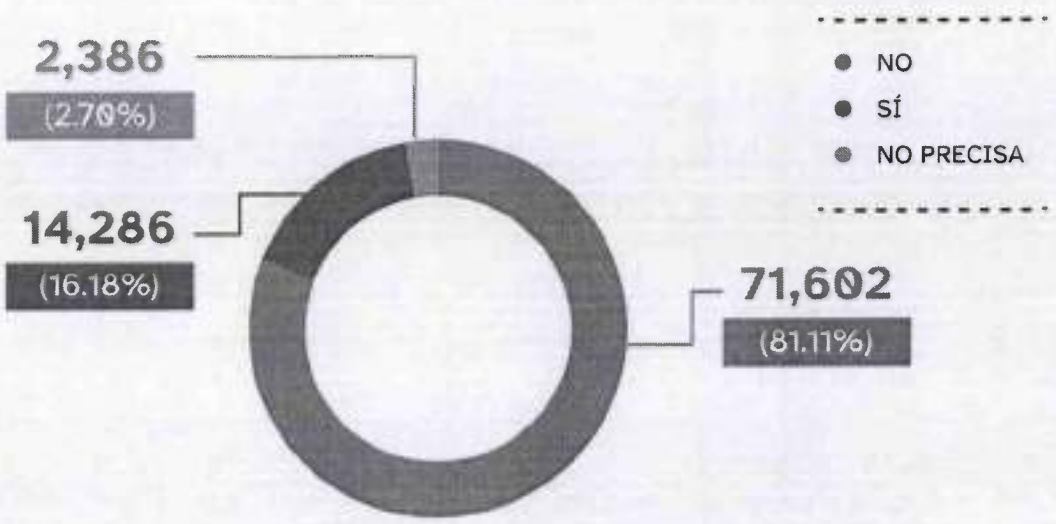
> ***CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL***
> *Artículo 93. Asistencia Social*
> *La asistencia social apoya al interno, a la víctima del delito y a los familiares inmediatos de ambos.*
> *Artículo 94. Acciones de la asistencia social*
> *La asistencia social desarrolla las acciones necesarias que permiten mantener relaciones entre el interno y su familia.*
>
> ***REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL***
> *Artículo 137.- El trabajador social diagnostica, planifica y ejecuta acciones socioeducativas, asistenciales, recreativas y culturales orientadas a optimizar el tratamiento del interno, la víctima del delito y los familiares inmediatos de ambos.*

18 El trabajo social penitenciario. Rivero Zuñiga Minela. Disponible en: https://celats.org/noticias/el-trabajo-social-penitenciario/

Artículo 138.- Además de las funciones establecidas en los artículos 83 y siguientes del Código, son funciones del trabajador social:
138.1 Promover la restitución, mantenimiento y refuerzo del vínculo del interno con su familia a través de procesos individuales, grupales o familiares.

Durante la supervisión realizada a los establecimientos penitenciarios de varones, se recopilaron datos relevantes sobre la intervención del área social a favor de los internos. Al respecto, 16.18% señalo que si recibió una visita del área social al ingresar al penal, 81.11% no tuvo visita y 2.70% no precisó. Esto indica que una mayoría no recibe una evaluación inicial a su ingreso por el área social, lo cual es un aspecto importante para identificar sus necesidades y brindar el apoyo adecuado desde el principio de su reclusión.

GRÁFICO N° 19: ¿EL ÁREA SOCIAL DEL INPE REALIZÓ UNA VISITA CUANDO EL INTERNO INGRESÓ AL PENAL?



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 22: ¿EL ÁREA SOCIAL DEL INPE REALIZÓ UNA VISITA CUANDO EL INTERNO INGRESÓ AL PENAL?

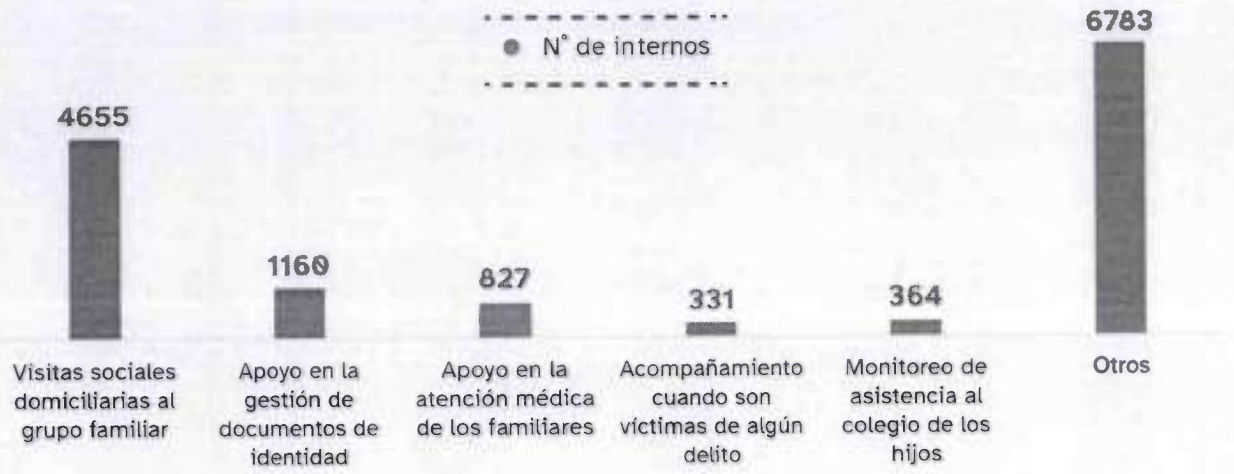
Respuesta	N° Internos	%
NO	71,602	81.11%
SI	14,286	16.18%
[NO PRECISA]	2386	2.70%
Total general	**88,274**	**100.00%**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En cuanto a los servicios brindados por área de asistencia social, se identificó que 4655 de las intervenciones corresponden a visitas sociales domiciliarias al grupo familiar, lo cual es importante para mantener el vínculo entre los internos y sus familias, facilita su rehabilitación y reintegración. Asimismo, 1160 recibió apoyo en la gestión de documentos de identidad.

Además, 827 obtuvo ayuda para la atención médica de sus familiares y 331 contó con acompañamiento cuando fueron víctimas de algún ilícito, 364 intervenciones estuvieron referidas a monitorear la asistencia escolar de los hijos e hijas de los internos y un total de 6783 se clasificó en otros tipos de apoyo.

GRÁFICO N° 20: SERVICIOS BRINDADOS POR ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

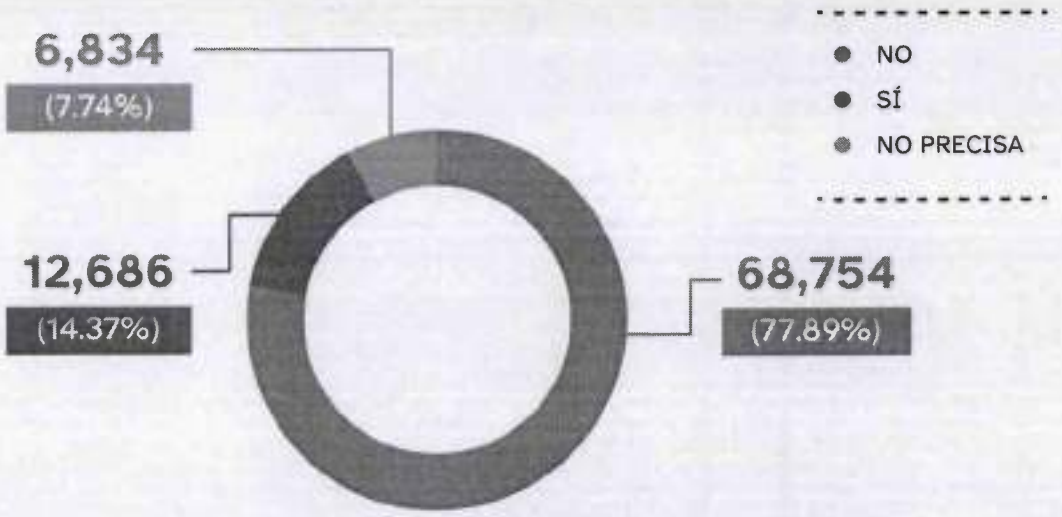
TABLA N° 23: SERVICIOS BRINDADOS POR EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL

SERVICIOS BRINDADOS POR EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL	N° DE INTERNOS
Visitas sociales domiciliarias al grupo familiar	4655
Apoyo en la gestión de documentos de identidad	1160
Apoyo en la atención médica de los familiares	827
Acompañamiento cuando son víctimas de algún ilícito	331
Monitoreo de asistencia al colegio de los hijos	364
Otros	6783

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En la supervisión realizada a los establecimientos penitenciarios de varones, se recopiló información sobre la solicitud de asistencia social hecha por los internos al INPE. De acuerdo con los datos obtenidos, 12 686 solicitaron dicho servicio, 68 754 no lo hicieron y 6834 no precisaron. Estos números revelan que la mayoría de los internos no solicitó el servicio de asistencia social, lo podría reflejar una falta de información sobre los servicios disponibles por parte del INPE.

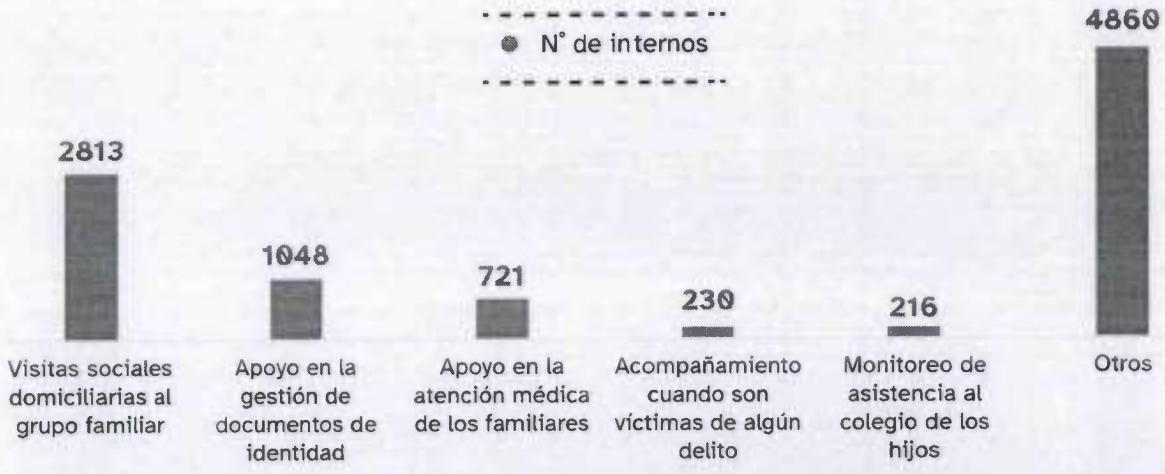
GRÁFICO N° 21: INTERNOS QUE SOLICITARON EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL AL INPE



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En cuanto a los servicios brindados por el área de asistencia social a solicitud del interno, se advierte que 2813 correspondieron a visitas sociales domiciliarias al grupo familiar, 1048 se dedicaron a la gestión de documentos de identidad, 721 consistió en apoyo para la atención médica de sus familiares. Además, 230 recibieron acompañamiento cuando fueron víctimas de algún ilícito, 216 se enfocaron en el monitoreo de la asistencia escolar de los hijos e hijas de los internos y 4, 860 se clasificaron en otros tipos de apoyo.

GRÁFICO N° 22: SERVICIOS BRINDADOS POR EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL A SOLICITUD DEL INTERNO



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

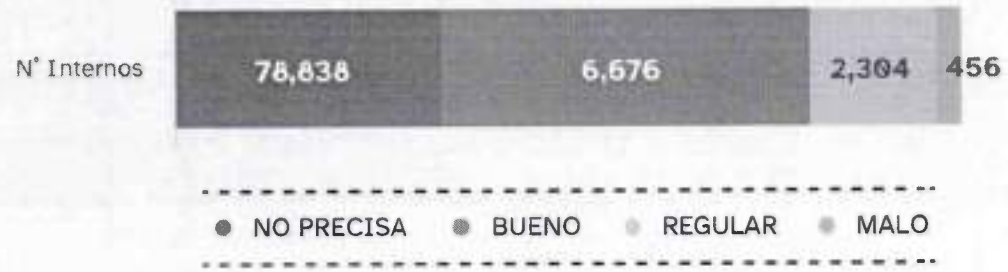
TABLA N° 24: SERVICIOS BRINDADOS POR EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL A SOLICITUD DEL INTERNO

SERVICIOS BRINDADOS POR EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL	N° DE INTERNOS
Visitas sociales domiciliarias al grupo familiar	2813
Apoyo en la gestión de documentos de identidad	1048
Apoyo en la atención médica de los familiares	721
Acompañamiento cuando son víctimas de algún ilícito	230
Monitoreo de asistencia al colegio de los hijos	216
Otros	4860

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Finalmente, sobre la calificación del servicios de asistencia social brindado por el INPE, 6676 internos calificaron dicho servicio como bueno, 2304 como regular, 456 como malo y 78 838 no precisaron.

GRÁFICO N° 23: CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL BRINDADO POR EL INPE



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Conforme a la información proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre la cantidad de asistentas sociales que brindan servicios en los establecimientos penitenciarios, desde la Defensoría del Pueblo hemos advertido con preocupación que solo existen 137 personas que brindan el servicio de asistencia social a nivel nacional. Este número de profesionales, en comparación a la población penitenciaria que asciende a más de noventa mil personas privadas de libertad resulta insuficiente y no permite brindar un servicio adecuado. Esta situación refleja la necesidad de incrementar el número de profesionales que realizan el trabajo social.

Esto ha conllevado a que, precisamente, los hijos e hijas de las personas privadas de libertad no sean debidamente atendidos en sus necesidades más elementales, en tanto y en cuanto, se desconoce la mayoría de las veces las condiciones en las que se encuentran.

GRÁFICO N° 24: ASISTENTAS SOCIALES A NIVEL NACIONAL



Fuente: Instituto Nacional Penitenciario - INPE
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 25: PERSONAL DE ASISTENTAS SOCIALES EN EL INPE A NIVEL NACIONAL

OFICINA REGIONAL	POBLACION PENITENCIARIA	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO	REGIMEN LABORAL				
			LEY 28708	LEY DE SALUD	276	CAS	TOTAL
NORTE CHICLAYO	17713	CHICLAYO	4	2			6
		MUJERES TRUJILLO	1				1
		CAJAMARCA				1	1
		PIURA				1	1
		JAEN				1	1
		TRUJILLO	2	1		1	4
Total parcial			7	3	0	4	**14**
LIMA	43127	HUARAL	3			1	4
		ANCON	3				3
		ANCON II	5	1	1	2	9
		ANEXO MUJERES	2	1			3
		BARBADILLO		1			1
		CALLAO	3	3			6
		CAÑETE	1		1	1	3
		CASTRO CASTRO	5	2			7
		CHIMBOTE			1		1
		VIRGEN DE FATIMA	2	1			3
		HUACHO	1				1
		HUARAZ			1		1
		ICA		1	1	1	3
		LURIGANCHO	14	3		1	18
		VIRGEN DE LA MERCED	1				1

Total parcial			40	13	5	6	**64**
SUR AREQUIPA	4065	MUJERES TACNA					0
		MUJERES AREQUIPA					0
		AREQUIPA		4		1	5
		CAMANÁ	1			1	2
		TACNA	1				1
		MOQUEGUA	2			1	3
Total parcial			4	4	0	3	**11**
CENTRO HUANCAYO	7019	HUANCAYO	3		3		6
		CHANCHAMAYO		1	1		2
		RIO NEGRO			1		1
		TARMA			1		1
		LA OROYA			1		1
		HUANCAVELICA			1		1
		AYACUCHO			3	1	4
		HUANTA				1	1
Total parcial			3	1	11	2	**17**
ORIENTE HUANUCO	6641	HUANUCO	2				2
		COCHAMARCA			1	1	2
		PUCALLPA	1		2	1	4
Total parcial			3	0	3	2	**8**
SUR ORIENTE CUSCO	6541	MUJERES CUSCO		1		1	2
		ANDAHUAYLAS				1	1
		CUSCO			3		3
		PUERTO MALDONADO				2	2
		SICUANI				1	1
		QUILLABAMBA				1	1
Total parcial			0	1	3	6	**10**
NOR ORIENTE SAN MARTIN	5724	TARAPOTO				1	1
		BAGUA GRANDE				1	1
		CHACHAPOYAS				1	1
		IQUITOS			1		1
		MOYOBAMBA				1	1
Total parcial			0	0	1	4	**5**
ALTIPLANO PUNO	2409	PUNO	1		2		3
		LAMPA			1		1
		JULIACA	1		1	1	3
		CHALLAPALCA	1				1
Total parcial			3	0	4	1	**8**
TOTAL GENERAL			**60**	**22**	**27**	**28**	**137**

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario - INPE
Elaboración: Defensoría del Pueblo

3.2.5 Inscripción de sentencias

La Defensoría del Pueblo ha atendido quejas, de acuerdo a sus atribuciones, donde las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, a pesar de haber cumplido su condena no pudieron conseguir su libertad de manera oportuna, debido a la omisión de algunos juzgados en remitir a la Dirección de Registro Penitenciario del INPE las sentencias y las resoluciones que las declararon firmes o consentidas, para su registro respectivo.

Esta situación vulnera el derecho a la libertad, al prolongar indebidamente la detención de las personas. Esto afecta a la población penitenciaria en el trámite de beneficios penitenciarios, y, en mayor medida, en los casos egresos por cumplimiento de condena.

Se debe entender que la responsabilidad de mantener actualizado el registro de sentencias no solo recae en los órganos jurisdiccionales, si no también en el Instituto Nacional Penitenciario quien tiene la obligación de advertir oportunamente los casos donde no se cuente con esta información, a través de su Dirección de Registro Penitenciario, como lo regula el artículo 209 del Decreto Supremo n.° 015-2003-JUS que establece el procedimiento de "libertad por cumplimiento de condena"[19].

3.3. Grupos de especial protección

En el contexto de los establecimientos penitenciarios, los grupos de especial protección requieren una atención particular debido a su vulnerabilidad y las condiciones específicas que enfrentan. La Defensoría del Pueblo, en su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, se enfoca en supervisar que reciban un trato justo y adecuado, así como que se garantice el respeto de sus derechos fundamentales.

Las mujeres, extranjeros, adultos mayores, personas con discapacidad y la comunidad LGTBI pertenecen a estos grupos de especial protección y presentan necesidades únicas que deben ser atendidas con políticas y medidas específicas dentro del sistema penitenciario. La identificación de estas necesidades y la implementación de acciones dirigidas a su satisfacción no solo mejora la calidad de vida de los internos e internas, sino que también contribuye a su proceso de rehabilitación y reinserción social.

La Defensoría del Pueblo subraya la importancia de monitorear y evaluar continuamente las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad y de aquellas que pertenecen a grupos de especial protección, a través de la realización de supervisiones, cuyos resultados se muestran en informes detallados, que contienen recomendaciones. Con ello se busca impulsar cambios que promuevan un entorno más humano y equitativo, con un enfoque integral de protección de derechos humanos.

3.3.1. Mujeres

La mujer privada de la libertad (sea preventiva o con sentencia condenatoria) tiene que afrontar un régimen que fue diseñado sin tener en cuenta sus necesidades, régimen propio de una corriente androcentrista[20], caracterizado por la ausencia de una mirada de género en los trabajos criminológicos y penitenciarios. El derecho a la igualdad no significa, necesariamente, que las mujeres reciban el mismo trato que los varones; por el contrario, busca que los derechos, así como las obligaciones de las mujeres privadas de libertad, sean detenidos en relación con la posición, necesidades, intereses y experiencias de las mismas mujeres que están en esa condición.

---

19 Artículo 209
En la fecha de vencimiento de la condena, la Oficina de Registro Penitenciario o quien haga sus veces dispondrá la excarcelación del interno que haya cumplido su condena, siempre que no registre proceso penal con mandato de detención u otra condena pendiente de cumplimiento.
En los casos que el juez disponga la libertad del procesado en procesos penales o en los de Hábeas Corpus, la Oficina de Registro Penitenciario o quien haga sus veces, bajo responsabilidad funcional y penal, dispondrá la excarcelación del interno, siempre que no registre mandato de detención vigente emanado de autoridad competente o condena a pena privativa de libertad efectiva, pendiente de cumplimiento.

20 Defensoría del Pueblo. Informe N° 154-2011/DP. "El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad ciudadana y la Política Criminal. Problemas, retos y perspectivas (2011)- Pág. 120.

En ese sentido, existe la necesidad de aplicar el enfoque de género en el ámbito penitenciario, dado que permite visualizar las inequidades construidas socioculturalmente y establecer los mecanismos de protección que requiere este grupo por la situación de especial vulnerabilidad y riesgo que afronta.

De acuerdo con los datos recabados por la Defensoría del Pueblo en agosto de 2023, la población penitenciaria (POPE) femenina es de 4 449 internas a nivel nacional, cifra que representa aproximadamente el 5% de la POPE total. No obstante, el sistema penitenciario se habría adaptado mínimamente a la realidad de las mujeres privadas de libertad, al dejar de lado aspectos importantes como la atención en salud especializada, trabajo, educación, asistencia psicológica con enfoque de género, condiciones apropiadas para gestantes y madres que viven con sus hijos y/o hijas en cárceles, entre otros.

Ilustración N° 6: SUPERVISIÓN A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS



Fuente: Defensoría del Pueblo

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha resaltado que el encarcelamiento afecta en mayor medida la salud emocional de las mujeres, puesto que se afecta el desarrollo de su vida familiar, lo cual conlleva a una inminente afectación emocional de las personas que se encuentran bajo su cuidado[21].

Cabe indicar que, en el ámbito latinoamericano, en Chile, una investigación desarrollada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales de Chile, ha señalado enorme preocupación sobre el particular[22] y, en este sentido, ha concluido que la población interna femenina sufre de una vulnerabilidad física y emocional que las afecta en mayor medida que a los hombres, sobre todo por la separación de sus familias, ya que las mujeres, en el contexto chileno, son asumidas como las principales responsables de la crianza de los hijos e hijas, por lo que la reclusión afecta en mayor medida su salud mental[23].

21 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Informe: Mujeres Privadas de Libertad en las Américas. https://www.oas. org/es/cidh/informes/pdfs/2023/Informe-Mujeres-privadas-libertad.pdf

22 Cárdenas, Ana. Informe Final del Proyecto "Mujeres y Cárcel: Diagnóstico de las Necesidades de Grupos Vulnerables en Prisión". Universidad Diego Portales–ICSO, Santiago de Chile. Diciembre del 2011.

23 Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. (2020). Informe de Adjuntía N° 003-2020-DP/ADHPD. Lima: Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2020-09813.

En el Perú, la situación no es diferente, pues el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha reconocido que la discriminación hacia las mujeres es generalizada; en muchos casos, erróneamente, normalizada y reforzada por estereotipos machistas[24]. Asimismo, nuestra idiosincrasia ha conllevado a que la mayoría de las madres autónomas[25] asuman sus deberes materno-filiales sin apoyo del padre, incluso encontrándose privadas de libertad, hecho que origina una mayor carga que puede mermar su estabilidad emocional durante su internamiento.

Por ende, se advierte que un grupo significativo de las mujeres privadas de libertad afronta otros factores por su condición de madres, lo que debería significar que el Estado preste un interés especial, no solo por la situación de la mujer en sí, sino de los hijos e hijas que dependen de ella a nivel económico y emocional y toma en cuenta que tanto ellas como sus descendientes constituyen una población vulnerable.

Normativa internacional y nacional sobre mujeres privadas de libertad en establecimientos penitenciarios

Los mandatos establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración y el "Plan de Acción de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos", señalan que "*los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable e indivisible de los Derechos Humanos universales*". A su vez, estos instrumentos establecen la garantía de la igualdad ante la ley y la vigencia de los derechos humanos sin discriminación alguna por razones de sexo, criterio reafirmado por los tratados referidos directamente a los derechos de las mujeres, los cuales, adicionalmente, reconocen el derecho de ellas a una vida sin violencia.

En adición, la legislación sobre personas privadas de libertad, como las "Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos" y normas similares, regulan el tratamiento de las mujeres en el sistema penitenciario con base en su rol como madres, prioriza las necesidades relacionadas con este aspecto y deja de lado otros temas relevantes para su vida y desarrollo.

En cuanto al ámbito regional, los "Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas", incorporan varias disposiciones referidas a las particularidades y necesidades de las mujeres privadas de libertad, entre ellas las siguientes:

- Acceso a una atención médica especializada que corresponda a sus características físicas y biológicas, así como a sus necesidades en materia de salud reproductiva: atención médica ginecológica y pediátrica (antes, durante y después del parto). Instalaciones especiales, personal y recursos apropiados para el tratamiento de las mujeres embarazadas y de las que acaban de dar a luz (Principio X).
- En caso se permita conservar a sus hijos menores de edad al interior de los establecimientos penitenciarios, se deben tomar las medidas necesarias para organizar guarderías infantiles con personal calificado y con servicios educativos, pediátricos y de nutrición para garantizar el interés superior de la niñez (Principio X).
- Provisión de artículos básicos para las necesidades sanitarias femeninas (Principio XII 2).
- Prohibición de las medidas de aislamiento para mujeres embarazadas y las madres que conviven con sus hijos al interior de los establecimientos penales (Principio XII 3).

Cabe precisar que el enfoque tradicional respecto a las mujeres privadas de libertad ha sido superado, en gran medida, con la aprobación de las "Reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes" (Reglas de Bangkok). Esta norma contiene 70 disposiciones que abordan diversos aspectos de la convivencia dentro del sistema penitenciario, que benefician tanto a las mujeres adultas como a las menores de 18 años; entre esas disposiciones están las siguientes:

- La situación de las reclusas bajo arresto y en espera de un juicio e indica las medidas no privativas de la libertad y las disposiciones posteriores a la sentencia.
- La situación de las reclusas que se encuentran cumpliendo sentencia, especificando la clasificación e individualización, el régimen penitenciario aplicable, las relaciones sociales y la atención después de su liberación. Se hace énfasis en lo siguiente:
  - El ingreso: registro y ubicación dentro del penal - La higiene personal
  - Los servicios de salud: chequeo médico preventivo al ingresar; atención médica especiada para su género; servicios de salud mental y servicios médicos; prevención del VIH y el SIDA; tratamiento; atención y apoyo; programas para tratar el abuso en el consumo de sustancias; suicidio y autolesión; servicios de salud

24 Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada mediante Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP
25 Denominación adoptada contemporáneamente para referirse a aquellas madres que se hacen cargo de su familia por sí solas.

preventivos; respuesta ante acusaciones de violación sexual, y otro tipo de violencia y tortura
    - La seguridad personal y medidas de seguridad en las instalaciones - La disciplina y castigo: instrumentos restrictivos, informar a las reclusas y escuchar sus quejas
    - El contacto con el mundo exterior
    - El personal institucional y su capacitación
- Las necesidades específicas de las mujeres embarazadas, las madres lactantes, las madres con hijos/as en edad dependiente, las menores de edad, las mujeres indígenas, las mujeres extranjeras, entre otras.
- La necesidad de investigar, planear y evaluar, despertar conciencia pública, compartir información y capacitar a los funcionarios penitenciarios.

La implementación de estas medidas exige acciones concretas para su efectiva vigencia. Por ello, debe considerarse la labor que corresponde no sólo a la entidad penitenciaria, sino también a otros sectores del Poder Ejecutivo, como los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Salud, Educación; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Trabajo y Promoción del Empleo; Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social; entre otros.

De otro lado, en el ámbito nacional sólo existen dos normas básicas que regulan el sistema penitenciario: el Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal (TUO), aprobado por Decreto Supremo N° 003-2021, con fecha 27 de febrero de 2021 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2003-JUS, del 11 de setiembre del 2003.

En cuanto al TUO del Código, respecto a las mujeres privadas de libertad, lo más resaltante es lo que sigue:
- La protección de la madre y su hijo (art. IX del Título Preliminar)
- Eximente de la madre y la gestante respecto de la sanción de aislamiento (art. 33°)
- Atención médica especializada para las mujeres en las especialidades de ginecología y obstetricia. Asimismo, atención para los hijos o las hijas de las internas (art. 90°).

En lo que se refiere al reglamento, las disposiciones sobre las mujeres están centradas principalmente en su rol de madre, de acuerdo con lo siguiente:
- La revisión corporal e íntima que se realiza a una mujer debe ser realizada por una profesional médica femenina, de preferencia, respetando sus derechos a la dignidad y la intimidad (art. 22°)
- Las mujeres que son gestantes o que tienen niños menores de 3 años deben ser separadas de las demás (art. 46°).
- Prohibición del uso de la sanción de aislamiento para las gestantes y las madres hasta después de los seis meses del parto (art. 80°)
- Preparación de una dieta especial para la madre gestante (art. 136°) y prohibición para que en los penales de mujeres ingrese personal masculino, salvo profesionales de tratamiento o de seguridad acompañados por personal femenino (art. 214°)
- Los penales donde existan mujeres con hijos o hijas deben contar con una guardería infantil o un área destinada especialmente para ellas (art. 215°).

Como se aprecia, ni el TUO del Código ni el Reglamento reconocen la necesidad de las mujeres privadas de libertad de acceder a labores educativas y de trabajo en consideración a sus necesidades específicas. Asimismo, en materia de salud, no se hacen precisiones respecto al tratamiento que requieren las mujeres, salvo en lo que se refiere a su rol reproductivo.

Por consiguiente, todavía existen vacíos en la legislación nacional acerca del tratamiento que corresponde a las mujeres privadas de libertad, situación que conlleva prácticas discriminatorias por parte de los operadores del sistema penitenciario, así como a la vulneración de sus derechos fundamentales, lo que muchas veces impide o dificulta la posibilidad de una adecuada reinserción social[26].

Este vacío normativo, también se evidencia en lo referido a la preocupación por el entorno familiar de las mujeres privadas de libertad. Si bien el Capítulo Quinto del Reglamento del Código de Ejecución Penal contempla la

26 Defensoría del Pueblo. Informe N° 154-2011/DP, "El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad ciudadana y la Política Criminal. Problemas, retos y perspectivas (2011)- Pág. 123.

salvaguarda de las relaciones entre internas/os y sus familiares, a través de la promoción del apoyo de organizaciones públicas y privadas; en la práctica, esto no resulta suficiente porque no cubre las necesidades de asistencia a sus hijas e hijos.

Por ende, se colige la existencia de dificultades en las actividades de soporte, fortalecimiento y restitución del vínculo familiar, pues se ha corroborado en las entrevistas realizadas la falta de registro de atenciones sociales brindadas a las hijas e hijos de las madres internas, advirtiéndose que estas se realizan esporádicamente, con énfasis en hijas e hijos menores de edad internados en los Centros de Acogimiento Residencial (CAR).

En tal sentido, esta situación evidencia la debilidad del sistema penitenciario en la prestación de los servicios de asistencia social para los familiares de las mujeres privadas de libertad; y, a su vez, la necesidad de personal o medidas que permitan extender el alcance de dicha asistencia, para garantizar los derechos de las hijas y los hijos de las internas y así asegurar el entorno familiar que tanto ellos, como sus progenitoras privadas de libertad requieren.

Resultados de la supervisión

De acuerdo con los resultados, se entrevistó a 4449 internas a nivel nacional, cifra que representa aproximadamente el 5% del total.

Respecto al tipo de documento de identidad, 4087 internas cuentan con Documento Nacional de Identidad (DNI) y representan el 91.86%. Por otro lado, 27 mujeres se encuentran indocumentadas, que representan el 0.61%. Además, 29 internas declararon un número de DNI que no guarda coherencia con la información obtenida de la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que representan el 0.65% y 50 mujeres tienen DNI pero no recuerdan su número, que representan el 1.12%.

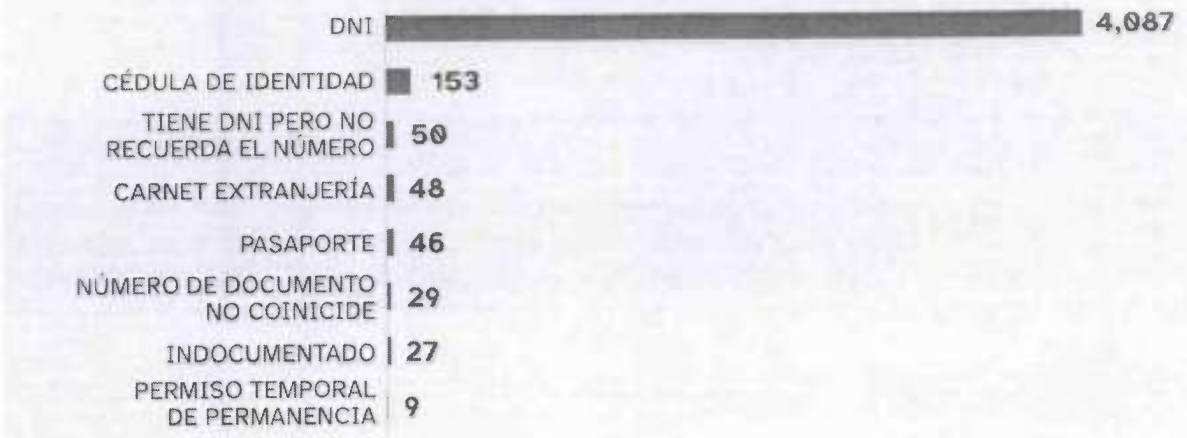
Las mujeres privadas de libertad de nacionalidad extranjera son un total de 256, de las cuales 153 tienen Cédula de Identidad, 48 carné de extranjería, 46 pasaporte y 9 permiso temporal de permanencia.

TABLA N° 26: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MUJERES

TIPO DE DOCUMENTO	N° INTERNAS	%
DNI	4087	91,86%
Cédula de identidad	153	3,44%
Tiene DNI pero no recuerda el número	50	1,12%
Carnet extranjería	48	1,08%
Pasaporte	46	1,03%
Número de documento no coincide	29	0,65%
Indocumentado	27	0,61%
Permiso temporal permanencia	9	0,20%
Total	4.449	100,00%

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

GRÁFICO N° 25: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MUJERES



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

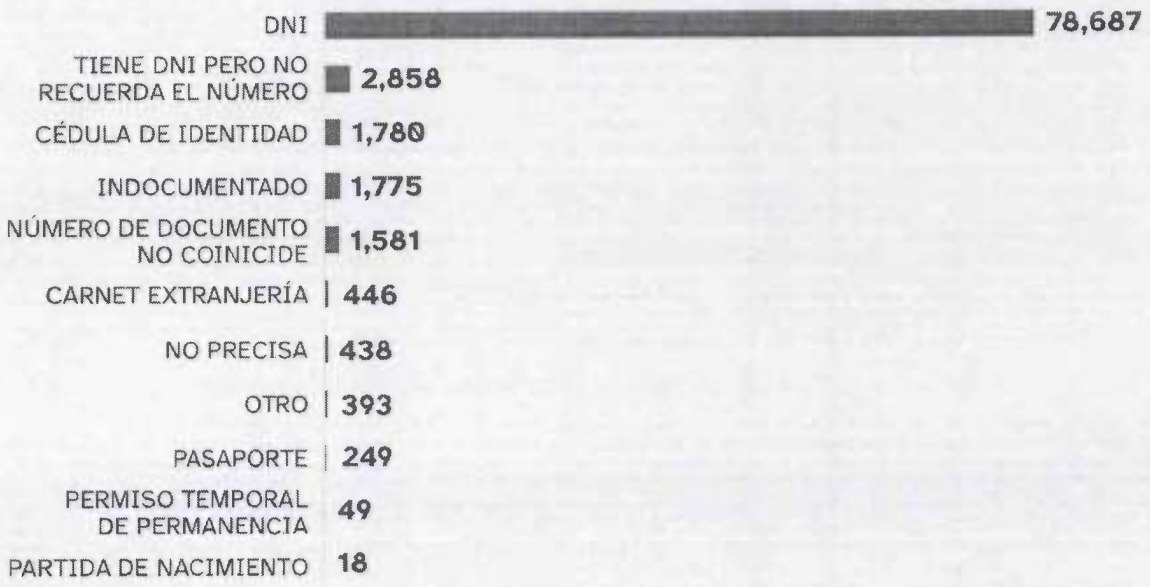
En cuanto a la población penitenciaria de varones, 78 687 tiene DNI, 2858 tiene DNI pero no recuerda el número, 1780 tiene cédula de identidad y 1775 son indocumentados, entre otros, como se muestra en la siguiente tabla.

TABLA N° 27: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE VARONES

Tipo de documento	N° Internos	%
DNI	78,687	89.14%
Tiene DNI pero no recuerda el número	2,858	3.24%
Cédula de identidad	1,780	2.02%
Indocumentado	1775	2.01%
Número de documento no coincide	1581	1.79%
Carnet extranjería	446	0.51%
No precisa	438	0.50%
Otro	393	0.45%
Pasaporte	249	0.28%
Permiso Temporal de Permanencia	49	0.06%
Partida de Nacimiento	18	0.02%
Total general	**88,274**	**100.00%**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

GRÁFICO N° 26: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE VARONES



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En cuanto al rango de edad de las mujeres en el establecimiento penitenciario, se observa una distribución diversa que abarca desde los 18 años hasta más de 65 años. La mayoría de las internas se encuentra en el grupo de edad de 25 a 29 años, con un total de 700 mujeres. Le sigue muy de cerca el grupo de 30 a 34 años, con 685 internas, y el grupo de 35 a 39 años, con 668 mujeres. Estos tres rangos de edad representan una proporción significativa de la población total e indican que la mayor parte de las internas están en sus años más productivos. En el rango de 40 a 44 años se encuentran 591 internas, seguido por el grupo de 45 a 49 años con 459 mujeres. La población de internas comienza a disminuir considerablemente a partir de los 50 años, con 343 mujeres entre 50 y 54 años, y 267 en el rango de 55 a 59 años. Entre las internas de 60 a 64 años, el número baja a 150, y finalmente, hay 85 mujeres de 65 años o más. Adicionalmente, 21 internas no precisan su edad. Esta amplia gama de edades plantea una diversidad de necesidades y situaciones personales.

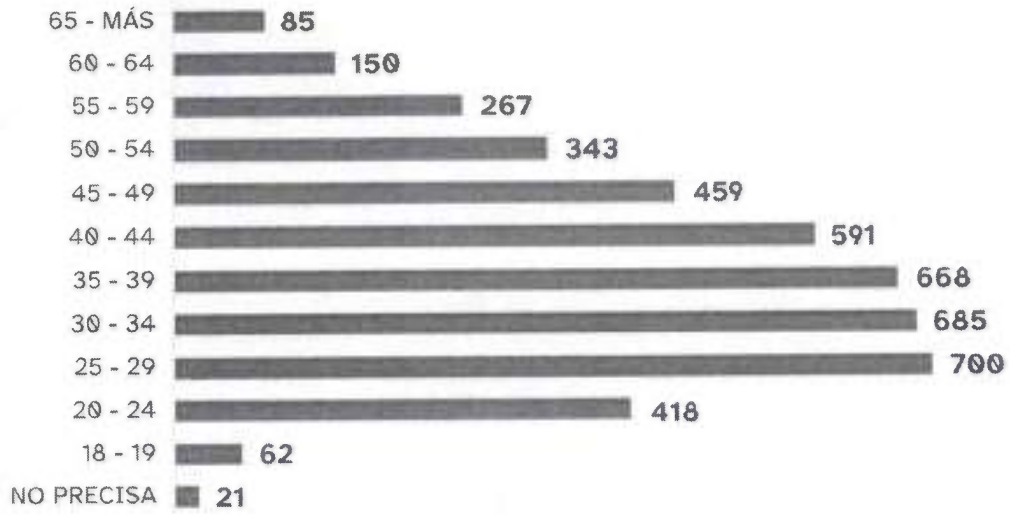
TABLA N° 28: RANGO DE EDAD DE LAS MUJERES EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

RANGO DE EDAD	N° DE INTERNAS
18-19	62
20-24	418
25-29	700
30-34	685
35-39	668
40-44	591
45-49	459
50-54	343
55-59	267
60-64	150

65-MÁS	85
No precisa	21
TOTAL	4.449

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

GRÁFICO N° 27: RANGO DE EDAD DE LAS MUJERES EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La mayoría de las internas proviene de Perú, con un total de 4208 mujeres, lo que representa el 94.58% de la población total. Esta cifra refleja una predominancia significativa de internas de nacionalidad peruana.

En cuanto a la nacionalidad de las internas extranjeras, 106 mujeres son de Venezuela y representan el 2.38% de la población, 60 son de Colombia, que representa el 1.35% y 20 son de Bolivia que representa el 0.45%. Asimismo, 15 internas son de Ecuador, lo que representa el 0.34% y 14 internas de México, que representan el 0.31%. Hay también pequeñas representaciones de internas, 5 de Malasia, 4 de Chile, 3 Brasil y 3 España, entre otras nacionalidades.

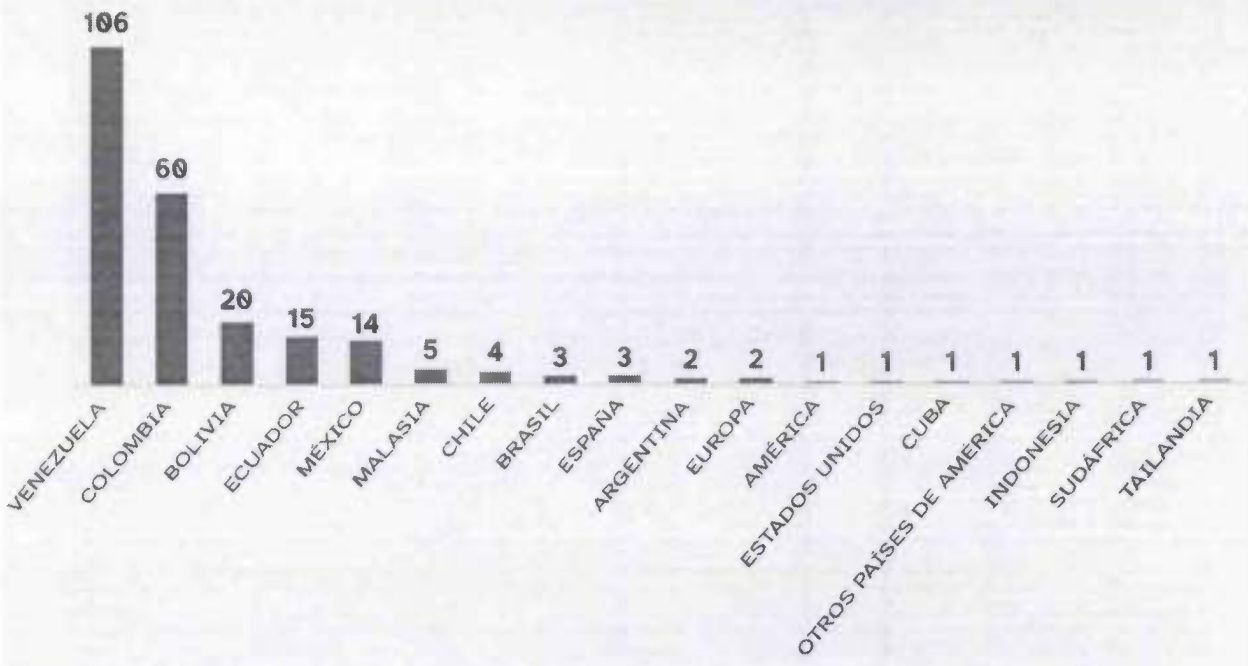
TABLA N° 29: INTERNAS POR EL PAÍS DE PROCEDENCIA

PAÍS DE PROCEDENCIA	N° INTERNOS	%
Perú	4208	94,58%
Venezuela	106	2,38%
Colombia	60	1,35%
Bolivia	20	0,45%
Ecuador	15	0,34%
México	14	0,31%
Malasia	5	0,11%
Chile	4	0,09%
Brasil	3	0,07%

España	3	0,07%
Argentina	2	0,04%
Europa	2	0,04%
América	1	0,02%
Cuba	1	0,02%
Estados unidos	1	0,02%
Indonesia	1	0,02%
Otros países de América	1	0,02%
Sudáfrica	1	0,02%
Tailandia	1	0,02%
Total	4449	100,00%

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

GRÁFICO N° 28: INTERNAS EXTRANJERAS POR EL PAÍS DE PROCEDENCIA

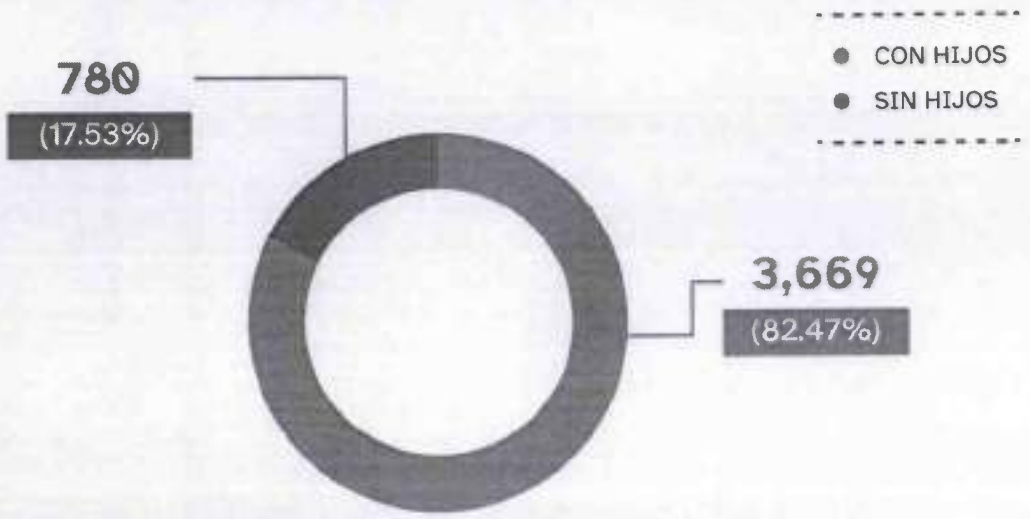


Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Mujeres privadas de libertad con hijos

En cuanto a las mujeres privadas de libertad que son madres, tenemos que 3 669 mujeres privadas de libertad señalaron tener hijos, vale decir que casi el 4% de la población penitenciaria total son madres. De esa cifra, en las supervisiones realizadas se pudo identificar que 112 vivían con sus hijas e hijos en cárceles, por lo que el 0.1% de tal población son mujeres que viven con sus hijas e hijos en establecimientos penitenciarios.

GRÁFICO N° 29: ENTORNO FAMILIAR DE LAS MUJERES PERUANAS PRIVADAS DE LIBERTAD



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Aunado a ello, los traslados al nosocomio para que las mujeres embarazadas lleven sus controles prenatales están sujetos y condicionados a la cantidad de internos (en el caso de los penales mixtos) o internas que tengan programadas diligencias médicas en hospitales, ya que no se cuenta con un vehículo exclusivo para estos casos; pese a que dichos controles durante el embarazo necesitan realizarse mensual o hasta semanalmente[27].

Cabe indicar, que la normativa penitenciaria prevé el derecho de las internas a permanecer con sus hijos menores de 3 años en los establecimientos penitenciarios, medida que implica que cuenten con un área adecuada para niñas y niños, reciban atención médica apropiada, así como el servicio de asistencia social[28], sin dejar de lado que, en general, madres e hijos debe gozar de la protección del sistema penitenciario[29].

Ahora bien, de acuerdo con los datos recabados durante la supervisión nacional, solo 0.26% de la POPE total son mujeres extranjeras, puesto que de 3 624 extranjeras privados de libertad, 241 son mujeres[30]; de ellas, 194 tienen hijos o hijas.

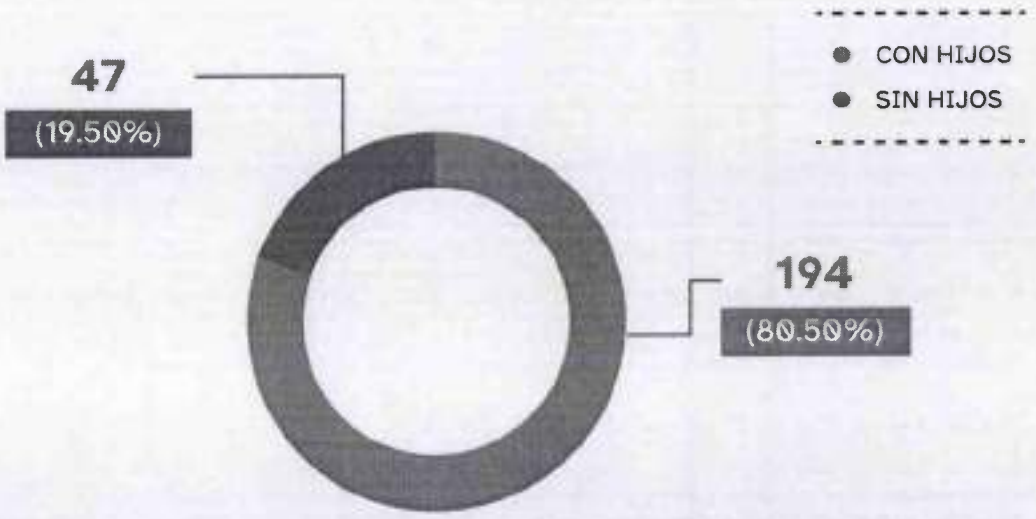
27 Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. (2018). Op. cit.

28 REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL
Artículo 8.- La protección de las internas gestantes -incluyendo el alumbramiento- e hijos menores que convivan con ellas, conlleva una atención médica en establecimientos públicos de salud o en ambientes adecuados del establecimiento penitenciario. Asimismo, se promoverán programas de salida para los niños.
Artículo 12.- Las mujeres privadas de libertad tienen derecho a permanecer en el Establecimiento Penitenciario con sus hijos hasta que éstos cumplan tres años de edad, oportunidad en la cual serán entregados a la persona que corresponda de conformidad con la normatividad sobre la materia, o en su defecto se procederá por la vía legal correspondiente a la colocación familiar u otra institución tutelar conforme a lo dispuesto por el Código de los Niños y Adolescentes.

29 REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL
Artículo 138.- Además de las funciones establecidas en los artículos 83 y siguientes del Código, son funciones del trabajador social:
(...)
138.3 Brindar atención asistencial a los hijos menores de tres años de las internas, a fin de garantizar su normal desarrollo de su personalidad.
CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL
Artículo IX.- Protección de madres internas e hijos
La interna gestante o madre y los hijos menores de ésta que conviven con ella gozan de amplia protección del Sistema Penitenciario

30 La mayoría, son mujeres que cumplen condena por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas.

GRÁFICO N° 30: ENTORNO FAMILIAR DE LAS MUJERES EXTRANJERAS PRIVADAS DE LIBERTAD



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Al respecto, podemos señalar que esta población afronta una triple vulnerabilidad en los establecimientos penitenciarios, ya que a la privación de libertad se suman los factores de género y de nacionalidad; en razón a que, las mujeres, los extranjeros y las personas privadas de libertad, se encuentran consideradas como poblaciones vulnerables y, por ende, las mujeres privadas de libertad que son extranjeras tienen una triple vulnerabilidad[31], circunstancias en las que deben asumir la maternidad desde el establecimiento penitenciario donde se encuentren cumpliendo condena.

En atención a ello, podemos ver que muchas de las mujeres extranjeras en cárceles no tienen familiares que radiquen en Perú, por lo que no cuentan con apoyo moral ni económico para asumir su maternidad -desde la gestación y el nacimiento-, lo cual también repercute en el cuidado del niño o niña cuando egresan de los establecimientos penitenciarios al cumplir los 3 años de edad.

Por lo tanto, los hijos e hijas de mujeres extranjeras privadas de libertad suelen estar expuestos a un estado de necesidad aún más crítico, en tanto, la carencia de un núcleo familiar consolidado, sumado al hecho de encontrarse en otro país donde no encuentra el apoyo suficiente para afrontar condiciones adversas, pueden predisponer a los menores de edad a incidir en la delincuencia desde muy temprana edad, a fin de paliar la precariedad.

Visita íntima

La sexualidad es un aspecto también problemático al referirnos a la mujer, toda vez que no reviste mayor problema cuando se trata de varones. Sin embargo, en el caso del grupo femenino, la libertad sexual reproductiva se ve entorpecida por prejuicios de los propios agentes penitenciarios que se encuentran a cargo de la seguridad de las cárceles y, por tanto, supervisan el tipo de visitas que pueden recibir las internas con un sesgo sexista.

31 Según datos de ACNUR, las mujeres venezolanas refugiadas, que representan el 58 por ciento de la población venezolana en el Perú, enfrentan de manera cotidiana diversas manifestaciones de violencia y discriminación. Además, coexisten simultáneamente, por lo menos, dos factores de exclusión como son el género y la nacionalidad, junto a otros como pobreza, discapacidad, lo que agudiza la situación de vulnerabilidad y riesgo que las mujeres desplazadas enfrentan en nuestro país.
ACNUR - Agencia de la ONU para los Refugiados. (14 de febrero de 2023). Perú: ACNUR y Defensoría del Pueblo presentan muestra fotográfica sobre situación de mujeres refugiadas y migrantes. Obtenido de UNHCR - ACNUR: https://www.acnur.org/noticias/ comunicados-de-prensa/peru-acnur-y-defensoria-del-pueblo-presentan-muestra-fotografica

De este modo, las mujeres privadas de libertad no reciben las mismas facilidades que un interno, por lo que se han verificado casos de establecimientos penitenciarios que ni siquiera cuentan con un adonisterio y no se procura la habilitación de un ambiente apropiado para que las internas puedan recibir la visita íntima que les corresponde. Aunado a ello, pueden recibir llamados de atención si quedan embarazadas cuando se encuentran privadas de libertad, lo cual vulnera directamente su libertad sexual reproductiva.

Otro problema que hemos conocido mediante el testimonio de las internas entrevistadas, es la discriminación que sufren aquellas que pertenecen a la comunidad LGTBI, en el sentido que se les exige que la visita a recibir sea su cónyuge o conviviente de sexo masculino, específicamente, un varón que tenga un vínculo sentimental estable con ellas; no permitiéndose visita íntima de parejas sentimentales del mismo sexo (femenino), lo que las obliga a declarar que son solo amistades y, por tanto, no se les facilita un espacio privado.

El Tribunal Constitucional ha reconocido en su STC 1575-2007-PHC/TC que la visita, más que un beneficio es un derecho[32] que debe garantizarse; y es que, la limitación de la libertad de las y los internos no implica una restricción a su libertad sexual, ni mucho menos a su reproducción.

Atención médica para mujeres

De la supervisión nacional realizada a las mujeres privadas de libertad, tanto en establecimientos penitenciarios mixtos, como aquellos exclusivamente para mujeres, se ha podido corroborar aquello que se ha detectado en las visitas realizadas en las cárceles de Lima Metropolitana, esto es, que en todos los establecimientos penitenciarios solo cuentan con médico general que afronta la atención no solo de la totalidad de la POPE, sino que además tiene que hacer las veces de especialista de acuerdo al caso clínico que se presente, mientras se realiza la junta médica para diligencia de traslado a hospital.

Esto quiere decir que la carencia de especialistas que laboran en cárceles afecta no solo a la población femenina cuando requieren un chequeo propio de su condición femenina (considera incluso aquellos casos de mujeres gestantes), sino que el propio médico se ve obligado a asumir una carga que no le corresponde, no solo por la cantidad de atenciones, sino por las competencias que debe desarrollar, pese a que ello debe ser inmediatamente atendido por un especialista en la materia.

Así, es innegable que el área de salud requiere de la contratación de más profesionales de la salud que puedan afrontar la carga excesiva de labores que implica la función dentro de un establecimiento penitenciario (tanto la labor asistencial, como la administrativa), se considera dentro de dicha contratación también a profesionales con especialidad; por lo que se debe tener en cuenta el índice de patologías presentes en la población penitenciaria, así como los grupos de especial protección, esto es, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, sin dejar de lado a los niños y niñas que acompañan a sus madres en los establecimientos penitenciarios.

Además, se han identificado diversos tipos de enfermedades entre las internas, 240 señaló tener diabetes, 46 TB, 32 VIH, 22 hepatitis B y 1170 otras enfermedades.

TABLA N° 30: TIPO DE ENFERMEDAD DE LAS INTERNAS

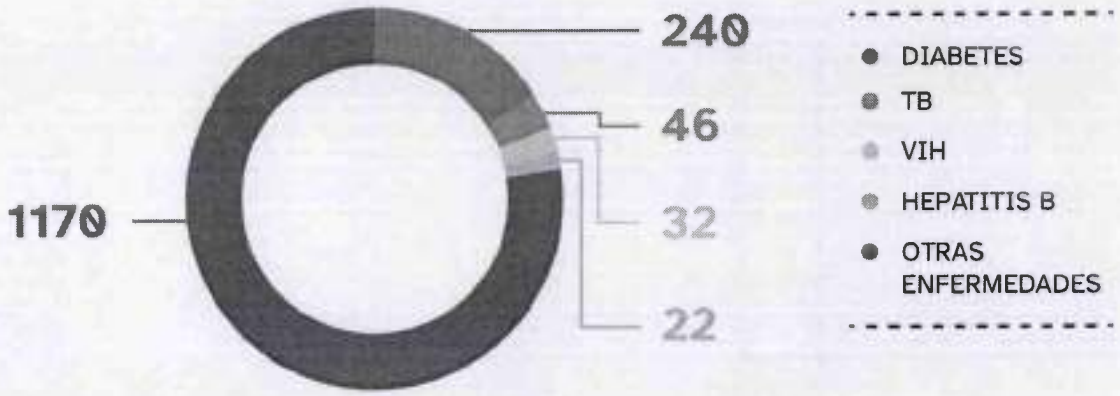
TIPO DE ENFERMEDAD POR RANGO DE EDAD	
Diabetes	240
TB	46
VIH	32

32 STC 1575-2007-PHC/TC
"25. La relación sexual entre el interno y su pareja es uno de los ámbitos del libre desarrollo de la personalidad que continúa protegido aún en prisión, a pesar de las restricciones legítimas conexas a la privación de la libertad. Y es que, tratándose de personas privadas de la libertad, se hace esencial para los internos y su pareja el poder relacionarse en el ámbito sexual ya que este tipo de encuentros, además de tener como sustrato un aspecto físico, trasciende al psicológico y al ser positivo repercute en el estado de bienestar de la pareja".

Hepatitis b	22
Otra enfermedad	1170

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

GRÁFICO N° 31: TIPO DE ENFERMEDAD DE LAS INTERNAS



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

3.3.2. Adultos mayores

La Constitución reconoce una especial protección a las personas adultas mayores, por lo que las políticas de Estado deben ser adaptadas para garantizar la prestación de programas y servicios que garanticen el goce y ejercicio de sus derechos bajo un enfoque que concibe a la persona mayor como sujeto de derecho.

Por ello, la Defensoría del Pueblo considera a las personas adultas mayores como uno de los grupos de atención prioritaria y sus intervenciones se encaminan a la protección de sus derechos a través de las siguientes acciones: supervisión de la administración estatal, promoción de derechos, fortalecimiento de capacidades y coordinación interinstitucional.

Nuestras acciones se desarrollan principalmente en los siguientes temas: derecho a una vida digna y libre de violencia, derecho a la pensión, salud, derecho a la participación, acceso a programas sociales y servicios de cuidados. Una persona adulta mayor sujeta a una medida restrictiva de la libertad merece toda la atención por parte del Estado en hacer prevalecer sus derechos, por su condición de vulnerabilidad, máxime si está en condición de procesada, debiéndose dar la celeridad procesal respectiva en resolver de su caso con la finalidad de alcanzar justicia en vida.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 30490, denominada Ley de la Persona Adulta Mayor, se entiende por persona adulta mayor a aquella que tiene 60 años o más de edad. Del mismo modo, a nivel regional la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, establece también que persona mayor es aquella de 60 años o más.

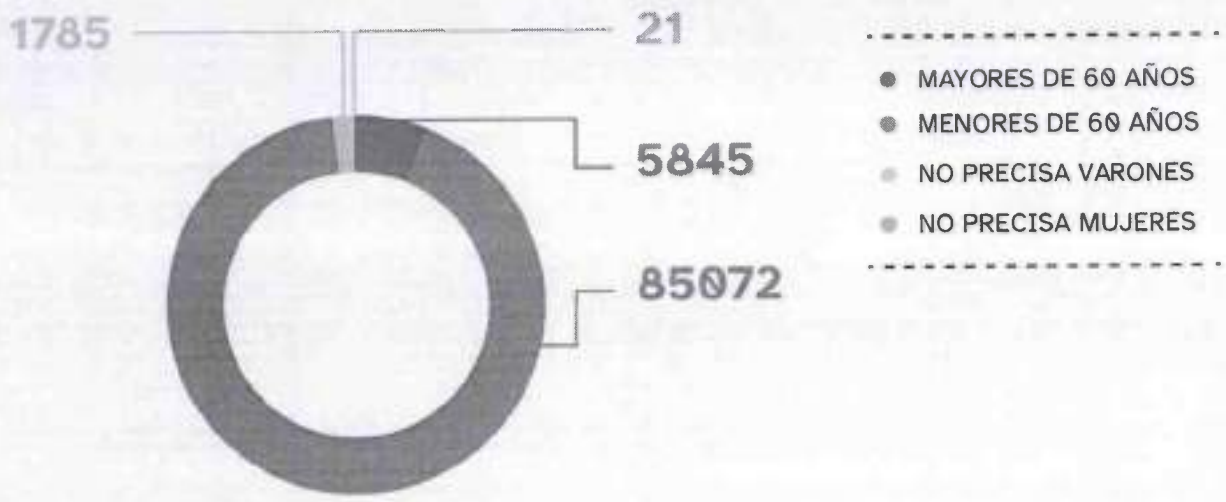
Y es que, el incremento de la edad puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, en relación a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia[33]; como suele ser el cautiverio[34], ya que la privación de la libertad, pese a que se deriva de

33 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
34 De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, cautiverio se define como "**2.** m. Vida en la cárcel."

la ejecución de un mandato judicial, no deja de caracterizarse por mantener cautiva a la persona que cumple la sentencia.

Frente a esta situación resulta imperativo que las autoridades cuenten con lineamientos claros y precisos para que cumplan su ineludible deber de brindar una especial protección a las personas adultas mayores cuando de tener acceso a la justicia se refiere, todo ello en armonía con los estándares internacionales en derechos humanos[35].

GRÁFICO N° 32: ADULTOS MAYORES



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En virtud de ello, se ha identificado 5845 personas adultas mayores privadas de libertad, las cuales deben afrontar las mismas circunstancias precarias del sistema penitenciario al igual que el resto de los internos, lo más crítico es el hacinamiento que repercute en todos los servicios penitenciarios, como lo es el área de salud y las atenciones especializadas que requiere una persona de avanzada edad.

En efecto, las personas adultas mayores privadas de libertad se encuentran en una situación más crítica, su atención en salud resulta más apremiante; y, sin embargo, se ve afectada por las propias circunstancias de la privación de libertad. De modo que, resulta necesario velar por la debida y oportuna atención médica de los adultos mayores, si se considera además que suelen presentar comorbilidades por el propio avance de su edad.

3.3.3. Personas con discapacidad

De acuerdo con las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, se entiende por *discapacidad* la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social[36].

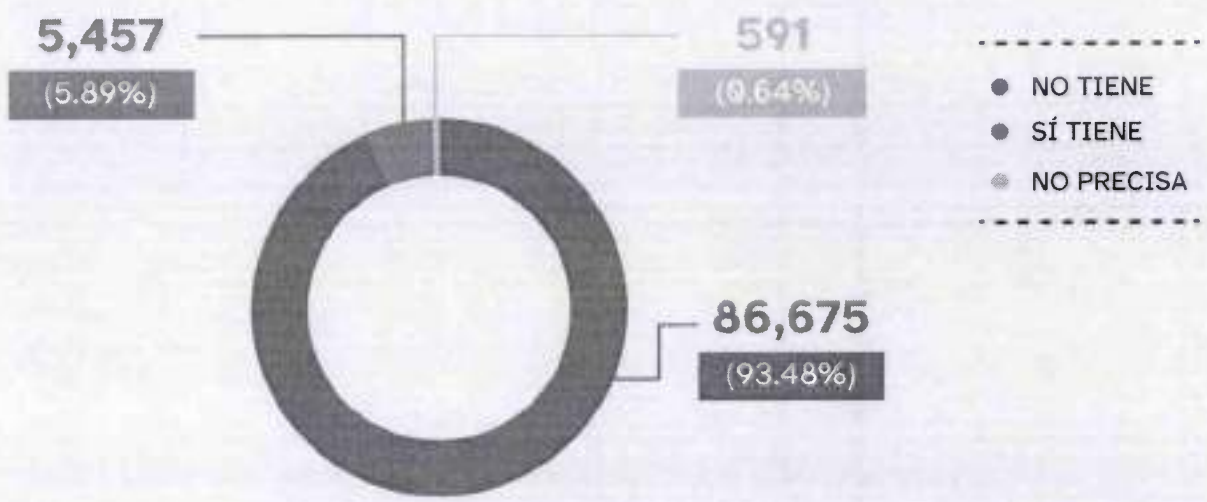
En tal sentido, las instituciones públicas y privadas se encuentran en la obligación de establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios públicos requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación.

35 Informe de Adjuntía n.° 001-2022-DP/ADHPD "Situación de las personas adultas mayores sometidas a restricciones de libertad"
36 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

De modo que, la privación de libertad no tiene por qué exceptuar el trato digno de las personas, más aún cuando requieren de una atención diferenciada debido a su especial condición de vulnerabilidad, como los casos de personas con discapacidad.

En ese sentido, todo establecimiento penitenciario debería contar con una infraestructura adecuada para el desplazamiento y realización de actividades de las personas con discapacidad. Así también, se espera que el personal del INPE (entiéndase, técnicos de seguridad, trabajadores administrativos y personal de tratamiento) cuente con una sólida formación en relación a las personas con discapacidad, a fin de que su condición no limite u obstaculice su tratamiento penitenciario. Al respecto, se ha verificado que 5457 internas e internos tienen alguna discapacidad, lo cual representa el 5.89% de la población penitenciaria.

GRÁFICO N° 33: PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

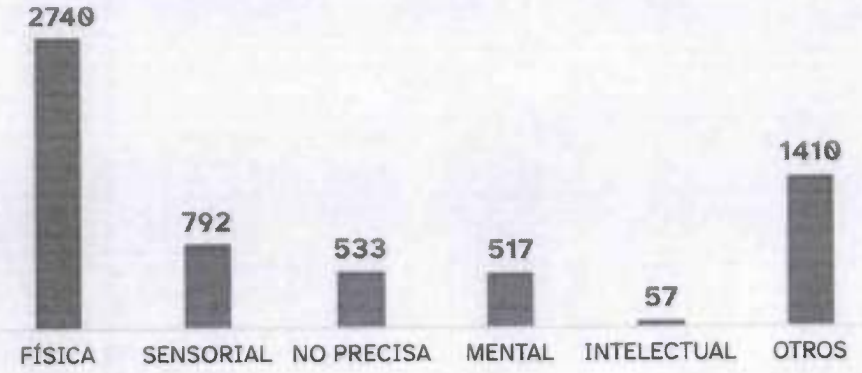
Además de lo indicado hemos advertido que 2740 tienen discapacidad física, 792 sensorial, 517 mental, 57 intelectual y 1410 otro tipo de discapacidad.

TABLA N° 31: TIPO DE DISCAPACIDAD POR GRUPO ETARIO

Tipo de discapacidad	18-30	31-40	41-50	51-60	61-MÁS	No precisa	Total general
Física	391	644	662	558	453	32	2,740
Sensorial	80	136	186	193	191	6	792
Mental	144	137	105	63	45	23	517
Intelectual	12	18	20	4	3	0	57
Otros	227	340	327	276	219	21	1,410

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

GRÁFICO N° 34: TIPO DE DISCAPACIDAD



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

3.3.4. Extranjeros y extranjeras

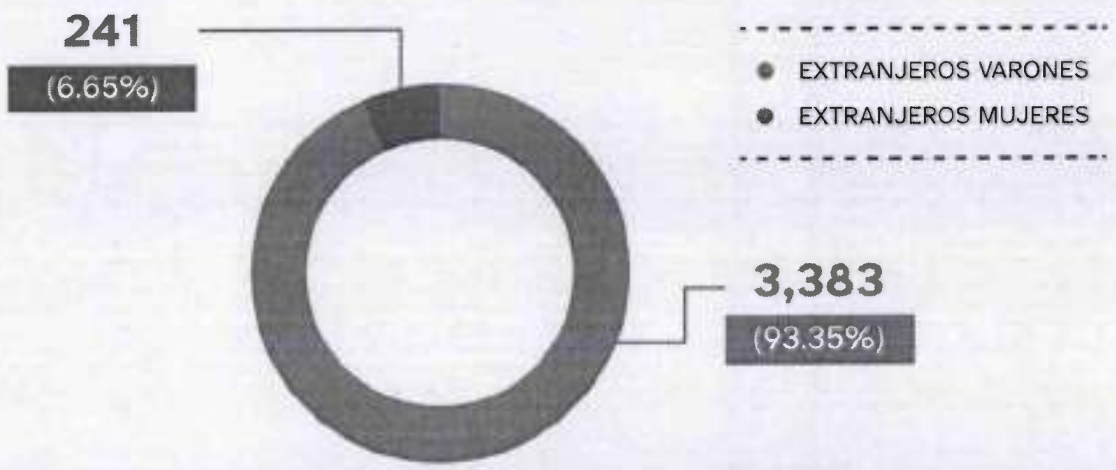
La población extranjera dentro de los establecimientos penitenciarios suele enfrentar barreras lingüísticas y culturales significativas que obstaculizan su capacidad para comprender sus derechos y navegar por el sistema legal y penitenciario del país anfitrión. Esta falta de comprensión puede exponerlos a un mayor riesgo de abusos por parte del personal penitenciario o de otros reclusos, así como dificultar su acceso a servicios básicos como atención médica, asesoramiento legal y comunicación con sus familias.

Además, algunos extranjeros detenidos han huido de situaciones de violencia, persecución o pobreza extrema en sus países de origen, lo que los coloca en una posición de vulnerabilidad adicional dentro de los establecimientos penitenciarios. La experiencia previa de trauma y abuso puede verse exacerbada por las condiciones de encarcelamiento, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático.

Otro factor que contribuye a la vulnerabilidad de la población extranjera en las cárceles es su estatus legal precario. Muchos extranjeros detenidos se encuentran en proceso de solicitud de asilo o enfrentan la posibilidad de deportación, lo que genera una incertidumbre adicional sobre su futuro y agrava su estrés emocional y psicológico. Esta incertidumbre también puede dificultar su participación en programas de rehabilitación y reinserción, lo que aumenta el riesgo de reincidencia una vez que sean liberados.

La población extranjera en los establecimientos penitenciarios es considerada una población vulnerable debido a una combinación de factores que incluyen barreras lingüísticas y culturales, experiencias previas de trauma y abuso, y un estatus legal precario. Garantizar el respeto de los derechos fundamentales de estos individuos dentro de los centros penitenciarios requiere un enfoque sensible a sus necesidades particulares y una supervisión rigurosa por parte de las autoridades competentes y los defensores de los derechos humanos. Del total de la población penitenciara extranjera 3383 son hombres y 241 mujeres.

GRÁFICO N° 35: POBLACIÓN PENITENCIARIA EXTRANJERA DE ACUERDO AL GÉNERO



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

RESPECTO A LA POBLACIÓN FEMENINA EXTRANJERA

La población penitenciaria femenina muestra una amplia diversidad en cuanto a su país de procedencia. Destaca que el país con mayor representación es Venezuela, con un total de 106 internas, lo que evidencia una predominancia de mujeres peruanas dentro del sistema penitenciario. Le siguen Colombia con 60, Bolivia con 20 y Ecuador con 15, entre otras nacionalidades.

TABLA N° 32: POBLACIÓN FEMENINA POR NACIONALIDAD

Nacionalidad	N° Internas	%
PERU	4,208	94.58%
VENEZUELA	106	2.38%
COLOMBIA	60	1.35%
BOLIVIA	20	0.45%
ECUADOR	15	0.34%
MEXICO	14	0.31%
MALASIA	5	0.11%
CHILE	4	0.09%
BRASIL	3	0.07%
ESPANA	3	0.07%
ARGENTINA	2	0.04%
EUROPA	2	0.04%
AMERICA	1	0.02%
INDONESIA	1	0.02%
SUDAFRICA	1	0.02%
TAILANDIA	1	0.02%

OTROS PAISES DE AMERICA	1	0.02%
CUBA	1	0.02%
ESTADOS UNIDOS	1	0.02%
Total general	**4,449**	**100.00%**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TABLA N° 33: POBLACIÓN FEMENINA EXTRANJERA POR NACIONALIDAD

Extranjeras	N° Internas	%
VENEZUELA	106	43.98%
COLOMBIA	60	24.90%
BOLIVIA	20	8.30%
ECUADOR	15	6.22%
MEXICO	14	5.81%
MALASIA	5	2.07%
CHILE	4	1.66%
BRASIL	3	1.24%
ESPANA	3	1.24%
ARGENTINA	2	0.83%
EUROPA	2	0.83%
AMERICA	1	0.41%
INDONESIA	1	0.41%
SUDAFRICA	1	0.41%
TAILANDIA	1	0.41%
OTROS PAISES DE AMERICA	1	0.41%
CUBA	1	0.41%
ESTADOS UNIDOS	1	0.41%
Total general	**241**	**100.00%**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Esta diversidad refleja la complejidad de los procesos migratorios y la interseccionalidad de factores que pueden llevar a la población femenina a entrar en contacto con el sistema penitenciario, en donde se destaca la necesidad de abordar sus necesidades específicas con enfoques culturalmente sensibles y adaptados a su contexto de origen.

RESPECTO A LA POBLACION MASCULINA EXTRANJERA

La población masculina extranjera privada de libertad presenta una diversidad significativa en cuanto a su país de origen, Venezuela lidera la lista con 2371 internos. Esta cifra refleja la compleja situación socioeconómica y política en Venezuela, que ha llevado a un gran número de sus ciudadanos a buscar refugio, algunos de los cuales han terminado en el sistema penitenciario de otros países

Después de Venezuela, Colombia y Ecuador son los siguientes países con mayor representación, con 533 y 195 internos respectivamente. Estas cifras subrayan la migración significativa desde países vecinos de América Latina hacia otras naciones, ya sea por motivos económicos, políticos o de seguridad. Además, la presencia de internos procedentes de una amplia gama de países, incluidos Estados Unidos (6), China (8) e India (1), ilustra la complejidad y la globalidad de los flujos migratorios que impactan en el sistema penitenciario a nivel mundial.

Las visitas que reciben las personas extranjeras son muy escasas; por tanto, el INPE ha optado por darles preferencia en el uso de computadoras para la comunicación mediante videollamadas, de esta manera promover las comunicaciones cuando estas son beneficiosas para el interno y no perjudiciales para su tratamiento penitenciario.

TABLA N° 34: POBLACION MASCULINA EXTRANJERA POR NACIONALIDAD

Nacionalidad	N° Internos	%
PERU	84,891	96.17%
VENEZUELA	2,371	2.69%
COLOMBIA	533	0.60%
ECUADOR	105	0.12%
MEXICO	88	0.10%
BRASIL	45	0.05%
BOLIVIA	35	0.04%
OTROS PAISES DE AMERICA	32	0.04%
CHILE	28	0.03%
ARGENTINA	27	0.03%
ESPANA	14	0.02%
REPUBLICA DOMINICANA	10	0.01%
CHINA	8	0.01%
PAISES BAJOS	6	0.01%
ESTADOS UNIDOS	6	0.01%
MALASIA	5	0.01%
FRANCIA	5	0.01%
ITALIA	4	0.00%
LITUANIA	4	0.00%
AMERICA	4	0.00%
CUBA	4	0.00%
PORTUGAL	3	0.00%
NIGERIA	3	0.00%
REINO UNIDO	3	0.00%
ISRAEL	3	0.00%
DOMINICA	3	0.00%
OTROS PAISES DE EUROPA	3	0.00%
JAPON	3	0.00%
SUDAFRICA	2	0.00%
EUROPA	2	0.00%
TURQUIA	2	0.00%
BULGARIA	2	0.00%
POLONIA	2	0.00%
URUGUAY	1	0.00%
MARRUECOS	1	0.00%
LIBANO	1	0.00%
IRAK	1	0.00%

TANZANIA	1	0.00%
OTROS PAISES DEL ASIA	1	0.00%
INDIA	1	0.00%
CHECOSLOVAQUIA	1	0.00%
SINGAPUR	1	0.00%
ALEMANIA	1	0.00%
SURINAME	1	0.00%
BELGICA	1	0.00%
CANADA	1	0.00%
VIETNAM	1	0.00%
LIBERIA	1	0.00%
QATAR	1	0.00%
ALBANIA	1	0.00%
JORDANIA	1	0.00%
Total general	**88,274**	**100.00%**

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

3.3.5. Poblaciones indígenas

De acuerdo con la Base de datos de pueblos indígenas u originarios[37], dichas poblaciones son aquellas que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado y que tienen lugar en este país o región, conserva toda o parte de sus instituciones distintivas. Además, presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria; a la fecha, se tiene información de 55 pueblos indígenas en el Perú: 51 de la Amazonía y 4 de los Andes.

Las personas integrantes de las *comunidades indígenas* pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos fuera de su entorno habitual, ya sea por cuestiones de lengua, idiosincrasia u otros aspectos que limitan el desenvolvimiento de los pobladores indígenas y, por ello, el Estado se encuentra en la obligación de adecuar suficientemente los procesos y sistemas ante los cuales necesita interactuar el poblador o pobladora indígena, al promover condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud sus derechos.

Por tanto, la privación de libertad de algún integrante de las comunidades indígenas de por sí resulta excepcional, considera su derecho consuetudinario; no obstante, cuando el Poder Judicial dicta sentencia de pena privativa de libertad respecto de un poblador o pobladora indígena, la institución ejecutora de dicha decisión (léase, INPE) debe garantizar un trato adecuado a estas poblaciones, toda vez que el idioma no es el único aspecto que divide la interacción con el resto de la población penitenciaria, por lo que las capacitaciones constantes son una cuestión imperativa para que el personal penitenciario pueda velar por los derechos de las comunidades indígenas que se encuentran cumpliendo condena en un establecimiento penitenciario.

TABLA N° 35: IDIOMA EN EL QUE SE COMUNICA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

Idioma que habla	NO PRECISA	18-30	31-40	41-50	51-60	61 a más	Total general
CASTELLANO	1,784	27,716	28,479	19,132	10,223	5,107	92,441
QUECHUA	14	398	700	656	417	247	2,432

37 Recuperado el 26 de marzo de 2024 de la plataforma virtual de la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, disponible en:
https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos-indigenas#:~:text=Los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20u%20originarios,una%20identidad%20ind%C3%ADgena%20u%20originaria.

INGLES	5	25	42	40	16	12	140
AYMARA	0	21	28	45	26	20	140
ASHANINKA	0	7	9	6	3	5	30
AWAJUN	0	2	9	6	5	2	24
LENGUA DE SEÑAS	0	5	6	4	5	1	21
OTROS	13	135	148	118	69	27	510

3.3.6. Comunidad LGTBI

La protección de los derechos humanos, en particular de aquellos grupos históricamente marginados y vulnerables, es un principio fundamental consagrado en el derecho internacional. Los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen claramente que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a la igualdad ante la ley y a la protección contra la discriminación. En este contexto, la población LGTBI representa un segmento especialmente vulnerable de la sociedad, enfrenta discriminación y violencia en diversos ámbitos, que incluye al sistema penitenciario.

Es importante que los Estados reconozcan y aborden las necesidades específicas de la población LGTBI dentro de sus sistemas penitenciarios, como desarrolla el Manual sobre reclusos con Necesidades Especiales de la Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito[38]. La prisión, al ser una institución donde se ejerce un control total sobre la vida de los individuos, puede exacerbar la vulnerabilidad de las personas LGTBI si no se implementan medidas adecuadas de protección y apoyo. La falta de políticas y prácticas inclusivas puede llevar a situaciones de discriminación, acoso e incluso violencia física o sexual contra las personas LGTBI en prisión, lo que constituye una violación flagrante de sus derechos humanos.

En este sentido, los Estados tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas bajo su custodia, que incluye a aquellas que son parte de la comunidad LGTBI. Esto implica no solo la implementación de políticas antidiscriminatorias y programas de sensibilización dentro de las instituciones penitenciarias, sino también la adopción de medidas concretas para proteger a las personas LGTBI de la violencia y el abuso. Además, los Estados deben garantizar el acceso equitativo a servicios de salud física y mental, así como a programas de rehabilitación y reinserción social, que debe tener en cuenta las necesidades específicas de esta población.

La protección de los derechos de la población LGTBI dentro del sistema penitenciario no solo es un imperativo moral, sino también una obligación legal en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Esto no solo contribuirá a promover la igualdad y la justicia, sino que también fortalecerá la integridad y la legitimidad del sistema de justicia penal en su conjunto. Es bien sabido que las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI se encuentran en un grado de vulnerabilidad mayor que otros grupos de especial protección, toda vez que se suman los crímenes de odio contra dicho grupo minoritario, lo que los coloca en una condición de desprotección al compartir espacios cerrados con otras personas que pueden resultar homófobas, transfóbicas u otros similares.

Resulta necesario, por tanto, que se difunda constantemente una cultura de respeto a la persona, sobre todo de sus derechos fundamentales en toda circunstancia. De acuerdo al Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex)[39], entre 2015 y 2016, se documentaron ocho asesinatos, 43 incidentes que afectaron la seguridad personal de personas LGTBI y 28 casos de discriminación basada en la orientación sexual en nuestro país. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo hemos advertido[40] que las agresiones contra la vida e integridad de las personas LGTBI constituyen un tipo de violencia de género y son la forma más

38 OC 29/22 de la Corte IDH, Enfoques diferenciados aplicables a las personas LGBTI privadas de libertad, párrafo 239 citando a UNODC, Manual sobre Reclusos con necesidades especiales, p. 116.

39 Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mpfn/informes-publicaciones/2829986-caracteristicas-criminologicas-de-las-muertes-dolosas-de-personas-lgtb-en-el-peru-2012-2021

40 Disponible en: "A 2 años del Informe Defensorial N° 175: Estado actual de los Derechos de las Personas LGTBI" https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Informe-Defensorial-N%C2%B0-007-2018-DPADHPD-%E2%80%9CA-2-a%C3%B1os-del-Informe-Defensorial-N%C2%B0-175.-Estado-actual-de-los-derechos-de-las-personas-LGBTI%E2%80%9D.pdf

grave de discriminación contra este grupo, por lo que es una obligación del Estado peruano fomentar la empatía y el respeto por la diversidad sexual.

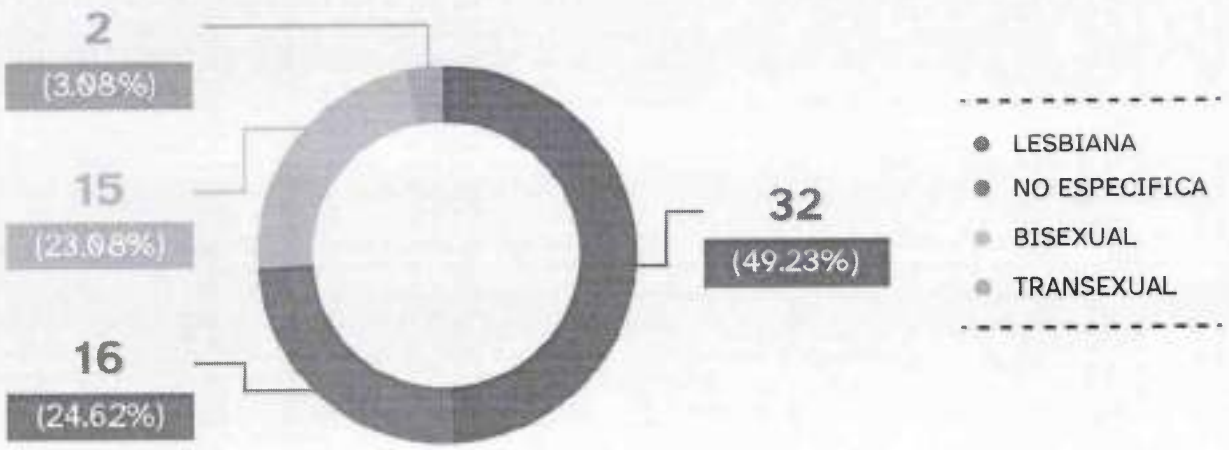
De este grupo, 32 mujeres se identifican como lesbianas, 15 como bisexuales, 2 como transexuales, y hay 16 no especifican. Estas cifras muestran la diversidad de la comunidad LGTBI en los establecimientos penitenciarios.

TABLA N° 36: POBLACIÓN LGTBI EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MUJERES

POBLACIÓN QUE NO SE IDENTIFICA COMO LGTBI	POBLACIÓN LGTBI			
	Lesbiana	Bisexual	Transexual	No especifica
4,384	32	15	2	16

Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

GRÁFICO N° 36: POBLACIÓN LGTBI EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MUJERES



Fuente: Base de Datos (BD) Supervisión a Establecimientos Penitenciarios - 2024
Elaboración: Defensoría del Pueblo

3.4. El aislamiento en los establecimientos penitenciarios desde la mirada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

El mecanismo, tiene como objetivo la prevención de actos crueles, inhumanos o degradantes mediante el desarrollo de un sistema de visitas periódicas a lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad. Su cumplimiento se encuentra a cargo del Subcomité para la Prevención de Tortura, a nivel internacional, y de los Mecanismos Nacionales de Prevención de Tortura (MNPT), a nivel de los Estados.

Mediante Ley 30394, el Congreso de la República otorgó autonomía orgánica y funcional al Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, encarga su implementación y ejecución a la Defensoría del Pueblo, en donde precisa que, conforme a su naturaleza constitucional de protección de derechos fundamentales, realizaba desde sus inicios labores de prevención de la tortura y malos tratos a nivel nacional.

3.4.1. Definición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes

La definición que utilizaremos es la establecida, por su similitud, en la Declaración de Estambul, del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y de la reconocida investigadora de Derechos Humanos, Sharon Shalev.

La Declaración de Estambul sobre la utilización y los efectos de la reclusión en régimen de aislamiento, la define como el aislamiento físico de una persona en su celda de 22 a 24 horas al día, donde el contacto con otras personas suele reducirse al mínimo, y la reducción de estímulos no solo es cuantitativa, sino también cualitativa (A/63/175, anexo).

Por su parte, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante (en adelante, "Relator Especial") define la reclusión en régimen de aislamiento como el aislamiento físico y social de personas que permanecen encerradas en sus celdas entre 22 a 24 horas al día. Y, como régimen de aislamiento prolongado, todo aquel periodo de aislamiento que supere los 15 días (A/66/268, párr. 26).

El Relator Especial ha llegado a la conclusión de que el plazo de 15 días es el límite entre el "régimen de aislamiento" y el "régimen de aislamiento prolongado" porque en ese punto, según la bibliografía consultada, algunos de los efectos psicológicos nocivos del aislamiento pueden ser irreversibles (A/66/268, párr. 26).

Según, Shalev (2008), la define como una forma de confinamiento en el que los reclusos pasan de 22 a 24 horas al día solos en sus celdas, separados unos de otros. Así como también donde los reclusos no tienen más contacto entre sí, que el permitido durante los ratos de ejercicio fuera de sus celdas, como ocurre en algunas jurisdicciones.

3.4.2. El aislamiento penitenciario en el Perú

En el Perú, el aislamiento penitenciario es comúnmente utilizado frente a la comisión de una infracción grave por parte de la persona privada de libertad. Sin embargo, esta institución jurídica no se utiliza única y exclusivamente para estos efectos, sino también cuando la vida e integridad de la persona se encuentra en riesgo al interior del penal, procediéndose a disponer su aislamiento por medidas de seguridad.

Entonces, en la práctica, nos encontramos frente a la proliferación y uso indiscriminado del aislamiento, del cual se dispone como medida inmediata, primera decisión y única alternativa para "restablecer el orden" en el penal. Ahora bien, resulta conveniente precisar que, como regla, el aislamiento se cumple en espacios asignados por la administración penitenciaria que han sido denominados "celdas de meditación", decisión que va en contra de lo estipulado por el TUO del CEP y su Reglamento, respecto de la preferencia de su ejecución en la celda en que la persona permanece, todo ello bajo el argumento de la seguridad penitenciaria.

Con relación a su marco normativo, como se ha dicho *ut supra,* el aislamiento como medida disciplinaria se encuentra regulado en la norma de ejecución penal. Sin embargo, no sucede lo mismo con el aislamiento por medidas de seguridad, el cual se encuentra desarrollado en una directiva institucional del INPE[41].

Para estos efectos, la directiva establece que al presentarse una situación de peligro que amenace la integridad física o mental de un interno, debidamente comprobada, procede su reubicación temporal a un pabellón o ambiente distinto al que fue ubicado producto de su clasificación. En la práctica, estas personas son ubicadas en las celdas de meditación como medida de aislamiento por seguridad personal, permanece allí hasta 30 días mientras se realiza la investigación para determinar si se encuentra o no en riesgo su vida e integridad, plazo que podrá ser prorrogado por única vez por el mismo tiempo, esto es, 60 días.

Culminado este tiempo y, de persistir las amenazas en contra de la persona, se propondrá su traslado a otro penal. Es decir, la solución a las amenazas parte de la propuesta por trasladar a la víctima, y no de la o las personas que realizan las amenazas.

41 Directiva N.° 005-2011-INPE, denominada "Procedimientos que regulan la reubicación de internos en los establecimientos penitenciario de régimen cerrado ordinario por medidas de seguridad personal", aprobado mediante Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario N.° 306-2011-INPE/P, de fecha 14 de abril de 2011.

El utilizar las celdas de meditación para tales fines genera que haya oportunidades donde coinciden las personas que permanecen por medidas disciplinarias y por medidas de seguridad a la vez, aunque en celdas separadas en caso de que haya espacios disponibles, lo cual resulta preocupante.

Ahora bien, respecto de los espacios físicos de las celdas de meditación, varían con relación a cada penal, ya que en algunos casos están distribuidas por celdas con un pasadizo en común, en otros es una sola celda sin patio o pasadizo. Algunos cuentan con puertas de metal con una pequeña ventana, otros son vallas con barrotes de hierro.

ILUSTRACIÓN N° 7: CELDA DE MEDITACIÓN EP LURIGANCHO



Fuente: MNPT - Defensoría del Pueblo
Elaborado por: MNPT

Asimismo, casi todas las celdas cuentan con los baños en su interior y consisten en una taza turca o silo que en la mayoría de casos está tapada con papel higiénico y restos de excremento. Algunas tienen el lavadero al lado, por lo que es muy común la filtración de agua y posible inundación en ese lugar. La mayoría de las duchas están clausuradas y las mayólicas se encuentran destruidas.

ILUSTRACIÓN N° 8: BAÑO EN CELDA DE MEDITACIÓN EP MIGUEL CASTRO CASTRO



Fuente: MNPT – Defensoría del Pueblo
Elaborado por: MNPT

Sin embargo, lo que más caracteriza a estos espacios es la humedad, la presencia de hongos en las paredes, la nula ventilación e iluminación natural, la oscuridad al cerrar las puertas, la falta de tarimas, colchones y frazadas, o en estado deteriorado, la falta de higiene, y sobre todo el hedor insoportable con el que conviven las personas sujetas al régimen de aislamiento.

ILUSTRACIÓN N° 9: INGRESO A CELDA DE MEDITACIÓN EP MIGUEL CASTRO CASTRO



Fuente: MNPT – Defensoría del Pueblo
Elaborado por: MNPT

Aunado a ello, se tiene también la vulneración sistemática a la garantía constitucional a un debido proceso que, como consecuencia de ello, se transgrede el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, a la debida motivación de las resoluciones administrativas, pluralidad de instancias, entre otros. Es decir, a pesar de que nos encontramos frente a un procedimiento eminentemente inquisitivo, sancionatorio y no contradictorio, tampoco se respetan las garantías mínimas.

El mantener esta situación no hace más que desconocer lo establecido en la Opinión Consultiva (OC-29/22) de la Corte IDH respecto de la prohibición y prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

3.4.3. El Aislamiento Penitenciario como Forma de Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes

Para el Relator Especial, debido a la ausencia de testigos, el aislamiento aumenta el riesgo de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/66/268, párr. 70).

La evaluación de si la reclusión en régimen de aislamiento equivale a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes debe tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, debe analizar cada caso individualmente. Esas circunstancias incluyen la finalidad de aplicar el régimen de aislamiento, sus condiciones, duración y efectos y, por supuesto, las condiciones subjetivas de cada víctima que la hacen más o menos vulnerables a esos efectos (A/66/268, párr. 71).

El Relator Especial afirma que, cuando el aislamiento se impone como consecuencia de una infracción de la disciplina penitenciaria, y es utilizada con fines de castigo, no puede justificarse por ninguna razón, precisamente porque inflige dolores y sufrimientos mentales graves que van más allá de todo castigo razonable por la comisión de una infracción y, por tanto, constituye un acto definido en el artículo 1 o el artículo 16 de la Convención contra la Tortura y una violación del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (A/66/268, párr. 72).

3.4.4. Efectos psicológicos y fisiológicos del aislamiento penitenciario

Las investigaciones muestran que el régimen de aislamiento parece causar "trastornos psicóticos", un síndrome que se ha denominado "psicosis de prisión"[42]. Estos efectos negativos en la salud suelen producirse después de solo unos pocos días en aislamiento, aumenta su riesgo conforme pasan los días. Para el Relator especial, estos síntomas pueden incluir ansiedad, depresión, ira, trastornos cognitivos, distorsiones de la percepción, paranoia, psicosis y lesiones autoinfligidas (A/66/268, párr. 62).

Un claro ejemplo de los efectos negativos en la salud de las personas privadas de libertad, fueron los graves acontecimientos suscitados en los penales de mujeres de Lima durante los años 2022, 2023 y 2024, que consistieron en suicidios e incendios provocados por ellas mismas al interior de las celdas de meditación, con la consecuencia la muerte de cuatro internas.

Finalmente, como ya se ha dicho, los efectos negativos no son iguales para todas, ya que algunas personas experimentan síntomas moderados, mientras que otras sufren un "grave empeoramiento de una enfermedad mental ya existente o la aparición de una enfermedad mental que no se había observado antes"[43].

42 Stuart Grassian, "Psychiatric Effects of Solitary Confinement" (1993), pág. 1
43 Ibid., pág. 2.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES

REPÚBLICA DEL PERÚ
Defensoría del Pueblo

1. Hacinamiento penitenciario

El hacinamiento es uno de los principales problemas que menoscaba las condiciones de internamiento en los establecimientos penitenciarios, ocasiona la afectación de los derechos fundamentales de la población penitenciaria, genera la deficiencia en la prestación de los servicios que brinda el Instituto Nacional Penitenciario, impide el cumplimiento de la finalidad del sistema de ejecución penal el cual está orientado a una adecuada reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

Si bien se han implementado medidas para mejorar la problemática advertida, resulta preocupante la situación actual de las condiciones de internamiento, al encontrarnos a menos de un año del vencimiento del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia emitida en el año 2020 (Expediente n.° 05436-2014-PHC/TC), respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional.

De los casos que atiende la Defensoría del Pueblo sobre población penitenciaria, se advierte que algunos órganos jurisdiccionales omiten remitir en un plazo oportuno las copias certificadas de la sentencia y resolución que la declara consentida o ejecutoriada al Registro Penitenciario del INPE, esto porque la norma en ejecución penal no establece una responsabilidad directa a los operadores de justicia ante su incumplimiento.

Se advierte, además, que el Instituto Nacional Penitenciario - INPE, a través de la Dirección de Registro Penitenciario, no cuenta con un sistema informático que les genere alertas, a fin de identificar los casos en los cuales los internos no cuenten con su sentencia registrada y se encuentren cumpliendo condena por más de 5 años.

2. Servicio de asistencia social

Sobre el servicio de asistencia social en establecimientos penitenciarios a nivel nacional, hemos verificado que el Instituto Nacional Penitenciario solo cuenta con 137 trabajadoras y trabajadores sociales. Esto constituye una situación crítica pues no permite atender las necesidades de más de 90,000 internas e internos, así como a las víctimas del delito y, en menor medida, a los familiares inmediatos de ambos, conforme lo establece el Código de Ejecución Penal.

Este hallazgo es preocupante al evidenciar la situación de desprotección a las hijas e hijos de las personas privadas de libertad y, en mayor alcance a los grupos de especial protección, que deben contar con distintas medidas que permitan asegurar su atención integral por parte del Estado.

3. Grupos vulnerables

Debemos tener claro que las personas privadas de libertad son un grupo vulnerable que está conformado por diversos grupos de especial protección como niños y niñas de 0 a 3 años que acompañan a sus madres en los establecimientos penitenciarios, mujeres, mujeres gestantes, extranjeros, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, comunidad LGTBI, entre otros.

Esta concurrencia de vulnerabilidades exige que el Estado adopte medidas que busquen atender las necesidades específicas de cada grupo de especial protección, al considera su diversidad, con enfoques transversales de protección de derechos humanos.

4. Interculturalidad

Un número significativo de la población penitenciaria tienen como lenguas maternas a lenguas originarias, 4135 señaló al quechua, 448 aymara, 48 ashaninka y 26 awajun. Además, se identificaron 82 personas cuya lengua materna es el inglés y 584 que hablan algún otro idioma o dialecto. Esta diversidad lingüística refleja una realidad social compleja que requiere una atención especial por parte del Estado.

5. Población LGTBI y personas con discapacidad

Estamos frente a la falta de políticas públicas penitenciarias a favor de los grupos de especial protección, en especial medida para la comunidad LGTBI, que —en algunas oportunidades— sufren discriminación y violencia dentro del sistema penitenciario por su orientación sexual o identidad de género.

La falta de políticas públicas penitenciarias a favor de las personas con discapacidad en cárceles, hace que este grupo de especial protección enfrente dificultades adicionales para acceder a servicios básicos, instalaciones adecuadas y atención médica especializada dentro del sistema penitenciario.

6. Educación y trabajo

La oferta que se brinda en los talleres de estudio y trabajo en los establecimientos penitenciarios resulta insuficiente, en relación a la demanda de la población penitenciaria. Asimismo, se puede advertir que ciertas actividades laborales realizadas por las personas privadas de la libertad no son consideradas formalmente por el Instituto Nacional Penitenciario como trabajo para redimir su pena. Esto perjudica el proceso de rehabilitación de las internas e internos y afecta el acceso al beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo y la educación.

La población penitenciaria que no estudia en los establecimientos penitenciarios es mayor en los grupos etarios de 31 a 40 años, seguido del grupo de 18 a 30 años. Asimismo, aquellos que no trabajan a pesar de haber manifestado tener un oficio pertenecen en mayor número al grupo etario de 18 a 30 años, seguido del grupo de 31 a 40 años. Este hallazgo resulta preocupante, porque tanto la educación como el trabajo contribuyen con la rehabilitación de las internas e internos.

Cerca de diez mil internos no han terminado la primaria y casi veinticuatro mil no culminaron la secundaria, números que representan más del 35% de la población penitenciaria. Este hecho llama la atención porque, de acuerdo al Código de Ejecución Penal, cada establecimiento penitenciario debe promover la educación del interno para su formación profesional o capacitación ocupacional, así como el aprendizaje técnico; asimismo, gestionar la alfabetización obligatoria y educación primaria para adultos.

7. Salud

El 30.13% de la población penitenciaria entrevistada declara no contar con un seguro de salud. Si bien las internas e internos que no cuenten con algún seguro de salud deberían contar con la cobertura universal del Seguro Integral de Salud (SIS), en algunos casos no es posible afiliarlos debido a su situación de indocumentación, esta problemática ocurre con personas privadas de libertad nacionales y extranjeros. Asimismo, resulta preocupante la alta prevalencia de las enfermedades crónicas en la población carcelaria, como diabetes, TB, hipertensión y VIH-SIDA.

CAPÍTULO V

RECOMENDACIONES

REPÚBLICA DEL PERÚ
Defensoría del Pueblo

1. A la Presidencia de la República, Poder Legislativo y Poder Judicial

INCREMENTAR esfuerzos para reducir los niveles de hacinamiento carcelario en el país y así garantizar condiciones idóneas de reclusión, el respeto por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; lo que permitirá al régimen penitenciario cumplir con la reeducación, rehabilitación y reincorporación de la persona privada de la libertad a la sociedad, como lo regulan los principios de la administración de justicia que establece nuestra Constitución Política.

2. Al Poder Judicial

ADOPTAR un claro compromiso institucional para reducir los niveles de hacinamiento y hacer un uso racional y excepcional de las prisiones preventivas en los procesos penales, conforme lo establece el Tribunal Constitucional en su sentencia emitida en el año 2020 (Expediente n.° 05436-2014-PHC/TC), esto es: *"identificar un adecuado nivel de equilibro entre los principios y derechos que se encuentran involucrados al dictar las prisiones preventivas"*.

EXHORTAR a los jueces y juezas de los órganos jurisdiccionales en materia penal a la observancia obligatoria de los estándares y criterios establecidos en los presupuestos para el otorgamiento de la prisión preventiva, así como la revisión periódica de oficio de la vigencia de los presupuestos que fueron de sustento para el otorgamiento de dicha medida, conforme a lo ordenado por el Tribunal constitucional en la sentencia recaída en el expediente (Exp. N° 03248-2019-PHC/TC)

3. Al Poder Legislativo

LEGISLAR en materia procesal penal respecto a los estándares y criterios para el otorgamiento de la prisión preventiva, que establezca responsabilidad para los jueces y juezas que se aparten de los presupuestos establecidos en la norma de la materia.

LEGISLAR en materia de ejecución penal, con la finalidad que se establezcan criterios y plazos para la inscripción de sentencias por parte de los órganos jurisdiccionales, además de establecer responsabilidades ante su incumplimiento, lo que garantizará el funcionamiento eficiente del sistema de justicia, además permitirá que no se vulnere el derecho a la libertad de las personas privadas de libertad que cumplieron su condena, al egresar oportunamente de los establecimientos penitenciarios.

4. Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

GESTIONAR la construcción de tres complejos penitenciarios de mínima seguridad y de gran capacidad de albergue —con el enfoque de cárceles productivas para internos primarios— para un aforo de 15,000 internos, a fin de reducir el hacinamiento en las cárceles del país. El costo de construcción de estos establecimientos no debe significar mayor gasto público en componentes de seguridad al estar dirigido a internos de poca peligrosidad.

GESTIONAR la ampliación y mejora de la infraestructura de los penales existentes, con especial énfasis en los que albergan niñas y niños de cero a tres años que se encuentran bajo el cuidado de sus madres.

GESTIONAR ante el Ministerio de Economía y Finanzas mayor asignación de recursos a favor del Instituto Nacional Penitenciario, lo que permitirá mejorar las condiciones carcelarias, optimizará el servicio de asistencia social, ampliará la capacidad de los talleres de trabajo y estudio, modernizará la infraestructura y ampliará el número del personal de los tópicos de los establecimientos penitenciarios, conforme a las múltiples vulnerabilidades de la población penitenciaria.

5. Al Ministerio de Economía y Finanzas

ASIGNAR mayor presupuesto al sector Justicia y Derechos Humanos, para que el Instituto Nacional Penitenciario pueda afrontar la problemática de hacinamiento en sus establecimientos penitenciarios, garantizará la dignidad e integridad de las personas privadas de libertad, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia emitida en el año 2020 (Expediente n.° 05436-2014-PHC/TC).

6. Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y CONADIS

GESTIONAR campañas de promoción de derechos de las personas con discapacidad en los establecimientos penitenciarios, con la finalidad de garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos.

7. Al Tribunal Constitucional

REALIZAR seguimiento sobre el cumplimiento de lo ordenado en su sentencia recaída en el Expediente n.° 05436-2014-PHC/TC.

8. Al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

REALIZAR campañas en los establecimientos penitenciarios para facilitar el trámite de obtención del documento nacional de identidad a los internos e internas de nacionalidad peruana, al afectar en forma conexa el acceso al servicio de salud.

9. Superintendencia Nacional de Migraciones

REALIZAR campañas en los establecimientos penitenciarios para facilitar el trámite de obtención del documento de identidad a los internos e internas de nacionalidad extranjera, al ser un problema que afecta también el acceso al servicio de salud.

10. Al Instituto Nacional Penitenciario

AMPLIAR el alcance del servicio de asistencia social en los establecimientos penitenciarios, e implementar un equipo multidisciplinario para que atienda las necesidades de la población penitenciaria y sus grupos vulnerables, las víctimas de los delitos, así como el núcleo familiar de ambos, conforme a lo establece el Código de Ejecución Penal; con especial énfasis en la atención integral que se brinde a las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad.

MEJORAR la capacidad de los talleres educativos y laborales en los establecimientos penitenciarios, a fin de que más internos puedan acceder a ellos y así contribuir con el objetivo del tratamiento penitenciario, que es la reeducación, rehabilitación y reincorporación de la persona privada de la libertad a la sociedad, además del acceso a los beneficios penitenciarios que contribuyen al deshacinamiento.

MEJORAR la infraestructura de los centros de salud y tópicos de los establecimientos penitenciarios, dotándolos de los medicamentos necesarios, así como de personal de salud suficiente y médicos especialistas en el tratamiento de enfermedades que afectan a la población femenina, a fin de atender las necesidades de atención médica de la población penitenciaria.

GESTIONAR, a través del servicio de asistencia social, la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) de todos los internos e internas de nacionalidad peruana y extranjera, a fin de garantizar el acceso oportuno al servicio de salud y a un servicio de calidad.

GESTIONAR, la implementación de intérpretes para personas que requieran ser atenidas en su lengua originaria, lo que permitirá garantizar la igualdad de acceso a la información y acceso a los beneficios penitenciarios para todas las personas privadas de libertad, acción que facilitará se cumpla la finalidad del sistema de rehabilitación del penado a la sociedad.

IDENTIFICAR a los grupos de especial protección que se encuentran privados de libertad, con la finalidad de adoptar políticas públicas que aborden sus necesidades específicas, promuevan su bienestar y el respeto a sus derechos humanos dentro del sistema penitenciario.

GESTIONAR a través de la Oficina de Sistemas de la Información, la creación de un programa informático que les permita advertir de manera oportuna cuando una persona privada de libertad no cuenta con su sentencia registrada en el Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario.

ANEXOS

REPÚBLICA DEL PERÚ
Defensoría del Pueblo

Caso emblemático

Ingreso de visitas de familiares de nacionalidad venezolana en los establecimientos penitenciario	
Número de registro en el SID	2100-2024-000091
Derechos vulnerados	Visita familiar de las personas privadas de libertad. Intimidad familiar. Protección de la familia. Decisión de la familia.
Entidad ante la cual se intervino	Superintendencia Nacional de Migraciones e Instituto Nacional Penitenciario.
Descripción de la problemática que ameritó intervención	Durante el año 2023 se recibieron múltiples pedidos de intervención defensorial ante el Instituto Nacional Penitenciario debido a una problemática relacionada a las visitas familiares de nacionalidad venezolana que no podían ingresar a los establecimientos penitenciarios porque no contaban con carné de extranjería, ni con pasaporte. De acuerdo al protocolo de Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario, aprobado con Resolución Directoral Nro. 016-2020-INPE-DISEPE, del 23 de diciembre de 2020, las visitas familiares de nacionalidad venezolana solo pueden ingresar a los establecimientos penitenciarios al presentar el carné de extranjería o el pasaporte; sin embargo, la mayoría de la población venezolana en Perú no cuentan con dichos documentos de identidad, por cuanto se encuentran en calidad migratoria irregular, por lo que solo ha logrado obtener el carné PTP o CPP.
Actuación defensorial	La Defensoría del Pueblo remitió el Oficio Nro. 0258 - 2022 -DP/ADHPD-PAPP al Consejo Nacional Penitenciario solicita que la Dirección de Seguridad Penitenciaria actualice la normativa vigente que regula el procedimiento de ingreso y egreso de visitas a los penales, con la finalidad de agregar el carné de permiso temporal de permanencia para extranjeros, como documento legítimo para el ingreso a penales, adicional a los dos ya establecidos. El Instituto Nacional Penitenciario respondió mediante Oficio Nro. D000272-2023-INPE-PRE, al cual adjunta el Informe Nro. D000035-2023-INPE-SDSYT, emitido por la Subdirección de Seguridad de Penales y Traslados del INPE, en el cual se precisa que la seguridad penitenciaria es el principal fundamento de la limitación de documentos de identidad en el caso de extranjeros y, por otro lado, se hizo alusión a la denuncia de explotación sexual de menores en el establecimiento penitenciario de Carquín - Huacho, lo que los habría obligado a proceder con mayor rigurosidad en el control de ingreso de visitas en todos los penales a nivel nacional. Por tal motivo, se llevó a cabo una primera mesa de trabajo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, en la cual la Dirección de Política Migratoria se comprometió a viabilizar la firma de un convenio con el INPE, para agilizar y mejorar la identificación de las personas extranjeras que recurren a los centros penitenciarios a visitar a sus familiares. Asimismo, la Defensoría del Pueblo asumió la responsabilidad de convocar al INPE para una reunión interinstitucional a fin de lograr soluciones sobre la problemática de los extranjeros. En la segunda mesa de trabajo la Defensoría del Pueblo se reunió con la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional Penitenciario, y se absolvió los principales inconvenientes respecto a la identificación de extranjeros venezolanos en los establecimientos penitenciarios, lográndose recibir el compromiso de ambas entidades para que se actualice el sistema del registro de identidad de las visitas familiares de nacionalidad extranjera, el que inicia con un piloto en los tres establecimientos penitenciarios de mujeres de Chorrillos; y, como segundo compromiso, el INPE modificaría su protocolo de Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario.

Impacto o resultado de la actuación defensorial	Del seguimiento realizado a los compromisos, se verificó que en los penales de mujeres de Chorrillos y en el penal de varones de Lurigancho se modificó el sistema de registro de identidad, al permitir que las visitas familiares de nacionalidad venezolana ingresen con el CPP y PTP, lo cual se ha implementado en todos los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, en virtud del Memorándum Múltiple Nro. D000201-2023-INPE-DISEPE emitido por la Dirección de seguridad penitenciaria, dirigido a las oficinas regionales y subdirecciones de seguridad penitenciaria a nivel nacional.

El Peruano Firmado por: Editora Peru
Fecha: 10/05/2025
ANEXO 1
lp
123

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil veinticinco.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

GUSTAVO LINO ADRIANZÉN OLAYA
Presidente del Consejo de Ministros

2398238-3

LEY Nº 32330

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 635, Y EL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, DECRETO LEGISLATIVO 1348, PARA INCORPORAR A LOS ADOLESCENTES DE 16 Y 17 AÑOS COMO SUJETOS IMPUTABLES DENTRO DEL SISTEMA PENAL

Artículo 1. Modificación de los artículos 20 y 22 del Código Penal, Decreto Legislativo 635

Se modifican los artículos 20 —numeral 2— y 22 —párrafo primero— del Código Penal, Decreto Legislativo 635, en los siguientes términos:

"**Artículo 20.-** Está exento de responsabilidad penal:

[...]

2. El menor de dieciocho años, con excepción de los adolescentes de dieciséis y menos de dieciocho años, que cometen alguno de los delitos tipificados en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 121, 121-B, 129-A, 129-B, 129-C, 129-D, 129-G, 129-H, 129-I, 129-K, 129-L, 129-M, 129-Ñ, 148-A, 152, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 189, 200, 279, 279-G, 280, 281, 296, 296-A, 296-B, y los numerales 4, 5 y 6 del artículo 297, así como los artículos 303-C, 317, 317-A, 317-B y 326 del Código Penal, o alguno de los delitos tipificados en el Decreto Ley 25475, que establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

[...]".

"**Artículo 22.- Responsabilidad restringida por la edad**

Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido, cuando el agente tenga entre dieciséis y menos de veintiún años, o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo.

[...]".

Artículo 2. Modificación del artículo I del título preliminar y de los artículos 126 y 163 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348

Se modifican el artículo I del título preliminar —numeral 1— y los artículos 126 —numerales 2, 3 y 4—, 163 —párrafos 163.2 y 163.4— del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348; en los siguientes términos:

"**Artículo I.- Responsabilidad penal especial**

1. El adolescente entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad, es sujeto de derechos y obligaciones, y responde por la comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial, considerándose para ello su edad y características personales. Si el adolescente tiene entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años y comete los delitos señalados en el numeral 2 del artículo 20 del Código Penal, se le aplicará responsabilidad penal ordinaria.

[...]

Artículo 126.- Determinación de la medida socioeducativa

Cuando el adolescente se acoge a este proceso, se le aplica una medida socioeducativa de acuerdo a las siguientes reglas:

[...]

2. Si a la infracción le correspondiera la medida de internación conforme al párrafo 163.2, se aplica la medida conforme al plazo de duración dispuesto en el párrafo 163.4.
3. Si a la infracción le correspondiera una internación conforme al artículo 163.4, se aplica la medida conforme al plazo de duración dispuesta en el mismo articulado.
4. Si a la infracción le correspondiera una internación conforme al artículo 163.4, se aplica la medida conforme al plazo de duración dispuesto en el artículo 163.2, si el adolescente tiene entre catorce (14) y menos de dieciséis (16) años

[...].

Artículo 163. - Duración de la internación

[...]

163.2 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la medida socioeducativa de internación es no menor de cuatro (4) ni mayor de seis (6) años, cuando el adolescente tenga entre catorce (14) y menos de dieciséis (16) años y se trate de los siguientes delitos:

[...]

163.4 Excepcionalmente, cuando se trate de los delitos de sicariato (108-C) o violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (173-A), tipificados en el Código Penal, Decreto Legislativo 635, así como de los delitos regulados mediante Decreto Ley 25475 —por el que se establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio—, la medida de internación puede durar de seis (6) a ocho (8) años, si el adolescente tiene entre catorce (14) y menos de dieciséis (16) años.

[...]".

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Adecuación de reglamentos

El Poder Ejecutivo adecuará el Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado por Decreto Supremo 004-2018-JUS; así como el Reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto Supremo 015-2003-JUS, a las modificaciones dispuestas en la presente ley en un plazo de sesenta días calendario contados a partir de su entrada en vigor.

SEGUNDA. Normativa adicional

El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario emitirán la normativa adicional necesaria, conforme a las modificaciones dispuestas en la presente ley, en un plazo de sesenta días calendario contados a partir

de su entrada en vigor, a fin de garantizar su debido cumplimiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificación del artículo IV del título preliminar y de los artículos 11 y 63 del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654

Se modifica el artículo IV del título preliminar y los artículos 11 —numeral 4— y 63 del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654; en los siguientes términos:

"**Sistemas de tratamiento penitenciario**

Artículo IV. El tratamiento penitenciario para los internos mayores de veintiún años se lleva a cabo mediante el sistema progresivo, mientras que para los internos de dieciséis a veintiún años se utiliza el sistema de individualización científica.
[...]

Artículo 11.- Criterios de separación de internos
Los internos están separados de acuerdo a los siguientes criterios básicos:

[...]
4.- Los de dieciséis a veintiún años de los de mayor edad.
[...]
Clasificación del interno

Artículo 63.-

63.1 El interno es clasificado en grupos homogéneos diferenciados, en el establecimiento penitenciario o sección del mismo que le corresponda, determinándose el programa de tratamiento individualizado.
63.2 En el caso de los internos de dieciséis a veintiún años, estos serán separados absolutamente de los de mayor edad, de acuerdo con los demás criterios de separación".

SEGUNDA. Incorporación de los artículos 63-A, 63-B, 63-C y 63-D en el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654

Se incorporan los artículos 63-A, 63-B, 63-C y 63-D en el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654, en los siguientes términos:

"**Artículo 63-A. Tratamiento penitenciario bajo el sistema de individualización científica**

63-A.1 El tratamiento penitenciario de carácter individualizado, científico e integral, comprende acciones y actividades terapéutico-asistenciales. Está diseñado para abordar situaciones problemáticas vinculadas a aspectos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, que han influido en la personalidad o conducta delictiva de la persona privada de libertad de 16 a 21 años.
63-A.2 El tratamiento penitenciario busca mejorar capacidades, desarrollar aptitudes y habilidades, enriquecer conocimientos y compensar carencias para una efectiva reincorporación social.

Artículo 63-B. Proyectos de tratamiento individualizado

63-B.1 El tratamiento penitenciario implica el desarrollo de programas especializados adaptados a las particularidades de la personalidad o conducta de cada persona privada de libertad de 16 a 21 años.
63-B.2 Los programas especializados de tratamiento se centran en actividades de trabajo penitenciario, educativas, culturales, familiares, artísticas, deportivas, espirituales o religiosas, adaptadas al grado de clasificación de la persona privada de libertad y a la organización específica de cada establecimiento penitenciario.

Artículo 63-C. Tratamiento integral
La Administración Penitenciaria, a través del Órgano Técnico de Tratamiento, facilita un tratamiento científico, individualizado e integral para la persona privada de libertad de dieciséis a veintiún años de edad, y aborda las necesidades, así como deficiencias identificadas, en atención a los siguientes lineamientos:

a) Desarrolla los distintos programas especializados de tratamiento.
b) Brinda servicios asistenciales de índole sanitaria, social, legal, psicológica y otros que coadyuven a la rehabilitación de la persona privada de libertad.
c) Estimula la participación activa del interno en la planificación y ejecución de su tratamiento.
d) Desarrolla otras acciones orientadas a lograr la resocialización de la persona privada de libertad.

Artículo 63-D. Consentimiento para el tratamiento penitenciario

63-D.1 La administración penitenciaria estimula la participación de la persona privada de libertad de dieciséis a veintiún años, en el diseño, planificación y ejecución de su tratamiento penitenciario.
63-D.2 Para la aplicación del tratamiento penitenciario, no será necesario contar con el consentimiento de las personas privadas de libertad en condición de sentenciadas. La negativa a aceptar dicho tratamiento constituye un criterio para reconsiderar la clasificación de la persona privada de libertad.
63-D.3 La persona privada de libertad que tenga la condición de procesada puede acogerse a un programa de tratamiento compatible con su situación jurídica".

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación del párrafo 163.3 del artículo 163 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348

Se deroga el párrafo 163.3 del artículo 163 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348.

Comuníquese a la señora Presidenta de la República para su promulgación.

En Lima, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veinticinco.

EDUARDO SALHUANA CAVIDES
Presidente del Congreso de la República

CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil veinticinco.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

GUSTAVO LINO ADRIANZÉN OLAYA
Presidente del Consejo de Ministros

2398238-4

OFICIO Nº 041-2025- DP/DMNPT

Lima, 13 de mayo de 2025

Señor
FRANCISCO NIVARDO NAQUIRA CORNEJO
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Centros Juveniles
Presente.-

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, transmitir nuestra profunda preocupación por las condiciones inhumanas en las que se encuentran cumpliendo su medida socioeducativa un grupo de adolescentes internados en el Anexo 3 del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.

Sobre el particular, con fecha 12 de mayo del año en curso, personal del Mecanismo se constituyó en el Anexo 3 a efectos de realizar sus labores de monitoreo sobre las condiciones en las que se encuentran los adolescentes infractores allí internados.

Al respecto, se advirtieron serios factores de riesgo de condiciones inhumanas en el ala "B", primer nivel, celda 12, constatando una filtración de agua en el lavadero ubicado al interior de la celda en la que conviven hasta 8 adolescentes, desde hace más de un mes, según refieren.

Este hecho ha generado que los adolescentes inhalen humedad excesiva a diario, teniendo contacto con moho y hongos en las paredes y piso, comprometiéndose seriamente su estado de salud, en el que destacan problemas respiratorios e infecciones pulmonares y reacciones alérgicas en diferentes partes del cuerpo.

A nivel internacional existen innumerables pronunciamientos, documentos, declaraciones, reglas, principios y otros que señalan y rigen la manera de cómo los Estados deben acondicionar los lugares de detención, respetando en todo momento el derecho a la dignidad de toda persona privada de libertad, y en consecuencia la proscripción absoluta de los actos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La situación que se ha constatado y ha sido perennizada en imágenes y videos que se adjuntan al presente documento resulta contraria al párrafo 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (suscrito y ratificado por el Perú en abril de 1978), que obliga a que toda persona privada de libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a su dignidad, como derecho inherente al ser humano. En esa línea, en

Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros malos tratos
dmnpt@defensoria.gob.pe - Jr. Azángaro 430 Lima 1 - Telf. 0800-15170
http://sgd.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/

el Perú, el fin supremo del Estado y de la sociedad es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad[1], no admitiendo discriminación alguna.

Asimismo, cuestiona seriamente la posición especial de garante en la que se coloca el Estado peruano frente a las personas privadas de libertad, obligación que asume al suscribir y ratificar los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Cabe mencionar que la falta de recursos económicos no justifica la violación por parte del Estado de derechos inderogables de las personas privadas de libertad. En este sentido, la Corte IDH ha manifestado consistentemente que "(...) los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano"[2].

Por ello, resulta imperativo abordar de manera inmediata esta situación, reparando las filtraciones y disponiendo las acciones correctivas para que en lo sucesivo no se vuelvan a producir este tipo de circunstancias tan lamentables que impactan de manera directa en el derecho a la salud, integridad y a la dignidad y el trato humano que merece toda persona privada de libertad, eliminando así los factores de riesgo de malos tratos y tortura.

En ese sentido, y estando a los hallazgos advertidos en los párrafos precedentes, me permito solicitarle, de conformidad con lo señalado en el literal "a", numeral 1.2 del artículo 1 de la Primera Disposición Final de la Ley N° 30394, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, lo siguiente:

1. La reparación urgente de la filtración de agua en el interior del ala "B", primer nivel, celda 12.
2. La reubicación inmediata de los adolescentes que permanecen en el ala "B", primer nivel, celda 12, mientras dure la reparación, salvaguardando de esta manera su derecho a la salud.
3. La revisión integral de todas las celdas que componen el ala "A" y "B" con la finalidad de prevenir que esté ocurriendo la misma situación, reparándolas de inmediato, de ser el caso.
4. La evaluación médica e inicio del tratamiento respectivo, en caso de que sea necesario.
5. La exhortación respectiva al personal que labora en dicho establecimiento por presuntamente haber permitido mantener a los adolescentes en condiciones inhumanas.

---

[1] Constitución Política del Perú, artículo 1.

[2] Corte I.D.H., *Caso Vélez Loor Vs. Panamá*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C. No. 218, párr. 198; Corte I.D.H., *Caso Boyce et al. Vs. Barbados*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 88; Corte I.D.H., *Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela*. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 85; Corte I.D.H., *Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala*. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 96.

Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros malos tratos
dmnpt@defensoria.gob.pe - Jr. Azángaro 430 Lima 1 - Telf. 0800-15170
http://sgd.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/

Finalmente, mucho agradeceré me remita un informe con las acciones adoptadas en virtud del presente documento.

Con la seguridad de su gentil atención, aprovecho la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente por
PIERO VILLENA ESCALANTE
Director General del Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura y otros malos tratos
Defensoría del Pueblo

Anexo:
https://drive.google.com/drive/folders/1I4EAHik1A-TjAr1U-S6dAOYLyehefO2x

Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros malos tratos
dmnpt@defensoria.gob.pe - Jr. Azángaro 430 Lima 1 - Telf. 0800-15170
http://sgd.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/

Defensoría del Pueblo

Firmado digitalmente por ESCALANTE Pie... 20304117142 so... Motivo: Soy el au... Fecha: 13-05-2025...

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la Defensoría del Pueblo. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 13/05/2025. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. https://sgd.defensoria.gob.pe/verificador/

Código de verificación: 0137 6971 5663 4017